

Adrián Piva

ECONOMÍA Y POLÍTICA
EN LA ARGENTINA
KIRCHNERISTA

**BATALLA DE
IDEAS B**
★

Economía y política en la Argentina kirchnerista
Adrián Piva



*Se autoriza la reproducción parcial o total,
siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente*

Diseño de tapa e interior: Agustín Artese y Diego Pérez Roig

Editores responsables: Agustín Artese, Manuel Martínez y Diego Pérez Roig

Batalla de Ideas

Pasaje Dr. Rodolfo Rivarola 175 - C1015AAA - CABA, Argentina
editorialbatalladeideas@gmail.com

ISBN: 978-987-33-7439-5

Printed in Argentina
Impreso en Argentina, mayo de 2015

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Piva, Adrián

Economía y política en la Argentina kirchnerista. - 1a ed. -
Buenos Aires : Batalla de ideas, 2015.

288 p. : il. ; 22x15 cm.

ISBN 978-987-33-7439-5

1. Política Argentina. I. Título

CDD 320.82

Fecha de catalogación: 28/04/2015

A los coautores invisibles de este libro, mis compañeros del Programa de Investigación “Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina Contemporánea” de la Universidad Nacional de Quilmes, especialmente a Alberto Bonnet.

A Agustín Artese, Manuel Martínez y Diego Pérez Roig, quienes trabajaron en la revisión, corrección y diseño de todo el libro e hicieron importantes sugerencias de contenido.

A Fernanda que, por suerte, es parte de todo lo que hago.

Índice

INTRODUCCIÓN	11
I. MODO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DOMINACIÓN POLÍTICA	17
Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001	19
Los límites económicos de una lógica política	37
POSTDATA: Política económica y modo de acumulación en la postconvertibilidad	51
II. ESTADO Y CONFLICTO SOCIAL	75
Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)	77
¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post-crisis (2003-2010)	95
POSTDATA: Las transformaciones del Estado en la Argentina postconvertibilidad: de la desorganización del Estado neoliberal al “keynesianismo trunco”	125
III. EL MODO DE DOMINACIÓN POLÍTICA	159
¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001	161
La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)	189
POSTDATA: Las “clases medias” frente al kirchnerismo: entre la crisis de representación y el rechazo del populismo	221
CONCLUSIONES	239
CUADROS Y GRÁFICOS	257
BIBLIOGRAFÍA	269

INTRODUCCIÓN

El libro que presentamos cierra un largo período de investigación que completa –e inevitablemente reinterpreta– el análisis de la etapa abierta en 1989. Sin embargo, al momento de escribir mi trabajo anterior sobre la década menemista (Piva, 2012), el período abordado –al menos en sus rasgos específicos y centrales– podía considerarse clausurado con la crisis de 2001. Lejos de ello el período abierto en 2002 se encuentra en pleno desarrollo y su significado y periodización están sujetos, más que nunca, a dicho desarrollo. Ello se refleja en la estructura del libro, que combina la compilación y la exposición ordenada en partes y capítulos. Esa estructura refleja un proceso de investigación completo para un objeto en plena construcción histórica.

La opción elegida fue la de publicar los resultados parciales alcanzados en cada momento con una postdata que refleja un balance y estado actual de la investigación. Ello supone abrir parcialmente las conclusiones a los lectores. En la medida que la exposición exhibe discontinuidades y decisiones de investigación, los intentos de cerrar o de otorgarle sistematicidad a los desarrollos parciales o al proceso de conjunto muestra cierto grado de contingencia y arbitrariedad. Sin embargo, ambos aspectos –sistematización y contingencia/arbitrariedad– son inherentes a cualquier proceso de investigación, sólo que resultan especialmente acusados en un caso como este.

La hipótesis que atraviesa todo el libro es que el rasgo que singulariza al kirchnerismo es su papel en la recomposición del poder político

post crisis de la convertibilidad; específicamente, el cumplimiento de esta tarea a través de una estrategia de satisfacción gradual de demandas obreras y populares en los límites de un proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación sin reversiones radicales de la reestructuración del capital y del Estado en los noventa. Este rasgo específica al kirchnerismo y lo diferencia del duhaldismo, respecto del cual constituye un quiebre. Si bien el proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación se inicia en 2002 con el interregno duhaldista, la reconstrucción de la legitimidad política fue una tarea del kirchnerismo y el modo de su cumplimiento afecta a su naturaleza y a la dinámica entera del proceso que condujo. Por esa razón, los límites y contradicciones de la estrategia kirchnerista se pusieron de manifiesto en la dinámica de acumulación, en la forma de Estado y en la modalidad de dominación política. Detrás de esas contradicciones se dibuja la alteración de la relación de fuerzas sociales que produjo la rebelión popular de 2001 y el quiebre de la convertibilidad. De modo que, lo económico y lo político se revelan como momentos diferenciados de un proceso de subordinación del trabajo al capital cuyas inflexiones imponen rearticulaciones de la acumulación y de la dominación política sin que su correspondencia esté asegurada.

La primera parte está dedicada al análisis de la relación entre el modo de acumulación y la estrategia de reconstrucción de la dominación política. Este eje atraviesa de diferentes formas a todos los demás. Ello se debe a que la ausencia de correspondencia o funcionalidad entre ambos momentos de la reproducción capitalista es el indicador más claro de la dificultad para estabilizar dinámicamente la relación de fuerzas entre las clases heredada de la rebelión de 2001. En este sentido, se enfatizan en el análisis que allí desarrollamos los límites que las características del modo de acumulación imponen a la estrategia de reconstrucción/reproducción de la dominación política y, a su vez, los desequilibrios en la acumulación de capital originados por el desfase entre política económica y acumulación capitalista. Integran esta primera parte el artículo “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001” escrito a fines de 2006 y publicado originalmente en el *Anuario* n° 3 de la Asociación de Economistas de Izquierda en abril de 2007 y el artículo “Los límites económicos de una lógica política” escrito a inicios de 2012 y publicado a mediados del mismo año en el número 3 de la revista *Batalla de ideas*. La cierra la postdata “Política económica y modo de acumulación en la postconvertibilidad” donde profundizamos la conceptualización del modo de acumulación, avanzamos en aspectos

que habíamos desatendido en los artículos previos y proponemos la idea de un desfase entre política económica y acumulación de capital.

La segunda parte tiene como objetivo analizar las transformaciones en la forma de Estado postconvertibilidad. Allí exponemos los principales cambios respecto de la forma neoliberal del Estado desarrollada en los años noventa y presentamos la tesis de que las tendencias de transformación han derivado en un proceso de desorganización de aquel Estado neoliberal pero sin reorganización del aparato de Estado en torno a sus núcleos novedosos. Ello tiene importantes consecuencias para la estabilización y la modalidad de la dominación política. En este sentido, y debido a su relevancia para la construcción de una hegemonía, prestamos especial atención a la evolución y características del conflicto social y a las respuestas del Estado ante él. Integran la segunda parte: “Una aproximación a los cambios en la Forma de Estado en Argentina (2002-2009)” escrito a mediados de 2009 y publicado originalmente en el número 23 de la revista *Theomai* durante el primer semestre de 2011 y el artículo “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” escrito a fines de 2011 y publicado originalmente en el número 40 de la revista *E-Latina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos* durante el segundo semestre de 2012. La cierra la postdata “Las transformaciones del Estado en la Argentina postconvertibilidad: de la desorganización del Estado neoliberal al ‘keynesianismo trunco’”. Allí analizamos las transformaciones del Estado post 2009, abordamos aspectos que dejamos de lado en los artículos previos y avanzamos en una conceptualización de las transformaciones del Estado. En particular, prestamos atención a los rasgos novedosos del Estado postconvertibilidad y al vínculo de las tendencias a la desorganización del Estado con las continuidades respecto del neoliberalismo y con la alteración de las relaciones entre las clases post crisis de 2001.

La tercera y última parte está dedicada al análisis del modo de dominación política. En primer lugar, realizamos una aproximación a los conceptos de populismo y neopopulismo para el caso latinoamericano y discutimos su aplicación para la comprensión de la estrategia kirchnerista de reconstrucción/reproducción de la dominación y el consenso. En segundo lugar, analizamos la relación entre inflación y neopopulismo para adentrarnos en la dinámica económico-política que caracteriza a la década kirchnerista. Integran esta última parte: el artículo “¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001” escrito en la segunda mitad de 2012 y publicado originalmente en el número

21 de la revista *Trabajo y Sociedad* en el invierno de 2013 y el artículo “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”, inédito.¹ La cierra la postdata “Las ‘clases medias’ frente al kirchnerismo: entre la crisis de representación y el rechazo del populismo”. Dado que estos trabajos reflejan mis más recientes resultados de investigación –que corresponden, además, lógicamente a la última fase de la exposición de la cuestión tratada en el libro– la postdata se dedica a profundizar en un aspecto de aparición recurrente tanto en el estudio sobre la década menemista como en los artículos que componen este volumen: el rol de las clases medias en el proceso político. Aquí nos centramos en la relación entre dos dimensiones presentes en la movilización de clase media contra el kirchnerismo: la antipolítica y el antipopulismo.

Los artículos publicados previamente no han sido alterados, salvo para corregir errores que no fueron advertidos antes de su publicación original. Sí se han suprimido algunas partes para evitar reiteraciones, en la medida que no afectaban la comprensión del texto.

Quisiera cerrar la introducción agradeciendo a los compañeros de la editorial *Batalla de Ideas* que hayan elegido este libro como edición lanzamiento. No sólo porque no creo merecerlo, sino porque me permiten poner de manifiesto el interés político detrás de los problemas de investigación que abordo. Desde un tiempo a esta parte la profesionalización de nuestro trabajo como investigadores –con dispositivos institucionales, carreras profesionales y criterios de evaluación y productividad cada vez más estandarizados– han conducido a la creciente imposición de modelos de ciencia social que fragmentan nuestro objeto y nuestras tareas y que escinden investigación social e intervención política. Pero hoy casi nadie pretende negar el vínculo entre lucha política y ciencia social, por eso dicha imposición es más grave, porque es “objetiva”. La disputa argumentativa con el positivismo ha sido ganada, pero el positivismo vive y se despliega a través de un conjunto de normas y criterios prácticos que estructuran nuestras prácticas de investigación hasta tal punto que lo que decimos que hacemos no describe lo que hacemos. Quizás sea más gráfico decirlo de este modo: no lo sabemos, pero lo hacemos. Salir de esa trampa requiere, como siempre en estos casos, romper con las lógicas competitivas e individualizantes y convertirlas en objeto de nuestra reflexión colectiva con el fin de oponerles otros modelos de ciencia social que requieran/construyan otros sujetos investigadores. Es decir, restituir el vínculo, en

¹ Una versión más extensa –que incluye un análisis econométrico y un mayor desarrollo de la cuestión monetaria– se encuentra en prensa, al momento de escribir esta introducción, en la revista *Realidad Económica*.

los hechos, entre ciencia social y lucha política. Este libro no pretende –ni podría pretenderlo– ser un aporte a esa tarea, pero sí reivindica ese vínculo al asumir la intención de servir a la intervención política. En ese sentido, lejos de que ese objetivo comprometa el valor de lo que aquí se plantea para la comprensión de los problemas que trata, creemos que una caracterización política adecuada que enmarque una acción política de izquierda requiere de análisis rigurosos y de compromiso con la verdad. Compromiso con la verdad significa aquí, en primer lugar, apego a una práctica crítica de lo dado. La verdad, como momento fugaz, sólo es posible a condición de partir de lo dado –y ello supone construcción metodológicamente rigurosa de datos– para trascenderlo. O, lo que es lo mismo, partir de un punto de vista para –a partir de un distanciamiento crítico– dar lugar a uno nuevo. Pero, en segundo lugar, es una máxima ética orientada a impedir que el trabajo intelectual sea instrumentalizado con fines de justificación, su transformación en ideología de partido o de Estado.

I

MODO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DOMINACIÓN POLÍTICA

Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001¹

El objetivo de este artículo es realizar una primera aproximación al análisis de los cambios y continuidades de la relación entre modo de acumulación de capital y hegemonía política después de la crisis de 2001. Para ello, presentaremos, en primer lugar, un breve resumen de las principales hipótesis sobre esta relación entre 1989 y 2001, ya desarrolladas en trabajos anteriores. En segundo lugar, avanzaremos en un primer análisis de los cambios y continuidades en el modo de acumulación de capital. Por último, expondremos algunas hipótesis provisorias referidas a las consecuencias sobre la hegemonía de la clase dominante, implicadas por los cambios en la dinámica de acumulación de capital. Dados los límites en nuestro avance del estudio de la conflictividad social y de los cambios en la forma de Estado desde 2001, nos concentraremos en el análisis del modo de acumulación y de los cambios en la hegemonía en él supuestos.

La principal hipótesis respecto de la relación entre acumulación de capital y hegemonía entre 1989 y 2001 es que, por sus características,

¹ Artículo escrito a fines de 2006 y publicado originalmente en el *Anuario* N° 3 de la Asociación de Economistas de Izquierda en abril de 2007. Para reducir la cantidad total de cuadros y gráficos, en notas al pie, se reenvía, en algunos casos, a cuadros que exceden el período considerado en este artículo. En aquellos, y salvo indicación contraria, las afirmaciones son válidas para el período que concluye en el año 2005.

era inherente al modo de acumulación de capital desarrollado en Argentina en esos años, una contradicción entre las necesidades de valorización del capital y las necesidades de legitimación del proceso de valorización. Esta contradicción tendió a resolverse a través del predominio de mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo, que dio lugar a lo que denominamos una “hegemonía débil”.

La hiperinflación de 1989 representó el final de un modo de acumulación de capital, de una lógica de enfrentamiento entre las clases y de una determinada forma de Estado. La crisis del dinero, su virtual desaparición como medida general de los valores, significó un agudo proceso de disolución social. En este sentido, la crisis hiperinflacionaria constituye un momento agudo de la crisis de reproducción del capital y, por lo tanto, de reproducción del conjunto de las clases y fracciones de clase. Frente a ello, la clase obrera no pudo romper con una estrategia centrada en la lucha salarial y en la defensa del viejo patrón de acumulación, aliada a las fracciones mercado internistas de la burguesía industrial. Esta estrategia suponía la defensa de la desvinculación del espacio nacional de valor de la acción de la ley del valor a escala mundial.² Pero como esta desvinculación estaba en la base de la crisis de balanza de pagos y de la pérdida de capacidad de compra de la moneda local, el éxito en la resistencia conducía a la profundización de la crisis. Esta lógica de enfrentamiento restaba capacidad hegemónica al bloque sociopolítico al que pertenecía la clase obrera. Al mismo tiempo, en la medida en que la crisis se profundizaba, adquiría potencialidad hegemónica la reestructuración del capital ligada a una estrecha articulación con el mercado mundial. De modo que, lo que posibilitó que las fracciones más concentradas del capital local pudieran construir un sólido consenso alrededor del programa de reformas neoliberales (apertura externa, desregulación del mercado, privatizaciones, etc.), fue la capacidad que tuvieron de presentar, en ese momento, las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del capital en general y, por lo tanto, del conjunto social. Es desde esta perspectiva que puede comprenderse el papel de la amenaza hiperinflacionaria. En tanto la hiperinflación es un proceso de disolución social que amenaza la reproducción del conjunto de las clases, pudo actuar como fundamento coercitivo del consenso alrededor de un programa de reformas que aparecía como única alternativa de salida de la crisis. Ese consenso alrededor del programa de reformas neoliberales condujo a una reconfiguración del modo de acumulación de capital.

² Para una discusión teórica de estos conceptos, ver Astarita (2004).

En primer lugar, se desarrolló un proceso de reestructuración de la industria. Por un lado, bajo condiciones de apertura externa y política monetaria restrictiva, se dio un proceso de quiebras de empresas, en particular de las productoras de bienes de mayor valor agregado. Pero, al mismo tiempo, creció la participación de las manufacturas en las exportaciones.³ No se trató, entonces, de un proceso de reprimarización sino del aumento del peso en la estructura económica de una industria productora de mercancías de bajo valor agregado y orientada a la exportación.⁴ Este hecho permitió la superación de la contradicción entre agro e industria del período sustitutivo y fue una de las bases para la conformación de un bloque unificado de poder de la clase dominante. Pero esta transformación de la estructura industrial profundizó el desarrollo dependiente y la tendencia a crisis recurrentes. En primer lugar, la especialización en la exportación de *commodities*⁵ volvió a la economía vulnerable a la volatilidad de los precios. En segundo lugar, debido a la dependencia tecnológica del desarrollo industrial, durante las fases expansivas, el aumento de las importaciones condujo a déficits comerciales crecientes.⁶ En tercer lugar, la brecha de productividad internacional persistió a lo largo de todo el período y comenzó a incrementarse en la segunda mitad de los noventa.⁷ Bajo la presión de la competencia externa, las empresas que lograron sobrevivir compensaron esta brecha mediante el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo.

Un segundo rasgo del modo de acumulación de capital durante la vigencia de la convertibilidad fue la dependencia financiera. Sobre este hecho se apoyan los enfoques que sostienen el carácter financiero del crecimiento –como el de la “valorización financiera” de Basualdo (2000)– y que enfatizan la importancia de los flujos de corto plazo de capital dinero y de la fuga de capitales. Sin embargo, el problema no es la existencia de estos fenómenos, sino el tipo de relación que man-

³ Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sumadas a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron el 60% del total en el año 2000. Las MOI por sí solas alcanzaron el 31%. Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación [gráfico 1].

⁴ Esto no niega la importancia del mercado interno para un sector importante de la industria, sino que señala una tendencia de la transformación industrial y que es predominante entre las fracciones más concentradas del capital local.

⁵ Mercancías de bajo valor agregado con un único precio determinado por el mercado mundial.

⁶ Si bien el consumo tuvo importancia, la importación de bienes de capital fue central. El análisis de las importaciones por uso económico revela que las importaciones de bienes de capital fueron las segundas en importancia durante todo el período y fueron las que presentaron mayor prociclicidad (Piva, 2005).

⁷ Durante la primera mitad de los noventa, si bien la incorporación de nuevas tecnologías redujo la brecha de productividad internacional, ésta no llegó a cerrarse [ver Piva (2012)].

tuvieron con la acumulación de capital productivo. Aquí sostenemos que el predominio del sector financiero en este período se debió a su papel para la acumulación de capital productivo. En primer lugar, el proceso de acumulación era dependiente del ahorro externo. Los flujos de capital dinero permitieron la ampliación de la capacidad de crédito necesaria para sostener el proceso de modernización tecnológica y la acumulación de capital en todas las actividades productivas.⁸ En segundo lugar, desde este punto de vista, es irrelevante el origen nacional o internacional de los agentes que buscan aprovechar las diferencias entre las tasas de interés local e internacional. Se trate de flujos de capital internacional o de endeudamiento externo de agentes locales, el comportamiento es el mismo: ingresa una masa de divisas, se presta a través del sistema financiero local y después de un tiempo se retira esa misma masa de dinero más una tasa de interés que es realización de una ganancia en moneda mundial. Esa tasa de interés es una porción de plusvalor y la continuidad en el tiempo de esa “valorización financiera” se juega, en última instancia, en el éxito en la producción y realización de plusvalor de los capitales productivos. Lo que es relevante desde el punto de vista de la composición de la burguesía como clase es la asimilación de comportamientos de capital nacional y extranjero y su interpenetración, producto del mecanismo de endeudamiento y fuga de capitales. Un segundo aspecto de la dependencia financiera fue la función de compensación de desequilibrios macroeconómicos que cumplieron los flujos de capital financiero.⁹ Durante las fases expansivas, en la financiación del déficit de cuenta corriente agravado por acumulación de déficits comerciales; durante las fases recesivas, en el financiamiento del déficit fiscal debido al descenso de la inversión y el consumo. Desde este punto de vista, es importante destacar que los flujos de capital financiero cumplieron una función inmediatamente política, dado que la convertibilidad suponía la cristalización de una relación de fuerzas que daba cierto marco de unidad al capital. En tanto tipo extremo de política monetaria restrictiva, la convertibilidad indujo durante las fases recesivas procesos deflacionarios de respuesta a la crisis. En la medida que mayores caídas salariales implicaban menores desvalorizaciones de capital como medio

⁸ El análisis de la evolución de los préstamos por actividades del sistema financieros local muestra que la inversión productiva y el consumo fueron los grandes destinos del crédito (Fuente: BCRA) [ver Piva (2012)].

⁹ Aquí utilizamos el término “capital financiero” en el sentido que le da Marx en *El Capital* (Marx, 1998, tomo III, volumen 7), como capital que da interés, y no en el más específico de Hilferding/Lenin.

para la recuperación de la rentabilidad, la convertibilidad brindaba un marco de unidad del capital en su ofensiva contra el trabajo.

El tercer rasgo del modo de acumulación es el papel desempeñado por la IED.¹⁰ Su aumento en los años noventa fue fundamental para la ampliación del capital productivo. Si bien es cierto, como plantea Basualdo (2000), que gran parte de esta inversión tuvo como destino la participación en las privatizaciones y las transferencias accionarias ligadas a ellas, otros datos muestran la importancia de los aportes de capital en la industria.¹¹ Pero lo más relevante fue el proceso de internacionalización del capital local. Bajo la presión de la competencia internacional, se dio lugar a un proceso de fusiones y adquisiciones liderado por el capital extranjero.¹² El resultado de este proceso fue la internacionalización del capital local y la interpenetración entre capital nacional y extranjero

Resumiendo lo expuesto, la coerción hiperinflacionaria fue el fundamento de un amplio consenso alrededor del programa neoliberal de salida a la crisis. Frente a la hiperinflación, el proceso de reestructuración capitalista, en tanto fue capaz de recomponer las condiciones para la reproducción del capital en general, apareció como condición para la reproducción del conjunto social. Sobre esta base, la acción del Estado, en su ejecución del programa de reformas neoliberales, pudo presentar la ofensiva del capital como expresión del interés general, traduciéndola en hegemonía política. La reestructuración del capital reconfiguró en su desarrollo el modo de acumulación transformando la estructura social y, de este modo, produjo las premisas de su reproducción al consolidar una relación de fuerzas favorable al capital. La derrota de las fracciones mercado internistas de la burguesía industrial contribuyó a la creación de una sólida unidad al interior de la clase dominante en torno a un nuevo modo de acumulación centrado en la exportación de productos industriales, agroindustriales y agropecuarios de bajo valor agregado. A su vez, la dependencia del ritmo de acumulación de la inversión extranjera directa y de los flujos internacionales de capital dinero, produjo una comunidad de intereses en-

¹⁰ Todos los datos referidos a IED, salvo indicación contraria, son tomados de Giusani y L'hopital (2003).

¹¹ Entre 1992 y 2002, los aportes de capital representaron el 32% de la IED, constituyeron la segunda fuente de ingresos y mostraron el comportamiento más estable, mientras que la industria fue la segunda actividad receptora de IED con un 22% del total. El primer lugar lo ocupó la suma de "Electricidad, gas y agua", "Comercio" y "Transporte y comunicaciones" con un 24%.

¹² La cantidad de firmas de IED aumentó desde 45% en 1993 hasta 63% en 2001, mientras que su valor de producción pasó desde el 61% hasta el 78% del total de la muestra (Fuente: Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC).

tre capital local y transnacional, esto en el marco de una creciente interpenetración del capital nacional y extranjero, y de una tendencia a la internacionalización de la propiedad del capital local. Frente a este bloque de poder unificado de la burguesía, la clase obrera emergía del proceso fragmentada y debilitada. Se invertía así la dinámica que había dominado el enfrentamiento social hasta mediados de los setenta. Esta fragmentación, inicialmente producto del fracaso de la estrategia dominante de la clase obrera, se desarrolló luego como resultado de las transformaciones del modo de acumulación, ya que el proceso de reestructuración fue desigual según ramas y tamaño de las empresas. Al mismo tiempo, la dinámica reformista produjo un fuerte incremento del desempleo y el subempleo. Si la amenaza hiperinflacionaria fue fundamento coercitivo del consenso alrededor del programa de reformas neoliberales, la fragmentación de la fuerza de trabajo así como el aumento del desempleo y el subempleo, completaron y profundizaron su eficacia coercitiva, al inducir la aceptación de la ofensiva del capital en los lugares de trabajo. Esta relación de fuerzas fue condición de la continuidad del proceso de acumulación. Frente a retrasos en la productividad que afectaban la competitividad internacional del capital local y, más tarde, en un contexto de devaluaciones competitivas y caída de los precios internacionales de los *commodities*, la continuidad del proceso de acumulación tendió a basarse cada vez más en mecanismos de aumento de la plusvalía absoluta –extensión de la jornada laboral e intensificación del trabajo– y en la caída de los salarios. Pero este carácter del proceso de acumulación tendió a limitar la capacidad hegemónica de la clase dominante. En la medida en que la reproducción ampliada del capital se basó de modo predominante sobre el deterioro de las condiciones de trabajo y del salario de los trabajadores, fue cada vez más difícil presentar las condiciones de la expansión particular del capital como condiciones de la “expansión de las energías nacionales” (Gramsci, 1998). Por lo tanto, la continuidad del proceso de acumulación dependió cada vez más de la efectividad de los mecanismos coercitivos (amenaza hiperinflacionaria, fragmentación de la fuerza de trabajo, alto desempleo) para producir lo que podríamos llamar un “consenso negativo”, que dio lugar a una “hegemonía débil”.

Sin embargo, es posible distinguir dos etapas: la primera desde 1991 a 1994 y la otra desde 1995 en adelante. Durante la primera, se produjo lo más importante de la reestructuración del capital en el sector privado, el grueso de la reforma del Estado y del programa privatizador, y se establecieron normas fundamentales como la ley de empleo, el decreto de desregulación, etc. Desde este punto de vista, se trata de un período de pleno desarrollo de la ofensiva del capital. Pero, por otro lado,

los fuertes incrementos en la productividad permitieron compatibilizar un aumento importante de la tasa de explotación, con un leve incremento del salario real,¹³ al mismo tiempo que se extendió de hecho la jornada laboral y crecía el desempleo. También hubo un simultáneo incremento de los ingresos de los más pobres y de la desigualdad.¹⁴ Por último, la estabilidad económica permitió una expansión del consumo de los sectores medios. En este sentido, desde 1991 hasta 1994, el consenso alrededor del programa de reformas neoliberales se basó en una articulación de la eficacia de los mecanismos coercitivos (amenaza hiperinflacionaria, fragmentación de la fuerza de trabajo y aumento del desempleo) con una cierta capacidad de realizar concesiones a diversas fracciones de las clases subalternas. En este contexto, los conflictos vinculados al proceso de reestructuración del capitalismo argentino, crecientes aunque fragmentados y desarticulados, pudieron ser aislados y tuvieron escaso impacto electoral. A partir de 1995, sin embargo, los menores aumentos de la productividad y el consecuente ensanchamiento de la brecha de productividad internacional dieron predominio a los mecanismos de producción de plusvalor absoluto y caída salarial. Esto resultó agravado por la sucesión de devaluaciones iniciadas en 1997. En este contexto, entre 1995 y 2001, el salario real cayó debajo del nivel de 1991 (Basualdo, 2003). La pauperización relativa cedió el lugar a la pauperización absoluta,¹⁵ y los agudizados procesos de centralización y concentración del capital condujeron a una creciente pauperización y proletarización de sectores medios. Ante esta situación adquirieron centralidad los mecanismos coercitivos de producción de consenso. En este contexto, comenzaron a manifestarse dificultades en la capacidad del Estado para ejercer sus funciones hegemónicas frente a la emergencia del movimiento piquetero y frente al inicio del proceso de movilización de los sectores medios, sobre todo urbanos.¹⁶ La emergencia de la Alianza puede vincularse a este proceso de movilización de los sectores medios, y reflejó en sus posiciones electorales y en los dilemas de gobierno la actitud dual que tuvieron esos sectores hacia el programa de reformas. Por un lado, oposición a las consecuencias del modelo –en tanto víctimas de un proceso de proletarización y pauperización– y, por otro lado, adhesión a la convertibilidad y al núcleo duro del programa neoliberal, en la medida en que su poder de compra estaba atado a su continuidad. Ya en el gobierno,

¹³ El salario real promedio de la industria creció el 7,7% entre 1991 y 1994 (Basualdo, 2003).

¹⁴ Fuente: INDEC.

¹⁵ Fuente: INDEC.

¹⁶ Esto proceso fue señalado por el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), ver Cotarelo (2000).

la política de la Alianza expresó esas exigencias contradictorias. Desde el último trimestre de 1998, la economía entró en una fase depresiva. La vigencia de la convertibilidad imponía, como condición para el relanzamiento de la acumulación, una deflación general de precios y una caída del salario mayor a la del resto de los precios. Esto obligaba al Estado a producir un ajuste fiscal con el doble propósito de aliviar el déficit e inducir mecanismos deflacionarios. Pero la deflación sólo era posible a través de una gran caída del consumo y la inversión, que iría acompañada de la agudización de las tendencias a la centralización de capitales y la expropiación y empobrecimiento de los pequeños propietarios. Mientras, la restricción monetaria desmonetizaba la economía informal afectando especialmente a los sectores más empobrecidos. Al mismo tiempo, la legitimación de esas políticas obligaba al Estado a responder a una serie de demandas centradas en las consecuencias del modo de acumulación. Desde esta perspectiva, la crisis de 2001 es eminentemente política. En términos puramente económicos, es pensable una salida de la crisis compatible con el régimen de convertibilidad mediante una deflación suficiente con las características arriba mencionadas. El bloqueo de la vía deflacionaria y la crisis consecuente significó el estallido de la contradicción entre necesidades del proceso de valorización y las necesidades de su legitimación.

Ahora bien, dado que esta contradicción, inherente al modo de acumulación, fue resuelta durante todo el período mediante la eficacia de los mecanismos de coerción (amenaza hiperinflacionaria, fragmentación de la clase obrera, alto desempleo), el problema a dilucidar es por qué y sobre quiénes fracasaron esos mecanismos. El análisis de la evolución de la conflictividad durante el 2001 muestra que los mecanismos de coerción fracasaron fundamentalmente entre sectores de las capas medias, los desocupados organizados y los sectores más pauperizados. Para estos sectores, sometidos por la crisis a acelerados procesos de disolución social en los márgenes y de proletarianización y pauperización que amenazaban su reproducción social, la hiperinflación ya no constituía una amenaza. Los trabajadores ocupados, por el contrario, permanecieron atrapados entre la fragmentación y la amenaza del desempleo.

El modo de resolución de la crisis de 2001 impactó sobre las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones de clase y, en particular, sobre la conformación del “bloque en el poder” (Poulantzas, 1986; 1986b) de

la clase dominante. La convertibilidad constituía un marco de unidad de las distintas fracciones del capital. En primer término, porque ésta era cristalización de una relación de fuerzas entre las clases con origen en la violencia hiperinflacionaria (Bonnet, 1995), profundizada y consolidada con la reestructuración capitalista, siendo el fundamento del desarrollo “normal” de la acumulación durante las fases expansivas. En segundo término, porque, en períodos de crisis, era el marco de una ofensiva unitaria contra el trabajo que minimizara la desvalorización de capitales y la alteración del balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder”. El bloqueo de la vía deflacionaria de resolución de la crisis abrió el espacio para las disputas entre diversas fracciones del capital, en tanto que la salida de la convertibilidad a través de la devaluación del peso supuso una distribución desigual de los costos de la crisis entre esas distintas fracciones.

Desde este punto de vista, las preguntas a responder respecto de las condiciones de la recomposición de la hegemonía burguesa entre 2002 y 2003 son básicamente dos: 1) si el bloqueo a la vía deflacionaria constituyó una alteración sustancial de la relación de fuerzas entre las clases dominantes y subalternas; 2) si el cambio en las fracciones constituyentes y en el balance de fuerzas en el “bloque en el poder” es tal que debiéramos hablar de la conformación de un nuevo bloque. Aquí solo podremos avanzar muy parcialmente en esas respuestas, a través de una primera aproximación a los cambios en la dinámica de la acumulación a partir de un análisis comparativo de un *set* básico de variables macroeconómicas. Nos concentraremos específicamente en dos áreas: la evolución de la estructura industrial y la dependencia financiera.

El primer rasgo de la nueva fase expansiva iniciada a fines de 2002 está dado por los altos índices de crecimiento del PBI. Entre 2002 y 2005, medido a precios de 1993, creció un 29,5% y tuvo una tasa de crecimiento anual promedio del 9%.¹⁷ Sin embargo, recién durante el año 2005 superó los niveles de 1998, pico de la convertibilidad. Es decir, los años 2003 y 2004 fueron años de reactivación. El comportamiento de la inversión y el consumo privado también confirman este punto de inflexión.¹⁸ La cuestión a dilucidar aquí es si las características del

¹⁷ Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadro 1].

¹⁸ La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) medida a precios de 1993, prácticamente alcanza su máximo de la convertibilidad (1998) durante el año 2005, permaneciendo levemente por debajo (Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación). Lo mismo sucede con el consumo de los hogares, que, medido a precios de 1993, también supera el máximo de la convertibilidad

crecimiento entre 2003 y 2005 configuran un nuevo modo de acumulación de capital y, en ese caso, en qué aspectos se ha modificado.

El primer interrogante es si, desde 2003, el crecimiento se orientó en el sentido de un aumento del peso de la industria en la estructura productiva y de una importancia mayor del mercado interno como destino de la producción –en particular de la industrial. Respecto del peso de la industria en la estructura productiva, si tomamos como un indicador aproximado la proporción de la industria manufacturera respecto del valor agregado bruto de producción (a precios de productor de 1993), observamos que la industria manufacturera no sólo no aumentó su participación, sino que ésta ha decrecido levemente comparada con el ciclo 1996-1998.¹⁹ Sin embargo, sí se percibe un cambio en la composición del producto industrial, lo que surge de observar el crecimiento que experimentaron las distintas ramas de la producción entre 1996 y 1998 y entre 2003 y 2005.²⁰ Se destacan las tasas de crecimiento relativas de las ramas “Metalmecánica excluyendo industria automotriz”, “Productos textiles” y “Papel y cartón” respecto de su caída o crecimiento nulo entre 1996 y 1998. Esta parece ser una consecuencia, fundamentalmente, de la política de tipo de cambio alto y de la reducción del costo salarial real.²¹ En el caso de la producción textil, es importante señalar que además de haber crecido de manera permanente la utilización de su capacidad instalada²² –lo que puede ser un indicador de la escasa ampliación de su dotación de bienes de capital–, presenta un importante aumento del trabajo no registrado, si utilizamos como indicador la proporción de asalariados sin aporte jubilatorio.²³ Es decir, al menos en este caso, la sustitución de importaciones operó sobre la base de estrategias de acumulación trabajo-intensivas y de un aumento de la utilización de trabajo no registrado, el que presenta, a diferencia del trabajo registrado, niveles de ingreso real inferiores a los del año 2001. Respecto de la importancia del mercado

de 1998 durante el año 2005 (Fuentes: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación) [cuadro 2].

¹⁹ Fuentes: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadro 7].

²⁰ Fuentes: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadro 3].

²¹ Pero también, como veremos después en relación con los cambios en el balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder”, de la caída real de las tarifas de gas, electricidad, etc. y del descenso relativo de los tipos de interés.

²² Fuente: INDEC [cuadro 4].

²³ Si bien con tendencia creciente, la proporción de trabajadores sin aportes jubilatorio para el período 1996 – 1998 en la “producción textil” fue del 52,1% mientras que entre 2003 y 2006, aunque con tendencia decreciente, fue del 64,7% (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC).

interno como destino de la producción y de la industria en particular, todas las mediciones parecen confirmar una profundización de la reorientación exportadora de la industria desarrollada durante los noventa. La proporción de las exportaciones sobre el PBI se ha incrementado sustancialmente, sea ésta medida a precios corrientes o a precios de 1993. En contraste, el consumo de los hogares ha reducido su proporción del PBI según ambas mediciones.²⁴ La evolución de las exportaciones por grandes rubros también muestra que, tanto desde 1993 como desde el año 2003, las MOI experimentan un crecimiento mayor que las exportaciones primarias y que las MOA.²⁵ Y, si observamos la proporción de las exportaciones industriales respecto del valor agregado bruto de producción industrial, vemos que también ha crecido.²⁶ Es decir, los diferentes datos parecen mostrar una profundización de las principales tendencias de transformación de la estructura industrial de los noventa. Por otro lado, la política de tipo de cambio alto parece efectivamente haber producido un proceso incipiente de sustitución de importaciones en algunas ramas. Sin embargo, este proceso, lejos de romper, se articula con la reorientación exportadora de productos de bajo valor agregado predominante en la industria. Esto se vuelve visible en el hecho de que el nuevo proceso sustitutivo, a diferencia del de los años treinta a los setenta, se desarrolla a partir de las posibilidades de competir con la importación sobre la base de la reducción del costo salarial que el tipo de cambio alto ofrece a algunas ramas. Este resultado pone de manifiesto que los efectos de las políticas de “tipo de cambio alto y competitivo” deben considerarse en su relación con el tipo de articulación con el mercado mundial, rasgo medular del modo de acumulación.

Junto a las tendencias de transformación de la estructura industrial, subsiste la fragilidad externa propia de la profundización del desarrollo dependiente. Desde el inicio de la fase expansiva, las importaciones de mercancías han crecido más que las exportaciones, reduciendo el superávit comercial.²⁷ La diferencia con los años noventa es la

²⁴ Fuentes: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria y Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadros 6 y 11].

²⁵ De conjunto, alrededor del 60% de las exportaciones resulta explicado por la suma de MOA y MOI en ambos períodos (Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación) [gráfico 1].

²⁶ Creció desde el 14,4% en 1998, último año de crecimiento del período de vigencia de la convertibilidad, y el 18,5% durante el año de crisis de 2001, hasta el 32,1% del año de crisis post devaluación de 2002 y el 25,4% del 2005, último dato disponible de la actual fase expansiva (Fuente: CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación).

²⁷ Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadro 5].

magnitud del superávit comercial que, aunque decreciente, subsiste aun después de tres años consecutivos de crecimiento. Este hecho es resultado del aumento del precio internacional de los *commodities* y de la continua depreciación del peso respecto de las demás monedas.²⁸

No contamos con datos que nos permitan estimar si persiste una tendencia al incremento de la brecha de productividad internacional de la industria. Sin embargo, ni la evolución de la IBIF como proporción del PBI, ni la proporción de la IBIF de bienes y equipos durables, muestran diferencias significativas respecto de las fases expansivas del período de vigencia de la convertibilidad.²⁹ Por otra parte, la productividad horaria de la industria aumentó entre 2003-2005 por debajo de 1996-1998.³⁰ Si desde 1995 proporciones de inversión similares y aumentos de la productividad superiores tendieron a aumentar la brecha de productividad, es probable que hoy esté sucediendo algo similar. De modo que, desde el punto de vista de las tendencias de evolución de la estructura industrial, puede observarse una profundización de los rasgos desarrollados en los años noventa. Al mismo tiempo, los cambios vinculados a la modificación de la política cambiaria y de las condiciones del mercado mundial afectan el modo de operación concreto de esas tendencias, pero sin revertirlas.

Un segundo aspecto del modo de acumulación de capital entre 1991-2001 era la dependencia financiera. Este rasgo ha sido el más radicalmente modificado. En la medida en que la combinación de devaluación y altos precios de los *commodities* ha sostenido un elevado superávit comercial, a lo que se ha sumado en el corto plazo una reducción de los pagos de intereses de la deuda externa, el saldo de cuenta corriente ha sido superavitario. Esto condujo, en lo inmediato, a reducir la dependencia de los flujos de capital dinero y a un ritmo menor de endeudamiento externo, reflejado en la evolución de la cuenta capital.³¹ Es esperable que, en el mediano plazo, el aumento del pago de intereses y la reducción del superávit comercial lleven a déficit de cuenta corriente, aún si persisten estos precios internacionales de los *commodities*. Llegado ese punto, el ritmo y la continuidad de la acumulación volverán a depender de los flujos de capital dinero y de la capacidad de endeudamiento externo público y privado. Es decir, que la fragilidad financiera del actual modo de acumulación sigue presente, aunque de modo latente.

²⁸ Como puede observarse en la evolución del índice de tipo de cambio real multilateral. Fuente: BCRA.

²⁹ Fuente: CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

³⁰ Tuvo un aumento anual promedio del 5,4% entre 1996 y 1998 y de 1,7% entre 2003 y 2005.

³¹ Fuente: CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Si bien los rasgos centrales del modo de acumulación no se han modificado, han ocurrido cambios. Estos cambios pueden definirse como cambios tácticos en el marco de una misma estrategia de acumulación.³² Sin embargo, como planteáramos antes, estas modificaciones no han sido neutras ni desde el punto de vista de la relación clases dominantes/clases dominadas, ni para el balance de fuerzas entre las diferentes fracciones del capital. Como señalamos arriba, las principales resistencias a la vía deflacionaria de respuesta a la crisis provinieron de los sectores pauperizados, los desocupados organizados y las capas medias. La coerción hiperinflacionaria dejó de ser efectiva allí donde los procesos de disolución social comenzaron a desarrollarse como efecto del proceso recesivo/deflacionario. Si bien los asalariados ocupados no se encontraron ausentes de estos conflictos, su modo de participación expresó la persistencia de la situación de repliegue que dominó el conjunto del período 1989-2001 y, particularmente, el subperíodo iniciado en 1995-1996. El primer año post devaluación y el primer año del gobierno kirchnerista expresaron esa relación de fuerzas de varios modos. Aquí nos concentraremos en el análisis de los cambios en el modo de acumulación.³³

Como efecto de la devaluación, durante 2002 se produjo una fuerte caída de los salarios reales, principal fundamento de la recuperación de la tasa de ganancia.³⁴ El éxito de la devaluación, un aumento de los salarios nominales inferior al incremento de los precios al consumidor, supone la consolidación de la situación de relativa debilidad de los obreros ocupados. Si las devaluaciones de períodos anteriores no tenían efectos similares, se debía a la capacidad de los asalariados de resistir la caída del salario real. Al mismo tiempo, la captura de una parte del aumento de las ganancias mediante la imposición de retenciones a las exportaciones, se destinó al Plan Jefes y Jefas de Hogar. Esta cuasi universalización de los Planes Trabajar se destinó, por un lado, a enfrentar la situación de pauperización extrema de los protagonistas de los saqueos y, por otro lado, a debilitar las capacidades organizativas y los recursos de movilización de las organizaciones de desocupados. Sin embargo, la vía inflacionaria de resolución de la crisis implicó simultáneamente una alteración en el balance de fuer-

³² Esta formulación me la sugirió Rolando Astarita.

³³ En la política hacia parte importante de los sectores medios fueron centrales cuestiones de orden simbólico (política de DDHH, renovación de la corte, etc.) y la resolución con una pérdida ciertamente menor a la esperada inicialmente del problema del corralito bancario.

³⁴ Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC [cuadro 12].

zas al interior del “bloque en el poder”. La recuperación de la tasa de ganancia del capital productivo fue también producto de la caída en términos reales de las tarifas de gas, electricidad, etc.³⁵ y de la reducción de las tasas de interés respecto de los promedios de la década del noventa (Schvarzer y Finkelstein, 2005). Estos hechos, a los que habría que agregar el resultado de la renegociación de la deuda externa, representan una alteración en la relación de fuerzas de las fracciones del capital en favor del capital productivo –especialmente el orientado a las exportaciones– y en detrimento del capital financiero y de aquellos sectores del capital cuya inserción predominante es la propiedad accionaria de empresas privatizadas. Los resultados, ya expuestos, de la combinación de tipo de cambio alto y elevados precios de exportables han favorecido la continuidad de este balance de fuerzas en el corto plazo, al reducir la dependencia financiera del proceso de acumulación. Sin embargo, más allá de este hecho, el desplazamiento de las relaciones de fuerza entre las fracciones del capital se apoya en el bloqueo a la vía deflacionaria de respuesta a la crisis por parte de fracciones de las clases subalternas y, por lo tanto, de la relación de fuerzas fundamental entre dominantes/dominados. Puede decirse que los cambios en el “bloque en el poder” son expresión de la inviabilidad política del tipo de salida que aseguraba la continuidad del balance de fuerzas interburguesas consolidado durante la convertibilidad.

De conjunto, la persistencia de los rasgos centrales del modo de acumulación de capital, así como la sólida unidad de las diversas fracciones de la burguesía en torno a esos rasgos, nos conducen a sostener la hipótesis de un cambio del balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder” más que de un cambio de bloque.

Sin embargo, este desplazamiento de la relación de fuerzas entre las fracciones del capital tiene importantes efectos sobre la capacidad de universalización de los intereses de la clase dominante. Aunque no podemos profundizar aquí en el tema, esta alteración del balance de fuerzas es correlativa con un aumento de la autonomía relativa del Estado. Aquí centraremos la atención en aquellos aspectos del modo de acumulación que permiten observar algunos rasgos de la modificación en la relación entre acumulación y hegemonía. En primer lugar, se observa un importante aumento del consumo.³⁶ Este hecho, asociado a las fases de recuperación y crecimiento, ha impactado sobre todo en las capas medias, con acceso al crédito y la adquisición de

³⁵ Fuente: Elaboración propia a partir de CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

³⁶ Fuente: Elaboración propia a partir de CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación [cuadro 2].

bienes durables. En segundo lugar, descendieron sensiblemente los niveles de desempleo y subempleo.³⁷ Simultáneamente, aumentó el salario real de todos los trabajadores respecto del año 2002, aunque sólo para los trabajadores registrados del sector privado se produjo una recuperación de niveles pre devaluación. En el caso de los privados no registrados y de los trabajadores del sector público, aún persiste un fuerte retraso respecto del cuarto trimestre de 2001.³⁸ Por otro lado, la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini ha mejorado (INDEC, 2006), retrotrayendo las mediciones a niveles semejantes a los de 1996.³⁹ Al mismo tiempo, la amenaza inflacionaria ha seguido operando como límite a las demandas por aumentos salariales. El éxito en el respeto de las pautas de aumento salarial y su explícita vinculación a la amenaza de disparamiento de los precios es también un dato significativo que lo diferencia del fracaso de las pautas de incremento salarial acordadas por el gobierno alfonsinista durante el Plan Primavera. Esto demuestra la persistencia de la relación de fuerzas fundamental que fue alumbrada después del proceso hiperinflacionario de 1989 –sólida unidad burguesa y debilidad y fragmentación de la clase obrera– y que es el fundamento del modo de acumulación desarrollado desde 1991. Sin embargo, lo expuesto muestra una alteración fundamental, producto del desplazamiento del balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder”: los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo (amenaza hiperinflacionaria, alto desempleo, fragmentación de la clase obrera) han funcionado desde 2003 de manera subordinada respecto de la capacidad del Estado de otorgar concesiones a las clases subalternas. Es decir, han actuado como límites al planteo de las demandas y como un marco de conformidad respecto de concesiones consideradas como posibles. Pero el consenso se ha sostenido, fundamentalmente, sobre esa capacidad de satisfacción gradual de demandas y otorgamiento de concesiones. La pregunta que se plantea en el mediano, e incluso en el corto plazo, es si la lógica del proceso de acumulación, basada en bajos costos salariales relativos, será compatible con la continuidad de aumentos graduales del poder de compra de los asalariados, reducción persistente del desempleo y aumento del consumo de las capas medias, teniendo en cuenta además que ya no son posibles, por lo menos no en un contexto de expansión económica, nuevas pérdidas de posiciones relativas del sector financiero y las empresas privatizadas; o si se reabrirá la contradic-

³⁷ Aunque todavía en niveles superiores al 10% (Fuente: INDEC).

³⁸ Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INDEC [cuadro 12].

³⁹ Esto supone una reversión del deterioro de la distribución del ingreso entre 1996 y 2001, aunque sin alterar su modificación radical entre 1989 y 1995.

ción entre necesidades del proceso de valorización y sus necesidades de legitimación. En ese caso, los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo, ¿mantendrán la efectividad para resolver esa contradicción que tuvieron durante los noventa?

Sea como sea el futuro del vínculo entre acumulación de capital y hegemonía, es importante destacar que la alteración radical de la relación entre mecanismos coercitivos y capacidad de satisfacer demandas y otorgar concesiones en la producción de consenso, pone de manifiesto el rasgo central del proceso de constitución de una hegemonía. El cambio del balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder” es actualización de una potencialidad hegemónica, es decir, de la capacidad de determinadas fracciones del capital de hacer coincidir su reproducción como fracción con la reproducción del capital en general y, por lo tanto, de presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social. Si la disolución hiperinflacionaria fue el contexto que dio capacidad hegemónica a fracciones que, hasta ese momento, eran incapaces de constituir una dominación política democrática, las condiciones de la salida de la convertibilidad –el bloqueo de la vía deflacionaria por fracciones de las clases dominadas– otorgó potencialidad a algunas fracciones del capital –el capital productivo orientado a la exportación– de constituirse en dominantes al interior del “bloque en el poder”. Es esta capacidad la que se juega en la posibilidad de reapertura de la contradicción entre necesidades del proceso de valorización del capital y sus necesidades de legitimación.

Por supuesto, la actualización de la potencialidad hegemónica tiene un carácter contingente en la medida que requiere, como un momento de su realización –y que es al mismo tiempo un momento de la reproducción ampliada del capital como totalidad orgánica–, de desarrollos específicamente políticos, que hemos dejado provisoriamente fuera del campo de nuestro análisis.

I. MODO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DOMINACIÓN POLÍTICA

Los límites económicos de una lógica política¹

Introducción

La dominación política y la acumulación de capital son aspectos diferenciados de la misma realidad de subordinación del trabajo al capital. La normalidad capitalista presupone la reproducción de ambas. El primer gobierno kirchnerista pudo recomponer el poder de Estado a través de la construcción de un amplio consenso entre 2003 y 2007. El gobierno de Cristina pudo reconstruirlo después del denominado “conflicto del campo” en 2008. Lo hicieron, en ambos casos, a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas, que consistió en una recuperación selectiva y resignificación de reivindicaciones democráticas y populares forjadas desde la resistencia al neoliberalismo en los años noventa. Sin embargo, esa lógica fue posible en el marco de un conjunto de transformaciones de la dinámica de acumulación de capital cuyo grado de ruptura con la propia del período menemista es todavía, una década después, materia de debate.²

Si el modo específico del crecimiento económico fue condición de posibilidad de la reconstrucción del poder político, sus límites plantean desafíos a la continuidad de una lógica política que el kirchnerismo impulsó –pero de la que hoy depende–, aunque deberá verse en

¹ Artículo escrito a inicios de 2012 y publicado originalmente a mediados del mismo año en el N° 3 de la revista *Batalla de Ideas*.

² Este primer párrafo fue ligeramente modificado para evitar reiteraciones [agregado al artículo original].

qué medida. Este artículo se enfocará en el análisis de aquellas características del modo de acumulación desarrollado desde el año 2003 en Argentina que posibilitaron la opción kirchnerista de reconstrucción del consenso y los límites que enfrenta. A su vez, esas características y estos límites no pueden ser pensados como aislados de un proceso de acumulación que se desenvuelve a escala mundial y del actual contexto de crisis en el centro del sistema mundial. Su análisis es, desde esta perspectiva, el estudio de cómo las transformaciones y la crisis del sistema mundial se refractan en el medio económico-político específico de la Argentina.

La limitación de este artículo al “lado económico” del problema exige una aclaración. La construcción de consenso y la reproducción del poder de Estado requieren de procesos específicamente políticos, que aquí dejaremos momentáneamente de lado. Ello presupone, en primer lugar, que las características del modo de acumulación a la que nos referiremos en este artículo no condicionaron mecánicamente la lógica kirchnerista de construcción de consenso, sólo explican su posibilidad. En segundo lugar, los límites que le imponen tampoco permiten inferir que entonces el kirchnerismo se dirige a una crisis política. Sólo permiten reconocer dilemas políticos que el gobierno deberá enfrentar y que los trabajadores deberemos tomar en cuenta a la hora de discutir nuestra táctica y estrategia políticas.

Cambios en el sistema mundial

El ciclo de crecimiento económico de la Argentina desde fines de 2002 se inscribe en un conjunto de transformaciones del capitalismo a escala mundial. Estos cambios y su impacto en la modalidad de inserción argentina en el sistema mundial constituyen aspectos fundamentales de las condiciones de acumulación de capital durante el período. Esto es, no son un mero marco externo de procesos económicos y políticos internos, sino que los cambios de la acumulación de capital en Argentina deben verse como una articulación y entrelazamiento de cambios a escala mundial y dinámicas políticas y económicas internas.

En este sentido, un hecho fundamental fue *la reversión durante la última década de la tendencia de un siglo al deterioro de los términos de intercambio entre los productos de la periferia y del centro del sistema mundial*. Diversos estudios han registrado que, al menos desde fines de la primera guerra mundial y hasta fines del siglo XX, los productos primarios en particular y, más recientemente, los denominados *commodities* en general (que incluyen una serie de productos industriales altamente estandarizados), han

visto disminuir sus precios relativos a los de los bienes industriales de mayor valor agregado.³ Esta tendencia supuso importantes restricciones para el sector externo de las economías dependientes. *Desde el año 2002 los precios de los commodities, y de las materias primas en particular, han tendido a aumentar significativamente dando lugar a un mejoramiento de los términos de intercambio que impactó positivamente en la balanza comercial argentina.*

Este fenómeno se encuentra vinculado al impacto en el mercado mundial del crecimiento de la economía china y, en menor medida, de la India. El crecimiento de la economía china y de su participación en el producto mundial es un dato que se remonta a inicios de los años ochenta. Entre 1980 y 2000, el PBI chino pasó de representar el 2,2% del PB mundial (un porcentaje inferior al 3,9% de Brasil y al 2,5% de la India ese mismo año) al 7,1% en 2000 (superior al 2,9% de Brasil y al 3,7% de la India). Pero hacia 2010, el PBI chino explicaba el 13,5% del PB mundial, un 90% más que 10 años antes,⁴ hecho que impulsó la demanda de importaciones china de materias primas y su incidencia en sus precios. Desde 2002, además, India y Rusia, aunque la segunda en menor medida, también aumentaron su participación en la producción de riqueza a nivel mundial. Este fenómeno, lejos de ser un retroceso de la denominada “globalización” del capital, es el resultado genuino de la expansión de las relaciones capitalistas a escala planetaria (Astarita, 2004).

En este contexto de aumento de la participación económica mundial relativa de los llamados países emergentes –fenómeno del que no resultaron excluidos Brasil y Argentina, aunque con puntos de partida mucho más modestos y sin alcanzar aun sus niveles de participación en 1980–, la dependencia comercial para con EEUU y de la Unión Europea se redujo fuertemente. Por un lado, los precios de los productos que exporta Argentina no dependieron fundamentalmente de la demanda mundial de los países centrales durante la última década. En segundo lugar, producto de un aumento del comercio intra Mercosur desde inicios de los años noventa, más de un 20% de las exportaciones se dirigen hoy a Brasil y también se incrementaron las exportaciones a China (de un 4,2% del total en 2002 a un 7,1% en 2011) y al ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) (del 3% al 5% entre los mismos años). Simultáneamente, se redujo el porcentaje de exportaciones a EEUU (del 11,1% al 5%) y a la UE (del 20% al 15%).⁵ *El mejoramiento de los términos de intercambio y la menor dependencia comercial del centro constitu-*

³ Para un análisis más detallado ver Astarita (2010).

⁴ Fuente: Fondo Monetario Internacional.

⁵ Fuente: Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

yen cambios drásticos respecto de la inserción comercial de Argentina durante la mayor parte de su historia y permiten explicar tanto el desempeño exportador desde 2002 como el impacto moderado de la crisis mundial de 2008-2009. En términos más coyunturales, la política brasileña de apreciación del real ha contribuido a mejorar la performance exportadora de Argentina y a moderar el impacto de la apreciación de la moneda argentina frente al dólar.

De conjunto, los cambios en las tendencias del comercio mundial durante el último decenio otorgaron un mayor margen de maniobra a Estados periféricos como el argentino, pero el modo en que ésto incidió en la reconfiguración del modo de acumulación en Argentina y en las políticas efectivamente implementadas obliga a desplazar la mirada hacia la dinámica interna.

Las causas y la forma del crecimiento económico

Devaluación, recuperación de la tasa de ganancia y competitividad externa

La devaluación fue tanto el resultado de la impugnación popular a la vía deflacionaria de resolución de la crisis en 2001 como la respuesta capitalista a ambas. Y como tal, su éxito fue el éxito de la ofensiva inflacionaria contra el trabajo. Una devaluación del 200%, una inflación anual del 40% y salarios prácticamente inmóviles (todos datos de 2002) conforman ciertamente una “devaluación exitosa”. Su resultado fue el abaratamiento internacional de los bienes producidos localmente y una notable recuperación de la tasa de ganancia, tanto por la vía de la depresión del salario real como por la reducción en términos reales de las tarifas de gas, electricidad, etc. y de la tasa de interés. Ello supuso que la distribución de los costos de la crisis entre las distintas fracciones del capital benefició a las fracciones de capital productivo, especialmente a las orientadas a la exportación. *Pero, fundamentalmente, a partir de allí el tipo de cambio alto fue un aspecto central del proceso de acumulación.* No sólo favoreció la exportación, sino que actuó como paraguas de un incipiente proceso de sustitución de importaciones.

Reestructuración industrial, sustitución de importaciones y acumulación extensiva

Empecemos señalando que, a diferencia de quienes sostienen la tesis de que durante la década menemista existió un proceso de desindustrialización (Notcheff, 1998; Basualdo, 2006), entendemos que se produjo un proceso de reestructuración industrial de características más complejas. Por un lado, hubo una reducción del peso de la producción industrial orientada al mercado interno, particularmente en productos de mayor valor agregado en términos relativos. Pero, por

otro lado, aumentó notablemente la participación industrial en las exportaciones. Es esta reorientación exportadora de la gran burguesía industrial la que constituye en nuestra opinión el carácter dominante del proceso. Ésto se refleja no sólo en el agregado de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI), sino también en la evolución de las MOI, que resultaron ser las exportaciones más dinámicas del período. Las MOI pasaron de representar el 22,8% de las exportaciones en 1992 al 32,6% en 1998. En 2003 representaban el 26,9%, luego de la fuerte caída durante el período de crisis (1999-2002), y, en 2011, el 34,6%.⁶ Es decir, la tendencia desde 2003 a un mayor crecimiento de las MOI respecto de las MOA y las exportaciones primarias es un rasgo de continuidad con el proceso de reestructuración iniciado en los años noventa y no una ruptura. El término desindustrialización resulta, además, ambiguo en sus significados y la caída de la industria manufacturera como proporción del PBI es un rasgo compartido por la mayor parte de las economías centrales y de los denominados países emergentes en los últimos 30 años (Grigera, 2011). Aun así, esta caída ha continuado también en Argentina entre 2003 y 2011.

¿Dónde se encuentra la especificidad de este período entonces?

En primer lugar, la devaluación actuó como un paraguas que permitió cierto proceso de sustitución de importaciones. Sin embargo, a diferencia de la sustitución clásica de los años treinta a mediados de los setenta, la sustitución de este período se articuló con la orientación predominantemente exportadora de la gran burguesía industrial de productos altamente estandarizados y de bajo valor agregado relativo. Esta modalidad de inserción en el mercado mundial constituye una continuidad fundamental con los noventa que fue, además, fortalecida por la reversión del deterioro secular de los términos de intercambio. Ésto se manifiesta, por un lado, en la continuidad del patrón de exportaciones respecto de los años noventa (Porta y Fernández Bugna, 2008) pero, por otro lado, en el hecho de que las industrias orientadas al mercado interno beneficiarias de la protección cambiaria desarrollaron la sustitución de importaciones recurriendo a bajos costos salariales relativos, a través de estrategias trabajo intensivas con alta utilización de la capacidad instalada y la apelación al trabajo en negro. Ello ocurrió típicamente en la industria textil, aunque no sólo en ella, y explica la persistencia de altos niveles de empleo en negro, similares a los porcentajes más altos de los años noventa, aun después de 10 años de crecimiento económico, de aumento del empleo y de reducción del empleo en negro.⁷

En segundo lugar, aunque con una profunda heterogeneidad interna, la acumula-

⁶ Fuente: INDEC.

⁷ Fuente: INDEC.

ción de capital ha sido fundamentalmente extensiva. Una dimensión central de la reestructuración del capital en los noventa, particularmente entre 1991 y 1994, fue la importante renovación de capital fijo –que supuso la incorporación de nuevas tecnologías– y la quiebra de los capitales menos competitivos. Las tasas anuales de inversión desde 2003 han sido levemente superiores a las de la década del noventa. Sin embargo, si tomamos la evolución de la productividad horaria entre 1991-1998 y entre 2003-2010, observamos que para el primer período el promedio de variación anual es de un 7,1%, mientras que en el segundo es de un 4,7%.⁸ Si bien la productividad horaria es una medida deficiente del aumento de la productividad debido a renovación de capital fijo, ya que incluye aumentos en la intensidad laboral, la diferencia es significativa y permite aproximarnos indirectamente al problema de la calidad de la inversión. *La hipótesis más consistente con el conjunto de datos disponible es que la acumulación en el período ha sido predominantemente capital-extensiva y que el crecimiento económico desde 2003 se apoyó en el fundamento de la reestructuración del capital operada en los noventa.* Ésto fue posible en un contexto de tipo de cambio alto y de costos laborales históricamente bajos. Sin embargo, la heterogeneidad de la estructura industrial presupone que coexisten comportamientos tecnológico-intensivos en sectores de exportación, con el empleo intensivo de mano de obra descalificada en ramas como la textil. Pareciera que la articulación de la orientación exportadora de la gran burguesía industrial y el crecimiento de sectores orientados al mercado interno bajo el paraguas cambiario profundizaron dicha heterogeneidad (Fabris y Villadeamigo, 2011). *El carácter predominantemente capital-extensivo de la inversión explica el fuerte aumento del empleo, es decir, la más alta elasticidad empleo/producto respecto de los noventa por lo menos hasta 2007, y la consiguiente caída de la tasa de desempleo. A su vez, la caída del desempleo en un contexto de costos laborales históricamente bajos fue condición de posibilidad del aumento de los salarios reales.*⁹ Sin embargo, la heterogeneidad de la economía argentina tiene también su expresión en el grado de recomposición salarial. Mientras los salarios del sector privado registrado se encontraban en 2006 un 18,4% arriba del nivel del último trimestre de 2001, los asalariados en negro y los empleados en el sector público tenían salarios 17,3% y 23,8% inferiores.¹⁰ A partir de allí, es difícil establecer la evolución del salario real debido a la ausencia de datos fiables de inflación, pero las distintas fuentes informales (Buenos Aires

⁸ Fuente: elaboración propia en base a datos del Centro de Estudios de la Producción (CEP), Ministerio de Industria de la Nación.

⁹ Decimos condición de posibilidad porque la explicación de la recuperación salarial se encuentra también asociada al aumento de la conflictividad obrera.

¹⁰ Fuente: INDEC.

City, FIEL, Ecolatina, CENDA) coinciden en mostrar una tendencia al estancamiento de los salarios reales, con una leve mejora entre enero de 2007 y enero de 2012 (en el caso de CENDA datos disponibles hasta 2010), un leve cierre en la brecha entre asalariados registrados y no registrados, y un mayor retraso relativo de los asalariados del sector público respecto de los empleados en los demás sectores.¹¹

Superávits gemelos y menor dependencia financiera

El aspecto de la modalidad de acumulación que se modificó más sustancialmente respecto de los noventa fue la dependencia financiera. Durante el período de vigencia de la convertibilidad, la persistencia de déficits fiscales y de cuenta corriente volvieron a la acumulación de capital y al sostenimiento del aparato de Estado altamente dependientes del ingreso de divisas, fundamentalmente mediante el endeudamiento externo. *Desde 2002, el mejoramiento de los términos de intercambio y la fuerte reducción en términos reales del gasto público dieron origen a superávits comercial y fiscal, los denominados "superávits gemelos". Simultáneamente, la cesación de pagos primero, la quita compulsiva de más del 60% del valor de la deuda defaulteada después y la cancelación de la deuda con el FMI por último, aliviaron las obligaciones de pago de intereses y redujeron sensiblemente el peso de la deuda sobre un PBI y exportaciones crecientes* (Frenkel y Rappetti, 2011). El resultado fueron sucesivos superávits de cuenta corriente, un hecho novedoso en la economía argentina post 1976.¹²

En este contexto, en primer lugar, el Estado vio fuertemente incrementada su disponibilidad de recursos; en segundo lugar, en caso de serle necesario, su capacidad para hacerse de recursos vía el endeudamiento interno le permitió eludir la toma de deuda en el exterior, en condiciones que después del default siempre supusieron altos diferenciales de tasas de interés. Esta situación permitió ignorar los problemas para el financiamiento externo del sector público y privado.

Esta mayor disponibilidad de recursos, combinada con el fin de la convertibilidad y la subordinación del Banco Central y el Ministerio de Economía al ala política del Poder Ejecutivo, dieron al gobierno una mayor capacidad para responder a demandas sociales y arbitrar entre fracciones del capital. En este sentido, sobresale la amplia

¹¹ La utilización posterior de datos de CIFRA-CTA permitió precisar estas tendencias. Particularmente, la mejora en los salarios reales entre 2007 y 2012 es significativa [cuadro 12; agregado al artículo original].

¹² El superávit de cuenta corriente implica, en este caso, que los ingresos por exportaciones superan a los egresos por importaciones más la salida neta de divisas debida al pago de intereses de la deuda externa.

política de subsidios con el fin de contener precios y tarifas sensibles para la determinación del salario.

Pero, además, esta menor dependencia financiera “blindó” parcialmente a la economía local durante la crisis financiera de 2008-2009. De conjunto, la persistencia –más allá de cierta volatilidad manifestada durante la crisis de 2008/2009– de altos precios de los *commodities* y la menor dependencia financiera supusieron una menor fragilidad externa de la economía argentina (Frenkel y Rappetti, 2011; Fanelli y Albrieu, 2009).

La otra gran fuente de ingreso de divisas durante la convertibilidad, la inversión extranjera directa (IED), también experimentó cambios. Ya desde 1998, después de la crisis en el sudeste asiático, los flujos de IED hacia Latinoamérica se redujeron sensiblemente (Giusani y L’hopital, 2003). Desde 2002 comenzaron a recuperarse nuevamente y Argentina recibió parte de ese aumento, sólo que su participación en los flujos de IED hacia Latinoamérica se redujo respecto de los noventa. Más allá del aspecto cuantitativo, desde el punto de vista del origen, aumentaron las inversiones brasileñas, chinas, y en menor medida rusas, y se orientaron fundamentalmente hacia la producción primaria y la industria extractiva, en detrimento de la IED dirigida a la industria (López y Ramos, 2009).

A pesar de las altas tasas de crecimiento, que retornaron después de la desaceleración de 2009, desde 2007 se empezaron a encender algunas luces de alarma. Una serie de restricciones vinculadas a la propia dinámica de acumulación comenzaron a avizorarse en el horizonte y confluyen con un escenario internacional, que a partir de la crisis de 2008-2009, no termina de despejarse. El punto que nos interesa aquí es hasta qué punto llega a su límite una dinámica político-económica que compatibilizó acumulación de capital y satisfacción gradual de demandas populares.

Los límites económicos de una lógica política

¿Dos etapas del ciclo abierto en 2002-2003?

El año 2007 muestra el inicio de algunas tendencias que pueden bien señalarlo como un cambio de etapa dentro del período de crecimiento abierto en 2002-2003. En primer lugar, el salario real interrumpe su marcha claramente ascendente e inicia un sendero de relativo estancamiento, aun cuando subsiste una leve mejora entre 2007 e inicios de 2012. En segundo lugar, se desacelera la creación de empleo en la medida que se reduce la elasticidad empleo/producto. ¿Plantea este

escenario que se encuentra cerca el final de la compatibilización de crecimiento económico con aumentos simultáneos del salario real y del empleo?

Lo que efectivamente se observa es que empiezan a manifestarse ciertas tensiones inherentes a la dinámica de la acumulación antes descrita.

En primer término, la devaluación está en el origen del crecimiento económico y del aumento de la inflación. Si inicialmente el alto desempleo y el bajo nivel de consumo reprimieron el aumento de salarios y precios, en la misma medida que el tipo de cambio alto permitió la recuperación de la tasa de ganancia y de la competitividad externa, se desataron las tendencias al aumento de los precios y después –sólo después– de los salarios, en tanto que el desempleo descendía y aumentaba la conflictividad obrera, variables que no se encuentran, sin embargo, mecánicamente asociadas.¹³ Ésto en el contexto de un alza mundial de alimentos, que, al tiempo que engordó el superávit comercial, incrementó las presiones inflacionarias. A partir de allí, lo que todos conocemos: la apreciación real del peso por aumento de los precios conspira contra la competitividad externa del sector exportador, pero la devaluación del peso para devolverle competitividad renueva las presiones inflacionarias. El gobierno ha elegido hasta ahora anclar el dólar y la inflación no ha cedido sustancialmente, pero tampoco se ha desbocado. Sin embargo, la apreciación del peso empieza a amenazar el superávit comercial (Frenkel y Rappetti, 2011) y el control de importaciones es un remedio sólo coyuntural. Además, dada la heterogeneidad de la estructura industrial, ésto empieza a afectar seriamente a los sectores trabajo-intensivos. Por su parte, quienes abogan por una devaluación competitiva ocultan que su éxito presupone la caída del salario real.

En segundo término, desde 2007 se evidencia cierta tendencia a que las negociaciones salariales perforen los techos inicialmente planteados por el gobierno. Si bien no hay hasta ahora indicios de que la situación esté fuera de su control, sí se manifiesta cierto retorno a una lógica de puja distributiva inflacionaria. La estabilización de expectativas inflacionarias que, hasta cierto punto, autonomizan el proceso de aumento de precios de la causa que le dio origen, la devaluación del peso, es un hecho conocido en la historia argentina hasta los años ochenta. Los esfuerzos del gobierno por lograr un acuerdo de precios y salarios entre sindicatos y empresarios buscan, al menos, limitar esta

¹³ Para un análisis más detallado ver Etchemendy y Collier (2008).

tendencia. Pero, nuevamente, su éxito presupone el disciplinamiento de las bases obreras de los sindicatos.

En tercer término, la apreciación del peso está minando el superávit comercial y comienza a reaparecer el déficit de cuenta corriente. Al mismo tiempo, el aumento, junto con la inflación, de la masa de subsidios requeridos para mantener congelados precios y tarifas elimina o reduce (según la “creatividad” de la contabilidad utilizada) el superávit fiscal. La combinación de ambas tendencias limita la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y transforma en un problema real las dificultades para financiarse tomando deuda externa, debidas a las altas tasas de interés exigidas al Estado argentino desde el default.

Sin embargo, nuevamente no hay relación mecánica entre la restricción económica y la respuesta política. Ya sea por necesidad política o por convicción ideológica, la necesidad de financiamiento empujó hasta ahora al gobierno al enfrentamiento con fracciones y grupos de la burguesía. La disputa por las retenciones, la estatización de las AFJP, el enfrentamiento con algunos sectores de la burguesía financiera por la utilización de reservas del BCRA, la disputa por la colocación de directores en empresas con participación accionaria estatal o la estatización parcial de YPF responden, sin duda, a las necesidades de financiamiento para mantener subsidios a empresas y, en menor medida, pagar deuda externa. Sin embargo, es significativo que la respuesta política fuera esa y no, fundamentalmente, el ajuste fiscal. *Lo que justamente empieza a ponerse en cuestión es la posibilidad de continuar con una política que desvía la contradicción capital/trabajo hacia la oposición pueblo/oligarquía, pueblo/capital financiero, pueblo/grupos económicos, pueblo/capital extranjero, etc.* La pregunta es si un gobierno que necesita estimular la inversión para sostener el crecimiento y aumentar la productividad, controlar la inflación y mantener el tipo de cambio alto para evitar la pérdida de competitividad y recomponer los superávit gemelos para evitar las dificultades de financiamiento externo, puede seguir evitando frenar el aumento de salarios, reducir significativamente (y no como hasta ahora) los subsidios al transporte y los servicios públicos, y ajustar en términos reales el gasto del Estado. Ciertamente, sería una tarea difícil, sino imposible. Pero lo cierto es que esto no supone ni que el gobierno lo hará (¿en tal caso comenzaran a madurar las condiciones de una crisis?) ni que si lo hace no encuentre mecanismos alternativos de conservación o construcción de consenso. Sea como sea, las condiciones internacionales no auguran buenos tiempos.

¿Una crisis europea o una crisis mundial?

Desde la crisis financiera de 2008 en EEUU, que rápidamente se transformó en una crisis mundial a través de mecanismos financieros y comerciales, la economía mundial muestra signos de debilidad. La economía norteamericana se recuperó durante 2010, pero de manera débil. Ya desde mediados de la década del setenta, el mundo desarrollado atraviesa una fase de crecimiento débil signada por recesiones sucesivas. Pero, además, la economía europea fue de rescate en rescate derecho a una recesión continental que este año parece asegurada. No intentaremos aquí una explicación de esta crisis, sólo nos interesan las posibles perspectivas para la economía argentina, por lo demás, seguimos el análisis de Rolando Astarita (2012). Este autor plantea que la crisis de EEUU no fue un mero estallido de una burbuja financiera, sino que fue el producto de la sobreacumulación de capital que comenzó a manifestarse en la recesión de 2001 y que se profundizó entre 2002 y 2008. Es decir, fue un producto de la dinámica de la inversión en capital fijo, impulsada por la competencia capitalista, que genera episodios de sobreproducción y caída de la tasa de ganancia y no de la especulación financiera sin contrapartida en la economía real. O mejor, la especulación financiera acompaña y acrecienta los fenómenos de sobreacumulación originados en la inversión productiva. Según Astarita, existen actualmente indicios de sobrecapacidad, que anticipan posibles fenómenos de sobreproducción en Europa y en China. Esto significa que la sobreacumulación que subyace a la emergencia de episodios agudos de crisis, está lejos de ser superada. Las perspectivas en lo inmediato son, entonces, de recesión en Europa con probabilidades de una generalización futura de la crisis.

Cualquiera de los escenarios tendría importantes consecuencias para la economía argentina. En primer lugar, en 2008-2009 el crecimiento de China y de otros mercados emergentes amortiguó el impacto sobre la Argentina, en un contexto todavía caracterizado por un “colchón” de superávit comercial alto. En segundo lugar, las tensiones originadas por la apreciación cambiaria eran muy inferiores y la capacidad del Estado para apelar al financiamiento interno y a la expansión contracíclica del gasto público eran claramente mayores. En tercer lugar, aunque la economía brasileña también resultó afectada, en 2009 todavía la capacidad de las exportaciones argentinas de penetrar el mercado brasileño era alta y era más baja la posibilidad de la producción brasileña de encontrar mercado en Argentina. Si bien Brasil mantiene un real apreciado en relación a la moneda argentina, la

relación claramente ha empeorado y empieza a sentirse en la balanza comercial entre los dos países.

Un escenario de recesión europea incrementará las presiones por ajustar salarios y gasto público reales a través de su impacto en la balanza comercial y en la tasa de ganancia empresaria, pero a su vez, ello potenciaría los efectos de una desaceleración del crecimiento que ya se siente. En el caso de ocurrir una generalización de la crisis o, al menos, una desaceleración importante de China y de otros mercados emergentes, ésto equivaldría a un giro en las condiciones internacionales que otorgaron una mayor margen de maniobra a Estados periféricos como el argentino. Cualquiera de los dos escenarios presupone dilemas políticos a resolver por el gobierno.

Conclusiones

El análisis de las características del modo de acumulación de capital desde 2003 nos obliga a romper con las visiones simplificadoras de su relación con el imperante en los noventa en términos de ruptura o continuidad. Por un lado, una inserción en el mercado mundial determinada por la orientación predominantemente exportadora de productos industriales de bajo valor agregado relativo y una acumulación de capital basada en la reestructuración capitalista operada en los noventa señalan aspectos sustanciales de continuidad y profundización que habilitan a considerar el ciclo iniciado en 2002-2003 como una sub etapa dentro de la más general abierta con el proceso hiperinflacionario de 1989. Por otro lado, se observan cambios significativos tanto a nivel de funcionamiento del sistema mundial como de las condiciones de la acumulación originadas en la salida de la convertibilidad que señalan la existencia de especificidades de la acumulación que la diferencian de la dinámica de los años noventa. Estas diferencias resultan especialmente relevantes a la hora de evaluarlas desde el punto de vista de su impacto en la capacidad del Estado para responder a las demandas populares y, por lo tanto, como condición de posibilidad de una lógica de construcción de consenso por la vía de la satisfacción gradual de demandas. Sin embargo, las mismas condiciones que posibilitaron esa lógica política -tipo de cambio alto, precios elevados de las mercancías de exportación, costos salariales iniciales históricamente bajos, acumulación predominantemente extensiva- imponen tendencialmente límites a través de la inflación, el alza de salarios, la apreciación cambiaria y el agotamiento de los superávits gemelos. Los dilemas políticos que ello plantea al gobierno pueden resultar agravados por un escenario internacional oscilante entre

el crecimiento débil y una crisis mundial abierta. Sin embargo, esos dilemas políticos no son algo exterior a los procesos económicos, señalan más bien su indeterminación o, dicho de otro modo, el hecho de que el desenvolvimiento de la acumulación no es más que un modo del antagonismo entre capital y trabajo que amenaza permanentemente con salirse de cauce y estallar como crisis de dominación.

POSTDATA

Política económica y modo de acumulación en la postconvertibilidad

Al observar los cambios ocurridos entre 2006 (año en el que se escribió el primer artículo) y mayo de 2012 (cuando se escribió el segundo) surgen inmediatamente dos evidencias. En primer lugar, los aspectos esenciales de la modalidad de acumulación que ya resultaban visibles en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, se han mantenido con pocas variaciones y han mostrado en todo caso la evolución de las tensiones que lo atravesaban desde el inicio. Sin embargo, en segundo lugar, es notable la importancia que adquirió con el paso del tiempo el principal aspecto transformado por la crisis de 2001 y la recomposición posterior del poder de Estado: *la dimensión específicamente política de la política económica*. Con este término referimos al modo en que la reconstitución y reproducción de la dominación política, dimensión dominante del momento estatal de la reproducción capitalista, atraviesa la política económica. Ésto no sólo significa que la política económica no es meramente una técnica, sino que incorporar a su análisis explícitamente la dimensión específicamente política afecta la manera en que debe pensarse el lugar de la política económica en el modo de acumulación y las relaciones que establece con las otras variables que lo caracterizan: inserción en la economía mundial, tendencias de evolución de la estructura productiva, comportamiento de la inversión y de la demanda, etc.

En los debates sobre el modo o régimen de acumulación en Argentina se suele abusar de la noción más o menos vulgar de “modelo” y, generalmente, se clasifican y periodizan esos “modelos” dando predo-

minio a las continuidades o cambios en la política económica (Bonnet, 2007). Pero en términos más universales, y en particular en la tradición marxista, la noción de modo o régimen de acumulación lleva la marca de la “Escuela de la Regulación”.¹ Esta corriente ha tendido a ver a la política económica en una relación de correspondencia con los demás aspectos del modo de acumulación. Determinados tipos de intervención estatal o de política monetaria corresponden a determinados tipos de relación con el mercado mundial, funcionamiento del mercado laboral, orientación de la inversión, etc. La posibilidad de que en determinados países se produzcan, por períodos más o menos prolongados, inconsistencias o desfases entre la política económica y las tendencias más relevantes de la acumulación capitalista es subestimada o es vista como un desvío del “tipo ideal”. Considerar seriamente la dimensión específicamente política de la política económica previene de estas simplificaciones rápidas y obliga a preguntarse por el lugar de la política económica, así como a pensar la singularidad de ese lugar para cada espacio y momento específico.

El debate sobre el modo de acumulación en Argentina desde la salida de la convertibilidad y, en particular, su definición por diversos autores como “neodesarrollista”, ha estado atravesado por este problema. En lo que sigue trataremos de mostrar que un aspecto central del modo de acumulación y de sus tensiones durante la última década en Argentina fue un creciente desfase entre la política económica y las principales tendencias de la acumulación capitalista en el período, originada en la manera en que la dimensión específicamente política de la política económica condicionó el rumbo de la intervención económica del Estado.² Para ello partiremos de precisar a qué refieren con el término “neodesarrollismo” los principales autores que lo han acuñado y trataremos de ver en qué medida la política económica del gobierno se aproxima o aleja de ese concepto. Luego avanzaremos en la caracterización del modo de acumulación en la Argentina postconvertibilidad retomando aspectos ya expuestos en los artículos precedentes, actualizándolos y reformulándolos a la luz de otros datos. Finalmente volveremos a la cuestión del lugar de la política económica y al significado del desfase señalado.

¹ Una aproximación general a los postulados clásicos de los regulacionistas puede encontrarse en Aglietta (1979) y Boyer (1989).

² Jessop (1980; 1990) señala la posibilidad de esta ausencia de correspondencia entre estrategia de acumulación y proyecto hegemónico, según sus propios términos. Esta idea está también articulada con la contradicción entre acumulación y legitimación señalada por O'Connor (1981) y, desde otras perspectivas, por Habermas (1995) y Offe (1992).

El “modelo económico neodesarrollista”

El término “neodesarrollismo” fue acuñado por un conjunto de autores ligados a la tradición del estructuralismo económico (Bresser Pereyra, 2007; Ferrer, 2004; Frenkel 2004). Intentó señalar una estrategia de política económica –una estrategia nacional de desarrollo en términos de Bresser Pereyra (2007)–, orientada al desarrollo industrial en un contexto de mundialización productiva y financiera. “Neodesarrollismo” es, por lo tanto, el nombre de un *set* de políticas económicas, de un “modelo económico”, con un objetivo definido más que el concepto correspondiente a un modo de acumulación. La diferenciación es importante porque en la mayoría de las discusiones, especialmente cuando el término es importado por autores marxistas, ambos aspectos se confunden. El problema de hasta qué punto cambió o no el modo de acumulación respecto de los años noventa no debe confundirse con (ni reducirse a) los cambios evidentes en la política económica, aunque el análisis de ésta es parte del estudio del modo de acumulación.

Los “neodesarrollistas” sostuvieron la necesidad de articular políticas de tipo de cambio alto para dar un marco de competitividad a la industria, junto a políticas fiscales y monetarias que brindaran sostenibilidad financiera a la acumulación (superávit fiscal o déficit fiscal bajo) y niveles reducidos de inflación (combinación de metas de inflación con niveles objetivo de empleo y actividad). Estas políticas intentaban apuntalar un proceso de industrialización orientado a la exportación con mayores grados de integración nacional y/o regional de las cadenas de valor, capaz de asimilar las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el centro y de impulsar procesos de innovación local. Admitían la intervención reguladora del Estado en los mercados de capitales, la intervención activa en el mercado cambiario, así como políticas redistributivas para compensar desigualdades del desarrollo hacia afuera y apuntalar la demanda interna. Pero, al mismo tiempo, asimilaban la crítica neoliberal al “Estado empresario”.

Los autores “neodesarrollistas” articulan una caracterización y un balance de los procesos de reestructuración del capital y del Estado de los años noventa en América Latina con orientaciones y propuestas de política económica. Es decir, combinan análisis de procesos objetivos con análisis normativos o prescriptivos. A su vez, muchas de esas propuestas se basan en las respuestas ensayadas por distintos gobiernos a los dilemas originados en las crisis de la región de principios del siglo XXI. De conjunto, la vertiente principal del “neodesarrollismo” (Bresser Pereyra, 2007; Frenkel, 2004; Frenkel y Taylor, 2006) tiende

a considerar como un fundamento de sus políticas gran parte de las reformas neoliberales, sobre todo en lo referente a la reforma del Estado y, con mayor incomodidad política, a la reorientación exportadora de una parte de la industria.³ En este último caso, la crítica al bajo valor agregado de las exportaciones y a la baja integración productiva nacional y regional se articula con un rechazo al retorno a estrategias de industrialización nacional centradas basadas en la orientación al mercado interno. Asimismo, se encuentran por lo general ausentes la apelación a la protección arancelaria y a mecanismos de transferencias y subsidios a la industria. En este sentido, el papel de las retenciones a las exportaciones agropecuarias se halla más bien ligado a la sustentabilidad fiscal, la política de precios en un contexto de fuerte aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, la inducción al procesamiento local de las materias primas y, en menor medida, la redistribución de ingresos hacia sectores pauperizados de la población que a mecanismos de transferencia a la industria característicos del desarrollismo. La principal diferencia respecto de las políticas neoliberales se centra en el rol del Estado y, ligado a éste, a la caracterización de la orientación dominante del desarrollo en los años noventa.⁴ De acuerdo a los “neodesarrollistas”, el Estado debe intervenir limitadamente generando marcos que favorezcan la inversión productiva, en particular la industrial, en un contexto de integración regional y mundial. La política cambiaría, niveles de tasa de interés compatibles con la inversión y que desincentiven los flujos especulativos de corto plazo y, en caso de ser necesario, regulaciones de los flujos de capital, son los instrumentos principales. Según este planteo las políticas de tipo de cambio fijo y retrasado, tasas de interés altas favorecidas por inconsistencias entre política fiscal (déficit) y monetaria y apertura irrestricta del mercado de capitales habrían dado predominio al sector financiero, estimulando burbujas especulativas, limitando al capital productivo –especialmente el industrial– y destruyendo el tejido industrial interno. El cambio de políticas, entonces, debiera hacer posible un desarrollo industrial compatible con los cambios en la economía mundial desde mediados de los años setenta. El cambio en la tendencia de los términos de intercambio favorable a las economías periféricas desde 2002-2003 constituiría una oportunidad para ensayar esas políticas y permitir un salto en el desarrollo de las economías

³ Aun con importantes coincidencias, Aldo Ferrer presenta una visión más crítica del legado de las reformas y matices importantes en cuanto al papel de la demanda interna en el proceso de desarrollo (Ferrer, 2010).

⁴ Nuevamente, Aldo Ferrer muestra un mayor distanciamiento de las reformas neoliberales y una visión más crítica de los planteos sobre la llamada “globalización” (Ferrer, 2010).

intermedias latinoamericanas. Este es el espacio de una limitada recuperación del viejo proyecto cepalino y de sus nociones de centro-periferia, aunque muy desdibujadas. A la hora de explicar los procesos de desarrollo, los enfoques “neodesarrollistas” tienden a privilegiar el rol de los Estados periféricos y de las decisiones nacionales de política económica sobre la determinación de la inserción internacional y de las restricciones estructurales originadas en la heterogeneidad interna (Katz, 2014).

Las políticas implementadas en Argentina, fundamentalmente entre 2002 y 2005 o, tal vez, 2007 (después volveremos sobre los cortes que representan ambos años), se inscriben en esta tendencia y han sido referencia para los “neodesarrollistas” al punto de que muchas de sus ideas se han inspirado en ellas. A la salida de la convertibilidad, la devaluación dio lugar a un tipo de cambio alto y superávit comercial y fiscal. Los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner continuaron, en lo esencial, la política económica de Duhalde a cargo del mismo ministro, Roberto Lavagna. Éste sostuvo el tipo de cambio alto con una intervención del Banco Central coordinada con el Ministerio de Economía, limitó la expansión monetaria con políticas de esterilización a través de la emisión de bonos,⁵ se establecieron tasas de interés levemente negativas y se regularon limitadamente los flujos de capital de corto plazo imponiendo plazos mínimos de permanencia. Las retenciones cumplieron un rol centralmente fiscal y permitieron financiar la expansión de programas sociales, y los subsidios a energía y transporte buscaron contener precios y tarifas por razones políticas más que subsidiar a la industria, aunque cumplieron también esa función. Después de 2005, las políticas monetaria y fiscal se alejaron progresivamente de las recomendaciones “neodesarrollistas” volviéndose más expansivas. Más allá de 2007, se perdieron gradualmente los “superávit gemelos” y, frente a la crisis mundial, las políticas giraron más hacia el sostenimiento de la actividad vía expansión de la demanda. A partir de 2011, las políticas buscan contener una crisis cambiaria en curso en el marco de una creciente restricción externa y tratando de evitar el ajuste o aplicándolo con un gradualismo no siempre compatible con los tiempos económicos.

⁵ El fuerte superávit comercial tendía a reducir el precio del dólar. Para sostener el tipo de cambio el Banco Central debía emitir pesos para comprar el excedente de divisas al tipo de cambio objetivo. Para neutralizar el aumento de la cantidad de pesos el Banco Central emitía bonos de deuda en pesos que los bancos compraban, de esta manera reabsorbía los pesos que emitía y regulaba la cantidad de dinero. En rigor la esterilización fue siempre parcial, en “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”, en este mismo volumen, volvemos sobre esta cuestión y su relación con la inflación.

Sin embargo, los cambios en la política económica nos dicen poco sobre las características del modo de acumulación así como de su lugar en él. Desde la perspectiva “neodesarrollista” se sobreestima el papel de las decisiones políticas de los gobiernos y se subestiman las continuidades profundas detrás de los cambios coyunturales. Dirigiremos ahora, entonces, nuestra atención al estudio de las características de la acumulación para comprender el significado de esos cambios de política económica.

Una vez más... sobre el modo de acumulación de capital en la postconvertibilidad

Las principales tendencias de la acumulación capitalista en la postconvertibilidad se inscriben en un conjunto de transformaciones de largo plazo, algunas rastreables hasta la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) (1975-76), pero en su mayoría surgidas del profundo proceso de reestructuración del capital y del Estado iniciado con la hiperinflación en 1989.⁶

Como hemos señalado en otros lugares (Piva, 2012), el rasgo dominante de ese proceso fue la reestructuración productiva y, su corazón, la reestructuración industrial. La apertura comercial y el tipo de cambio fijo supusieron la subordinación de la reproducción del capital local a la acción de la ley del valor a escala mundial y, con ello, la intensificación de la competencia. Dicha intensificación indujo un proceso de reestructuración en la industria que se caracterizó por la pérdida de peso, y en muchos casos la directa desaparición, de la producción industrial de mayor valor agregado y la orientada al mercado interno, y un aumento del peso de las MOA y de las MOI en las exportaciones. De hecho, como vimos en los artículos anteriores, las MOI fueron las más dinámicas.

Sin embargo, la reestructuración también afectó al agro. Los noventa, fueron años de importante tecnificación y de incorporación de las nuevas técnicas de siembra asociadas con el uso de organismos genéticamente modificados, los denominados “transgénicos”. Aunque algunas de las transformaciones productivas en el agro comienzan en la primera mitad, es importante destacar que la segunda mitad de los noventa, en condiciones de deterioro de los términos de intercambio –después de una breve mejora en la primera mitad– es particularmente intensa y abarca el conjunto del proceso de producción y comercialización, la distribución geográfica de los diversos tipos de producción,

⁶ Al final de este artículo volveremos sobre los problemas de periodización.

las formas de propiedad, etc. La importancia adquirida por el sector agropecuario en la importación de bienes de capital es indicativa de ese proceso.

La reestructuración productiva y, particularmente, la reorientación exportadora en base a commodities de los capitales más concentrados de la industria tuvieron efectos muy importantes en la dinámica de la acumulación y en la composición de la burguesía. Recordemos las principales consecuencias. En primer lugar, la reestructuración industrial supuso la derrota de las fracciones mercado internistas de la burguesía y la subordinación del capital menos concentrado a la estrategia de acumulación de la gran burguesía. En segundo lugar, dicha reestructuración fue el terreno de la internacionalización del capital local. Esta internacionalización se desarrolló, por un lado, a través de fusiones, adquisiciones y de la apertura de las empresas controladas por capitales de origen nacional a la participación extranjera; y, por otro lado, a través de la asimilación de comportamientos –en términos de inversión, inserción productiva, endeudamiento, fuga, etc.– del capital de origen nacional y extranjero. En tercer lugar, el papel de las finanzas como palanca de la reestructuración y acumulación capitalista en el período modificó la relación entre capital productivo y financiero. Durante la década del noventa, la magnitud del monto de la inversión superó persistentemente al ahorro interno y la fuerte renovación de capital fijo, fundamentalmente desarrollada en la primera mitad de la década, se apoyó en la apertura del mercado de capitales. De modo que el endeudamiento externo financió inversión y fuga de capitales. Al mismo tiempo, la persistencia de la fuga de capitales significó que, al lado del fundamento productivo de la reproducción de la gran burguesía –sobre todo la industrial– de origen nacional, se desarrolló la acumulación de capital líquido, fundamentalmente a través del mecanismo de endeudamiento y fuga. Esta acumulación, subsidiaria de la primera, operó como una especie de “retaguardia financiera” frente a una acumulación productiva fuertemente inestable.⁷ La contraparte de este comportamiento en el capital extranjero –aunque sujeto también a definiciones y cambios en las estrategias globales de acumulación de las transnacionales– es la remisión de uti-

⁷ Aquí retomamos la hipótesis de Astarita (2012b) que explica la reticencia inversora de la burguesía local y la tendencia a la fuga de capitales como una respuesta a la inestabilidad de la acumulación de capital y a los recurrentes cambios en los marcos sociales de la acumulación capitalista. En la tercera parte del libro, en el contexto del debate sobre la inflación, proponemos la hipótesis de que esta inestabilidad tiene su fundamento en las dificultades de la clase dominante para subordinar duraderamente al trabajo, en oposición a lo ocurrido en países vecinos como Brasil o Chile, ver en este libro “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”.

lidades. Esta articulación entre producción y finanzas y la estrategia financiera del propio capital productivo tendió a entrelazar capital productivo y financiero, sin suprimir las tensiones entre capital dinero y capital productivo propias de la reproducción capitalista.⁸ Por último, la reorientación exportadora de la gran burguesía industrial y la reestructuración del agro tendieron a eliminar la oposición gran burguesía agraria/gran burguesía industrial. Este conjunto de transformaciones explica la fuerte unidad del conjunto de la burguesía en torno de los aspectos centrales de la estrategia de acumulación desarrollada en los años noventa y respecto de las fuertes continuidades en la postconvertibilidad.

Estas líneas profundas de continuidad, que nos conducen a considerar a la postconvertibilidad como un sub período dentro de la etapa abierta con la hiperinflación de 1989, se manifiestan en un conjunto de indicadores. En primer término, en la evolución de la composición de las exportaciones. Como se observa en el gráfico 1, las MOI fueron las que más crecieron tanto, entre 1991-1998 como entre 2003-2012. Es decir, en los períodos de desarrollo de la acumulación tendió a profundizarse la reorientación exportadora de la industria y su peso en el conjunto de las exportaciones, procesos que sólo se revirtieron durante la fase depresiva 1999-2002. En este sentido, si comparamos la contribución al total de las exportaciones industriales de las diferentes ramas manufactureras para 1998 y 2011 observamos que, por un lado, “Alimentos y bebidas” explica el 44% de las exportaciones en 1998 y el 45,1% en 2011, pero que, por otro lado, las ramas cuyo aporte crece más son “Sustancias y productos químicos”, “Metales comunes” y, aunque partiendo de un porcentaje muy bajo, “Equipos de transporte”. Estas tres últimas ramas sumadas representaron el 22,8% de las exportaciones manufactureras en 2011 y el 16,2% en 1998. Si les incorporamos las exportaciones de vehículos, cuyo porcentaje del total decreció levemente entre ambos años, explican casi el 40% de las exportaciones manufactureras en 2011 (39,6%).⁹ En segundo término, producto de la reorientación exportadora de la industria, la acumulación de capital en su conjunto se ha vuelto más dependiente de la demanda externa. Como se observa en el cuadro 6, se acrecentó el peso de las exporta-

⁸ Es importante aclarar en este punto que la discusión con la tesis de Eduardo Basualdo (2000) de una acumulación con centro en la “valorización financiera” refiere al tipo de articulación entre acumulación productiva y financiera (en particular el mecanismo de endeudamiento y fuga) y no a la existencia de esta última. Nuestra posición es que el centro de la acumulación de los años noventa fue el incremento de la producción y de la explotación posibilitado por la reestructuración productiva y que la estrategia financiera giró y se desarrolló en torno a ese centro.

⁹ Fuente: Elaboración propia en base a Cuentas internacionales-INDEC.

ciones y decreció el del consumo total respecto del PBI, ello a pesar de cierta reversión del fenómeno desde 2008. Mientras el promedio de la relación exportaciones/PBI entre 1993 y 1998 fue del 9 %, entre 2003 y 2012 fue del 13%. De manera correlativa, el promedio de la relación consumo total/PBI cayó desde el 81% al 77%. La reversión de la tendencia desde 2008 no alcanzó para que las tasas volvieran a los niveles de 1998. En el caso del consumo, además, hubo una tendencia al aumento del consumo público respecto del privado, sobre la que volveremos después.¹⁰

La reorientación exportadora del gran capital industrial no significó, sin embargo, que el resultado comercial del conjunto de la industria dejara de ser deficitario. En ambos períodos el saldo comercial de la industria fue negativo y, si comparamos 2011 contra 1998, las únicas ramas superavitarias en ambos años fueron “Alimentos y bebidas” y “Productos del cuero”. En 2011, resultó superavitaria la producción de metales comunes y, en contraposición a 1998, fue deficitaria la refinación de petróleo que había arrojado superávit en la década de los noventa.¹¹ Esto significa que, desde el punto de vista sectorial, el agro sigue siendo el proveedor neto de divisas y que la dependencia tecnológica de una industria productora de mercancías de bajo valor agregado sigue dando lugar a una acumulación comercialmente desequilibrada. Sin embargo, la clasificación por sectores encubre tendencias de fondo que resultan significativas para comprender qué dirección asumió la acumulación capitalista desde 1989 y, en particular, durante la postconvertibilidad. En primer lugar, dentro del denominado complejo oleaginoso los sectores más dinámicos fueron los manufactureros (harinas, aceites y subproductos), que concentraron entre 2003 y 2010 entre el 70% y el 80% de las exportaciones totales del complejo, y no los granos sin procesar (Kejsefman, 2014). En segundo lugar, ya en los años noventa, las grandes empresas industriales mostraron superávits comerciales (Basualdo, 2000) mientras el resto de la industria registraba déficit. Este comportamiento se profundizó durante la postconvertibilidad (Ortiz y Schorr, 2009; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014) y lo que señala es un rasgo central de la acumulación de capital desde 2002: la creciente dualización de la estructura económica y, particularmente, de la estructura industrial entre un sector moderno, altamente concentrado, con altos niveles de productividad internacional y un sector atrasado, de baja productividad.

Es en esta última tendencia que hay que inscribir la primera de las

¹⁰ Fuente: Elaboración propia en base a Cuentas Nacionales-INDEC.

¹¹ Fuente: Elaboración propia en base a Cuentas Internacionales-INDEC.

especificidades relevantes de la postconvertibilidad: la limitada sustitución de importaciones industriales. Limitada en dos sentidos. Primero, porque su desarrollo no revirtió la tendencia a la reducción del peso de la industria en la economía. Medido en función del valor bruto de producción total, respecto del PBI total, ya sea en precios constantes o en precios corrientes, el peso del valor bruto de producción industrial fue, en 2012, igual (respecto del valor de producción total a precios constantes) o inferior (en todos los demás casos) a 2003 y confirma en todos los casos la caída iniciada en 1993 [cuadro 7]. Segundo, porque como ya hemos señalado en los artículos precedentes, la sustitución de importaciones se desarrolló, fundamentalmente en los primeros años, bajo el paraguas del tipo de cambio alto y articulada/subordinada a una estrategia de acumulación que profundizó la reorientación exportadora del gran capital industrial. En este sentido, la acumulación de la industria sustitutiva tendió a aprovechar costos salariales bajos para desarrollar una estrategia trabajo-intensiva, que incluyó la utilización de trabajo precario (sobre esto volveremos más adelante). Por esta razón, es esperable que el resultado fuera una mayor heterogeneidad del sector industrial.

La evolución de la productividad por ocupado en los capitales más concentrados de la industria y en el conjunto de la industria puede servir como un indicador del incremento de la dualización de la estructura industrial. Para acercarnos a esa medida hemos tomado la evolución de la relación entre el Valor Agregado Bruto de producción (VAB) y el número de ocupados en las empresas industriales del panel de las 500 grandes empresas de la encuesta nacional de grandes empresas¹² y lo comparamos con la evolución del cociente entre VAB industrial a precios corrientes (1993)¹³ y dos mediciones del número de asalariados en la industria. Como vemos en el cuadro 8, el VAB por ocupado de las empresas industriales de la ENGE-INDEC entre 2003 y 2011 aumentó un 221,4% mientras el VAB por ocupado de toda la industria creció un 182%, si tomamos como fuente del número de asalariados industriales la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación (EIL), y 205% -si tomamos la Encuesta industrial Mensual del INDEC (EIM). Es decir, en ambos casos, con las limitaciones que impone la comparación de fuentes distintas, los proxis de productividad por ocupado parecen mostrar un aumento mayor en las grandes empresas industriales que en el resto de la industria durante el período, lo cual habría acrecentado la brecha entre sector moderno y atrasado.¹⁴

¹² Fuente: ENGE-INDEC.

¹³ Fuente: Cuentas Nacionales-INDEC.

¹⁴ Los datos aportados por Gaggero, Schorr y Wainer (2014) muestran que esta “dualización”

De la mano de la profundización de la dualidad de la estructura económica, se desarrolló un nuevo salto en el proceso de concentración, centralización e internacionalización del capital local. Este fenómeno fue ampliamente estudiado y es suficiente con mencionar que todos los indicadores –porcentaje del valor bruto de producción de las grandes empresas,¹⁵ participación en las exportaciones,¹⁶ peso de las ventas de la “cúpula industrial” en el PBI industrial (Manzanelli y Schorr, 2013; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014)– muestran un salto en la concentración y centralización del capital industrial post crisis de la convertibilidad y, aunque con cierto decrecimiento posterior, el mantenimiento en niveles superiores a los de la convertibilidad durante todo el período.

Lo mismo sucede con la internacionalización del capital local. Después de un fuerte aumento de la participación extranjera en el conjunto de las grandes empresas post crisis de 2002, hay un cierto decrecimiento en los años posteriores, pero manteniéndose en niveles superiores a los de la década del noventa (Schorr, Manzanelli y Basualdo, 2012; Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; ENGE-INDEC, 2007; ENGE-INDEC, Boletín de prensa, Varios números). Respecto del destino de esta inversión, desde la segunda mitad de los noventa y con fuerza en la postconvertibilidad, se observa un fuerte aumento de la IED en minería y en explotación hidrocarburífera. Sin embargo, la industria constituyó un destino muy importante durante la convertibilidad y la postconvertibilidad, tanto en términos totales como de aportes de capital y, aunque hubo un fuerte flujo hacia alimentos y bebidas, ramas industriales como productos químicos, plástico, y, claro está, vehículos automotores, han sido importantes destinos de la IED. De hecho, el industrial es el destino que muestra una mayor regularidad a lo largo de ambos períodos. Entre 1992 y 2002 representó el segundo destino con el 22% del total de la IED, superado sólo por “Petróleo y minería” debido a la compra de YPF por Repsol (Giusani y L’hopital, 2003). Durante la postconvertibilidad, volvió a ser el segundo destino, tanto en aportes de capital como en cambios de manos, detrás del sector extractivo, apuntalado sobre todo por las inversiones mineras (García, 2014). Es decir, el capital extranjero participa activamente del desarrollo de la explotación de recursos naturales, con lógica extractiva, pero tam-

se verifica también al interior de la gran burguesía entre capitales de origen extranjero y capitales de origen nacional. Los primeros muestran una acumulación más capital-intensiva que los segundos y una mayor tasa de explotación con mayores salarios promedio, lo que se explica por la mayor productividad del capital de origen extranjero.

¹⁵ Fuente: ENGE-INDEC.

¹⁶ Fuente: ENGE-INDEC.

bién en la expansión de la industria, particularmente la exportadora, lo que explica su creciente participación en las exportaciones totales (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014; García, 2014).

Debemos tener en cuenta que el capital extranjero que ha incrementado su participación en los principales indicadores de la economía argentina es un capital altamente internacionalizado en sus comportamientos, es decir, que su estrategia de acumulación se despliega a escala mundial y que sus cadenas de valor están crecientemente mundializadas.¹⁷ A su vez, Gaggero, Schorr y Wainer (2014) muestran que los capitales de origen nacional que han permanecido dentro de lo que ellos denominan “cúpula empresaria”¹⁸ son aquellos que han internacionalizado sus estrategias expandiendo sus negocios a otros países, profundizando su reorientación exportadora y manteniendo e incrementando el capital en estado líquido en el exterior.

El resultado conjunto de la reorientación exportadora y de la internacionalización de la gran burguesía, simultáneas con la creciente concentración y centralización del capital, es la internacionalización de la dinámica de la economía local. Dicha internacionalización, el crecimiento desequilibrado debido a la dependencia tecnológica y la dualización de la estructura económica señalan la profundización de un desarrollo dependiente.

Acumulación de capital y relaciones sociales de fuerza

Como señalábamos antes, la crisis y la recomposición de la acumulación en la Argentina de inicios del nuevo siglo no pueden ser pensadas separadamente de la crisis y recomposición del poder político. Ambas son momentos diferenciados de un mismo proceso de crisis y recomposición de la subordinación del trabajo al capital (Bonefeld, 1992; Jessop, 1990). Esto significa que, si ahora nos ocupamos centralmente de la acumulación, siempre debemos tener presente la simultánea crisis y recomposición de la dominación política. Pero, además, que no puede abordarse el análisis del modo de acumulación sin referir a las relaciones de fuerza que son la base de su desarrollo y que ese desarrollo expresa. Algo de eso hemos tratado en los artículos precedentes a la hora de analizar la recomposición de la acumulación postconver-

¹⁷ Aunque no lo podemos desarrollar aquí, ésto no significa una ruptura total de los capitales internacionalizados con los Estados de sus países de origen. Sin embargo, la creciente tendencia a las fusiones y adquisiciones entre capitales de países centrales y a su asociación en el exterior entrelaza también los intereses de esos Estados.

¹⁸ Los autores definen a la “cúpula empresaria” como las 200 empresas de mayor facturación anual de la Argentina (Gaggero, Schorr y Wainer 2014).

tibilidad y los límites económicos de la modalidad de dominación política. Acá queremos retomar ese problema atendiendo a su relación con la dimensión específicamente política de la política económica y su importancia para caracterizar el modo de acumulación. Decíamos allí que, en 2001, el bloqueo popular de la vía deflacionaria de salida de la crisis hizo estallar, junto con la convertibilidad, las relaciones de fuerza que ella cristalizaba. Por lo tanto, la salida postconvertibilidad no podía limitarse a la respuesta inflacionaria al desafío popular, debía, además, recomponer acumulación y dominación sobre la base de nuevas relaciones de fuerza. Fundamentalmente, la recomposición del poder político requirió de la incorporación política y satisfacción gradual de demandas populares. Pero, entonces, este rasgo debió atravesar la construcción (no necesariamente la planeada) de la política económica.

En este sentido, es que cobra importancia un rasgo que diferencia el proceso de acumulación postconvertibilidad del desarrollado en los noventa, aunque particularmente con la primera mitad de esa década:¹⁹ su carácter predominantemente capital-extensivo. Los cuadros 9 y 10 corroboran lo expuesto en los artículos previos, los aumentos de productividad horaria y por ocupado fueron superiores en los años noventa a los de la postconvertibilidad, aunque las tasas de inversión fueron inferiores en esa década, tanto medidas en términos corrientes como constantes [cuadros 6 y 11]. A su vez, el volumen físico de producción aumentó tres veces más entre 2003-2011 que entre 1991-1998. La contrapartida de estos datos fue el fuerte aumento del empleo y la caída del desempleo que fue un aspecto esencial de la reconstrucción del consenso político. La tasa de empleo se incrementó desde el 38,8% en el tercer trimestre de 2003 hasta el 43,4% en el tercer trimestre de 2011 y la tasa de desempleo se redujo desde el 16,1% en el segundo trimestre de 2003 hasta el 7,3% en el segundo trimestre de 2011. Esto en un contexto de sostenimiento (leve aumento) de la tasa de actividad que pasó del 46,3% al 46,7% en el mismo período (Fuente: EPH - INDEC).

Esta caída del desempleo fue el fundamento de la recuperación del poder reivindicativo de la clase obrera que se evidenció en el crecimiento del salario real, sobre todo desde 2005 y, especialmente, para los asalariados registrados del sector privado [cuadro 12]. La combinación de reducidos aumentos de productividad, caída de las horas

¹⁹ La fase expansiva 1996-1998 también se apoyó sobre la renovación de capital fijo de la primera mitad. Ello explica los menores aumentos de productividad (Cfr. Piva, 2012) y la rápida caída del desempleo a nivel nacional desde el 17,3% en Octubre de 1996 al 12,4% en 1998 (Fuente: EPH-INDEC).

trabajadas por obrero y la recuperación del salario real dieron lugar a una caída de la tasa de explotación en la industria y, muy probablemente, en el conjunto de las actividades productivas. En el cuadro 9 podemos ver un indicador proxi de la tasa de explotación, el cociente de la productividad por ocupado y el costo salarial real por obrero en la industria (Gigliani y Bercovich, 2006; Marticorena, 2013) para los períodos 1991-1998 y 2003-2011. El cuadro muestra la evolución del indicador que resulta de utilizar el Índice de Precios Mayoristas de la Manufactura (IPIMM) para deflactar la evolución salarial y también el que resulta de aplicar el IPC-INDEC para la década del noventa y el IPC 9 provincias de CIFRA para la postconvertibilidad (CIFRA, 2012). El primero es el procedimiento adecuado para calcular el costo salarial real, pero resulta inservible para la postconvertibilidad dada la subestimación de los índices de precios calculados por el INDEC desde 2007. Mediante ese procedimiento el proxi de tasa de explotación habría caído un 44% entre 2003-2011 y habría aumentado un 26,2% entre 1991-1998. El segundo procedimiento no permite calcular costo salarial real en la industria pero el resultado sea probablemente un mejor indicador para el período 2003-2011, ya que el IPC 9 provincias da una medida más confiable de la inflación minorista. Según este último indicador, el proxi de tasa de explotación habría caído un 17,9% entre 2003 y 2011, pero habría aumentado un 66% en los noventa, lo que –comparado con el 26,2% utilizando el IPIMM– señala la posibilidad de diferencias significativas con el procedimiento adecuado. Teniendo en cuenta la evolución hasta 2007 (Marticorena, 2013), es muy probable que la reducción de la tasa de explotación no haya compensado su aumento en los años noventa, como surge de deflactar los salarios por el IPC 9 provincias y lo que es consistente con otros datos. Por ejemplo, la distribución funcional del ingreso calculada por el Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) indica un aumento de la participación asalariada en el producto entre 2003 y 2011, pero que no compensa la pérdida originada en la hiperinflación y consolidada durante el ciclo de la convertibilidad (Sánchez, 2013). Salvia y Vera (2013) muestran que la desigualdad medida según el coeficiente de Gini familiar habría caído hasta 2010 a niveles inferiores a los de la década de 1990, en coincidencia con lo evidenciado por otras mediciones (Beccaria y Maurizio, 2012). Sin embargo, cuando excluyen del cálculo los ingresos no laborales de los hogares, la caída de la desigualdad entre 2003 y 2010 no perfora los niveles promedio la primera mitad de los noventa (Salvia y Vera, 2013).

Estos datos son a su vez consistentes con los que surgen del análisis de las razones entre medias de ingreso de los deciles 10 y 1 –10% de ma-

yor y menor ingreso respectivamente- para hogares según ingreso per cápita familiar, población según ingreso per cápita familiar y población según ingreso de la ocupación principal.²⁰ Entre 2003 y 2008, la razón entre medias de ingreso de los deciles 10 y 1 cae un 33,1% para los hogares según ingreso per cápita familiar y un 49,6% para la población según ingreso per cápita familiar. Esta diferencia puede atribuirse a una caída en la desigualdad entre los hogares más pobres, ya que el 10% de la población perteneciente a hogares con ingresos per cápita familiar más bajos se ubica, a su vez, en los hogares más pobres del decil 1 de hogares según ingreso per cápita familiar. Pero la caída en la razón de medias de ingreso de los deciles 10 y 1 para la población según ingreso de la ocupación principal entre 2003 y 2008 es del 25,2%, mucho menor que las anteriores. Una hipótesis es que, entre 2003 y 2008, el impacto del aumento del empleo en la caída de la desigualdad entre hogares fue mayor que el del aumento de los ingresos laborales. Entre 2008 y 2013, la caída de la desigualdad así medida para hogares según ingreso per cápita familiar y para población agrupada según ingreso per cápita familiar es muy similar: 24,6% y 25,4%. Pero, nuevamente, la caída de la razón entre medias de ingreso de los deciles 10 y 1 según ingreso de la ocupación principal es mucho menor, del 18,7%. Una hipótesis de esta diferencia es que una parte significativa de la caída de la desigualdad entre hogares entre 2008 y 2013 se origina en transferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) y que sería mucho menor si se considerarían sólo a aumentos de ingresos laborales. Los datos y ambas hipótesis son consistentes con los resultados de Salvia y Vera (2013).

De conjunto, los datos expuestos parecen señalar que la caída del desempleo y el fortalecimiento de la posición negociadora de los trabajadores durante la postconvertibilidad posibilitaron una mejora de su situación -aumento del salario real, menor tasa de explotación, mayor participación en el producto, caída de la desigualdad según distintas medidas-, pero que no revirtió los resultados de la fuerte ofensiva contra la clase obrera desarrollada entre la hiperinflación y la primera mitad de los años noventa. A pesar de ello, dicha mejora implica que la acumulación se desarrolló sobre la base de una relación de fuerzas más favorable para el trabajo que en los años noventa. Pero esta relación de fuerzas, a su vez, sólo se abrió camino a través de la acción del Estado y es aquí donde el análisis de la dimensión específicamente política de la política económica y su relación con las tendencias de la acumulación capitalista cobran importancia.

²⁰ Fuente: EPH-INDEC.

El interregno duhaldista y los primeros dos años de gobierno kirchnerista muestran continuidades esenciales en la política económica y, como planteábamos más arriba, un set de medidas e instrumentos que permite calificarla como “neodesarrollista”. El crecimiento fue empujado por la recuperación de la tasa de ganancia, producto de la devaluación con caída del salario real, y de la mejora de los términos de intercambio, debida al boom de los commodities. Durante esta fase, la intervención estatal buscó sostener un tipo de cambio alto y tasas de interés levemente negativas en un contexto de inflación moderada y superávit comercial y fiscal. La implementación de los planes Jefes y Jefas de Hogar durante el gobierno de Duhalde y el retorno a políticas sociales más focalizadas durante los primeros años de presidencia de Néstor Kirchner buscaron contener el impacto sociopolítico del aumento de la desigualdad y de la pobreza producto de la crisis. La asistencia social, el aumento del empleo y la recuperación del consumo de los sectores medios permitieron articular el relanzamiento de la acumulación con la reconstrucción de la legitimidad política. Sin embargo, la presión y recuperación salarial empezó a sentirse recién en 2005, junto con un fuerte aumento del conflicto sindical y, como vimos, el peso del consumo interno decreció en relación al de las exportaciones. De conjunto, la política económica se articuló con (y sostuvo a) un proceso de acumulación impulsado por la exportación de productos industriales de bajo valor agregado y basado en bajos costos salariales relativos, alrededor del cual se desarrolló la limitada sustitución de importaciones que antes referimos.

Las tensiones entre política económica y acumulación de capital comenzaron a manifestarse en 2005 y, desde esta perspectiva, la salida del ministro de economía Roberto Lavagna constituyó un acontecimiento significativo.²¹ La disputa entre el Ministerio de Economía y los Ministerios de Planificación y de Trabajo que derivaron, finalmente, en la renuncia de Lavagna tuvieron como eje la política fiscal y salarial. La posición de Lavagna iba en el sentido de moderar la expansión del gasto público y contener los aumentos salariales. Este último punto en particular resultaba sensible en el contexto del retorno de las paritarias desde 2004 y de aumento del conflicto obrero a niveles no vistos desde fines de los años ochenta. La salida de Lavagna es sintomática del punto en que la lógica de reconstrucción y reproducción

²¹ La importancia de la salida de Lavagna del gobierno como síntoma de un cambio de período del ciclo postconvertibilidad la hemos referido en el estudio de los cambios en la forma de Estado y de la evolución de la inflación. Ver en este libro, “Una aproximación a los cambios en la Forma de Estado en Argentina (2002-2009)” y “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”.

del consenso político por la vía de la satisfacción gradual de demandas populares entró parcialmente en conflicto con una estrategia de acumulación impulsada por las exportaciones y una industrialización limitada soportada por bajos costos salariales.

Veamos sólo algunos aspectos significativos de lo que podemos caracterizar como un desfase entre política económica y acumulación capitalista que tiene su explicación en la dimensión específicamente política de la política económica, es decir, en su inscripción en una estrategia general de reconstrucción y reproducción del poder político.

Si bien durante los años siguientes a la salida de Lavagna las negociaciones salariales siguieron pautas informales que les ponían techos a los aumentos, los incrementos salariales siguieron un sendero que tendió a dislocar los objetivos de política económica. En primer lugar, aumentos salariales superiores a los incrementos de productividad y del movimiento del tipo de cambio tendieron a mover el tipo de cambio meta para sostener los niveles de competitividad. En segundo lugar, la política monetaria se tornó más expansiva por dos motivos centrales. Por un lado, una mayor intervención cambiaria debida al aumento del tipo de cambio meta en condiciones de superávit comercial y con esterilización parcial de la nueva emisión. Por otro lado, por la política de convalidación monetaria del traslado a precios de los aumentos salariales.

Los subsidios al transporte, la energía y demás tarifas de servicios públicos surgieron como una vía de compromiso para evitar aumentos de tarifas en un escenario post devaluación de alto grado de conflictividad social y en un marco de conservación del esquema de privatizaciones. Pero en la medida en que el aumento de las tarifas entraba en tensión con la construcción y conservación del consenso político, se prolongó en el tiempo y sus dimensiones se volvieron crecientes junto con la aceleración de la inflación. Desde 2008, empezó a ser un problema fiscal serio y, particularmente desde 2010, fue un elemento central en la reaparición del déficit fiscal. Por esta vía se transformó, además, en una variable que explica una parte significativa del aumento de la emisión monetaria para cubrir un déficit creciente.

La política monetaria expansiva se transformó en un problema en la medida en que se desarrolló en condiciones de ciertas restricciones de la oferta y de debilidad de la moneda nacional para funcionar como reserva de valor. Del lado monetario, porque la moneda nacional funciona débilmente como dinero debido a la historia de reiteradas crisis del dinero desde 1975. Eso explica que, aun en contextos de relativa fortaleza económica y financiera, como la de la Argentina en 2005 y

2006, la flexibilidad para emitir dinero sin consecuencias inflacionarias sea mucho más restringida que, incluso, en otros países dependientes. En 2006, de hecho, se evidencia una caída de la demanda de dinero cuando los niveles de inflación eran todavía de un dígito y las tasas de interés real eran levemente negativas. Del lado de la oferta, la “reticencia inversora” funcionó como un límite para respuestas más vigorosas de la oferta a la expansión de la demanda. Como señalábamos más arriba, siguiendo a Astarita (2012b), la fuga de capitales y la remisión de utilidades de empresas extranjeras funciona como un reaseguro frente una historia reciente de inestabilidad. En estas condiciones, la expansión monetaria dio lugar a un proceso inflacionario que impactó negativamente en la política de tipo de cambio alto, en las cuentas fiscales y fue parte de la explicación de la reaparición de tensiones cambiarias.²²

Sin embargo, el desfase entre política económica y acumulación de capital se desarrolló plenamente más allá de 2007. En este sentido, el conflicto de 2008 con la burguesía agraria y el cambio del contexto internacional señalan un nuevo giro en esa relación.²³

Antes mencionábamos que, después de 2008, se observa una reversión parcial de algunas de las tendencias presentes desde los años noventa y profundizadas desde 2002. Una de ellas, como se observa en el cuadro 6, es un leve crecimiento del porcentaje del consumo total en el PBI y una correlativa pérdida de peso de las exportaciones, sin volver a los niveles de los noventa. Pero también es visible el aumento del peso del consumo público respecto del privado. Mientras que hasta 2007 el consumo privado crece siempre más que el consumo público, desde 2008 ocurre lo inverso, con la excepción de 2011 –año de fuerte recuperación del salario real– en el que crecen a la par (aunque vuelve a ser levemente superior el aumento del consumo público). También se observa, en contraste con los años noventa, que desde 2008 el consumo público cumple una función contracíclica. Esta evolución del consumo público se desarrolla simultáneamente con la reaparición del déficit fiscal y, desde 2011, de la restricción externa. Es de destacar que el gobierno ha intentado reducir subsidios y limitar los aumentos salariales con poco éxito, es decir, debiendo retroceder ante el rechazo

²² Este argumento se desarrolla extensamente en la tercera parte de este libro. Ver “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”.

²³ La importancia del conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria de 2008 para la periodización de la dinámica económico-política del kirchnerismo y su significación para las relaciones de fuerza entre las clases se verán más claramente en la segunda y tercera partes de este libro, cuando analicemos los cambios en el Estado, la evolución del conflicto social y la modalidad de dominación política.

masivo, hasta los años 2013 y 2014, años en los que se lleva adelante un ajuste salarial gradual y una reducida quita de subsidios en medio de una recesión y crecientes dificultades en el sector externo.

Resumiendo, desde 2002 se observa una profundización de una estrategia de acumulación impulsada por la exportación de productos agrarios e industriales de bajo valor agregado y una limitada sustitución de importaciones, ambos basados en bajos costos salariales. Sin embargo, más allá de 2005 y, centralmente, desde 2008 se evidencia un desfase entre política económica y acumulación de capital que debe ser considerado a la hora de caracterizar la dinámica de acumulación postconvertibilidad. ¿Qué expresa ese desfase? Expresa una alteración de la relación de fuerzas favorable a los trabajadores sobre la base de la cual debió reconstruirse –después de su crisis– y reproducirse el poder político. Esta dimensión constitutiva del Estado, la de la reconstitución y reproducción de la dominación política, sobredetermina la política económica e imposibilita la correspondencia “típico ideal” entre política económica y necesidades de la acumulación capitalista.

La dualización estructural como límite de la intervención específicamente política del Estado durante la postconvertibilidad

Señalábamos antes que diversos trabajos muestran que la caída de la desigualdad y la reducción de la pobreza perforaron los niveles de la primera mitad de los noventa debido a los ingresos no laborales, es decir, a las transferencias y programas sociales del Estado. Al mismo tiempo, veíamos que todos los indicadores laborales muestran mejoras significativas: reducción de la tasa de explotación, aumento del salario real y de la participación en el producto, etc.; aunque sin reducirse a niveles por debajo de la primera mitad de la década del noventa. Entre ellos se encuentra también el trabajo en negro que cayó desde el 51,1% en el segundo trimestre de 2003 al 33,5% en el último trimestre de 2013.²⁴ Sin embargo, el trabajo en negro en 2013 no distaba mucho del promedio de los años noventa. Si observamos el porcentaje de trabajo asalariado en negro para el GBA en el cuarto trimestre de 2013, vemos que es del 37,1%,²⁵ mientras que en 1998 era del 36,7%.²⁶ Si bien los datos no son exactamente comparables por los cambios introducidos en la EPH en 2003, sirven para indicar que los porcentajes se encuentran en niveles aproximadamente similares. La pregunta que surge, entonces, es si la interrupción del crecimiento económico im-

²⁴ Fuente: EPH Continua-INDEC.

²⁵ Fuente: EPH Continua-INDEC.

²⁶ Fuente: EPH Puntual-INDEC.

pidió la continuidad de un proceso de mejoras que tendía a perforar los pisos de los años noventa o si las mejoras encontraron un núcleo duro ligado a las características del proceso de acumulación. No es posible responder taxativamente a esta cuestión pero sí es posible exponer algunas hipótesis sobre la relación entre el desempeño de algunos de esos indicadores y algunas características del modo de acumulación de capital, en particular la profundización de la dualidad estructural.

Salvia y Vera (2013) realizan un análisis de la contribución a la desigualdad de los hogares de los diferentes tipos de ingresos laborales que arroja resultados muy interesantes para el problema planteado. En particular, señalan que, entre 2003 y 2010, aun en un contexto de caída de la desigualdad de los hogares, el pasaje de ocupados en puestos “menos informales” a puestos formales del sector moderno puede leerse como una vuelta a la estructura ocupacional pre crisis y no como un cambio cualitativo. También concluyen que el proceso de aumento del número de empleados en el sector formal no impidió que se profundizará el empobrecimiento relativo de los hogares con asalariados y no asalariados insertos en el sector informal y la polarización socio-ocupacional entre sector formal e informal.

Algo similar cabe decir de la evolución expuesta del empleo en negro. Si bien cae significativamente, lo hace para volver a niveles pre crisis pero, además, ese comportamiento es compatible con la modalidad de la acumulación descrita más arriba. En primer término, el aumento de la actividad y del empleo tuvo un fuerte impulso en la construcción, actividad que históricamente tuvo altos niveles de empleo en negro. Pero, además, como señalamos, la limitada sustitución de importaciones desarrollada al abrigo de la devaluación y de los bajos costos laborales post crisis apeló al empleo en negro, lo cual es visible en la industria textil aunque no se limita sólo a ella. A ello hay que agregar la persistencia de un amplio sector informal que encubre una población sobrante que el sector moderno no puede absorber.

Podríamos agregar también la caída de la elasticidad empleo/producto desde 2007 y el relativo estancamiento o débil descenso del desempleo una vez alcanzado un piso superior al 7%, más elevado que el de la década del ochenta.

Es decir, la evolución de la desigualdad de los hogares de acuerdo a sus ingresos laborales y del empleo en negro, y los límites que encontró su reducción desde 2007, parecen responder a la reproducción de la dualidad de la estructura económica entre un sector moderno y atrasado que caracteriza la acumulación de capital desde los noventa. Desde este punto de vista, la dimensión específicamente política

de la intervención del Estado, que persiguió recomponer y reproducir la dominación política mediante una incorporación política y satisfacción gradual de demandas populares, encuentra un límite en la dinámica de la acumulación. Más allá de ese límite, el desfase entre política económica y acumulación sólo conduce a niveles crecientes de desequilibrio y de contradicciones macroeconómicas. La “sana” política “neodesarrollista”, entonces, no sería más que una política económica adecuada el desarrollo de esa sociedad dual con una política redistributiva basada en transferencias de ingresos a los sectores precarizados y empobrecidos.

Dependencia y restricción externa como límites a la “autonomía” del Estado

Otro elemento diferenciador de la acumulación de capital durante la postconvertibilidad respecto de los años noventa fue la “latencia” de la dependencia financiera. Durante la convertibilidad, la reestructuración productiva y los fuertes déficit de cuenta corriente fueron financiados con endeudamiento, es decir, que el propio proceso de acumulación productiva requería de financiamiento externo. Durante la postconvertibilidad, señalamos, la reversión de la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio estuvo en la base de importantes saldos comerciales y de cuenta corriente. Bajo esas condiciones, la virtual exclusión de los mercados internacionales de crédito, nunca del todo revertida a pesar de la reestructuración de la deuda externa entre 2002 y 2005, pasó inadvertida y, además, los Estados de la región, entre ellos el argentino, ganaron capacidad de arbitraje entre fracciones del capital y de intervención redistributiva entre capital y trabajo.

Sin embargo, hablamos de “latencia” de la dependencia financiera porque, como vimos, permanecieron el crecimiento desequilibrado de la industria y la tendencia al deterioro del balance cambiario –entre otros factores por la fuga de capitales y la remisión de utilidades.²⁷ A esto se sumaron el déficit energético y el pago de intereses y capital de la deuda externa, aun en un contexto de caída del peso de la deuda externa en el PBI. Es decir, la restricción externa al crecimiento propia de una estructura dual, atrasada y dependiente aparece como un límite infranqueable al desarrollo de la acumulación y a la aparente autonomía de la política económica respecto del capital. Llegados a este punto, en nuestro caso a partir del año 2011, lo que se pone en cuestión

²⁷ Para un mayor desarrollo del expuesto hasta aquí, ver en este libro “La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)”.

es la posibilidad misma del desfase entre política económica y acumulación de capital. La crisis de la acumulación capitalista disuelve el fundamento mismo de la intervención estatal “autónoma” y el déficit fiscal y externo presionan por un ajuste que parece cada vez más urgente en la medida que el Estado pierde capacidades institucionales.

Conclusiones

Desde 1989, en consonancia con una fase de expansión capitalista a nivel mundial caracterizada por la mundialización de las relaciones capitalistas (Astarita, 2004), se ha venido desarrollando y profundizando una estrategia de acumulación impulsada por la exportación de productos industriales de bajo valor agregado. Dicha modalidad de acumulación, posibilitada por una reestructuración productiva desatada sobre la base de una profunda derrota de la clase obrera, desarrolló y profundizó la dualidad estructural entre un sector moderno y atrasado al interior de la industria y en el conjunto de la economía, al mismo tiempo que se desplegaron procesos de concentración, centralización e internacionalización del capital local.

Sobre el fundamento de esas profundas continuidades, es posible advertir dos fases o períodos cuyo quiebre fue la rebelión popular de 2001. Una primera fase fundacional, que podemos denominar “neoliberal”, caracterizada por políticas de apertura y tipo de cambio fijo que intensificaron la competencia y, por esa vía, indujeron un profundo proceso de reestructuración productiva. Una segunda fase que, a partir de las políticas que la caracterizaron, podemos denominar “neodesarrollista/neopopulista”.²⁸ La dinámica de acumulación en este sub período tuvo como especificidades una acumulación fundamentalmente capital-extensiva –que se desarrolló sobre la base de la renovación de capital fijo de la primera mitad de los años noventa–, una limitada sustitución de importaciones posibilitada por el paraguas cambiario –basada en bajos costos laborales y articulada/subordinada a la orientación exportadora de la gran burguesía industrial– y la “latencia” de la dependencia financiera. Este último rasgo tuvo su fundamento en la reversión del deterioro de los términos de intercambio que posibilitó superávits de cuenta corriente y, con ellos, mayores capacidades de arbitraje del Estado entre clases y fracciones de clases. Justamente ese punto es el que hemos enfatizado en este trabajo. La postconvertibilidad se caracteriza por un desfase entre política económica y acumulación capitalista que expresa una alteración de la relación de

²⁸ El significado de la caracterización como “neopopulista” se pondrá de manifiesto en la tercera parte de este libro.

fuerzas favorable a los trabajadores sobre la base de la cual debió reconstruirse –después de su crisis– y reproducirse el poder político. Esta dimensión constitutiva del Estado, la de la reconstitución y reproducción de la dominación política, sobredeterminó la política económica e imposibilitó la correspondencia “típico-ideal” entre política económica y necesidades de la acumulación capitalista. Esa intervención estatal orientada a la incorporación política y satisfacción gradual de demandas populares encontró un límite en la dinámica dualizadora de la acumulación de capital que impone un piso a la reducción de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el empleo precario. Más allá de ese límite, el desfase entre política económica y acumulación sólo conduce a niveles crecientes de desequilibrio y de contradicciones macroeconómicas. Por último, hemos señalado que la restricción externa al crecimiento propia de una estructura dual, atrasada y dependiente aparece como un límite infranqueable al desarrollo de la acumulación y a la aparente autonomía del Estado respecto del capital. Llegados a este punto lo que se pone en cuestión es la posibilidad misma de ese desfase.

II

ESTADO Y CONFLICTO SOCIAL

Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)¹

La crisis de 2001, en tanto crisis del conjunto de las relaciones sociales capitalistas, asumió como una de sus formas el carácter de una profunda crisis política.

La recomposición de la acumulación y dominación capitalistas –sostenida en la salida devaluacionista/inflacionaria de la crisis– requirió como uno de sus momentos la recomposición del poder político estatal. Sin embargo, si los rasgos esenciales del modo de acumulación desarrollado en los noventa han persistido, la forma de Estado ha tendido a mostrar tendencias de transformación y síntomas de una crisis irresuelta.

En este artículo intentamos desarrollar una primera aproximación a las tendencias de transformación de la forma de Estado desde 2002-2003, cuya principal característica es la crisis de las relaciones internas entre las secciones de su aparato, pero sin que sea posible atisbar los contornos de una nueva reorganización.

Para ello, en primer lugar, resumiremos brevemente las principales características de la forma de Estado desarrollada entre 1989-2001. En segundo lugar, expondremos las principales características de la recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas en el período 2002-2003. Por último, intentaremos desarrollar la paulatina

¹ Artículo escrito a mediados de 2009 y publicado originalmente en el número 23 de la revista *Theomai* durante el primer semestre de 2011. Se han suprimido algunas partes para evitar reiteraciones, en notas al pie se aclara el contenido de los párrafos eliminados.

crisis de los atributos que caracterizaron a la forma de Estado durante los años noventa y buscaremos vincularla con la crisis de la convertibilidad, entendida como crisis de la cristalización de una determinada relación de fuerzas entre las clases, y con las particularidades de la salida devaluacionista/inflacionaria de dicha crisis.

Hegemonía y forma de Estado (1989-2001)

La potencialidad hegemónica de la burguesía o de algunas de sus fracciones se realiza en una determinada “forma de Estado”. En tal caso, el análisis de una determinada “forma de Estado” reenvía al análisis de la estructura de una hegemonía específica. Lo que analizaremos en este apartado, entonces, es el modo en que la hegemonía del “bloque en el poder”, con dominante en las fracciones industriales y agroindustriales orientadas a la exportación del capital local, cristalizó en una determinada “forma de gobierno” –y más en general de “régimen político”– y en relaciones específicas entre las secciones del aparato de Estado. Estas relaciones, en su dinámica, reprodujeron la relación de fuerzas entre las clases que fue la anatomía de la hegemonía burguesa durante el período 1989-2001.²

¿Cómo el Estado produjo y reprodujo la unidad del “bloque en el poder”, es decir, la unidad de la burguesía como “una clase”? ¿Cómo produjo y reprodujo la dominación sobre la clase obrera, es decir, el modo específico de su desorganización como clase? ¿Cómo se expresó en la “forma de Estado” el carácter débil de la hegemonía? Estas preguntas son las que trataremos de responder en lo que sigue y esas respuestas constituyen el análisis de la estructura de la hegemonía.

En función de exponer los rasgos característicos de la “forma de Estado” durante el período analizado, nos concentraremos –en lo referente a la “forma de gobierno” y al “régimen político”– en la relación entre los tres poderes, en particular en la relación entre Ejecutivo y Legislativo, y en la relación sindicatos-Estado. También analizaremos los cambios en las relaciones entre las diferentes secciones del aparato de Estado y en el modo de ejercicio de sus funciones.

² Hemos suprimido párrafos en los que se resumen rasgos centrales de las relaciones de fuerzas entre clases originadas en la crisis hiperinflacionaria de 1989 y consolidadas con la reestructuración del capital y el Estado de los años noventa. Ver en la primera parte de este libro “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001” [agregado al artículo original].

La concentración de poder en el ejecutivo

En las últimas dos décadas se han dado una serie de debates en torno al carácter de las democracias latinoamericanas desde los años ochenta y, en particular, de la democracia argentina de los noventa. Con enfoques en lo demás diversos y hasta antagónicos, O'Donnell y Boron han tendido a considerar la democracia argentina del período como “minimalista” (Boron, 1991; 2003) o “delegativa” (O'Donnell, 1996). Aquí acordamos con el planteo de Bonnet (2008a), quien sostiene que la “forma de gobierno” en la Argentina entre 1989 y 2001 fue una democracia capitalista, sin adjetivos. A la caracterización de la democracia argentina de los noventa como una democracia “disminuida” subyace un tipo ideal de democracia que no se corresponde con su análisis positivo, en particular, la idea errónea de que la democracia es incompatible con la insatisfacción de las demandas populares (Bonnet, 2008a).³ Como señala Nun, todo gobierno representativo posee un conjunto de características que pueden presentar concretamente variaciones significativas dentro de ciertos rangos.⁴ El reconocimiento de estas variaciones permite precisar sus modos específicos de existencia pero, como en el caso argentino, no desmienten el carácter de democracia capitalista plena de tales regímenes. Sólo en este sentido limitado, existe en los planteos de O'Donnell y Boron el registro de ciertos rasgos peculiares del régimen político argentino en el período –algunos compartidos por otros latinoamericanos– que dan cuenta de la dinámica específica de la dominación política.

Tempranamente, Boron llamó la atención sobre un hecho: la relación entre la forma de Estado desarrollada desde 1991 –a la que denominaba “Estado predatorio”– y una dinámica capitalista asentada en la extracción de plusvalor absoluto (Boron, 1995). En el caso de O'Donnell, ciertas características de lo que ha denominado “democracias delegativas” remiten a rasgos del consenso político y del funcionamiento de los gobiernos representativos de la región que, en el caso argentino, creemos adquieren pleno sentido a la luz del tipo de hegemonía que el Estado del período estudiado coaguló. En este sentido, la concentración de poder en el ejecutivo es un rasgo central de dicha forma de Estado.

Un paso importante del gobierno de Carlos Menem en ese sentido

³ El extenso análisis de las diversas posiciones y su refutación por Bonnet –desarrollo que compartimos y al que remitimos– nos eximen de concentrarnos más en este punto (2008a).

⁴ 1. Los gobernantes deben ser elegidos por los gobernados; 2. Los representantes tienen que conservar cierto margen de independencia con respecto a los representados; 3. Los gobernados deben poder formar y expresar libremente sus opiniones políticas; 4. Las decisiones colectivas deben ser producto de la deliberación (Nun, 2005).

fue, sin duda, la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que le garantizó una mayoría adicta dispuesta a acompañar con sus fallos las medidas del gobierno. Sin embargo, aquí nos concentraremos en el análisis de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que es la delegación de facultades de éste último en el Poder Ejecutivo la que dio el rasgo característico al ejercicio de gobierno durante el período.⁵

Como señaláramos antes, la concentración de facultades en el Ejecutivo ha dado lugar a un conjunto de denominaciones del ejercicio de gobierno en Argentina y otros países de la región durante el período estudiado. Przeworski ha denominado “decretismo” al patrón de imposiciones políticas desde arriba en muchas de las nuevas democracias latinoamericanas (Przeworski, 1994). Bosoer y Leiras denominaron “neodecisionismo” a los patrones de toma de decisiones gubernamentales caracterizados por la concentración de facultades en el presidente. Varios trabajos posteriores, entre ellos los de Vicente Palermo, Marcos Novaro, Sebastián Etchemendy, Mariana Llanos, etc. han puesto en cuestión la adecuación de tales términos a la descripción de los procesos políticos de toma de decisión durante la década del noventa y han destacado el papel jugado por la negociación con los legisladores –fundamentalmente los oficialistas– una vez superada la emergencia hiperinflacionaria. (Palermo y Novaro, 1996; Etchemendy y Palermo, 1998; Llanos, 1998). Sin embargo, más allá de estas discusiones, todos han reconocido la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo y la apelación al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) (autoatribución de facultades del Congreso) como rasgos más o menos permanentes entre 1989 y 2001 en Argentina y como prácticas consolidadas superada la emergencia hiperinflacionaria.

En particular, Negretto demuestra que el apoyo del Congreso a las decisiones por decreto del Poder Ejecutivo no sólo fue permanente a lo largo de los dos mandatos de Carlos Menem, sino que en la enorme mayoría de los casos este apoyo fue un apoyo pasivo, es decir, expresado a través de la aprobación tácita.⁶ Este apoyo pasivo se dio también en múltiples áreas en las cuales el Congreso nunca delegó facultades (Negretto, 2002). Negretto demuestra que la disciplina partidaria fue

⁵ Debe agregarse que esta relación Ejecutivo-Legislativo fue condición de la subordinación de la CSJN al Poder Ejecutivo. En primer término, porque fue el Congreso el que convalidó la ampliación del número de jueces y en segundo término, porque correspondía al Congreso la decisión de someter a los jueces de la Corte a juicio político.

⁶ En Argentina, los DNU deben ser rechazados de manera explícita por el congreso para considerarse derogados, por lo tanto, basta con no rechazarlos para que mantengan su vigencia (aprobación tácita).

muy alta entre los legisladores de las dos cámaras y sostiene que el apoyo pasivo significó que el menemismo se apoyó en una forma negativa de disciplina.

Esta hipótesis de un apoyo pasivo, debido a que muchas de las medidas afectaban negativamente a las bases electorales de los legisladores –hecho especialmente cierto entre los legisladores de extracción sindical y del peronismo del conurbano bonaerense o de varias provincias duramente impactadas por las reformas económicas–, o de una convicción íntima contraria por parte de los diputados y senadores, debe completarse con la referencia a los costos de su rechazo. No se trata sólo de que el rechazo a los DNU en temas trascendentes para el programa de gobierno pusiera en crisis al gobierno del partido al que pertenecían. Durante el gobierno de De la Rúa, los legisladores oficialistas no dudaron en oponerse al gobierno y dejarlo en minoría en una situación en la que la propia reproducción política los impulsaba a abandonar a su gobierno. El costo de bloquear el proceso de reformas a partir de una representación sectorial de los intereses de sus bases electorales o de un voto expresivo de convicciones ideológicas históricas era herir de muerte la estabilidad económica y la posibilidad de retorno a la crisis hiperinflacionaria.

La persistencia del “decretismo” más allá de la emergencia inmediata, su transformación en “un mecanismo cotidiano de legislación” (Negretto, 2002), muestra que el problema de los costos del rechazo a los decretos subsistió ligado a la poca capacidad del Estado para canalizar demandas sectoriales debido a las características del modo de acumulación. La delegación del Congreso en el Ejecutivo, el apoyo negativo de los legisladores oficialistas a la política del gobierno, no hizo más que reproducir en la escena institucional la renuncia masiva de amplias capas de la población –particularmente de los asalariados– a formular demandas económicas y sociales, y su consenso negativo a un conjunto de políticas que, de manera objetiva, afectaban negativamente sus posiciones en la economía y en las relaciones sociales de fuerza. Este tipo de consenso, estaba apoyado en el temor a la hiperinflación, en la fragmentación de la clase obrera y en altos niveles de desempleo.

La transformación del Congreso en una caja amplificadora de demandas sectoriales chocaba con los límites de un modo de acumulación que no admitía la posibilidad de importantes concesiones a las clases subalternas. El apoyo negativo y la delegación explícita de facultades liberaron a los legisladores de votar positivamente contra los intereses de sus bases electorales inmediatas o en línea con sus tradi-

cionales posiciones ideológicas. Paradójicamente, de este modo cumplieron cabalmente su función de representación.

Los cambios en las funciones del aparato de Estado y de las relaciones entre sus secciones

Los cambios en las funciones y en la magnitud del aparato de Estado durante los noventa han dado lugar a una serie de definiciones del tipo de Estado que estaba emergiendo. Las más comunes han sido la de “Estado mínimo” y “Estado ausente”, asociadas en algunos casos a la interpretación del proceso de reforma como de “desguace del Estado”. En este sentido, los trabajos de Oszlak (2003) y Bonnet (2008a) resultan esclarecedores en sus refutaciones de ambas nociones.

Desde el punto de vista cuantitativo, tomando como indicadores el número de empleados, la evolución del gasto público y el número de dependencias, las evidencias no avalan la hipótesis de un “Estado mínimo”. Oszlak tanto como Bonnet señalan que, más que una minimización o debilitamiento, una aproximación a las transformaciones sufridas por el aparato de Estado sugiere una metamorfosis. Ésta se caracterizó por el abandono o debilitamiento de ciertas funciones, lo que abonó la tesis del “Estado ausente”, pero, al mismo tiempo, por la reformulación y fortalecimiento de otras y la asunción de funciones nuevas.

Las privatizaciones fueron un aspecto central de la reestructuración del capital y del Estado. Supusieron la apertura de nuevas áreas para la acumulación de capital y el retiro del Estado de la provisión de una gama muy variada de bienes y servicios para reconcentrarlo y potenciarlo en otras funciones. Junto con la desregulación de los mercados implicó la subordinación a la lógica del valor y de la acumulación capitalista del conjunto de las actividades económicas. En sí mismas, la desregulación y las privatizaciones fueron una forma de intervención negativa, ya que –en un contexto de apertura económica y política monetaria restrictiva– indujeron una profunda reestructuración capitalista cuyo corazón fue una ofensiva del capital contra el trabajo.

Por lo tanto, el abandono de las funciones de “Estado empresario” y la reducción de la intervención en el funcionamiento de los mercados, por su papel en el proceso de reestructuración, es ya indicativa del tipo de metamorfosis del Estado que se estaba produciendo.

Del mismo modo Oszlak y Bonnet señalan la importancia, en el conjunto de transformaciones del aparato de Estado, del proceso de descentralización. Ésta abarcó fundamentalmente la transferencia

de la atención en primera instancia de la salud; la educación en sus niveles secundario, normal y técnico; la construcción de viviendas; la provisión de agua, servicios cloacales y electricidad; y el mantenimiento de la red vial que fueron delegadas a las provincias y municipios. Pero también deben incluirse otras formas de ese proceso como la descentralización de gran parte de la asistencia social, los convenios para la ejecución de la obra pública con los municipios, la asistencia financiera directa a municipios a través de instrumentos como los adelantos del tesoro nacional (ATN), etc.

El segundo componente de la descentralización se encontraba vinculado a otro aspecto de este proceso: el papel de los mecanismos clientelares locales como sistemas de mediación política.

Esta descentralización, sin embargo, tuvo como contracara la centralización en el Estado nacional de los recursos financieros de los que las provincias pasaron a ser crecientemente dependientes. Bonnet también pone de manifiesto la centralización de los recursos represivos, fundamentalmente a través de la Gendarmería Nacional, función que adquiriría cada vez mayor importancia con el incremento de la conflictividad en las provincias incapaces de asegurar el orden interno con sus propias fuerzas de seguridad. Esta centralización de los recursos represivos fue acompañada de un aumento de aquellos dedicados a esa tarea y de una modernización del aparato represivo en general.

Bonnet señala un segundo aspecto de la metamorfosis del Estado en los noventa: la independencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En octubre de 1992, una ley del Congreso modificó su carta orgánica, consagrándolo como un organismo autárquico encargado de defender el valor de la moneda y no sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo. Esto implicaba una doble transformación del BCRA: su sustracción de la órbita del poder político y su reorientación monetarista. Esta constitución del Banco Central “en una suerte de cuarto poder” (Bonnet, 2008a) fue complementada, siempre de acuerdo al autor, por el creciente peso del Ministerio de Economía dentro del Poder Ejecutivo.

Bonnet plantea, a partir de lo expuesto, que la forma y funciones del Estado se orientaron hacia el disciplinamiento de la clase trabajadora y que dicha estructura funcional de disciplinamiento se configuró como un triángulo: en el vértice superior el mecanismo de disciplinamiento dinerario, encarnado en la independencia del BCRA como garante de la disciplina monetaria y en el predominio de economía en el Poder Ejecutivo; en los dos vértices inferiores la asistencia

social descentralizada y la represión centralizada. Según Bonnet, la asistencia social focalizada y la represión selectiva se orientaron hacia aquellos grupos marginalizados de la disciplina dineraria.

Reprodujimos extensamente este planteo porque lo compartimos en lo sustancial y entendemos que da cuenta del núcleo de las transformaciones en el aparato de Estado y su vínculo con la hegemonía menemista. Sin embargo, querríamos plantear algunas precisiones que resultan fundamentales en relación con nuestra hipótesis central: la existencia de una “hegemonía débil”.

Creemos que el rasgo central de las transformaciones en el aparato de Estado es el predominio del Ministerio de Economía. Lejos de los modelos prototípicos de bancos centrales independientes como la Reserva Federal norteamericana durante el largo reinado de Greenspan o del Banco Central alemán y su sucesor el Banco Central Europeo, la independencia del BCRA nunca se efectivizó en términos de una duradera política autónoma frente al Ministro de Economía. De modo que la independencia del BCRA sustrajo el control de la política monetaria del poder político, pero por la vía de su subordinación de hecho al Ministerio de Economía potenció el predominio de este último respecto del sector político del Poder Ejecutivo. Este predominio fue, ante todo, político y se basó en el consenso negativo alrededor de la estabilidad y la continuidad del programa de reformas. Este hecho se puso de manifiesto en los enfrentamientos entre el ministro y el sector político del gabinete y aun con el mismo presidente. La salida de Domingo Cavallo, lejos de cambiar el aspecto fundamental, simplemente transformó al propio Presidente en garante del predominio del área económica y de su racionalidad tecnocrática.

La emergencia del conflicto social en las provincias –sobre todo hasta el año 1996– fue vista por el sector político del Ejecutivo, y aun por sectores de los bloque oficialistas de diputados y senadores, como una oportunidad para limitar el poder del ministro y recuperar protagonismo. En esas ocasiones, la amenaza de la pérdida de la disciplina fiscal para el futuro de la convertibilidad y el programa económico agitada por el ministro y organizaciones empresarias bastó para abortar el intento. Se trató de la actualización de la relación de fuerzas sobre la que se basaba el programa de reformas y que el predominio del Ministerio de Economía encarnaba y garantizaba. Este poder resultó reforzado por el control del área económica sobre los recursos financieros de los que dependían las provincias y, ante todo, los mecanismos de asistencia social sobre los que descansaba la estabilidad de sus administraciones.

Parafraseando a Bonnet, si la separación entre lo económico y lo político resulta replicada en el Estado por la división entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, podemos decir que el apoyo negativo y el comportamiento delegativo del Congreso resultaron replicados al interior del Poder Ejecutivo por la subordinación del sector político al Ministerio de Economía. Este doble desplazamiento de poder, del Legislativo al Ejecutivo y del sector político al área económica, dio cuerpo a la hegemonía débil caracterizada por el predominio de los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo en torno al programa económico.

La transformación del vínculo Estado-sindicatos

Los mecanismos institucionales de canalización de los conflictos sociales deben ser considerados como parte del régimen político y, por lo tanto, como un aspecto de la “forma de Estado”. Entre estos han adquirido particular importancia –tanto en los países centrales como en los periféricos con una fuerte presencia de la clase obrera–, desde la segunda posguerra, los mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero. Específicamente, aquellos de negociación con sindicatos y las negociaciones tripartitas entre gobiernos, cámaras empresarias y sindicatos.

La crisis del modelo de sustitución de importaciones fue, al mismo tiempo, la crisis de un sistema de relaciones laborales que hacía de la lucha salarial el centro del enfrentamiento entre capital y trabajo y, de su resultado, un dato fundamental de la política económica. Esta forma de la lucha de clases se estructuró a través de un complejo de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, en tanto que expresión coyuntural de la contradicción capital/trabajo. Se trató entonces, de la internalización del antagonismo obrero en una lógica reformista de las concesiones, centrada en la lucha salarial.

La integración funcional de los sindicatos a estos mecanismos institucionales fue el eje de la articulación entre sindicatos y Estado que permitió el desarrollo de complejas estructuras burocráticas sindicales dependientes para su reproducción del desvío de una porción del plusvalor, fundamentalmente a través del sistema de obras sociales. Los mecanismos de la lucha salarial eran, por lo tanto, un modo de canalización de la contradicción entre capital y trabajo y, al mismo tiempo, de la contradicción entre el desarrollo de esas complejas estructuras sindicales y el desarrollo contradictorio de la clase obrera al interior del capital.

Este vínculo funcional entre sindicatos y Estado entró en crisis de-

bido al bloqueo de la vía salarial de resolución/despliegue de la lucha capital/trabajo, primero en el marco del proceso de aceleración inflacionaria y después de 1991, debido al papel de los mecanismos de producción de plusvalor absoluto como estrategia competitiva del capital local. Al mismo tiempo, la derrota de la estrategia vandorista tuvo como una de sus causas el debilitamiento y la fragmentación de la clase obrera, primero debido a los efectos de la derrota hiperinflacionaria y, segundo, debido a su fragmentación estructural profundizada por las transformaciones en el modo de acumulación y en las formas concretas de explotación de la fuerza de trabajo.

Estas fueron las condiciones en las que devino dominante la estrategia “neoparticipacionista” de revinculación funcional de los sindicatos al Estado basada en su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras. Esta capacidad sería el fundamento de un apoyo negociado al proceso de reformas que permitiría conservar espacios de decisión institucional y la defensa del sistema de obras sociales. Posteriormente, el aumento del desempleo y del empleo en negro y las rebajas de aportes patronales condujeron a la crisis del sistema e impulsaron una fuga hacia delante de esa lógica, llevando a la negociación de subsidios, el acceso a nuevas formas de canalización del plusvalor a través de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y, en algunos casos, la participación en privatizaciones y la explotación directa de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) no logró hallar una solución definitiva a la crisis sindical estabilizando una nueva articulación funcional a las instituciones estatales. En primer lugar, el bloqueo de la vía salarial tendió a hacer descansar la capacidad de control del conflicto laboral en los mecanismos de carácter coercitivo sobre los que descansaba la hegemonía neoliberal: amenaza hiperinflacionaria, desempleo y fragmentación de la clase obrera. Pero, al mismo tiempo, estos factores debilitaban el poder de negociación de las direcciones sindicales, minando su capacidad de movilización. En segundo lugar, en ausencia de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, la tendencia a su crecimiento fragmentado y descentralizado amenazaba la capacidad de disciplinamiento de las bases y con ello la integración funcional de los sindicatos al Estado. Ésta sólo se sostuvo gracias a los relativamente bajos niveles de conflictividad laboral que caracterizaron al período. En tercer lugar, hay que agregar la emergencia de los movimientos de desocupados. La creciente importancia de los conflictos protagonizados por estos sujetos

desde mediados de los noventa autonomizó parcialmente la dinámica de los conflictos vinculados al mundo del trabajo del control de las cúpulas sindicales. Por último, la aparición de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) significó por primera vez un intento de romper con el monopolio de la CGT de la representación de los asalariados. Este intento se dio en el contexto de la ruptura de un sector de la CGT, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), con la dirección de la central sindical en 1993, prolongándose durante todo el período. La conformación de la CTA y la ruptura del MTA no pueden desvincularse de la estabilización del “neoparticipacionismo” como estrategia dominante en la CGT.

De modo que, si bien la cúpula sindical cegetista logró conservar el control sindical y cuotas importantes de poder organizativo y financiero, el escenario de crisis sindical permaneció abierto. La perdurabilidad de esa crisis se halla vinculada a las dificultades del Estado para constituir mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, debido a las limitadas capacidades para otorgar concesiones a causa de las condicionalidades del modo de acumulación de capital. Este es el núcleo de lo que hemos llamado “hegemonía débil”, debido a las características del modo de acumulación existía una potencial contradicción entre necesidades del proceso de valorización y sus necesidades de legitimación que fue “cerrada” por el predominio de los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo.⁷

Cambios en la forma de Estado (2003-2011)

Como planteamos en el apartado anterior, entre el interregno duhaldista y los primeros años del gobierno kirchnerista, se desarrolló un proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas, aunque en un modo que expresó los cambios en las relaciones de fuerza entre las clases después de las jornadas de diciembre de 2001. Sin embargo, si bien se produjo una recomposición del poder político y de las capacidades institucionales del Estado, al mismo tiempo se desarrollaron cambios importantes en la forma de Estado cristalizada en los noventa. Exponemos abajo las que consideramos principales.

⁷ Hemos suprimido párrafos en los que se resumen cambios en las relaciones de fuerzas entre clases y rasgos de la recomposición de la acumulación y la dominación entre el interregno duhaldista y los primeros dos años del kirchnerismo. Ver en la primera parte de este libro “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001” [agregado al artículo original].

La reforma de la carta orgánica del Banco Central

A poco de asumido el gobierno de Duhalde y de producida la devaluación del peso, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la carta orgánica del BCRA.

Bajo el régimen de convertibilidad, el BCRA sólo podía emitir pesos en contrapartida al ingreso de divisas, no podía actuar como prestamista en última instancia y sólo podía asistir al Tesoro en caso de que las reservas excedieran a la base monetaria al tipo de cambio fijo. Además, con el valor del dólar fijado por ley, la función del Banco en el mercado cambiario era sólo el de una caja de conversión.

La reforma de la carta orgánica, con sanción de ambas cámaras el 24 de enero de 2002, habilita al Central a emitir billetes sin establecer ninguna relación con el nivel de reservas, a actuar como prestamista en última instancia de la banca privada, a asistir al Tesoro y a intervenir en el mercado cambiario.

En lo inmediato, esta reforma obedecía, por un lado, a la necesidad de adecuar las funciones del BCRA a un tipo de cambio libre y bajo un esquema de flotación sucia; por otro lado, al reclamo de la banca privada de intervención del central para el salvataje de bancos en peligro de quiebra.

Pero lo fundamental es que la reforma terminaba de hecho con la independencia del BCRA y lo subordinaba más estrechamente al Ministerio de Economía, que recuperaba como una de sus órbitas la política cambiaria y monetaria.

La subordinación del Ministerio de Economía al área política del gobierno

La devaluación y la reforma de la carta orgánica del BCRA tenían de por sí importantes consecuencias sobre la relación del Estado con el conjunto de la burguesía. Bajo el régimen de convertibilidad y en un contexto de apertura comercial y desregulación de los mercados, la presión competitiva se imponía sobre el conjunto de los capitalistas de un modo objetivo e impersonal. La imposibilidad del Ministerio de Economía de adoptar cambios bruscos o suaves en la política cambiaria y monetaria dejaba sólo el flanco fiscal abierto al arbitraje estatal. Y, aun en ese plano, la presión de la competencia internacional imponía severos límites al aumento de la presión impositiva sobre los capitales, una vez eliminado el recurso a la devaluación.

La recuperación de los instrumentos cambiarios y monetarios daba al Ministerio de Economía la capacidad de arbitrar en el corto plazo entre las diversas fracciones del capital.

Pero, hasta aquí, la preeminencia del Ministerio de Economía en el Poder Ejecutivo no había sido severamente cuestionada. La permanencia de Roberto Lavagna al frente del ministerio una vez asumido el gobierno kirchnerista hasta el año 2005 fue una prueba de la dificultad del Presidente para remover al ministro. Lavagna seguía apareciendo como el garante de la salida de la crisis y de la estabilidad económica.

Sin embargo, la tendencia a limitar la influencia del ministerio se hizo sentir desde el gobierno de Duhalde. La creación del Ministerio de la Producción con un hombre de la Unión Industrial Argentina (UIA) al frente suponía un recorte del poder interno.⁸

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, la creación del Ministerio de Planificación, Infraestructura y Obras y Servicios Públicos acabó con el superministerio que ostentara Cavallo. A partir de ese momento, los enfrentamientos entre Lavagna y el ministro Julio De Vido serían noticia permanente. También limitó el poder del Ministerio de Economía el papel más prominente del Ministerio de Trabajo, tanto por la convocatoria de paritarias y la apertura de negociaciones colectivas como por el rol de mediador en temas conflictivos y de impacto económico como la reforma de la ley de ART o la reforma laboral.

Antes de su renuncia, Lavagna tuvo fuertes entredichos con el ministro Julio De Vido en torno a la política de obras públicas y de contrataciones; con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, en torno a las propuestas de modificación de la ley de riesgos de trabajo; y con el propio Presidente y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, por la política salarial. El trasfondo del debate era el aumento de la inflación y la tesis de Lavagna, compartida por los principales economistas, era que se debían moderar las tasas de crecimiento –“enfriar la economía”– y los aumentos de salarios, a los que consideraba inflacionarios.

Con la renuncia de Lavagna –exigida por el presidente Kirchner– el 28 de noviembre de 2005 se consumó la subordinación del Ministerio de Economía al área política del Poder Ejecutivo. Los siguientes ministros –Felisa Miceli, Miguel Peirano, el breve interregno de Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou– tuvieron un perfil bajo o bien un limitado campo de acción aun para elegir a sus colaboradores. Kirchner sintetizaba el sentido de la salida de Lavagna el mismo día de la renuncia: “Yo no puedo permitir que se dé un doble juego como ocurrió con Menem y Cavallo. La dirección del Gobierno debe ser una sola” [énfasis del original] (Clarín, 29/11/2005).

⁸ Se trata del entonces presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren [agregado al artículo original].

La impugnación a la concentración de facultades en el Ejecutivo

La subordinación del Ministerio de Economía al área política del gobierno implicó la concentración en la órbita presidencial de amplios poderes de arbitraje entre las fracciones del capital. Es que el desplazamiento de poder desde el Legislativo al Ejecutivo, consolidado en el período menemista, se mantuvo desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Las sucesivas prórrogas de facultades delegadas –que permitían desde modificar el presupuesto hasta modificar o crear nuevos impuestos– y el recurso a los DNU –que eran tácitamente aprobados en el Congreso–, adquirieron un nuevo carácter en el contexto de apertura de posibilidades de captación de excedentes por vía impositiva –dado el generoso superávit comercial–, en el marco de la recuperación de las políticas cambiaria y monetaria.

En los noventa, la independencia del BCRA y el régimen de convertibilidad sustraían la política monetaria del ámbito de la lucha de clases cristalizando y reproduciendo la relación de fuerzas legada por la violencia hiperinflacionaria (Bonnet, 2008a). En las nuevas condiciones, la subordinación del Ministerio de Economía al área política y la concentración de facultades en el Ejecutivo volvieron a poner las políticas monetaria y cambiaria en el centro de las pujas políticas y sectoriales. A su vez, el superávit comercial permitía al gobierno captar excedentes por la vía impositiva y reorientarlos por la vía de subsidios hacia otras fracciones del capital. Las facultades delegadas en lo presupuestario e impositivo daban, entonces, amplia discreción al Poder Ejecutivo para definir políticas sectoriales.

El conflicto con la burguesía agraria desatado el 11 de marzo de 2008, motivado por la resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos, se inscribe en dicha situación. Por primera vez desde 2002, una fracción de la burguesía –el conjunto de la burguesía agraria– rompía abiertamente la unidad del “bloque en el poder” y se movilizaba contra el gobierno y, de ese modo, ponía en cuestión las relaciones de poder al interior de la clase dominante.⁹ El centro del reclamo agropecuario se desplazó gradualmente hacia una impugnación de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo.

Históricamente, entre los aspectos centrales de la división de poderes se halló la atribución del Parlamento de crear, modificar o derogar

⁹ El conflicto tuvo diversas implicancias, entre ellas la movilización de porciones de los “sectores medios” que ya habían dado la espalda al gobierno en las elecciones presidenciales de 2007. Aquí nos limitamos al impacto sobre la relación entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Para una aproximación a otros aspectos del conflicto ver Bonnet, (2008b), Belkin y Piva (2009).

impuestos y de sancionar el presupuesto. Weber consideraba –entendemos que correctamente– que tales atribuciones eran estructurantes del papel del poder legislativo (Weber, 1991). Desde su origen, esta función era resguardar la igualdad de los capitales frente al Estado ante potenciales arbitrariedades del poder ejecutivo.

El reclamo de la burguesía agraria se orientó explícitamente hacia ese objetivo y tuvo un resultado exitoso. Ostensiblemente, desde el “conflicto con el campo”, el papel del Congreso se ha fortalecido, aun antes de las últimas elecciones, y se ha convertido en centro de atención de gran parte de los debates políticos más importantes. Los decretos de necesidad y urgencia se han reducido a un mínimo operativo y la reciente prórroga de las facultades extraordinarias, autolimitadas por el propio proyecto del Poder Ejecutivo, se realizó sólo por un año y habrá que ver cuál es su operatividad en temas conflictivos.

Conclusiones

Como señaláramos antes, la recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas en el período 2002-2003 implicó, como uno de sus momentos, la recomposición del poder del Estado, pero en un modo que expresó los cambios en las relaciones políticas de fuerza entre las clases después de las jornadas de diciembre de 2001.

Tempranamente –aunque lo hemos excluido del análisis por razones que resultarán más claras en lo que sigue–, el gobierno kirchnerista modificó la composición y los métodos de selección de los miembros de la Corte Suprema.

El mayor peso del área política del Poder Ejecutivo –consumada con la subordinación del Ministerio de Economía después de la renuncia de Lavagna– también debe verse como un resultado de la crisis de 2001. En otros trabajos hemos intentado mostrar que desde 1996-1997 ante los conflictos, cortes y puebladas en el interior del país tendía –aunque coyunturalmente y de manera limitada– a cobrar mayor protagonismo el sector político (Piva, 2012; 2009b).

Como parte de este proceso, se produjeron también transformaciones en el vínculo Estado-sindicatos. El retorno de las paritarias, el recentramiento, en un escenario inflacionario, en la lucha salarial y la vuelta, en este contexto, a las pautas de aumento salarial, muestran tanto un retorno a aspectos del viejo sistema de relaciones laborales como la persistencia de las relaciones de fuerza alumbradas por la hiperinflación y caracterizadas por la debilidad y mayor subordinación del trabajo al capital. Pero aún este escenario de tibias concesiones

graduales a la clase obrera no puede desvincularse de la necesidad de recomponer la legitimidad del poder político después de la crisis de 2001, de la recuperación del conflicto sindical después de años de evolución descendente y de los grandes conflictos que entre 2004 y 2005 protagonizaron fracciones de los ocupados como telefónicos, subtes, ferroviarios, etc.

De modo que se asiste desde 2002-2003 a una repolitización de la intervención del Estado en desmedro de una “razón tecnocrática objetiva”. Con “repolitización” no queremos aludir a una efectiva despolitización de la acción estatal en los noventa, lo cual sería una contradicción en los términos. Como hemos señalado, la convertibilidad era la cristalización de las relaciones políticas de fuerza entre las clases después de la derrota hiperinflacionaria, pero en un modo que presentaba la subordinación del trabajo al capital como subordinación del conjunto de los agentes/ciudadanos a una dominación impersonal y objetiva, y a la intervención del Estado como sujeta a razones de orden técnico-económico objetivas.

“Repolitización de la intervención del Estado” quiere significar – ante la falta de un mejor término– que la intervención del Estado vuelve a aparecer como producto de decisiones políticas que expresan relaciones de fuerza sectoriales inmediatas. El decisionismo menemista pretendía encarar reformas inevitables, impuestas por la lógica objetiva de “los mercados”. El decisionismo kirchnerista pretende reinstaurar el lugar de la política frente a la tendencia especulativa del mercado. Ambos decisionismos esconden simétricas y opuestas realidades. El decisionismo menemista oculta una intervención decididamente política de subordinación del trabajo a través del proceso de reestructuración del capital y del Estado, cuya condición fue la recomposición de las capacidades institucionales del Estado. El decisionismo kirchnerista oculta la respuesta a lógicas que efectivamente se presentan a los administradores del Estado como objetivas. En los límites de su intervención, mantenimiento de lo esencial de aquella reestructuración, y en muchos de los aspectos “virtuosos” del “modelo económico”: “superávits gemelos”, política monetaria por metas de inflación, etc. Ambos “decisionismos”, son genuinos productos de luchas sociales que empequeñecen su papel real.

Pero ciertamente la “repolitización” de la intervención del Estado supuso riesgos para la legitimidad del ejercicio del poder político en un contexto de concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. El régimen de convertibilidad constituía, como señalábamos antes, un marco de unidad de las diversas fracciones del capital y limitaba la

capacidad de arbitraje del Estado entre dichas fracciones. La devaluación, la recuperación de las herramientas de política cambiaria y monetaria, el superávit fiscal y comercial otorgaron al Poder Ejecutivo una mayor capacidad de redistribuir costos y beneficios entre diferentes sectores de la burguesía. La “crisis del campo” fue la crisis de una forma de Estado, o más bien de su última y más prominente característica, que resultaba crecientemente inadecuada en las nuevas condiciones de desenvolvimiento de la lucha de clases. Pero la cesión de la toma de decisiones al Congreso puede hacer al Estado más permeable a las demandas de diferentes grupos sociales en un contexto en el que la capacidad del Estado para procesarlas resulta limitada por las características del modo de acumulación. El agotamiento, hacia 2007, del período de compatibilización entre acumulación de capital y concesiones graduales a la clase obrera, puso de manifiesto que la lógica del modo de acumulación, basado en bajos costos salariales relativos, plantea límites a una hegemonía sustentada sobre esa base.

Por último, las tendencias de reversión de los atributos de la forma de Estado en los noventa plantean interrogantes respecto de la solidez de la recomposición del poder político iniciada en 2002-2003. Estas tendencias no dan, simultáneamente, muestras de una reorganización del aparato de Estado y dicha situación tiende a expresarse institucionalmente como conflicto de poderes.

Dado que no hay hegemonía sin condensación en una forma de Estado, sin coagulación en un conjunto de mecanismos institucionales que internalicen las contradicciones sociales, la pregunta que surge es si se gestó a partir de 2003 una nueva hegemonía –en el sentido de un nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que permita presentar el interés particular de la burguesía como interés general– o si se trató sólo de una recomposición frágil de la dominación política sobre la base del relanzamiento de la acumulación posibilitado por la devaluación y subsiguiente recuperación de la tasa de ganancia. Tiendo a pensar más adecuada a la comprensión de los hechos la última opción.¹⁰

¹⁰ Para un punto de vista similar en este sentido, ver Bonnet (2008b).

¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)¹

Introducción

El primer gobierno kirchnerista fue el gobierno de la recomposición del poder político, es decir, de la recomposición de la autonomía ilusoria-objetiva del Estado.²

Dicha tarea tuvo una doble dimensión. Por un lado, la reconstitución del consenso en torno al ejercicio del poder político como fundamento de la estabilización de la dominación política y económica del capital. Ello suponía la salida de la crisis política abierta en 2001 y, en virtud de ello, constituía una *tarea universal*, en el sentido de que expresaba el interés del conjunto del capital confundándolo en un mismo movimiento con el interés del conjunto social, como respuesta a una crisis que afectaba a todas las clases y fracciones de clase. Como tal, era el ejercicio de una función hegemónica. Pero, al mismo tiempo, de modo inmediato, suponía la necesidad de construir consenso en

¹ Artículo escrito a fines de 2011 y publicado originalmente en el número 40 de *E-L@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos*, durante el segundo semestre de 2012.

² La expresión “ilusorio-objetiva” refiere, en su origen, a la noción de “apariencia objetiva” utilizada por Marx (1998) que da cuenta del carácter fetichista de los fenómenos sociales en el capitalismo. Supone apariencia de objetividad (de cosa) de las relaciones entre los hombres y, al mismo tiempo, que esa apariencia de objetividad es el modo en que efectivamente se presentan las relaciones entre los hombres, no mero engaño. Ese mismo carácter comparten conceptos como los de “forma objetiva” (Lukács, 1985), “ilusión objetiva” (Horkheimer y Adorno, 2006) o “abstracción real” (Sohn-Rethel, 1980). Aquí refiere a la particularización del Estado y, por lo tanto, a la separación entre lo económico y lo político, en este doble sentido de “objetividad”.

torno a la figura del nuevo presidente que había llegado al gobierno con una debilidad de origen producto de la crisis del sistema político post 2001. Los dos grandes partidos históricos, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), estallaron después de la crisis y se presentaron fracturados a las elecciones presidenciales de 2003. La fractura de la UCR tendió a cristalizar en la conformación de nuevas fuerzas políticas. El PJ transformó la elección nacional en una interna abierta, tres candidatos, incluido el ex presidente Carlos Menem, se presentaron a esas elecciones con el aval del congreso partidario. Producto de estas condiciones, Néstor Kirchner con el 22% de los votos se transformó en presidente de un país sumergido en una crisis de representación.

Ambas dimensiones de la recomposición de la dominación política estaban entrelazadas, sin embargo, no sólo es necesario distinguirlas desde el punto de vista analítico sino que veremos que dicha diferencia tuvo importantes efectos prácticos.

En este artículo nos preguntamos si la recomposición del poder político y del consenso durante el período kirchnerista constituyó una nueva hegemonía. Trataremos de acercarnos a una respuesta a través del análisis de la relación entre Estado y conflicto social entre 2003 y 2010. Específicamente, analizaremos la capacidad del Estado para internalizar el conflicto social a través de la estructuración de mecanismos institucionales. Entendemos la hegemonía como un modo histórico de la lucha de clases que se caracteriza, en primer lugar, por la capacidad de la burguesía de presentar las condiciones para su propia expansión como condiciones para la “expansión de las energías nacionales” (Gramsci, 1998: 58). Esto es, de presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social.³ En segundo lugar, dicha potencialidad hegemónica, sólo se realiza en “formas de Estado” determinadas. En este sentido, en el núcleo de la construcción de una hegemonía se halla la estabilización de mecanismos de internalización de las contradicciones sociales mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos rutinizados que permitan traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas del régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones (Piva, 2009). Es en ese contexto que el estudio del conflicto social, ocupa un lugar central, en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones socia-

³ Ello presupone condiciones del modo de acumulación de capital que lo hagan posible y que aquí, para enfocarnos en el problema planteado, dejamos momentáneamente de lado.

les. Secundariamente apelaremos a datos de las elecciones de 2003, 2005, 2007 y 2009.

El material empírico que ha servido de base a esta investigación fue la recolección de todas las notas sobre conflictos sociales aparecidas en el diario La Nación.

El análisis fue prioritariamente cualitativo. Con ese fin, del total de los conflictos sociales recolectados fue seleccionado un conjunto de casos que fueron reconstruidos apelando a tres diarios de tirada nacional (La Nación, Clarín y Página/12). Los casos fueron elegidos en función de los siguientes criterios:

1. Porque en todos los casos debió intervenir el Estado nacional;
2. Porque todos los conflictos tuvieron un fuerte impacto político y en los medios de comunicación.

El ordenamiento de los datos basado en los casos seleccionados atendió a las siguientes dimensiones:

1. La identidad auto atribuida de los sujetos de la protesta (trabajadores, comerciantes, vecinos, etc.);
2. El tipo de demanda formulada;
3. Las formas de lucha y organización de los sujetos de las protestas;
4. La capacidad de los sujetos de las protestas de universalizar sus demandas;
5. La existencia o no de articulación, explícita o implícita, por los propios sujetos de la protesta de objetivos reivindicativos (inmediatos) y políticos (mediatos y orientados al Estado);
6. El rol jugado en o frente al conflicto por los actores de la oposición política: participación, dirección, apoyo, oposición, búsqueda de institucionalización, otras;
7. El posicionamiento del gobierno nacional frente al conflicto: negociación, búsqueda de institucionalización, intento de aislamiento/neutralización, represión, respuesta tendiente a la satisfacción de las demandas, otras;
8. Resultado del conflicto. Esta dimensión abarca a su vez como sub dimensiones: a) el resultado en términos de los objetivos inmediatos y mediatos de los sujetos de las protestas; b) el resultado en términos del fortalecimiento/debilitamiento del apoyo social al gobierno.

Aunque el análisis fue prioritariamente cualitativo, también se apeló a datos cuantitativos. Para ello, se utilizó la base de datos de huelgas

obreras de 16 variables que comenzamos a construir durante el año 2010 en base a información recolectada en el diario La Nación y los registros de número y tipo de acciones de protesta protagonizadas por movimientos de trabajadores desocupados y de número de acciones de protesta por sujetos constituidos fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas, ambos a partir de la misma fuente.⁴

La reconstrucción del consenso político (2003-2005)

Los primeros dos años del gobierno de Néstor Kirchner constituyeron un período de reconstrucción del consenso y de recomposición del poder político. Al mismo tiempo, los niveles de normalización e internalización del conflicto y la durabilidad de tales procesos variaron para los diferentes grupos sociales y sujetos de las protestas. Particularmente, las características adquiridas entre 2003 y 2005 por la relación entre gobierno y conflicto obrero –tanto para ocupados como para desocupados– parecen haber sedimentado en el aparato de Estado, estabilizando el vínculo funcional entre las organizaciones sociales y sindicales y el Estado. El conflicto obrero entre 2003 y 2010, más allá de variaciones coyunturales, mantuvo sus características esenciales. En contraposición, la adhesión inicial al gobierno y la desmovilización de los “sectores medios” urbanos resultó más inestable.⁵ Todo intento de traducción institucional del inorgánico universo de protestas de las identidades no vinculadas al mundo laboral y, en especial, de los “sectores medios” urbanos ha fracasado.

Los movimientos de trabajadores desocupados –también llamados “piqueteros”– fueron protagonistas del ciclo de movilizaciones del año 2001 y el número de acciones colectivas de dichos movimientos creció hasta el año 2003 (Piva, 2006). Una primera aproximación cuantitativa [cuadro 14] nos muestra que el número de acciones, después de crecer en 2004, cae en 2005 y, sobre todo, en 2006, año a partir del cual no se recuperarán los niveles de los primeros dos años. También la radicalidad de las medidas decrece fuertemente. El porcentaje de acciones radicales (cortes, ocupaciones, tomas, etc.) pasa de representar porcentajes superiores al 80% de las acciones en 2004 y 2005 a menos del 40% en 2006 y del 30% posteriormente. Estos datos demuestran el éxito del gobierno en normalizar el conflicto de los movimientos de

⁴ Para una descripción detallada de la base de datos ver Piva (2011).

⁵ “Sectores medios” no es una categoría de clase sino sociocultural. Incluye a la pequeña burguesía tradicional (pequeños propietarios no liberados del trabajo) y dos conjuntos de asalariados: las llamadas “nuevas clases medias” (por ejemplo, mandos medios) y “asalariados puros” asimilados por sus prácticas y representaciones a la pequeña burguesía.

desocupados. El porcentaje de medidas radicales sólo recupera coyunturalmente los niveles previos en el segundo semestre de 2009, dato que analizaremos luego.

Una aproximación cualitativa también revela una tendencia al aislamiento, fragmentación y retroceso relativo del movimiento piquetero (Svampa, 2008; Campione, 2008). El gobierno, como parte de su estrategia de recomposición del poder político a través de la satisfacción gradual de demandas de los grupos subalternos, produjo una ruptura en la relación con los movimientos de desocupados respecto de los gobiernos previos, adoptando una política de negociación y otorgamiento de concesiones.

El posicionamiento de las organizaciones piqueteras frente a este giro del gobierno definió tendencialmente tres posturas que se traducirían durante los siguientes dos años en una fractura del movimiento de desocupados.

Un primer conjunto de movimientos definiría durante los años 2003 y 2004 una postura oficialista: Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y Popular, etc. Este posicionamiento no debe atribuirse exclusivamente a una cooptación o a un mero intercambio de paz social por beneficios materiales. El movimiento de desocupados era desde el inicio un movimiento heterogéneo, que contenía en su seno corrientes populistas o nacional populares (Svampa, 2003; 2008b). En este sentido, existían “tradiciones comunes” que posibilitaban una “identificación simbólica” con el gobierno kirchnerista (Cortés, 2009). Por otra parte, la gran mayoría de las luchas de los desocupados de los noventa, no tuvieron, objetivamente, una orientación antiestatal, sino que insinuaban, en sus demandas, prácticas e imaginarios, la restauración de un Estado populista (Piva, 2009b).

Un segundo grupo de movimientos, particularmente el Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón (MTD Anibal Verón) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), adoptarían una posición moderada, sosteniendo su oposición al Gobierno mantendrían abiertas líneas de negociación y moderarían la radicalidad de las medidas de protesta en un intento por evitar un creciente aislamiento.

Un tercer grupo, heterogéneo por sus tradiciones ideológicas, estrategias y tácticas, conformado por el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón (CTD Anibal Verón), el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), etc. mantendría

una posición de enfrentamiento al gobierno e intentaría sostener la radicalidad de las acciones de protesta.

De conjunto, esta reconfiguración del mapa piquetero se tradujo en la fractura del espacio y en la fragmentación de sus luchas. Este hecho significó una ruptura de la tendencia a la centralización y coordinación del movimiento de trabajadores desocupados que alcanzó su mayor grado con las asambleas nacionales piqueteras del año 2001 y los planes de lucha conjuntos de aquel año.

El gobierno, desde mediados de 2003, enfrentó la alta conflictividad del movimiento de desocupados con una política que combinó la satisfacción gradual de demandas y una estrategia de aislamiento del denominado sector duro.

Por un lado, tendió a satisfacer las demandas de las organizaciones oficialistas y en menor medida de otras organizaciones opositoras, pero reemplazando los más universales planes Jefes y Jefas de Hogar, implementados por Duhalde, por subsidios a microemprendimientos y cooperativas de trabajo a través de diversos programas, como el Manos a la Obra. Por otro lado, buscó fortalecer el rol de los municipios del Gran Buenos Aires a través del otorgamiento de la asignación, la implementación y el contralor de dichos programas a las intendencias. Esto se desarrolló en el marco de un sostenido descenso del desempleo.

Frente a las organizaciones que sostuvieron una posición de enfrentamiento, el gobierno llevó adelante una política que denominó explícitamente como “ni palos ni planes”. Se trató de una estrategia que combinó una actitud de predominante tolerancia hacia la protesta en términos represivos, la negativa a otorgar concesiones y el intento de aislar las protestas a través de una práctica y un discurso orientados a bloquear la articulación con otros sectores sociales y la universalización de las demandas. El centro de la estrategia fue una disputa política pública en torno a la legitimidad de cortes, acampes y ocupaciones. En el marco de una construcción de consenso sostenida en la satisfacción gradual de demandas, el gobierno negoció y otorgó concesiones a organizaciones que enmarcaron la protesta en límites que progresivamente fue tornando más restrictivos. Simultáneamente, construía un discurso público que vinculaba protesta radical y delito, especialmente invocando la figura de la “extorsión”. En esa línea, se estimuló discursivamente la judicialización de los cortes, ocupaciones y reclamos de alimentos a empresas privadas, aunque no fue el Gobierno Nacional, por lo general, el que tomó la iniciativa de realizar las denuncias.

La respuesta a la protesta social en general, y a la de los desocupados en particular, fue predominantemente no represiva. La mayoría de las acciones represivas durante el período fueron ejecutadas por policías provinciales. La decisión de no reprimir del Gobierno Nacional estuvo en gran medida vinculada a un proceso de deslegitimación del uso de la violencia material estatal como respuesta a las protestas sociales desde 1997 hasta los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002 (Piva, 2012). La represión, durante ese período, tendió a producir enfrentamientos, en lugar del repliegue de los manifestantes, y manifestaciones de rechazo de los “sectores medios urbanos”, fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, y del sindicalismo disidente. En junio de 2002, el resultado fue el adelantamiento de las elecciones.

Sin embargo, el gobierno apeló a la represión en casos puntuales, y se advierten en ellos ciertas regularidades. En primer lugar, la mayoría de los casos correspondió a ataques u ocupaciones de empresas privadas y, en menor medida, al ataque o intento de ocupación de edificios públicos. En segundo lugar, la represión fue selectiva, se dirigió a “piqueteros duros”, al tiempo que no se utilizó en casos semejantes realizados por organizaciones oficialistas. Pareció, entonces, marcar los límites de tolerancia a las organizaciones sociales opositoras. Pero lo que se expresa en esta contraposición, más allá de la distinción inmediata oficialismo-oposición, es una doble dimensión del conflicto con los movimientos de desocupados. Por un lado, el conflicto en torno de las demandas mediatas e inmediatas de los movimientos: trabajo genuino y planes y subsidios. Pero, por otro lado, y tendencialmente predominante, un conflicto en torno al control del conflicto mismo. La política diferenciada hacia la FTV y Barrios de Pie, pero parcialmente también hacia la CCC y el MTD Anibal Verón, se debe a cierta disposición de estos movimientos a negociar las demandas formuladas dentro de los límites a la protesta demarcados por el gobierno. Esto es, a la funcionalidad parcial de cierta vinculación institucional o tendencialmente institucionalizada –y no sin tensiones, especialmente en el caso de la CCC y el MTD– que permitiría al gobierno cierto control o internalización del conflicto social. Este intento de normalización del conflicto piquetero tiene cierta analogía con la relación del gobierno con los sindicatos con personería gremial, más allá de que algunas medidas puntuales que tomen, por ejemplo, los bloqueos a empresas privadas del sindicato de camioneros, puedan resultar disfuncionales.

A menos de dos años de asumido, el gobierno había incorporado a organizaciones importantes como la FTV y Barrios de Pie a su coa-

lición política, había fragmentado el movimiento y había aislado a los piqueteros duros y deslegitimado sus métodos de protesta. Este éxito indicaba el importante consenso social construido y el grado de recomposición del poder político estatal y de su apariencia de autonomía respecto de la sociedad civil. Al mismo tiempo, dicha recomposición fue también producto de la capacidad del gobierno para interiorizar y normalizar el conflicto.

Pero, además, el reflujo de la movilización y la reorientación de la política social del gobierno hacia la conformación de cooperativas y el financiamiento de obras, en un contexto de reducción del desempleo, parecen haber impulsado cambios en la identidad de los movimientos. A partir de 2006, se observa un crecimiento de las demandas de carácter territorial, como la demanda de viviendas. Simultáneamente, los movimientos profundizaron patrones de movilización y organización más definidamente territoriales. Apelaron a las ocupaciones de tierras y el reflujo dio lugar a un repliegue a los barrios y al trabajo comunitario perdiendo peso el vínculo y articulación con el movimiento de trabajadores ocupados. En este sentido nos preguntamos hasta qué punto es posible seguir considerando a esos movimientos como organizaciones de desocupados.

La recomposición del consenso y la tendencia a la normalización del conflicto obrero reaparecen en el análisis de las protestas de ocupados. Los datos muestran una inversión en la evolución cuantitativa de los conflictos de ocupados y desocupados respecto de la observada para los años 1989-2003. Durante ese período, la tendencia fue a la caída de los primeros y a un aumento de los segundos. Como se observa en el cuadro 13, la frecuencia de paros crece en los años 2004 y 2005. Aunque cae en 2006, el número de paros ese año es superior al de 2003 y se mantiene en esos niveles hasta 2009, con otro pico significativo en 2007. De acuerdo al sitio Nueva Mayoría, que publica datos del período 1989-2007, el año 2005 sería el de mayor número de conflictos protagonizados por ocupados desde 1989 y todo el período 2004-2007 presentaría un promedio mayor al período iniciado en 1989.⁶

Del mismo modo que las tendencias opuestas entre 1989 y 2001 no podían desligarse del aumento del desempleo, la evolución de la protesta de ocupados y desocupados desde 2003 no puede desvincularse de la reducción del desempleo, que para fines de 2006 ya mostraba niveles de un dígito. También se encuentra parcialmente asociada con la

⁶ Ver: www.nuevamayoria.com.ar. Este dato, sin embargo, debe tomarse con reservas ya que ni el sitio web ni los informes publicados indican cual es la metodología utilizada, especialmente cuál es el criterio de construcción de la unidad de análisis.

caída del desempleo la recuperación de la lucha salarial, estimulada, además, por la inflación y el establecimiento de las paritarias. El hecho de que los asalariados registrados del sector privado consiguieran aumentos reales que superaron lo perdido por la devaluación y avanzaron sobre lo perdido durante los noventa evidencia el fortalecimiento relativo de las capacidades de acción colectiva de la clase obrera.⁷

Asimismo, a diferencia de los noventa, los conflictos obreros han recuperado peso político y social. Varios de dichos conflictos han estado entre los más significativos del período y con la vuelta de las paritarias y el retorno de la lucha salarial, han readquirido centralidad política. A su vez, presentan un conjunto de características comunes. En primer lugar, la mayoría fueron protagonizados por comisiones internas y sindicatos locales. En este sentido, la transformación de las relaciones de fuerza entre las clases, de la situación política después de diciembre de 2001 y el descenso del desempleo constituyeron condiciones para que la tendencia a la fragmentación de los conflictos durante la década del noventa pudiera dar lugar a un proceso de acumulación de fuerzas y de cristalización o consolidación de experiencias a nivel molecular. Sin embargo, dicho proceso –que dio lugar al surgimiento y desarrollo de comisiones internas y direcciones locales opositoras– fue desigual entre las distintas experiencias y tuvo un carácter local, no generalizado. Este bajo volumen y densidad sociales del proceso de acumulación molecular supuso que estas experiencias, si bien constituyeron (y constituyen) un desafío para las direcciones sindicales, no significaron una amenaza a la supervivencia de las direcciones de los sindicatos cegetistas, al menos hasta hoy.

Un segundo hecho, es que en varios de estos conflictos se desarrollaron prácticas sindicales que pretendieron diferenciarse de (y enfrentarse a) las prácticas sindicales tradicionales y que se vinculan, en varios aspectos, con las formas del conflicto social durante la segunda mitad de los noventa y la crisis de 2001. La apelación al funcionamiento asambleario, la utilización de medidas no tradicionales en combinación con formas tradicionales de lucha, la radicalidad de las medidas, etc. son algunos de dichos aspectos. En tercer lugar, a la apelación a medidas radicales se sumó una tendencia a la duración más prolongada de los conflictos.⁸

⁷ El salario real de los trabajadores registrados del sector privado era en el último trimestre de 2006 un 18,4% superior al del último trimestre de 2001. Los salarios del Estado y del sector privado no registrados eran 17,3% y 23,8% inferiores. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina).

⁸ Este crecimiento de la conflictividad de los ocupados y el protagonismo de las instancias sindicales descentralizadas ha sido también desarrollado, entre otros, por Svampa (2008),

Desde el año 2003, entonces, se desarrolló un proceso de recomposición de la acción sindical de los trabajadores que, por sus características, se vincula con el ciclo de resistencias de desocupados y ocupados entre 1996 y 2001. Simultáneamente, a partir de 2003, se recuperaron aspectos del viejo vínculo funcional de los sindicatos con el Estado centrado en la lucha salarial. Durante los noventa, bloqueada la internalización del conflicto obrero por la lucha en torno al salario, la mayor parte de los sindicatos desarrollaron una estrategia neoparticipacionista. La Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por los “gordos”⁹ se revinculó funcionalmente al Estado mediante una estrategia consistente en la vehiculización negociada del programa de reformas, basada en su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras, a cambio de la conservación de capacidades institucionales, financieras y organizativas. A pesar de ello, no evitó la pérdida de peso político, las divisiones internas –la escisión de la CGT-Moyano y el nacimiento de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)– y su retroceso en el escenario de los conflictos sociales ante otras organizaciones (como las de desocupados).

Esta situación se modificó desde 2003. El sistema de sindicatos tendió a unificarse (reunificación de la CGT) y a encolumnarse detrás de la administración kirchnerista (tanto la CGT como, en gran medida, la CTA). Asimismo, los sindicatos recuperaron una parte del peso político que habían perdido y recuperaron su centralidad como mecanismo institucionalizado de canalización de las luchas sociales. Se reabrieron las negociaciones paritarias y tuvo un fuerte impulso la negociación de convenios colectivos.¹⁰ El número de convenios colectivos creció todos los años, pasando de 348 en 2004 a 2038 en 2010.¹¹ A ello debe sumarse la convocatoria periódica del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, de conformación tripartita. A su vez, el relanzamiento de la discusión salarial pudo, entre 2003 y 2006, ser contenido dentro de los límites impuestos por el Gobierno, que fijó informalmente pautas anuales de aumento salarial.¹²

Campione (2008), Atzeni y Chigliani (2008) y Scolnik (2009). Sobre la importancia de la acción sindical de las comisiones internas desde 2003 y del vínculo de las prácticas sindicales de las comisiones internas opositoras con las desarrolladas por otros grupos sociales durante la crisis de 2001, ver Scolnik (2009) y Lenguita y Montes Cató (2009).

⁹ Denominación popular de los dirigentes de los grandes sindicatos de servicios.

¹⁰ Para una visión sobre el rol que la conservación de las capacidades organizativas sindicales durante la reforma de los noventa tuvo en la reemergencia del conflicto obrero y en el retorno de mecanismos de intermediación “neo corporativistas”, ver Etchemendy y Collier (2008).

¹¹ Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación.

¹² Desde 2007 parece haber una tendencia a la perforación de los techos de aumento sala-

El gobierno, frente al aumento de las luchas sindicales entre 2003-2005 y el mantenimiento de elevados niveles de conflictividad posteriores, logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas –la mayoría de los conflictos tuvieron resoluciones favorables para los trabajadores– resituar al Ministerio de Trabajo como ámbito de negociaciones tripartitas y, por lo tanto, recomponer la apariencia de autonomización del Estado respecto de la sociedad civil. Esto es, logró internalizar el conflicto obrero en una lógica reformista de concesiones y tendió a normalizarlo. En aquellos casos en los que el conflicto amenazó con desbordar los mecanismos institucionales de negociación o desafiar los límites demarcados por el gobierno, éste fue, por lo general, capaz de aislarlo. En cuanto a la respuesta represiva, se observa también para los ocupados una lógica de represión selectiva orientada a establecer los límites tolerables de la protesta. Se focalizó en conflictos prolongados, que incluyeron medidas de lucha radicales, desarrollados por comisiones internas opositoras o en zonas y áreas políticamente sensibles. Pero, también en este caso, la respuesta predominante fue no represiva.

Las tendencias a la normalización e institucionalización del conflicto obrero se han sostenido en el tiempo y consolidado, aunque coexistiendo con importantes niveles de conflictividad de los trabajadores ocupados y con la persistencia en la apelación a la acción directa radical.

Pero entre 2003 y 2005 se produjo también un proceso de desmovilización de ahorristas, asambleístas, vecinos, pequeños propietarios de la ciudad y del campo, etc. Todos estos actores, fundamentalmente los “sectores medios” urbanos, habían sido protagonistas de la rebelión popular de diciembre de 2001 y de la continuidad de la movilización durante el año 2002. Durante los primeros dos años del gobierno de Kirchner, la lógica de reconstrucción del consenso a través de la recuperación y satisfacción gradual de demandas de los grupos sociales movilizados también alcanzó a esos sectores. La renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la devolución a sus dueños de los ahorros bancarios con pérdidas menores a las esperadas, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fueron algunas de las principales medidas que recuperaron demandas de organizaciones de DDHH, ahorristas, asambleístas, etc. Todo esto en el contexto de un sostenido aumento del consumo. La desmovilización de ahorristas, asambleístas y vecinos y la caída del número y la radicalidad

rial y a un retorno de la puja distributiva inflacionaria, pero no todavía a una pérdida de control del gobierno.

de las protestas piqueteras daban a fines de 2005 e inicios de 2006 una apariencia de retorno a la “normalidad”.

La amplitud del consenso construido entre 2003 y 2005, que abarcaba el heterogéneo mundo de los “sectores populares”¹³ y de los “sectores medios”, es decir, al conjunto de los asalariados y de los pequeños propietarios, tuvo su manifestación electoral. El 14 de setiembre de 2003 el PJ se imponía con el 40,3% en la Provincia de Buenos Aires en la elección de Gobernador y, en la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra derrotaba en el balotaje de la elección para Jefe de Gobierno a Mauricio Macri con el 53% de los votos, una elección en la que el apoyo de Kirchner a Ibarra era visto por todos los medios de prensa como determinante para la victoria. En 2005, Cristina Fernández de Kirchner se imponía como candidata a senadora al duhaldismo –que había prohiado a Néstor Kirchner– en su propio territorio, la provincia de Buenos Aires, con el 45,77% de los votos y más de 20 puntos de diferencia. También derrotaba a Menem en La Rioja. En Córdoba, se daba la particularidad de que se declaraban kirchneristas el candidato oficialista de Unión Por Córdoba, que ganó con 37,76% de los votos, y el del Frente Nuevo de Luis Juez, que obtuvo el segundo lugar con el 24,84% de los votos. A nivel nacional, el kirchnerismo se convertía en la primera fuerza y superaba el 40% de los votos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sin embargo, ocupaba el tercer lugar con el 20,41% afectado por el incendio del local nocturno “República de Cromagnon” en el que murieron 194 jóvenes y del que se responsabilizaba al gobierno porteño, aliado del presidente Kirchner. También perdía en Santa Fe, donde el PJ resultaba afectado por las inundaciones de 2003. Ambos acontecimientos fueron causa de importantes movilizaciones durante los años 2004 y 2005.

Pero el movimiento de protestas no vinculado al mundo laboral de mayor impacto político del período fue el movimiento de protestas contra la inseguridad. En 2003, se producían puebladas, marchas y cacerolazos motivados en casos de inseguridad en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y en la CABA. Es en este contexto que emergió la figura de Juan Carlos Blumberg a fines de marzo de 2004. El caso

¹³ La categoría “sectores populares” es utilizada aquí para denotar que sólo una parte de la clase obrera, definida objetivamente, actúa como clase. Otra parte de ella se presenta con identidades ligadas a prácticas, sentidos de pertenencia y modalidades de incorporación política de carácter territorial. Ambos conjuntos son abarcados por la expresión “sectores populares” en una tradición que, por lo general, se ha opuesto a la categoría marxista de clase. Otra parte de la clase obrera actúa bajo el modo indiferenciado de “sectores medios”, ver supra nota 4. Para una discusión del concepto marxista de clase como relación social objetiva y como proceso de formación de clase en las luchas, ver Piva (2008).

de su hijo secuestrado y asesinado causó conmoción y sus convocatorias tuvieron un acompañamiento masivo. El gobierno inicialmente no se enfrentaría a Blumberg. Si bien su discurso –orientado al endurecimiento de las penas, la imputabilidad de los menores, el otorgamiento de mayores atribuciones a las fuerzas policiales, etc.– resultaba contradictorio con un discurso oficial centrado en el respeto de los derechos humanos y contrario a la solución represiva de problemas sociales, el énfasis de Blumberg en “despolitizar” su reclamo permitió al gobierno contener y acompañar su demanda y esterilizar cualquier intento de reposicionamiento opositor alertando sobre “el uso político del dolor”. Sin embargo, los resultados electorales de CABA y Rosario y las movilizaciones por la inseguridad señalaban la inestable adhesión de los “sectores medios” urbanos y las dificultades para traducir institucionalmente su descontento.

Los sectores medios urbanos se alejan del gobierno (2006-2007)

Los años 2006 y 2007 serían de activación de un conjunto de actores de la protesta cuyas identidades se articularían fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas. A pesar de su heterogeneidad, es posible observar en las protestas de “ciudadanos”, “vecinos”, “usuarios”, “consumidores”, “ambientalistas”, y un largo etc., una serie de rasgos comunes que señalan continuidades con rasgos de la protestas durante los años noventa y principios del nuevo siglo.

En primer término, la radicalidad de las formas de protesta. Fue usual la apelación a cortes de rutas y calles, la ocupación y el ataque a edificios públicos, las puebladas y el ataque a bienes de empresas privadas.

En segundo lugar, la enorme mayoría de las protestas manifiesta un carácter antipolítico, si bien su significado varía con la variación de identidades, de demandas y de sus articulaciones.

En tercer lugar, las demandas demostraron, en la mayoría de los casos, una elevada capacidad de universalización y los manifestantes tendieron a aparecer como “los ciudadanos”, “los vecinos” o directamente “la gente”, esto es, a asumir inmediatamente identidades universales. Sin embargo, más que pretender la representación de la totalidad pretendieron ser (o parecieron experimentarse como) la emergencia del propio “pueblo”, de la “ciudadanía”, o de la “gente” como tales y sin representación. Al mismo tiempo, el significado político de sus demandas permaneció abierto y la estabilización temporaria de uno u otro significado dependió de la articulación contingente con otras demandas. Esta curiosa simultaneidad de particularidad/uni-

versalismo será analizada enseguida en relación a las protestas contra la inseguridad.

En cuarto lugar, aunque participaron “sectores populares” en las protestas, un número significativo de casos presenta indicadores de que sus protagonistas son individuos y grupos sociales pertenecientes a los “sectores medios”.

Un primer movimiento de acciones colectivas que creció durante 2006 y 2007 es el de la demanda de viviendas. En el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron las ocupaciones de tierras y los cortes de rutas, calles y vías de trenes en reclamo de viviendas. La relación de los diferentes niveles de gobierno con esta demanda es ambigua. Las ocupaciones, cesiones de tierras y los subsidios para la construcción de viviendas fueron históricamente un aspecto importante de la construcción política territorial del peronismo. Simultáneamente, la reorientación de la política social del gobierno, que incluyó planes y subsidios para cooperativas de autoconstrucción, fortaleció este tipo de demandas y la ocupación de terrenos. En este sentido, el movimiento por la vivienda empalma con la política kirchnerista de internalización del conflicto vía satisfacción gradual de demandas. Sin embargo, se constituyó también en un terreno de disputa con organizaciones autónomas del gobierno. Al mismo tiempo, la difusión de este tipo de protestas, en muchos casos con un alto grado de espontaneidad, tiende a desbordar la capacidad de respuesta del gobierno. La amenaza latente es la generalización espacial y la sincronización temporal de las acciones.

Un segundo conjunto fueron las rebeliones de usuarios de trenes. Entre principios de 2005 y fines de 2007, usuarios enfurecidos atacaron y quemaron estaciones y formaciones de trenes en reiteradas oportunidades frente a demoras y cancelaciones. La actitud del gobierno ante estos hechos fue inicialmente ambigua. Sin embargo, hacia 2007, predominó en el discurso oficial la responsabilización de las empresas y durante ese año se decidió, en respuesta a nuevos incidentes, la reestatización del ramal Roca. Esta estatización, al igual que la posterior de Aerolíneas Argentinas, y a diferencia de las simples estatizaciones rescate del Correo Argentino y de Aguas Argentinas, manifiesta las tensiones generadas por el mantenimiento de lo esencial del proceso privatizador y una lógica de construcción de consenso que, debiendo canalizar las impugnaciones a las consecuencias del proceso privatizador, cuestiona y pone en crisis la relación entre Estado y empresas privatizadas.

Dentro de un tercer conjunto, el de las protestas ambientalistas, el

movimiento contra la minería a cielo abierto y la asamblea ambiental de Gualaguaychú contra la instalación de fábricas de pasta de celulosa en la costa uruguaya del río Uruguay han sido los más significativos. Si bien tienen particularidades que los diferencian, comparten algunas características que resultan relevantes para nuestro problema. En primer lugar, la apelación a formas de organización y protesta que caracterizaron a las luchas del año 2001: la forma asamblearia y la utilización de cortes de rutas y caminos. En segundo lugar, estas características se encuentran vinculadas a otro rasgo de continuidad con 2001, como la desconfianza en los mecanismos de representación. En tercer lugar, esta desconfianza ha conducido a las asambleas a la búsqueda de autonomía respecto de los partidos y del Estado, que, en el caso de la asamblea de Gualaguaychú, tendió a adoptar un marcado tono antipolítico. En cuarto lugar, las demandas de los manifestantes plantean límites a la capacidad del Estado para interiorizar el conflicto. El rechazo a una actividad considerada contaminante deja poco espacio para soluciones de compromiso. Al mismo tiempo, las protestas apuntan a actividades que han sido de las más dinámicas en cuanto a expansión del producto y atracción de inversión extranjera directa (IED).

Señalábamos antes que el caso Blumberg había logrado catalizar el descontento por la inseguridad y promovido un vasto proceso de movilización. La estrella de Blumberg comenzaría a decaer a mediados de 2006. Sin embargo, las protestas por inseguridad no cesarían, aunque perderían un centro articulador. Durante 2006 y 2007 se multiplicarían localmente las marchas; cacerolazos; cortes de calles; rutas y vías de trenes; ataques a comisarías; incendios de casas de sospechosos y otras manifestaciones por dicho tema.

El análisis del auge y caída de Blumberg nos permite entrever algunas características relevantes de las protestas contra la inseguridad y, por su contraste con otros movimientos, del conjunto de protestas no clasistas y su relación con el sistema político.

La pérdida de popularidad de Blumberg se inició en 2006 cuando dirigió su reclamo a la Plaza de Mayo y se enfrentó con el gobierno, y, sobre todo, en 2007, cuando hizo públicos sus deseos de postularse como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y se acercó a referentes de la centroderecha. La razón de esa pérdida de apoyo debe buscarse en el rasgo antipolítico presente en las protestas contra la inseguridad. La principal característica de ese rasgo es un rechazo a la instrumentalización de la problemática, su transformación en un simple medio para la acumulación de poder político. La despolitización del discurso,

o su contrario, la acusación de politización, supone una definición de la política como búsqueda de la acumulación de poder por un sector o capa social en interés propio, o de grupos minoritarios, y opuesto al auténtico interés general. Blumberg se tornó sospechoso de instrumentalizar la problemática de la seguridad para “hacer carrera política” y el gobierno, a través de declaraciones de sus funcionarios, lo acusó de ello.

El rechazo a la instrumentalización como núcleo de este rasgo antipolítico alcanza un grado máximo en las protestas contra la inseguridad en la medida en que la mayoría de ellas tienen como fundamento procesos de identificación colectiva sostenidos en el dolor, la tragedia o la pérdida personales. El rasgo antipolítico adopta en ese caso el carácter dramático de un rechazo a la instrumentalización del sufrimiento. Y este aspecto se encuentra a su vez vinculado con otro rasgo de las protestas contra la inseguridad: las demandas aparecen enunciadas desde un lugar inmediatamente universal, que no requiere mediación para universalizarse. No sólo por la identidad de los sujetos, “vecinos” o “la gente”, sino también por aquel fundamento inmediatamente universal de la identificación colectiva: el sufrimiento humano. En el caso de la inseguridad, este dramatismo de la identificación fundada en el dolor personal ha quedado como inmediatamente ligado a una serie de oposiciones –garantismo/mano dura, derechos humanos de los delincuentes/derechos humanos de las víctimas, etc.– que le han cuasi fijado un significado afín a las posiciones ideológicas de la derecha local. Sin embargo, no puede reducirse el significado de las protestas contra la inseguridad y de su rasgo antipolítico a este único encadenamiento. El rechazo a la instrumentalización del sufrimiento contiene también una dimensión disruptiva y radical que empalma con la crítica a la política como medio de acumulación de poder de una capa social y al servicio de grupos poderosos presente también en otros movimientos de protesta, como las asambleas ambientalistas, y que se vincula con la crisis de representación manifestada en asambleas y movilizaciones desde 2001.

El movimiento de familiares y amigos de los jóvenes muertos en el local “República de Cromagnon” el 30 de diciembre de 2004 comparte varios tópicos discursivos con las protestas contra la inseguridad, como el reclamo de penas duras para todos los responsables y el rasgo antipolítico recién señalado. Pero tiene la particularidad de que la búsqueda de justicia para las víctimas los enfrenta a una red de responsabilidades que vinculan al Estado con empresarios de locales nocturnos. Este hecho, junto a la también particular composición del

movimiento, ha permitido evidenciar, en la acción y en el discurso de familiares y amigos de las víctimas, la ambigüedad del rasgo antipolítico entre un significado afín a tradiciones autoritarias de cuestionamiento de la política y un significado disruptivo y radical que cuestiona los límites de la democracia representativa y del sistema de partidos.

Es en este nexo entre el rasgo antipolítico de las protestas y la crisis de representación que cobra sentido la pretensión de universalidad inmediata de los sujetos y sus demandas, el hecho, que mencionáramos al inicio de este apartado, de que experimenten su acción como la emergencia del “pueblo” sin representación. Sin embargo, dicha inmediatez plantea un límite al alcance de las demandas enunciadas por las diferentes protestas. En tanto no mediados, los problemas planteados aparecen aislados unos de otros y sin referencia a (desvinculados del) orden social como totalidad, es decir, el precio de la despolitización de las protestas es su particularización, la contracara de su pretendida universalidad inmediata. Es este efecto “particularizante” de la pretensión de universalidad inmediata lo que determina, como hemos planteado antes, el significado político abierto de muchas de las demandas de estas protestas, cuya fijación depende de su articulación contingente en contextos determinados de luchas sociales.

De lo expuesto, surge que el gobierno tuvo mayores dificultades con las protestas gestadas fuera del ámbito laboral, pero, al mismo tiempo, mayor capacidad para canalizar las demandas del movimiento por la vivienda y de las protestas de usuarios de trenes que las del movimiento ambientalista, del movimiento de Cromagnon y de las protestas contra la inseguridad. En ello han incidido diversas dimensiones –el rol de la minería en la IED, por ejemplo–, pero el dominante rasgo antipolítico de estas protestas explica también esas dificultades. La disposición a la negociación –cuando existe algún tipo de organización– y la confianza en funcionarios y dirigentes políticos es, sin duda, menor en estos tres casos.

De lo expuesto también surge que todas estas protestas, y en particular la tendencia a la apelación a la acción directa radical, indican una resolución incompleta de la crisis de representación abierta con la crisis de 2001. Específicamente, podemos observar un vínculo entre el proceso de movilización de 2006-2007 y la reaparición de tópicos de protesta que señalan un hiato entre los “sectores medios” y el gobierno, pero que refieren, más generalmente, a una crisis de confianza en el sistema político.

Durante 2006 se desarrolló un proceso de movilización en la provincia de Misiones contra el intento del Gobernador Rovira –alineado con

el Gobierno Nacional- de reformar la Constitución Provincial para permitir la reelección indefinida. Este proceso, que concluyó con su derrota en las elecciones constituyentes, tuvo un importante impacto en la opinión pública a nivel nacional y determinó que Néstor Kirchner interviniera personalmente para disuadir a otros gobernadores afines de sus intentos reeleccionistas. Durante 2007, el hasta entonces kirchnerista y candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez rompía con el kirchnerismo denunciando fraude del PJ cordobés con complicidad del Gobierno Nacional. Desde allí hasta fin de año, convocaría a multitudinarias movilizaciones de protesta exigiendo el recuento voto por voto y la realización de nuevas elecciones. Estas movilizaciones ciudadanas marcan una progresiva ruptura de amplios sectores de la población, en particular de los “sectores medios” urbanos de las grandes ciudades, con el kirchnerismo.

En este sentido, los conflictos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de los docentes de Santa Cruz en 2007 son indicativos del cambio de actitud de los “sectores medios” frente al gobierno y de la oposición política parlamentaria respecto de la acción directa.

A partir de enero de 2007, los trabajadores del INDEC denunciaron la adulteración de los datos de inflación, el accionar de patotas dentro del establecimiento y el hostigamiento laboral permanente a quienes se oponían a la intervención. El fuerte impacto del tema en la opinión pública daba lugar a la articulación entre la oposición política parlamentaria y los trabajadores del INDEC. Diputados, senadores y referentes de todas las fuerzas de la oposición concurrían a las protestas, llevaban el tema al Congreso y se manifestaban públicamente a favor de la demanda de los trabajadores.

El mismo año, se producía un extenso conflicto docente en Santa Cruz, la provincia del presidente Kirchner. Más de 60 días perdidos de clase, cortes de rutas y calles, movilizaciones multitudinarias, la instalación de una carpa docente frente a la gobernación y un estado de asamblea permanente dan un indicio de la magnitud del conflicto. El gobierno movilizó a la Gendarmería Nacional que ocupó los establecimientos para evitar que fueran tomados por los docentes y que se enfrentó con los trabajadores en algunas oportunidades. Un hecho significativo de este conflicto fue la amplia “movilización ciudadana” que acompañó, sobre todo en Río Gallegos -la capital de la provincia-, al reclamo docente. Se produjo una participación considerable de los “sectores medios” de la ciudad no sólo en las movilizaciones convocadas por el gremio sino a través de cacerolazos y de la ocupación de espacios públicos. En este contexto, la oposición provincial, especialmen-

te la UCR que gobernaba Río Gallegos, apoyó abiertamente la protesta. Pero también lo hizo la oposición nacional. Dirigentes nacionales del radicalismo y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió se manifestaron a favor de la protesta y viajaron a la provincia para dar su apoyo.

En el marco de la situación política creada por el conflicto, que obligó a la renuncia del gobernador, toda la oposición política provincial intentó articular un frente antikirchnerista, hecho que finalmente no ocurrió. El enfrentamiento tendió a asumir la forma de un conflicto político, sustentado en la apelación masiva a la acción directa radical. El marcado tono antiinstitucional de las movilizaciones y la impugnación creciente del estilo político del gobierno provincial dieron a la participación de la oposición un carácter novedoso en esos cuatro años. La oposición legitimó o directamente participó de acciones directas y salió del escenario parlamentario e institucional para ingresar en la lucha callejera.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2007, la candidata oficialista Cristina Fernández de Kirchner se imponía con el 45,3% de los votos a nivel nacional, duplicando aquel 22% de abril de 2003. La candidata más cercana, Elisa Carrió, reunía el 23%. Sin embargo, el kirchnerismo era derrotado en la CABA, en la Provincia de Córdoba, con pobres resultados en la ciudad capital, y en Rosario, con un ajustado triunfo por un 1% de diferencia en toda la provincia de Santa Fe. Los sectores medios de las principales ciudades le daban la espalda.

Rebelión de la burguesía agraria y pérdida de consenso (marzo de 2008-junio de 2009)

El 10 de marzo de 2008, mediante la Resolución N° 125, el Poder Ejecutivo pretendió implementar un régimen de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. En un contexto de alza de los precios de las materias primas, el gobierno tenía dificultades para contener los precios internos de los alimentos. Al mismo tiempo, necesitaba recursos para sostener un complejo y abultado régimen de subsidios a empresas –destinados mayormente a contener las tarifas de energía y transporte público– y los crecientes pagos de la deuda externa que comenzaban a amenazar el saldo de la cuenta corriente. Las retenciones móviles buscaban poner un techo a los precios internos de las materias primas exportadas por Argentina y captar parte del excedente extraordinario de la burguesía agroexportadora, si los precios internacionales se mantenían en los niveles de 2008. En la medida en que los precios bajaran, las retenciones también lo harían.

La relación con la burguesía agraria había sido mala desde el princi-

pio. Las asociaciones empresarias que históricamente nucleaban a los grandes propietarios y empresarios agropecuarios –la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Rural Argentina (CRA)– se opusieron siempre a la intervención estatal y, en particular, a las retenciones a la exportación, reimpuestas desde 2002. La Federación Agraria Argentina (FAA) –que nuclea a pequeños y medianos empresarios agropecuarios– y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) –que representa a un sector del cooperativismo agrario– ambas de buena relación inicial con el gobierno, fueron incrementando sus conflictos hasta que, en 2007, se sumaron abiertamente al frente agropecuario opositor. Frente a las retenciones móviles, las cuatro asociaciones –constituidas como Mesa de Enlace Agropecuaria– convocaron un paro agropecuario y las bases de la FAA se lanzaron a cortar las rutas en todo el país. El conflicto se extendería hasta el 17 de julio de ese mismo año, atravesado por cuatro extensos paros agropecuarios, un gran número de cortes de ruta, el desabastecimiento de alimentos y un ciclo de movilización social con pocos precedentes desde el retorno de la democracia.

El conflicto en torno a la Resolución N° 125 tuvo varios rasgos que le otorgaron un carácter disruptivo. En primer lugar, por primera vez desde 2002, una fracción de la burguesía, la burguesía agraria de conjunto, rompió abiertamente con el “bloque en el poder” y puso en cuestión las relaciones sociales de fuerza alumbradas por la rebelión popular de 2001. En segundo lugar, no sólo logró concitar el apoyo de los pueblos del interior dependientes de la actividad agropecuaria, sino que movilizó en su favor a la población de las grandes ciudades, en particular a los “sectores medios” urbanos. Actos y cacerolazos masivos, como no se veían desde diciembre de 2001, se produjeron en las principales ciudades, en particular en la CABA. En tercer lugar, a lo largo del conflicto, se produjo en torno a la Mesa de Enlace Agropecuaria una unidad en los hechos de la oposición parlamentaria que configuró un bloque político-social de derecha. Este bloque, sin embargo, no tendría finalmente una expresión político electoral unificada.

El conflicto en torno a las retenciones agropecuarias tendió a transformarse, ya durante el primer paro agropecuario, en una impugnación del estilo político del gobierno, acusado de autoritario y arbitrario, y específicamente, por la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Ejecutivo.¹⁴ La demanda de la burguesía agraria, devolver al

¹⁴ Parte suprimida para evitar reiteraciones. El párrafo eliminado resume la mayor capacidad de arbitraje del Estado entre fracciones del capital en el período postconvertibilidad que funda la impugnación de la burguesía agraria. Ver en este libro “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)” [agregado al artículo original].

Congreso facultades vinculadas a la fijación de impuestos, suponía la restitución de su papel histórico de resguardo de la igualdad entre los capitales. La identificación del rechazo al arbitraje del Ejecutivo entre fracciones del capital, y del rechazo de los “sectores medios” urbanos al estilo político populista en particular y de la política en general, fue muy potente a la hora de posibilitar una alianza de masas liderada por la gran burguesía agraria, algo poco habitual en la historia argentina.

El apoyo y la movilización de los sectores medios urbanos, en particular los de la CABA, fueron centrales a la hora de explicar la envergadura del desafío de la Mesa de Enlace al gobierno, la radicalidad de las medidas y la extensión temporal del conflicto. Al mismo tiempo, ratifica las características de las protestas de estos grupos durante los años 2006 y 2007.

En primer lugar, ratifica su tendencia a la oposición al gobierno y a su creciente activación. En segundo lugar, ratifica su tendencia a la apelación a la acción directa radical, de tono antiinstitucional. Estos rasgos, al igual que los tópicos y los formatos de protesta, guardan similitudes con la movilización de esos sectores en 2001. Sin embargo, como señalábamos en el anterior apartado, una de las características de estas protestas es que las demandas, al mismo tiempo que son enunciadas desde un lugar inmediatamente universal, son particulares, por lo tanto, su significado permanece abierto y dependiente de las articulaciones contingentes en el campo de lucha. En 2001, la articulación en los hechos con piqueteros, pobres y trabajadores ocupados dio a las demandas de estos grupos, en particular a la protesta contra la confiscación de los ahorros, el carácter de un enfrentamiento con el gobierno y los bancos. En 2008, la articulación con la burguesía agraria contra el “saqueo del gobierno” tendió a darle el significado, presente también en 2001 aunque de modo subordinado, de una lucha contra la violación de la propiedad privada por parte del Estado, por lo tanto, más afín a las posiciones de la derecha política. El tercer rasgo de la movilización de 2008 es que ratifica la legitimación y la apelación al uso de la acción directa por parte de la oposición parlamentaria.

De conjunto, el cuestionamiento a la delegación de facultades en el Ejecutivo y a la interpelación populista del gobierno, así como la tendencia a la acción directa, antiinstitucional, de los “sectores medios” urbanos, de fracciones de las clases dominantes y de la oposición parlamentaria señalan la existencia de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de resolución del conflicto social que constituyen el corazón de una hegemonía.

Al finalizar el conflicto, que acabó con la anulación de las reten-

ciones móviles, el gobierno había sufrido una extraordinaria pérdida de consenso. La burguesía agraria, en unión con fracciones de los “sectores medios”, demostró una gran capacidad para desestabilizar la situación política y paralizar la economía. Al masivo impacto del conflicto en los “sectores medios” deben agregarse los efectos sobre las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, las más expuestas a la inestabilidad político-económica, a los que siguieron los efectos locales de la crisis mundial.

Por otra parte, el enfrentamiento del gobierno con la burguesía agraria polarizó el conflicto social durante el primer semestre de 2008. Las organizaciones sociales oficialistas –FTV, Barrios de Pie, Movimiento Evita, etc.– se movilizaron en respaldo del gobierno y se enfrentaron en las calles con los apoyos urbanos del sector agrario. Algunas organizaciones sociales opositoras –como la CCC, MST Teresa Vive, MIJD– se enrolaron con la Mesa de Enlace y se movilizaron, cortaron rutas y ocuparon edificios públicos en su respaldo. Un tercer grupo de organizaciones sociales opositoras al gobierno –FPDS, Polo Obrero, MTD Aníbal Verón– buscó con algunas movilizaciones y un intento de acampe en Plaza de Mayo esbozar una posición autónoma de ambos campos, con poco éxito, bajo grado de movilización y casi nula repercusión. La CGT y una parte de la CTA se movilizaron en tres oportunidades en defensa del gobierno junto a las organizaciones sociales oficialistas, la base territorial de los intendentes peronistas del conurbano bonaerense y el grueso del PJ. Es significativa también la disminución de la actividad huelguística durante el semestre.

Durante el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009, el conflicto de los trabajadores ocupados estaría determinado por el impacto de la crisis mundial. Aunque todavía fuera la primera causa, las huelgas por motivos salariales se reducirían y se incrementarían las de despidos y suspensiones. Pero, síntoma de los cambios políticos en curso, se incrementaría la proporción de huelgas en demanda de seguridad [cuadro 17]. Estas huelgas eran contemporáneas de un nuevo ciclo de movilizaciones de “vecinos” por dicho tema. Es destacable, sin embargo, que el carácter general del conflicto obrero, de ocupados y de desocupados, no sufriera un cambio sustancial de las características enunciadas para el período 2003-2005. De hecho, la intervención del gobierno en lo que amenazaba ser una ola de conflictos por despidos y suspensiones en la industria fue eficaz y ya en el primer semestre de 2009 se encontraba encauzado.

El gobierno, sin embargo, no atinaba a reconstruir el consenso. La combinación de medidas de corte populista y que retomaban deman-

das de los trabajadores movilizados durante la década del noventa – reestatización de Aerolíneas Argentinas, estatización de los fondos privados de jubilaciones y pensiones (AFJP), ley de movilidad jubilatoria– se combinaban con un reforzamiento del PJ en detrimento de alianzas más amplias orientadas hacia la centroizquierda como las que caracterizaron al kirchnerismo en la primera etapa. Ésto equivalía a un reforzamiento de la base más estrecha de apoyo kirchnerista: ocupados formales con alto nivel de sindicalización y el núcleo del aparato justicialista. La ausencia de una agenda política que retomara las demandas de los “sectores medios”, la persistencia de bajos niveles de aprobación popular y una diáspora de dirigentes justicialistas a la oposición culminaron con un mal desempeño electoral en las elecciones de junio de 2009. El kirchnerismo volvió a ser la primera fuerza con el 26,55% de los votos –20 puntos menos que en octubre de 2007– pero sólo gracias a la fragmentación opositora que concentró más del 60%. Además, el kirchnerismo, con la candidatura del propio Néstor Kirchner, era derrotado por dos puntos en la provincia de Buenos Aires por el candidato de derecha, Francisco De Narváez, apoyado por el peronismo disidente. La caída del voto, reflejando el impacto de la “crisis del campo”, era sensible entre los “sectores medios” y entre los más pobres. Tal era el debilitamiento del gobierno que, con el mismo vicepresidente como líder de la oposición, comenzaba a ponerse en duda en los principales diarios su continuidad hasta el final del mandato.

Volver al primer casillero (julio de 2009-fin de 2010)

Sin embargo, pasadas las elecciones, el gobierno recobró la iniciativa política. Como entre los años 2003 y 2005, retomó una agenda democrática orientada a los “sectores medios”. Empezó lanzando una reforma política que incluyó la realización de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir los candidatos a presidente de cada uno de los partidos políticos. Resistida por los partidos más pequeños, ya que impone un piso de 1,5% para acceder a las elecciones generales, se lanzó en el marco de una convocatoria al diálogo político y como un modo de apertura y ampliación del sistema político. Luego, impulsó una reforma de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue el caballito de batalla en la lucha por la recuperación del apoyo de una parte de los “sectores medios” urbanos. Desde el conflicto con la burguesía agraria, fue evidente la toma de partido de los principales medios de comunicación en contra del gobierno, especialmente del multimedio Clarín. La ley de radiodifusión vigente había sido elaborada y sancionada por la última dictadura mi-

litar y su reforma era una vieja demanda de organizaciones de DDHH, de sindicatos de prensa y de un amplio espectro de organizaciones sindicales y sociales. Este grupo de organizaciones había confeccionado en 2004 los 21 puntos por una radiodifusión democrática. Ese documento fue el punto de partida de un proyecto de ley, a su vez modificado para obtener el apoyo de la oposición de centroizquierda. La ley era aprobada y promulgaba en octubre de 2009. Durante 2010, el gobierno impulsaba la reforma del código civil con el fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley era aprobada con una importante mayoría transversal a los diferentes partidos políticos en julio de 2010.

También retomaba una agenda orientada a la clase obrera y a los “sectores populares”, especialmente destinada a los sectores más pauperizados caracterizados por su inserción en el sector informal de la economía. Durante el segundo semestre de 2009, lanzaba la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, un beneficio que extiende la asignación familiar que perciben todos los asalariados formales a los desocupados y los trabajadores informales, lo que reducía sensiblemente la indigencia (Agis, Cañete y Panigo, 2010). También se lanzaba el programa de cooperativas Argentina Trabaja, que crearía 100.000 puestos de trabajo. Éstas y otras medidas se desarrollaron en un marco de salida de la recesión y de recuperación del empleo, el salario y el consumo.

En este contexto, durante el segundo semestre de 2009, se produjo un ciclo de auge de la conflictividad obrera, tanto de ocupados como de desocupados. Entre los desocupados, el 82,5% de las acciones del año 2009 se produjo en el segundo semestre [cuadro 15]. Y después de una fuerte caída de la radicalidad de las medidas desde 2006 hasta 2008, el 85% de las medidas fueron cortes, ocupaciones, tomas, etc. [cuadro 15]. También entre los ocupados se produjo un ciclo de paros en el segundo semestre de 2009 que, contra lo que ocurre normalmente, concentró el 52% de las huelgas del año entre agosto y noviembre, superando a la suma de marzo, abril y mayo, meses en los que se desarrolla el grueso de las negociaciones salariales [cuadro 16]. Pero lo más notable es que el 10% de los paros de 2009 fueron motivados en conflictos intra o intersindicales, contra un 4% de los dos años anteriores y porcentajes aun inferiores entre 2003 y 2006 [cuadro 17].

Una aproximación más cualitativa nos permite observar algunos de los conflictos más importantes. Entre los ocupados, destaca el conflicto de la fábrica de alimentos Kraft-Terrabusi, originado en el despido, a mediados de agosto, de 150 trabajadores y de toda la comisión

interna, que se extendió hasta noviembre con paros, toma de la empresa, cortes de ruta, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y movilizaciones. Si bien la causa inmediata fueron los despidos, el conflicto estuvo atravesado por la disputa entre la comisión interna, de izquierda, y la dirección del gremio. Otro de los conflictos fue el de los trabajadores de subterráneos, que incluyó paros, cortes de vías, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y con patotas de la dirección sindical. La causa fue la disputa entre el cuerpo de delegados de los subterráneos de Buenos Aires, que exigía que el Ministerio de Trabajo diera la inscripción gremial a su nuevo sindicato, y la dirección de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio nacional del transporte, que se oponía a la escisión. El tercer conflicto significativo fue el protagonizado por las organizaciones sociales opositoras en contra de la discriminación en la distribución de planes Argentina Trabaja. Un conjunto de organizaciones que confluyeron finalmente en el frente “Cooperativas sin punteros” realizaron varios acampes de más de 24 horas de duración en la céntrica Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, responsable del programa. Los tres conflictos, los que más atención captaron de los medios de comunicación y del gobierno, tienen en común ser disputas en torno al control del conflicto, como los definiéramos anteriormente. Todos, además, participan del incremento de la radicalidad de las medidas y de la tendencia a la acción directa.

¿Cómo explicar este ciclo de luchas y con estas características durante ese semestre? Sin duda, intervienen diversas dimensiones en la explicación. El debilitamiento del gobierno a causa de la derrota electoral y la legitimación de la acción directa por las patronales agropecuarias y la oposición parlamentaria son dos de ellas. Sin embargo, el debilitamiento del gobierno se había producido ya en 2008, si bien se ratificó en las elecciones de 2009. Por otro lado, el desplazamiento de los “gordos” de la conducción de la CGT desde 2004, abrió un espacio de disputa intersindical avivado por las paritarias y el fortalecimiento de los sindicatos. La derrota kirchnerista de 2009 también dio más espacio de presión a los “gordos”. La acumulación de fuerzas a nivel molecular a la que nos refiriéramos antes supuso que comisiones internas afirmadas en sus espacios encontraran una oportunidad política en esa apertura de las disputas intersindicales. Sin embargo, el aumento es demasiado general y la situación de disputa sindical, aunque más débil, es preexistente como para ser una explicación suficiente.

Una hipótesis que parece adecuarse a los hechos, y complementar las anteriores explicaciones, es que la propia lógica de reconstrucción

del consenso del gobierno promovió un proceso de movilización de esas características. El retorno a una lógica de satisfacción gradual de demandas retomando reivindicaciones democráticas y populares, la búsqueda de galvanización del consenso en base a una polarización con la derecha y, en particular, la elección del Grupo Clarín como expresión del poder económico, legitimó un aumento de las protestas obreras de base que cuestionaron el control del conflicto con prácticas burocráticas y clientelares, sindicales y territoriales. El gobierno, presionado por sindicatos e intendentes aliados, respondió inicialmente con una estrategia de desgaste y represión en el caso de Kraft, con una recreación de la estrategia “ni palos ni planes” en el caso de los acampes contra el Plan Argentina Trabaja y con un dolor de cabeza frente a la paralización de los subtes. Finalmente, terminó cediendo en las tres, incapaz de sostener una posición contraria a las pretensiones de democratización sindical, de movilización contra el clientelismo y, en general, de aumento de las reivindicaciones populares sin deslegitimar su discurso.

Pero su programa de reformas democráticas también incentivó, en este caso como estrategia explícita, la movilización a favor de la llamada “ley de medios” y estimuló las protestas y apoyos en torno a la “ley de matrimonio igualitario”.

Como entre 2003 y 2005, el gobierno, lejos de debilitarse con el aumento del conflicto se fortaleció internalizándolo en una lógica reformista de concesiones que se amplió a una parte importante de los “sectores medios”. Para mediados de octubre de 2010, la aprobación popular del gobierno superaba el 35% y se acercaba según algunas encuestas al 40%. La muerte de Néstor Kirchner sólo potenció, y a lo sumo aceleró, un proceso que se desarrollaba y que se apoyaba, además, en la evidencia de que sumar los votos de la oposición en 2009 era imposible. La oposición política fragmentada era incapaz de una acción política coordinada. Este hecho que parece coyuntural es en realidad estructural y sobre ello volveremos al final de este artículo. Aun el asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra por una patota de la dirección sindical de la Unión Ferroviaria, que debió haber debilitado al gobierno por su vínculo con la CGT, lo fortaleció cuando fue evidente que impulsó la investigación y le soltó la mano a su otrora aliado.

El año 2010 terminaba con tomas de tierras, nada menos que en un parque público, el Indoamericano, en plena CABA, que daban lugar a una generalización de tomas en la ciudad y en el conurbano bonaerense. Nuevamente el gobierno, a pesar de ser inicialmente partícipe a través de la Policía Federal de un intento de desalojo en el que se

asesinó a dos personas, desplegaba su lógica oponiendo una actitud negociadora, de no represión y de respuesta a las demandas populares frente a la posición de restauración del orden del Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri, representante de la derecha política.¹⁵

Los límites del consenso: ¿es posible hablar de hegemonía desde 2003?

El gobierno logró construir un amplio consenso entre 2003-2007 y pudo reconstruirlo después de su dilapidación durante el “conflicto del campo”. En ambos casos, una lógica de satisfacción gradual de demandas, que consistió en una recuperación selectiva y resignificación de reivindicaciones democráticas y populares forjadas desde la resistencia al neoliberalismo en los años noventa le permitió galvanizar el consenso y polarizar el espacio político, identificando con el grueso de la oposición con la derecha y la vuelta al pasado. Decimos selectivamente porque fueron excluidas una serie de demandas de reforma también sostenidas por el sindicalismo opositor al menemismo y por un amplio abanico de organizaciones sociales. Si los cambios en el modo de acumulación permitieron compatibilizar acumulación de capital y otorgamiento de concesiones, las concesiones otorgadas fueron aquellas compatibles con la acumulación de capital. Pero fueron suficientes para reconstruir el consenso.

Sin embargo, esta reconstrucción inmediata del consenso en torno de los gobiernos kirchneristas nos remite a la segunda de las dimensiones de la recomposición política a las que hicieramos mención al inicio del trabajo. Pero la primera y más fundamental recomposición de la hegemonía plantea interrogantes.

Hemos dicho que el corazón de una hegemonía es la constitución de mecanismos institucionales de canalización del conflicto, en tanto que manifestación coyuntural de las contradicciones sociales. También hemos visto que el conflicto obrero muestra señales duraderas de normalización e institucionalización. Sin embargo, al mismo tiempo, una serie de indicadores muestra dificultades para la traducción institucional de un amplio abanico de conflictos y demandas mucho menos asibles.

Dado el proceso de desorganización de clase y de desproletarización

¹⁵ Aunque excede los límites temporales de este artículo, este proceso culminaría en octubre de 2011 con la reelección Cristina Fernández de Kirchner con un 53,96% de los votos, seguida por el Frente amplio Progresista (Hermes Binner) con un 16,87% y la Unión para el Desarrollo Social (liderada por la UCR) con un 11,15%, con una participación electoral de casi el 79% (Fuente: Ministerio del Interior de la Nación).

subjetiva que significó la derrota de la clase obrera desde 1989 (Piva, 2011), aun en un contexto de recomposición de la acción y de la organización de los trabajadores, la contradicción capital/trabajo encuentra expresión en una inorgánica y heterogénea gama de conflictos y de modos de intermediación política que no tienen su espacio de constitución en las identificaciones clasistas y, menos aún, en el mundo laboral. Este conjunto heterogéneo abarca a los “sectores populares” y a los “sectores medios” urbanos. No es extraño, entonces, que la institucionalización del conflicto obrero no sea suficiente para la estabilización de una dominación hegemónica.

¿Cuáles son los indicadores de que la reconstrucción del consenso no sedimentó en una hegemonía política?

En primer lugar, la apelación generalizada a la acción directa, no institucionalmente mediada, y, en muchos de los casos, especialmente en manifestaciones no obreras, directamente antiinstitucional. Los efectos de esta tendencia han sido moderados por su carácter inorgánico y por la mayor capacidad del gobierno para internalizar el conflicto orgánico. Pero su potencial disruptivo emergió con fuerza durante el conflicto con la burguesía agraria, aunque adquiriera el carácter de movimiento restaurador.

Un segundo indicador es el rasgo antipolítico o de rechazo de la política de las protestas, como síntoma de una incompleta resolución de la crisis de representación. También ese rasgo reapareció con fuerza durante el “conflicto del campo”. El significado político abierto de este elemento antipolítico lo coloca en un lugar central en la potencial articulación de protestas generalizadas contra el régimen político, a derecha e izquierda.

En tercer lugar, encontramos, la tendencia al apoyo y apelación a la acción directa y antiinstitucional por parte de la oposición parlamentaria en 2007 y 2008. Este hecho significó que, en Santa Cruz en 2007 y en todo el país en 2008, la lucha política se trasladara a las calles y rutas siendo la acción directa el medio por excelencia de enfrentamiento. Además, como en 2001, nuevamente el parlamento fue el lugar de reconstrucción precaria del orden institucional traduciendo la “voluntad de las calles”.

Todos estos indicadores señalan la existencia de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de canalización del conflicto social que constituyen el corazón de una hegemonía. Las disputas en torno al control del conflicto en el seno de las luchas obreras son parte del mismo fenómeno, pero, dada la baja densidad de la construcción sindical antiburocrática y la fragmentación y debilitamiento del espacio piquetero opositor, no

han constituido una amenaza seria a la canalización institucional del conflicto obrero ni a las direcciones sindicales.

Debe añadirse un cuarto elemento que queda fuera del espacio de observación delimitado en este artículo: la dispersión del voto opositor en las elecciones de 2005, 2007 y 2009. *La incapacidad de la oposición para constituir un polo opositor después del conflicto con la burguesía agraria no fue un hecho coyuntural, sino que manifestó la persistencia de la crisis del sistema de partidos. Pero esta persistencia plantea la imposibilidad de una traducción política electoral de la oposición al kirchnerismo. A su vez, la inexistencia de un eje articulador del sistema de partidos –centro derecha/centro izquierda; populismo/institucionalismo, etc.– impide cualquier representación que permita una lectura, una dotación de sentido, de esa oposición. Éste es otro aspecto de la inexistencia de mecanismos institucionales de traducción de las contradicciones sociales.*¹⁶

En estas condiciones, la recomposición del poder político asumió la forma limitada de un consenso en torno al kirchnerismo, no de una redefinición de la lucha política en el marco de mecanismos institucionales consensuados por oficialismo y oposición. La oposición al kirchnerismo tomó entonces el carácter de rechazo al modo de recomposición política y su acción política devino fácilmente anti institucional. El resultado de esto fue que el gobierno tuvo éxito en polarizar el espacio político en términos de oposición kirchnerismo-antikirchnerismo. El costo de ese éxito fue sacrificar la constitución de una hegemonía que brindara estabilidad a la dominación. El punto no es si aquella pérdida de consenso fue transitoria o si lo es la recuperación actual del gobierno, el punto es la fluidez de la situación política.

La persistencia de la apelación a la acción directa y de la crisis del sistema de partidos es simultánea con una caída del voto en blanco y de la abstención electoral. Ésto significa que el resultado final está abierto. La recomposición actual del consenso en torno al gobierno y la fragmentación de la oposición pueden abrir paso a una reconstrucción del sistema político y de la dominación o a una reemergencia de la lucha extrainstitucional.

¹⁶ Para un análisis temprano de la debilidad institucional de la oposición como rasgo del sistema de partidos post 2001, ver Novaro (2003).

POSTDATA

Las transformaciones del Estado en la Argentina postconvertibilidad: de la desorganización del Estado neoliberal al “keynesianismo trunco”

La hipótesis expuesta en los textos precedentes, que desde 2002-2003 asistimos a un proceso de desorganización de la forma de Estado desarrollada en los años noventa, pero sin que se atisben los contornos de una nueva, parece corroborada por los sucesos posteriores al año 2009. Debe ser precisada, sin embargo, en un aspecto crucial. No es que estén ausentes rasgos “novedosos”, sino más bien que esos aspectos o tendencias a la metamorfosis del Estado, por un lado, entran en creciente contradicción con importantes continuidades que agudizan los problemas de coherencia característicos del aparato de Estado;¹ por otro lado, que varios de esos aspectos o tendencias “novedosos” han fracasado en sus objetivos o generado desequilibrios o desestabilizado otras áreas de política pública. Estos límites no se originan, al menos no fundamentalmente, en fallas en el diseño e implementación de las políticas públicas, sino en contradicciones inherentes a la articulación entre acumulación de capital y dominación política. Si antes nos aproximamos a ellas a través del estudio de la modalidad de acumulación y de sus límites, a partir de lo que denominamos desfase entre política económica y acumulación capitalista, ahora las volvemos a enfrentar en los límites que presenta la articulación de la dominación política en la forma de Estado. En lo que sigue presentaremos,

¹ El Estado realmente existente es un ensamble poco armónico de aparatos y secciones de aparatos, cada uno de ellos, a su vez, persiguiendo a cada momento cierta coherencia normativa. Para un análisis de este problema y de su relación con la cuestión de la burocracia, ver Piva (2012b).

en primer lugar, de manera muy breve, algunos sucesos significativos para la evolución de la forma de Estado desde 2009 así como también, sintéticamente, aspectos que han quedado fuera de los análisis precedentes, algunos de los cuales han sido abordados en otros trabajos (Bonnet y Piva, 2013). En segundo lugar, profundizaremos la conceptualización de los cambios en la forma de Estado postconvertibilidad y discutiremos desde qué perspectiva cobra relevancia la distinción entre consenso no institucionalizado y hegemonía que hemos expuesto en los artículos previos.

Algunas cuestiones no tratadas de los cambios en la forma de Estado postconvertibilidad

Profundización de las transformaciones en el Banco Central

Con la salida de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía se produjo uno de los cambios más duraderos en el funcionamiento del Poder Ejecutivo: la subordinación del Ministerio de Economía al ala política del gobierno encabezada por el presidente Néstor Kirchner, primero, y por la presidenta Cristina Fernández, después. La subordinación de la política económica a la lógica política de construcción y reproducción del consenso requería, a su vez, la subordinación de la política monetaria a los objetivos de la política económica. La profundización de la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de diciembre de 2009 obedeció a esta necesidad. El detonante fue el conflicto suscitado entre el Poder Ejecutivo y el entonces presidente del BCRA, Martín Redrado, en torno al uso de reservas para el pago de deuda externa. El 14 de diciembre de 2009, la Presidenta anunciaba la creación por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del “Fondo del Bicentenario” destinado al pago de vencimientos de deuda externa durante el año 2010. El Fondo se constituiría con las reservas de libre disponibilidad del BCRA. El concepto de “reservas de libre disponibilidad” era una rémora del régimen de convertibilidad monetaria en el cual toda la base monetaria debía estar respaldada por reservas al tipo de cambio fijado. Las reservas excedentes una vez cumplida dicha exigencia se consideraban de “libre disponibilidad”.

En el año 2005, el gobierno había cancelado toda la deuda con el FMI apelando a las reservas y, en el año 2008, se anunció el pago con reservas al Club de París –conformado por Estados nacionales acreedores del Estado argentino– suspendido finalmente por la agudización de la crisis mundial. Sin embargo, en este caso se trataba de cancelar deuda con particulares, lo que suponía un paso más en el uso de las reservas por parte del Poder Ejecutivo. El motivo inmediato alegado

por el gobierno era la generación de condiciones para el ingreso de la mayor cantidad de “hold outs” (acreedores privados de deuda externa que rechazaron ingresar a la reestructuración de deuda de 2002-2005) a la reapertura del canje de deuda anunciado para enero de 2010. El motivo de mediano plazo, expuesto por el entonces viceministro de economía Roberto Feletti en el Congreso, era permitir el uso de la partida presupuestaria destinada al pago de deuda a la expansión de gasto público en un contexto de crisis mundial y de estrechez fiscal (La Nación, 6/1/2010).

La emisión del decreto creador del Fondo dio lugar a un nuevo conflicto de poderes. Legisladores de la oposición intimaron a Redrado a desobedecer el decreto, cumplir con su función de custodiar las reservas y proteger el valor de la moneda alegando que la utilización de reservas para cancelar deudas con privados las volvía embargables por los “hold outs”. El Gobierno de la Provincia de San Luis presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ésta acogió rápida y favorablemente, pidiendo al Poder Ejecutivo que justifique la necesidad y urgencia del decreto. En este contexto, Redrado demoró el cumplimiento del decreto pidiendo dictamen sobre su legalidad al área de asuntos jurídicos del BCRA y asesoramiento jurídico al bufete Sullivan & Cromwell de Nueva York. Comenzó, entonces, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, que exigía la renuncia y finalmente la remoción del presidente del BCRA, y Redrado, que se negaba a abandonar su cargo. El sainete incluyó, entre otros hechos, su remoción por incumplimiento de los deberes de funcionario público, su restitución por orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento, denuncias de presiones del Ejecutivo por parte de la jueza, el impedimento de ingreso al BCRA por medio de la policía -luego de que la Justicia delegara la resolución del caso al Ejecutivo y al Congreso-, la renuncia indeclinable de Redrado rechazada por el gobierno y su remoción formal definitiva el 2 de febrero de 2010 por consejo de una comisión legislativa bicameral. Finalmente, el uso de reservas para el pago de deuda a privados se efectivizó mediante un nuevo decreto del 1 de marzo de 2010 que creaba el “Fondo del Desendeudamiento”, ya que el decreto de diciembre se encontraba entrampado judicialmente.

Sin embargo, la relevancia de este conflicto va más allá del uso de reservas para el pago de deuda a privados y del impacto inmediato sobre el presupuesto que ello pudiera tener. Lo realmente importante fue el paso dado en la dirección de subordinar la política monetaria a los objetivos de política económica. En ese sentido, la designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA fue significativa. Marcó del

Pont, antes presidenta del Banco Nación y Diputada por el Frente para la Victoria entre 2005 y 2008, era una economista orgánica al proyecto kirchnerista y desde su asunción al frente del Central coordinó la política monetaria con el Ministerio de Economía. Pero, además, como diputada, Marcó del Pont había impulsado una reforma a la carta orgánica del BCRA que incluyera como objetivos de la autoridad monetaria no sólo el control de la inflación, sino también el sostenimiento del crecimiento y del empleo, como había sido desde 1936 hasta 1992.

En marzo de 2012, finalmente, la carta orgánica del BCRA era modificada. Los objetivos del BCRA alcanzarían ahora “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, pero, más importante aún, aunque se consagraba su autonomía, el cumplimiento de esos objetivos se haría “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”. Se le otorgaban, además, mayores capacidades de regulación del mercado financiero y cambiario y mayor capacidad de financiar al tesoro. En este sentido, las “reservas de libre disponibilidad” eran redefinidas como aquellas que excedieran el nivel de reservas fijado por el directorio. Con ello se derogaban los últimos vestigios del régimen de convertibilidad. La reforma de la carta orgánica del BCRA instituía legalmente la adecuación del funcionamiento del banco a la política económica que, de hecho, se había establecido con la salida de Redrado y el ingreso de Marcó del Pont. Esta subordinación de la política monetaria a una política económica determinada por la lógica política de construcción y reproducción del consenso constituye, en conjunto con el establecimiento de las paritarias (a las que nos referiremos enseguida), el núcleo más “novedoso” de los cambios en la forma de Estado postconvertibilidad.

Los límites a la institucionalización del vínculo Estado-sindicatos

Como señalamos en los artículos precedentes, durante los primeros años del gobierno kirchnerista se unificó la Confederación General del Trabajo (CGT) bajo la conducción de Hugo Moyano -con la sola excepción de la minoritaria CGT Azul y blanca conducida por Luis Barrionuevo-, se restauró el sistema de paritarias libres y el conflicto obrero tendió a canalizarse a través de la lucha salarial, en un marco de alta inflación (pero controlada) y tendencia al aumento del salario real. Esta situación continuó hasta fines de 2011. Incluso la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo una fractura en 2010, incorporando a la coalición oficialista a la CTA conducida por Hugo Yasky, entonces secretario general de CTERA (Docentes), y dejando en la

oposición, en situación de aislamiento, a la CTA conducida por Pablo Micheli (ATE-Estatales).

La unificación de la CGT y la reimplantación de las paritarias no significaron un simple retorno al status quo anterior a los años noventa. Las fuertes transformaciones del capitalismo argentino determinaron cambios sustanciales y perdurables en la situación de la clase obrera y del movimiento sindical.

La dualización del mercado de trabajo transformó el vínculo entre CGT y clase obrera. Aun en un contexto de caída del desempleo y declive del movimiento de trabajadores desocupados, los importantes niveles de empleo en negro, que encontraron su piso en más de un tercio de la fuerza laboral, introdujeron una fractura entre la CGT y las fracciones precarizadas de la clase trabajadora. Este fenómeno, que ha sido denominado por algunos autores como “neocorporativismo segmentado” (Etchemendy y Collier, 2008), no es peculiar de Argentina, pero ha sido puesto en el centro de la atención por la recomposición de la acción sindical post 2003. En un marco de acrecentamiento de la brecha salarial y de condiciones laborales entre asalariados formales e informales –como se mostró en la primera parte de este libro–, la CGT tendió a concentrarse en las demandas de los trabajadores registrados, con una fuerte influencia de los asalariados industriales del sector privado, que tienen un peso entre los afiliados sindicales mayor a su peso en el conjunto de la fuerza de trabajo (Marshall y Perelman, 2013; Murillo, 2013).

Ésto instaura una situación paradójica. La acción de los grandes sindicatos reproduce una fractura entre los trabajadores que, simultáneamente que sostiene un poder sindical acotado, debe necesariamente reproducir la situación de debilidad relativa respecto del período anterior a la reestructuración capitalista de los años noventa. Las capacidades financieras de los grandes sindicatos descansan no sólo sobre los aportes de los afiliados, sino también, en gran medida, de transferencias estatales (subsidios directos), el manejo de las obras sociales, participación en negocios como las ART, etc., todos dependientes de su vínculo funcional con el Estado. A su vez, dicho vínculo con el Estado depende del control de las bases obreras y del monopolio de representación que el propio Estado asegura. Todo ello desincentiva los intentos de articulación por parte de los grandes sindicatos de los intereses de formales e informales. Como señalan Etchemendy y Collier (2008), los “intercambios políticos” del “neocorporativismo segmentado” se han caracterizado por la moderación salarial (en un contexto de aumentos graduales del salario real) a cambio de concesio-

nes a las organizaciones, en lugar de una política social que abarque a los informales y desempleados. Esto significa que el parcial retorno a mecanismos de canalización del conflicto obrero característicos del período de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), e incluso a niveles de movilización sindical no observados desde los años ochenta, se desarrolla en el marco general abierto por la estrategia neoparticipacionista de los años noventa, que responde a ese debilitamiento de largo plazo.²

A pesar de ese debilitamiento relativo, como señalamos antes³, el crecimiento del conflicto sindical opositor de base no tuvo la densidad y el volumen para representar, hasta ahora, un verdadero desafío a las direcciones sindicales. Sin embargo, el aumento de los conflictos intrasindicales y, aunque acotado, el surgimiento y estabilización de comisiones internas opositoras de izquierda en grandes empresas industriales son procesos que habrá que seguir de cerca y analizar hasta qué punto se vinculan con la crisis del viejo modelo sindical.⁴

Dicho debilitamiento relativo de largo plazo también se manifestó en la continuidad de la subordinación del sindicalismo peronista al sector político, legado duradero de la renovación peronista consolidado durante el menemismo (Piva, 2012). Es en ese marco que debe entenderse la disputa del gobierno con el moyanismo. El intento de

² Etchemendy y Collier también señalan que, a diferencia del viejo corporativismo populista (que caracterizan como estatal), los sindicatos han mostrado mayor autonomía. Nuestra opinión es que el sindicalismo en Argentina manifestó, aun en el período 1946-1955, importantes niveles de autonomía comparado con el corporativismo estatal de México o Brasil en la segunda posguerra. Sin ignorar el rol del Estado en la conformación del sistema de relaciones laborales y en la unificación del movimiento obrero en la CGT, ni la acción del Estado contra los intentos de independencia de la jefatura de Perón, su caracterización como “corporativismo estatal” nos parece inadecuada y creemos que subestima el rol del sindicalismo desarrollado en los años treinta en la emergencia y conformación del corporativismo. No permite tampoco entender la vitalidad y perdurabilidad del sindicalismo más allá de la caída de Perón.

³ Ver en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)”.

⁴ Dejamos aquí de lado los debates en torno a la “revitalización” sindical, es decir, sobre las modalidades que asumió la recomposición de la acción sindical en el período postconvertibilidad, ver Senén González y del Bono (2013). Nuestra posición, sin embargo, es que se desarrolló, en lo fundamental, un proceso de recomposición centrado en el sindicalismo tradicional con escasas articulaciones con trabajadores precarizados y con otros sujetos de la protesta, ver Etchemendy y Collier (2008). A su vez, es posible observar un conjunto de prácticas novedosas asociadas a la reemergencia del conflicto sindical en las bases, como señalamos antes (ver en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)”); desde otra perspectiva, ver también Lenguita (2011). Sin embargo, creemos que el concepto de “revitalización”, en sus dos significados principales (Fairbrother, 2008; Frege y Kelly, 2003), resulta limitado para abordarlas y preferimos la noción más amplia de “recomposición de la acción sindical”.

Hugo Moyano de negociar la participación electoral de la CGT en las listas del Frente Para la Victoria (FPV) buscaba devolver al sindicalismo el carácter de rama autónoma del peronismo, en disputa con el sector político por lugares en las listas de candidatos y posiciones en el aparato de Estado. La fractura de la CGT y el alineamiento del grueso del sindicalismo cegetista con la Presidenta significó la continuidad de una lógica en la que, una vez abierta la disputa por la conducción política del peronismo, los distintos agrupamientos y dirigentes sindicales se alinean con unos u otros candidatos, dividiendo fuerzas o repartiéndolas para maximizar el resultado en términos de candidaturas y bancas en el Congreso.⁵ Pero, si bien la fractura de la CGT señaló la perdurabilidad de la subordinación del sindicalismo peronista al sector político, también dio lugar a la fragmentación de la representación sindical, lo que significó una reversión de la unificación bajo el comando de Néstor Kirchner y, luego, de Cristina Fernández.

Dicha fragmentación mostró los límites de la institucionalización de la relación Estado-sindicatos, al dividir la representación sindical según tres clivajes: a) el posicionamiento frente al gobierno, la CGT “oficial” y la CTA “de los trabajadores”, conducidas por Antonio Caló y Hugo Yasky, se enfrentaron a la CGT “Azopardo”, CGT “Azul y Blanca” y CTA “Autónoma”, conducidas por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, respectivamente; b) los alineamientos estratégicos al interior de la CGT, “Gordos” e independientes (CGT “oficial”) y barriornuevistas y moyanistas; y c) el modelo sindical, las CTA en contraposición a las CGT.

Sin embargo, a la hora de explicar diferencias en la orientación de la acción de las centrales sindicales, el posicionamiento frente al gobierno resultó predominante.⁶ El posicionamiento frente al gobierno también explica la polarización de los comportamientos –confrontación/diálogo– en coyunturas de bloqueo gubernamental a las demandas sindicales. La fragmentación y polarización tuvieron su expresión en el llamado a varias huelgas generales y movilizaciones por el sindicalismo opositor, algunas de ellas como las huelgas del 20 de noviembre de 2012 y del 10 de abril de 2014, de fuerte acatamiento.

No obstante, aún en este punto debemos ser cautos. En primer lugar, porque la mayoría de los sindicatos –entre ellos muchos de los más poderosos– permanecieron en la CGT “oficial”. En segundo lugar,

⁵ Un argumento similar, pero referido al análisis de la Juventud Sindical, puede encontrarse en Natalucci (2013).

⁶ Sobre este aspecto volveremos en la tercera parte de este libro cuando analicemos el “neopopulismo” como modalidad de dominación política.

porque paradójicamente se manifestó en las acciones y en los posicionamientos de todas las centrales la existencia de un pliego de demandas unificado y estrechamente ligado a las reivindicaciones del sector obrero registrado, en particular del sector privado, centrado en el impacto del Impuesto a las Ganancias sobre las capas mejor pagas de los asalariados convencionales. La polarización confrontación/diálogo de los comportamientos de las centrales sindicales se produjo, justamente, en coyunturas de agudización de la tensión sindicatos-gobierno en torno al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. En tercer lugar, porque el funcionamiento de las paritarias no resultó alterado en lo fundamental por la fragmentación de la representación. El comportamiento sindical en las paritarias no sólo no presentó grandes divergencias entre los sindicatos pertenecientes a las diferentes centrales y alineamientos, sino que, tanto en 2013 como en 2014, firmaron salarios en promedio inferiores a la inflación e, incluso en 2013, por primera vez desde 2003, debajo de los aumentos alcanzados por los asalariados no registrados [cuadro 12]. Esto en un contexto de estancamiento económico, caída del consumo y aumento de despidos y suspensiones.⁷

El conflicto sindical manifiesta, entonces, los grados más altos de institucionalización en el período. De conjunto, la determinación de salarios en paritarias libres, la subordinación de la política económica a una lógica política de interiorización del conflicto social y la adecuación de la política monetaria a los objetivos de política económica parecen mostrar una tendencia a la reconfiguración de la forma de Estado basada en la transformación de la presión obrera en expansión de la demanda (Negri, 1991). Sin embargo, la normalización del conflicto de los ocupados registrados resulta limitada en un contexto de dualización laboral y persistencia de la desorganización de la acción como clase de vastas porciones de los asalariados⁸. A ello hay que agregar, como señalábamos arriba, que los rasgos novedosos de la forma de Estado desde 2003 tendieron a chocar con fuertes continuidades y a originar importantes desequilibrios.

⁷ Sobre la etapa abierta desde 2011, con la reaparición de la restricción externa, volveremos en la tercera parte de este volumen. Allí trataremos el problema de la inflación y su vínculo con la dinámica política del kirchnerismo.

⁸ La cuestión de la “desorganización de la acción de clase”, que ya mencionamos en este libro en “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)”, será retomada más adelante cuando abordemos el problema de las relaciones de fuerza entre las clases que la forma de Estado tendió a expresar/reproducir en la postconvertibilidad.

*Privatizaciones y subsidios*⁹

Como señala Bonnet (2008), el amplio y profundo proceso de privatizaciones desarrollado en los años noventa significó la apertura a la acumulación capitalista de espacios que antes le estaban total o parcialmente sustraídos. Dicha apertura fue el centro de un proceso de mercantilización de las relaciones sociales, rasgo medular del disciplinamiento neoliberal de la clase obrera y de su forma de Estado.¹⁰ Decíamos arriba, a su vez, que los rasgos novedosos de la forma de Estado postconvertibilidad chocaron con fuertes continuidades. Una de esas continuidades fue la conservación del esquema resultante de las privatizaciones. Ni el gobierno de Duhalde ni los gobiernos kirchneristas llevaron a cabo una política de reestatización de las empresas privatizadas. Pero tampoco se avanzó en una renegociación de los contratos con las concesionarias, aunque la Ley N° 25.561 “de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” –sancionada por la administración duhaldista– lo autorizaba.

El gobierno de Duhalde y ambos gobiernos kirchneristas llevaron adelante una política de control tarifario con largos períodos de congelamiento y ajustes graduales de las tarifas, que, por lo tanto, experimentaron una fuerte caída en términos reales, especialmente para el consumo residencial. A su vez, la desactualización del cuadro tarifario post devaluación, en un contexto inflacionario, fue compensada con un entramado de subsidios y concesiones en términos de obligaciones de inversión y prestación del servicio. Esos subsidios, que tienen un creciente peso en el presupuesto, se han transformado en un importante problema fiscal y manifiestan las exigencias políticas contradictorias a las que se encuentra sujeto el gobierno, a saber, el sostenimiento de lo esencial del proceso privatizador y la imposibilidad de aumentar las tarifas sin minar las bases de su consenso social. La estatización de algunas empresas quebradas (Correo Argentino) o cuyos beneficiarios se estaban retirando (Suez, de Aguas Argentinas) no modificaron sustancialmente este panorama. Las estatizaciones de la vaciada Aerolíneas Argentinas –en el marco de huelgas obreras que demandaban la continuidad de las fuentes de trabajo– y de los ramales ferroviarios –en respuesta a revueltas de usuarios contra el Estado y el funcionamiento de los trenes– constituyeron hechos aislados, que no dieron inicio a una reversión de la reforma menemista del Estado ni

⁹ Esta sección y la siguiente reproducen y amplían algunas conclusiones ya expuestas en Bonnet y Piva (2013). Sin embargo, fueron parcialmente modificadas y su significado general resulta afectado por su inserción en un marco más amplio.

¹⁰ Retomaremos este aspecto en las próximas secciones de este capítulo y cuando analicemos el vínculo entre inflación y dominación política en la última parte de este libro.

rompieron con la lógica de rescate estatal del Correo y Aguas Argentinas. Sí pusieron nuevamente de manifiesto las tensiones entre continuidades y rupturas en la forma de Estado.

Los cambios en el Estado desatados por el fin de la convertibilidad y de la disciplina dineraria, por la necesidad de recomponer la legitimidad del poder político y por la estrategia del gobierno de reconstrucción del consenso, supusieron tensiones para la regulación estatal de las empresas privatizadas que se resolvieron, en mayor medida, mediante concesiones contractuales y subsidios y, aisladamente, mediante estatizaciones/rescate. El impacto de la caída de las inversiones de los concesionarios en la evolución de la productividad de la economía y las presiones por el lado fiscal y sobre la política monetaria provocadas por el aumento de los subsidios contribuyeron, a su vez, a desequilibrios fiscales, tensiones inflacionarias y, en general, a una tendencial y creciente falta de coherencia entre objetivos de política económica, política monetaria e incorporación institucionalizada de demandas populares.

Sin embargo, la reestatización del sistema previsional en 2008¹¹ y, especialmente, la reestatización parcial de YPF en 2012 presentan particularidades que exigen analizarlas separadamente y reconsiderar si no suponen un quiebre en la política del gobierno respecto de las privatizaciones.

La reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) constituyó una medida con consecuencias significativas y que se diferencia claramente de las estatizaciones/rescate de empresas quebradas o abandonadas por los concesionarios o de aquellas que respondieron a fuertes conflictos, como el caso del sistema ferroviario. A diferencia de esas reacciones coyunturales, que no formaban parte de una política de reestatización y que no perseguían romper con la reforma neoliberal del Estado, la reestatización del sistema previsional fue una iniciativa política del gobierno originada en razones de corto plazo pero también inscrita en una estrategia más abarcadora. Aunque el gobierno fundamentó la reestatización, entre otras razones, en una coyuntura de crisis financiera mundial que amenazaba con licuar una parte de los ahorros previsionales invertidos en títulos y acciones, la razón de corto plazo hay que buscarla en el bloqueo de la gran burguesía agraria a la instrumentación de retenciones móviles.

Enfrentado a limitaciones fiscales, la captura de los fondos previsionales permitía al gobierno atacar simultáneamente una causa de déficit –el Estado pagaba jubilaciones, pero no recibía aportes– y desviar

¹¹ La Ley fue sancionada por el Senado el 19 de noviembre de 2008.

hacia el Estado una fuente de financiamiento adicional. Los aportes previsionales eran una fuente de financiamiento del mercado de capitales y parcialmente del Estado, vía compra de títulos públicos hasta el límite en que la ley lo permitía. La estatización de esos recursos permitió desviar ese financiamiento al Estado, supliendo con aumento de la deuda interna con la ANSES la ausencia de financiamiento externo. En la medida en que parte de la presión fiscal procedía del pago de capital e intereses de deuda externa, aumentó la proporción de deuda nominada en pesos sobre el total de deuda, en particular la deuda con la ANSES, y continuó decreciendo el peso de la deuda externa. Subsidiariamente, permitió, por medio de la participación de directores estatales en las empresas de las cuales las AFJP poseían acciones, presionar a esas empresas para que distribuyeran más dividendos, de modo de obtener más recursos.

Sin embargo, decimos que la medida excedía esas razones de corto plazo y se inscribía en una estrategia más abarcadora ya que se incorporaba/subordinaba el financiamiento previsional a la lógica política de reconstrucción y reproducción del consenso. Por un lado, en un contexto signado por la incapacidad del gobierno para aumentar la presión tributaria sobre la gran burguesía, permitía diferir el ajuste de las cuentas públicas. Por otro lado, la estatización permitió financiar el mecanismo de movilidad jubilatoria aprobado el 1 de octubre de 2008, unos días antes de que se anunciara la estatización del sistema previsional, e instrumentar la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), creada por decreto el 29 de octubre de 2009. Estas dos consecuencias, especialmente la creación de la AUH, son particularmente importantes, ya que completan mediante la cobertura social de pasivos, precarizados y desempleados la institucionalización de demandas que ya incluía a los asalariados registrados a través de las paritarias. Se articulaba, de este modo, el financiamiento previsional al dispositivo conformado por paritarias, subordinación de la política económica a los objetivos políticos y adecuación de la política monetaria a los objetivos de política económica.

La estatización parcial de YPF también se diferencia del resto de las estatizaciones –caracterizadas por ser reacciones coyunturales– al ser resultado de una iniciativa política del gobierno que, aunque impulsada por situaciones de corto plazo, se inscribe en una estrategia de más largo plazo que supone ciertos grados de ruptura. Sin duda, la estatización fue impulsada por la reaparición de la restricción externa en 2011.¹² Gran parte del problema de la restricción de divisas se ex-

¹² Hemos hecho referencia a la reaparición de la restricción externa en la primera parte y

plica por el déficit originado en la importación de combustibles. Sin embargo, aunque se persiguiera una moderación del problema en el corto plazo, la apuesta fue a un cambio sustantivo en la política energética a partir de la recuperación del control estatal sobre la petrolera. La decisión fue también potenciada por la existencia de la formación geológica “Vaca Muerta” en el sur del país, que posibilitaría, bajo ciertas condiciones internacionales y técnicas, el autoabastecimiento y la exportación en gran escala de hidrocarburos.

En primer lugar, la estatización parcial implica un giro en la política hidrocarburífera, que revierte en parte la tendencia a la descentralización propia del esquema, dominante en los noventa, de privatización de la actividad y provincialización de la propiedad del recurso (Pérez Roig, 2013). Esa reversión se expresa en la composición del paquete accionario expropiado de YPF (51% del Estado nacional y 49% de las provincias, es decir, 26,01% el Estado Nacional y 24,99% las provincias productoras) y en su carácter indiviso, que impide a las provincias negociar separadamente del Estado nacional con los accionistas privados. Pero el giro fue reforzado por la reforma a la ley de hidrocarburos en 2014, que impuso límites a la autonomía de las provincias para negociar concesiones de los recursos hidrocarburíferos. Los límites abarcan techos a las regalías, límites a la prórroga de las concesiones y la elaboración de un pliego modelo para las licitaciones de aplicación en todas las provincias. Sin embargo, las provincias siguen conservando un fuerte poder de negociación y presión basado en la propiedad sobre los recursos del subsuelo, garantizada por la reforma constitucional de 1994.¹³

En segundo lugar, YPF no deja de ser una sociedad por acciones y está por lo tanto sujeta al imperativo de la obtención de ganancias. Esto es importante porque la estatización parcial no retorna al modelo de la YPF anterior a la privatización sino que, inspirada en el modelo Petrobras, retorna al espíritu de la primera privatización de 1994, la que fue reivindicada por la Presidenta en diversas ocasiones (por ejemplo, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2013). Esto significa que YPF S.A., aun con mayoría accionaria del Estado Nacional, no puede mantener precios artificialmente bajos para subsidiar a la industria o regular la inflación ni puede disponer libremente del excedente con fines redistributivos directos o indirectos.

volveremos sobre ella en la tercera parte de este libro.

¹³ Incluso, los acuerdos entre YPF y otras empresas, según el alcance y las condiciones de los convenios, podrían requerir la refrendación de las provincias, como ocurrió con el caso Chevron. Agradezco a Diego Pérez Roig y a Diego di Risio, quienes me señalaron los límites del giro en la descentralización.

tos (la antigua “función social” de la empresa). La estatización parcial de YPF, entonces, no rompe con el esquema privatizador de los noventa, sino que se inserta en él.

Es visible en la continuidad de las privatizaciones y, particularmente, en la reestatización de YPF, la asimilación ideológica por parte de los gobiernos kirchneristas de la crítica neoliberal al rol del Estado en la ISI, particularmente, a la intervención directa en la acumulación capitalista a través de la producción y comercialización/provisión de bienes. La crítica al neoliberalismo aparece, al modo en que lo veíamos en los economistas “neodesarrollistas” o como se expresa en los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil o del Frente Amplio en Uruguay, como una corrección o moderación, más que como una impugnación, del proceso de mercantilización de las relaciones sociales que señalaba Bonnet (2008) como medular del neoliberalismo. Pero esa continuidad profunda entra en contradicción con la subordinación de la política económica y de la política monetaria al objetivo político de institucionalización de las demandas populares, con la vigencia de paritarias y la necesidad de financiamiento de la expansión de la política social. La forma de Estado, entonces, se torna incoherente, se desorganiza sin reorganizarse. Sin embargo, detrás de continuidades y rupturas hay algo más que opciones ideológicas. Hay relaciones de fuerza que no encuentran mecanismos institucionalizados de desenvolvimiento y estabilización dinámica. Sobre ellas volveremos enseguida, cuando intentemos avanzar en la conceptualización de los cambios en el Estado, antes debemos ver todavía, brevemente, algunas transformaciones más.

Crecimiento del aparato de Estado y ecuación centralización-descentralización

Como planteábamos antes, en los años noventa más que una minimización del Estado se produjo su metamorfosis.¹⁴ En ese sentido, todos los datos muestran una expansión del Estado tanto entre 1991 y 1998 como entre 2002 y la actualidad. Sin embargo, se advierten cambios en su estructura y en la composición del gasto público que señalan las tendencias de transformación de la forma de Estado postconvertibilidad.

En primer lugar, el gasto público total en precios constantes aumentó un 45% entre 1991-2001 y un 192% entre 2002-2009, lo que representó

¹⁴ Ver en este mismo volumen “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)”. Para una crítica a la noción de “Estado mínimo” y a la caracterización de la “metamorfosis del Estado” como “achicamiento del Estado”, ver Bonnet (2008), Piva (2012), Ouviaña (2002) y Oszlak (2003).

4,6 y 14 puntos del PBI respectivamente.¹⁵ Sin embargo, tras la fuerte contracción inicial posterior a la crisis de 2001 (-37,1% en precios constantes entre 2001 y 2002) se produjo una expansión del gasto, acelerada desde 2005, que lo llevó en 2009 a representar un 43,2% del PBI contra el 29,2% de 2002. Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), el gasto público consolidado en 2012 habría alcanzado el 49,4% del PBI (Capello, Grión y Valsagna, 2013). Para tener una idea de la magnitud de la expansión del gasto, basta mencionar que el promedio entre 1991 y 2001 (superior al de los años ochenta) fue del 32,2% del PBI con un pico de 35,6% en 2001. Sin embargo, a la hora de establecer el significado de esos datos debe tenerse en cuenta la evolución de los ingresos del Estado. En este sentido, los recursos tributarios totales aumentaron un 503,6% entre 2002 y 2009, mientras el gasto consolidado en precios corrientes lo hizo un 442,2% pero, mientras durante 2002, 2003 y 2004 los recursos tributarios totales aumentaron más que el gasto consolidado, desde 2005 el gasto público se incrementó sistemáticamente más que los recursos tributarios.¹⁶ Por lo tanto, si el superávit comercial y el fuerte crecimiento del PBI permitieron importantes aumentos de los ingresos tributarios la dinámica de expansión del gasto tendió a minar el superávit fiscal. En 2009, el resultado financiero era por primera vez negativo y, en 2010, sólo existió superávit primario gracias a la asistencia del BCRA.

En este contexto, entonces, resulta central analizar cómo varió la composición del gasto público. Los gastos de funcionamiento (administración, justicia, defensa y seguridad), si bien aumentaron respecto del PBI (1,7 puntos entre 2002-2009 y 0,6 puntos entre 1991-1998), lo hicieron menos que el gasto público total, de modo que pasaron de representar un 19% promedio entre 1991-2001 al 17,6% promedio entre 2002-2009. El gasto público social aumentó fuertemente, pasando a representar un 27,8% del PBI en 2009 respecto del 19,7% de 2002 y del 22,2% de 2001. Sin embargo, dado que aumentó en la misma proporción que el gasto total, su participación en el gasto siguió siendo de alrededor de un 64%, como el promedio de la década pasada. Todos los ítems del gasto social aumentaron como porcentaje del PBI, pero si comparamos la composición del gasto social de 2001 y de 2009 apa-

¹⁵ Todos los datos de gasto público, salvo indicación contraria, tienen como fuente las series de gasto público consolidado en pesos constantes de 2001 y en porcentaje del PBI de la Dirección Nacional de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales del Ministerio de Economía de la Nación. Algunos datos, de la misma fuente, están tomados directamente de Bonnet y Piva (2013). Los datos corresponden a 2009 porque siguen siendo los últimos disponibles.

¹⁶ Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.

recen variaciones significativas, como el aumento del porcentaje de la promoción y la asistencia social (que se explica por el aumento de la proporción del gasto destinado a prestaciones sociales a jubilados y pensionados y a la promoción y asistencia social pública) y la caída de salud y trabajo (esta última explicada por la caída de la proporción destinada a subsidios al desempleo pero también a las asignaciones familiares). Pero el cambio más significativo en la distribución del gasto respecto de los noventa es el aumento del gasto destinado a Servicios Económicos, que incluye los subsidios a los combustibles, la energía y el transporte. La cuenta pasó de representar un promedio del 2,5% del PBI y 7,8% del gasto total entre 1991-2001 a representar un promedio del 3,7% del PBI y 11,5% del gasto total entre 2002-2009. Pero, mientras durante la década pasada los gastos en Servicios Económicos se redujeron, entre 2002-2009 aumentaron un 710% o 4,2 puntos del PBI. El aumento de los subsidios coincide con la fase de aceleración del gasto público desde 2005. Entre 2005 y 2012 aumentaron, en precios corrientes, un 3010% y pasaron de representar del 0,6% al 4,2% del PBI (Capello, Grión y Valsagna, 2013).

El gasto en servicios de deuda pública sigue siendo significativo (pasa de representar un 2,8% del PBI y 8,9% del gasto total entre 1991-2001 a representar un 2,4% del PBI y un 6,8% del gasto total entre 2002-2009), pero se revierte la tendencia al crecimiento que caracterizó a la segunda mitad de la década pasada.

El peso de los subsidios y, en menor medida, de la asistencia social en la expansión del gasto y en la determinación de su dinámica de evolución señalan hacia la tensión observada en la sección anterior entre continuidad de lo esencial del proceso privatizador e incorporación de demandas populares como medio de reconstrucción y producción del consenso.

El aumento del tamaño del aparato de Estado también se verifica al tomar como indicadores el número de dependencias y el empleo público. La administración pública nacional tiene hoy 16 ministerios más la Jefatura de Gabinete, 73 secretarías o dependencias con grado de secretaría y 182 subsecretarías y dependencias del mismo rango dependientes directamente de las secretarías y ministros,¹⁷ lo cual representa un aumento de tamaño respecto del aparato de Estado de los años noventa (Bonnet, 2008; Piva, 2012).

En lo que refiere a empleo público, según el IERAL (en base a datos de la EPH), el empleo público total (incluyendo Nación, Provincias y Municipios) habría aumentado entre 2003 y 2012, en 1,2 millones de

¹⁷ Fuente: Instituto Nacional de la Administración Pública.

personas, un 54,9%, mientras el empleo privado formal habría aumentado en el mismo período un 73,2%. Sin embargo, según la misma fuente (en base a datos del Sistema Integrado de Previsión Argentino), entre 2008 y el primer semestre de 2013, el empleo público habría aumentado un 24% contra el 7,5% del empleo privado registrado (Capello, Grión y Valsagna, 2013).¹⁸ El grueso de este empleo se generó en las provincias y municipios. Sin embargo, no existen datos fiables para calcular la evolución del empleo público total a nivel subnacional. Según datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la planta del sector público provincial (excluyendo CABA, La Pampa y San Luis) entre 2003 y 2011 se habría incrementado en 462.782 personas. Teniendo en cuenta las provincias faltantes, la ausencia de datos para los municipios y que los datos sólo llegan hasta 2011, que dicho aumento represente el 38,6% de todo el empleo público creado entre 2003 y 2012 es indicativo de la magnitud del fenómeno.

En qué medida este crecimiento del aparato de Estado expresa las transformaciones y continuidades en la forma de Estado y la inercia del aparato burocrático es difícil establecerlo con los datos con los que contamos. No tenemos información suficiente para vincular el crecimiento del empleo con dichos fenómenos. Sí es posible ver en el organigrama el desguace del Ministerio de Economía que perdió, respecto de los años noventa, las áreas de transporte, obras y servicios públicos (reunidas mayormente en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), industria, agricultura, ganadería y pesca y turismo. También es posible advertir el silencioso pero importante incremento de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, que cuenta con el mayor número de secretarías y subsecretarías. El fraccionamiento del área económica y el crecimiento del área vinculada a la asistencia social, comandada por Alicia Kirchner, señalan las transformaciones apuntadas anteriormente.

Por último, queda analizar la división del poder entre niveles jurisdiccionales, es decir, observar la evolución de la ecuación centralización/descentralización.¹⁹ En primer lugar, ha persistido la descentralización de los servicios educativos y sanitarios del Estado, lo que constituyó uno de los principales aspectos de la reforma del Estado y que explicó una parte considerable del aumento en los conflictos pro-

¹⁸ Este mayor aumento del empleo público fue parcialmente compensado en términos de gasto con un menor aumento salarial: mientras en el sector privado registrado las remuneraciones totales aumentaron un 193,8% en el mismo período, en el sector público lo hicieron un 162,1% (Capello, Grión y Valsagna, 2013).

¹⁹ Este párrafo sigue lo expuesto en Bonnet y Piva (2013).

vinciales de la primera mitad de la década de los noventa. Lo mismo sucede con la apelación a la Gendarmería Nacional como recurso centralizado de represión en caso de graves conflictos provinciales. Sin embargo, el Estado Nacional en diversos aspectos ha cobrado mayor protagonismo. Desde el análisis del gasto, mientras entre 1991 y 2001 el gasto provincial aumentó un 84% (4,34 puntos del PBI), el gasto público del Gobierno Nacional aumentó un 25% (-0.2% del PBI). Entre 2002 y 2009, por el contrario, el gasto público provincial aumentó un 177% (4,72 puntos del PBI) y el gasto del Gobierno Nacional un 208% (8,41 puntos del PBI). Como hemos visto arriba, ese mayor gasto del Gobierno Nacional se observa en asistencia social y subsidios. Estos cambios van de la mano de un incremento del control centralizado de los recursos tributarios por el aumento de recursos no coparticipables, como los derechos de exportación, y se ha tornado crecientemente relevante, en contextos de estrechez fiscal provincial desde 2009. Dicha modalidad de relación nación/provincias es una continuidad con los años noventa, que ha llevado a Oszlak (2003) a denominar al Estado como “Estado cajero”, pero tiene un significado diferente en la post-convertibilidad en la medida que el Estado Nacional centraliza una asistencia social creciente.

Conceptualizando los cambios en la forma de Estado

Cambios en la estrategia de producción de consenso y tendencias de transformación de la forma de Estado

Anteriormente recuperábamos la representación triangular de la estructura funcional del Estado neoliberal propuesta por Bonnet (2008).²⁰ En el vértice superior, se ubicaba el mecanismo de disciplinamiento dinerario, encarnado en la independencia del BCRA y en el predominio del Ministerio de Economía en el Poder Ejecutivo; en los dos vértices inferiores la asistencia social focalizada (descentralizada) y la represión selectiva (centralizada), orientadas a aquellos grupos marginalizados de la disciplina dineraria. Una primera manera de aproximarnos a la conceptualización de los cambios en la forma de Estado es preguntarnos qué ha quedado de ese triángulo. Y la respuesta es que casi nada.

El mecanismo de disciplinamiento dinerario fue herido de muerte con la caída de la convertibilidad y la estructura institucional que lo soportaba fue gradualmente desarticulada a lo largo de la década pos-

²⁰ Ver “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)” en este mismo volumen.

terior. Fragmentación y subordinación de las funciones económicas del Estado al área política, subordinación del BCRA a los objetivos de política económica.

La asistencia social, inicialmente focalizada, se fue primero centralizando en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta tendencia se había insinuado en la segunda mitad de los años noventa, en la medida en que se desarrollaron los Planes Trabajar como respuesta a los cortes y puebladas en distintos lugares del país, pero se desarrolló plenamente en el gobierno de Duhalde con la cuasi universalización de la asistencia social que significaron los planes Jefes y Jefas de Hogar. Los primeros años del kirchnerismo desandaron parcialmente el camino al reemplazar gradualmente los “planes jefes y jefas” por una multiplicidad de programas focalizados, pero manteniendo el manejo centralizado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, la introducción de la AUH en 2009 modificó radicalmente el esquema con la cobertura universal de precarizados y desempleados, quedando los programas focalizados y cooperativas de trabajo como instrumento dirigido al núcleo duro de los desempleados, los definidos como “inempleables”.

En cuanto a la represión de la protesta, como vimos, desde 2003 ocupó un lugar secundario como respuesta al conflicto social.²¹

Este conjunto de transformaciones es síntoma del desplazamiento desde una hegemonía sustentada en la acción de mecanismos coercitivos productores de consenso negativo –la que hemos denominado “hegemonía débil”– a una estrategia de reconstrucción/reproducción de consenso basada en la satisfacción gradual de demandas. Dicha tendencia de transformación de la forma de Estado se visualiza en un conjunto de dispositivos institucionales y de articulaciones entre secciones del aparato de Estado que hemos denominado como “rasgos novedosos” respecto de los años noventa.

En el centro se encuentra la subordinación de la política económica a los objetivos políticos de reconstrucción/reproducción de consenso y la subordinación/adecuación de la política monetaria a los objetivos de política económica. Ésto se ha traducido institucionalmente en la fragmentación de las funciones económicas del Estado, antes reunidas en el Ministerio de Economía –y en el nombramiento de ministros sin vuelo propio, estrechamente subordinados a la Presidencia y con una alta rotación desde la renuncia de Roberto Lavagna en 2005.²²

²¹ Ver “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” en este libro.

²² Desde la renuncia de Lavagna se sucedieron: Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lous-

También en la reforma de la carta orgánica del BCRA, que institucionalizó la pérdida de autonomía y el enmarcamiento de su acción por la política económica, y, a partir del desplazamiento de Redrado, en el nombramiento de presidentes de dicho banco claramente alineados/subordinados a la Presidencia de la Nación.²³

En la base se encuentran los mecanismos institucionalizados de interiorización de las demandas populares. La determinación de los salarios en negociaciones paritarias institucionalizó y normalizó el conflicto salarial de los trabajadores registrados. La asistencia social centralizada a través de la AUH, más la ampliación de la cobertura previsional y la asistencia social focalizada en el núcleo duro del desempleo, tendió a institucionalizar las demandas de los precarizados y desempleados. De este modo, la articulación de los mecanismos de incorporación de demandas –“neocorporativismo segmentado” más asistencia social centralizada– traduce institucionalmente la dualización de la fuerza de trabajo. En términos del aparato de Estado, ello se ha expresado en el aumento del peso y el tamaño del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social. También, en el hecho de que los titulares de ambas carteras, Carlos Tomada y Alicia Kirchner²⁴, fueron los de mayor continuidad en el organigrama del Poder Ejecutivo.

La independencia del BCRA en los años noventa significó la sustracción de la política monetaria a la lucha de clases y fue la representación institucional más cabal de la articulación de la dominación política en torno al disciplinamiento de los trabajadores por la vía de la restricción monetaria y de la extensión e intensificación de la competencia. Durante dicho período, la forma de Estado materializó institucionalmente el consenso negativo en torno a la estabilidad económica –que denominamos “hegemonía débil”– que suponía la represión²⁵ de las demandas obreras y populares, y cuya mayor expresión fue el cepo de facto a los aumentos salariales. La inversión de la relación economía-política al interior del Estado durante la postconvertibilidad significó, por el contrario, la “repolitización” de la intervención del Estado en el sentido antes mencionado²⁶, en tanto las decisiones

teau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.

²³ Son los casos de Mercedes Marcó del Pont y de su sucesor, Alejandro Vanoli.

²⁴ Ambos se desempeñan desde el inicio del mandato de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003. En el caso de Alicia Kirchner, con una interrupción entre el 10 de diciembre de 2005 y el 14 de agosto de 2006, cuando se desempeñó como senadora nacional por Santa Cruz.

²⁵ El término “represión” es utilizado aquí en su significado más general, como contener, refrenar u oprimir, y no remite sólo al sentido estrecho de reprimir por la vía del uso de la violencia material del Estado.

²⁶ Ver en este mismo libro “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)”.

políticas se presentan como el resultado de conflictos y cambios en las relaciones de fuerzas sociales. De conjunto, los dispositivos institucionales y la relación entre secciones del aparato de Estado recién presentados apuntan a una canalización institucional del conflicto obrero y popular, por medio de la traducción de la presión obrera y popular en expansión de la demanda (Negri, 1991). Sin embargo, lejos de que este núcleo institucional se haya transformado en el centro de una reorganización del aparato de Estado que permitiera articular una nueva hegemonía, el resultado parece más bien haber sido un proceso de desorganización sin reorganización. La profundización de esta línea de transformación del Estado parece amplificar incoherencias de funcionamiento y generar desequilibrios. Algo nos aproximamos a esta cuestión al analizar la coexistencia de estas líneas de transformación con la continuidad del legado privatizador. Avancemos ahora un poco más en esos límites a la reorganización del Estado.

*Dualización de la fuerza laboral
y expansión de los dispositivos de mediación política clientelar*

Empecemos por el dispositivo estatal de institucionalización de las demandas. Las limitaciones que la dualización de la fuerza de trabajo impone a la traducción sindical de las demandas obreras ya han sido señaladas. Este hecho es un legado perdurable de la reestructuración capitalista de los noventa, que modifica radicalmente la posición de los sindicatos en relación al Estado y al peronismo y que debilita de conjunto a los trabajadores. Pero, además, la heterogeneización del mundo obrero y el empobrecimiento y fragmentación de los trabajadores precarios impone obstáculos a la institucionalización de las demandas de esos grupos de asalariados a través de la asistencia social del Estado. El proceso de territorialización del encuadramiento político de estos grupos es de larga data. Cobró impulso durante los años ochenta pero se desplegó en los noventa con el aumento del desempleo, del empleo en negro y un proceso que puede definirse como de empobrecimiento e individualización de importantes franjas de asalariados. Junto con dicha territorialización se desplegaron los dispositivos clientelares de mediación política. Tampoco eran nuevos, pero sí su rol en el marco de la expansión de la territorialización de la incorporación política y de la dualización, empobrecimiento e individualización de los trabajadores. Más adelante, al final de la tercera parte, analizaremos el lugar de la mediación política clientelar en la modalidad de dominación política y algunas de sus características.

Aquí nos interesa su carácter cuasi estatal y, por lo tanto, los desafíos que comporta para el análisis de la forma de Estado.

Los mecanismos de mediación política clientelar tienen su condición de posibilidad en el déficit de institucionalización de las demandas de las fracciones precarizadas y más empobrecidas de los trabajadores en un marco de individualización de sus comportamientos políticos. Los dispositivos clientelares se organizan como redes locales de “solución de problemas” ligadas a partidos políticos, en particular el Partido Justicialista, pero sólo son posibles por el vínculo de esos partidos con el Estado.²⁷ En ese sentido, aunque articulados con el Estado, se diferencian y mantienen con él relaciones complejas. El clientelismo tiene una base fundamental de existencia en el desvío de recursos estatales.²⁸ El significado de ese desvío, sin embargo, puede variar según el carácter de la relación entre el dispositivo clientelar y el Estado. Puede desarrollarse una relación de “parasitismo”, en la medida que recursos que debieran circular desde el Estado hacia la población objeto de la asistencia social, según criterios legal-burocráticos, son ilegalmente desviados al dispositivo clientelar. Puede desarrollarse, también, una relación de “competencia”. La centralización de la asistencia social puede producir relaciones de “competencia” entre niveles subnacionales, como provincias o municipios, cuando atienden demandas por medio de la activación de dispositivos clientelares y el Estado nacional que las provee a través de mecanismos legal-burocráticos. Pueden ser también “complementarias”, en la medida que los dispositivos clientelares permiten incorporar políticamente demandas difíciles de integrar por mecanismos legal-burocráticos.²⁹

Pero, en cualquier caso, el clientelismo surge en los límites de la institucionalización de demandas y, por su propia naturaleza, es disolvente de la distinción Estado-sociedad civil.

En primer lugar, en oposición al Estado, *locus* de universalidad, tiene un carácter particular. Los dispositivos clientelares son parte de entramados políticos locales y, si bien cumplen funciones de estabilización de la dominación política, su objetivo central es construir y reproducir lealtades políticas con jefes y aparatos políticos locales. Este objetivo

²⁷ Para una conceptualización del clientelismo a partir de un estudio de caso, ver Auyero (2001). Para un análisis de la creciente importancia del clientelismo para la reproducción del Partido Justicialista, ver Levitsky (2005).

²⁸ Aunque la relación con el Estado puede servir también para atraer recursos del sector privado.

²⁹ La “sensibilidad para el caso” propia de una relación personalizada contrasta con la actividad “niveladora” del mecanismo legal-burocrático y resulta más adecuada para la política de “solución de problemas” característica de los “sectores populares” (Piva 2012b).

particular, y su potencial contradicción con las funciones del Estado, se pone especialmente de manifiesto en momentos de agudización de tensiones políticas cuando pueden tornarse abiertamente disfuncionales para el mantenimiento del orden público.

En segundo lugar, tiene un carácter público, ya que es parte estructural y estructurante del régimen político, y no es estatal aunque depende del vínculo con el Estado. De allí su carácter cuasi estatal. Pero, justamente, ese carácter señala el borramiento de los límites entre Estado y sociedad civil.

En tercer lugar, ambos rasgos agudizan su potencial tensión con las funciones y reproducción del Estado en la medida en que las redes clientelares cristalizan y condensan. Cuando eso ocurre, crecen las tendencias a su autonomización. Es decir, aunque su fin sigue siendo construir y reproducir lealtades políticas, dicho fin se transforma en un medio de autorreproducción y adquieren cierta “neutralidad”. Pueden “servir” a distintos “jefes” y cotizar mejor cuanto más amplio sea el territorio controlado y de manera más eficaz. La dependencia de los recursos del Estado pone un límite a este proceso, pero en la medida en que las redes clientelares se articulan con el delito ganan en autonomía, penetran y disuelven al Estado.³⁰

Si el sistema de relaciones laborales encuentra un límite para la traducción de demandas de los asalariados en la dualización de la fuerza laboral, la asistencia social centralizada encuentra un límite en la expansión de los dispositivos clientelares. Una parte de ese límite tiene que ver con los propios efectos de la dualización, empobrecimiento e individualización para la canalización institucional de las demandas de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, lo cual otorga al clientelismo su funcionalidad. Otra parte, con los límites burocráticos y fiscales del Estado para desplegar una política social reintegradora de las tendencias desintegradoras desatadas por la acumulación capitalista. Pero también el límite está en la contradicción de los principios que organizan ambos procesos de mediación política, que los tornan potencialmente antagónicos en coyunturas críticas y que vuelve, más allá de cierto punto, la expansión de uno u otro un juego de suma cero. De modo que, la fórmula del dispositivo estatal de institucionalización de demandas no puede expresarse como <“neocorporativismo segmentado” + asistencia social centralizada + dispositivos clientelares>, ya que los dos últimos son sólo parcialmente complementarios

³⁰ Por razones de espacio, aquí no podemos desarrollar este importante aspecto. Para un análisis de caso del entramado entre clientelismo, delito y policías provinciales, ver Auvero (2007; 2013).

y tienden a producir incoherencias y desorganización mutua en sus funcionamientos.

Incorporación de demandas, repolitización y conflicto de poderes

Decíamos antes que, en el centro de las transformaciones en la forma de Estado postconvertibilidad, está la inversión de la relación entre “economía” y “política” en su interior. Dicha inversión condujo a una “repolitización” de la intervención del Estado, en el sentido de que las decisiones políticas se presentan como el resultado de conflictos y cambios en las relaciones de fuerzas sociales. Pero uno de los resultados de esa “repolitización” es una paradójica continuidad con los años noventa: la tendencia al desplazamiento de poder desde el Legislativo al Ejecutivo y la consecuente profundización del presidencialismo.

La “hegemonía débil” se apoyaba en la renuncia de amplias capas de la población a perseguir sus demandas sectoriales, para preservar la “estabilidad económica” o no perder el empleo, y se reproducía en la estructura del Estado a través del apoyo pasivo –convalidación de facto de los DNU– o la cesión explícita de facultades al Ejecutivo por parte de los legisladores. A su vez, el proceso de reestructuración capitalista tuvo como condición una activa, acelerada y profunda intervención del Estado que requirió de la “liberación” del Poder Ejecutivo de las trabas que imponían la división y control de poderes.

Durante la postconvertibilidad, la incorporación política de demandas obreras y populares, aun limitada como lo fue, se desarrolló –como es usual en el “capitalismo tardío”³¹– por fuera de los mecanismos de la democracia representativa. Se abrieron paso a través de la acción sindical, mediadas por el sistema de relaciones laborales, a través de la presión popular en las calles y por medio de los dispositivos clientelares. Ello requería también una mayor autonomía del Poder Ejecutivo de los tiempos y la agenda legislativa y de los controles de constitucionalidad del Poder Judicial. Pero durante los años noventa, la mayor autonomía del Poder Ejecutivo respecto de los controles constitucionales era compensada por su sujeción a la convertibilidad monetaria y la intensificación y extensión de la competencia exterior e interior. Esto es, por su estrecha subordinación a la lógica del capital que le dio la fortaleza para disciplinar al trabajo y a los capitales individuales. Du-

³¹ Utilizamos la expresión “Capitalismo tardío”, a falta de otra mejor, para referir a los capitalismos desde la posguerra de Europa occidental, América del Norte y América Latina. La expresión no significa mucho más que eso y se encuentra teóricamente vaciada, consideremos sino los diversos significados que tiene, por ejemplo, entre frankfurtianos de izquierda y derecha o en Ernest Mandel.

rante la postconvertibilidad, “liberado” de las ataduras de la convertibilidad y en un contexto económico internacional que dio mayores grados de libertad a los Estados periféricos³², el Poder Ejecutivo ganó márgenes de maniobra para intervenir redistribuyendo costos y beneficios entre fracciones del capital y de la clase obrera. Pero, entonces, quedó también más expuesto a procesos de deslegitimación y a cuestionamientos de fracciones de la clase dominante que vieron, cada vez más, en esos márgenes de maniobra una amenaza a la estabilidad de las condiciones de la acumulación de capital. No es la intención volver a exponer lo dicho antes³³, sólo queremos referir aquí a los efectos desorganizadores de la acción estatal que tuvo el conflicto de poderes.

En primer término, el rechazo del arbitraje estatal por parte del conjunto de la burguesía agraria y su exitosa identificación con el rechazo del estilo político del gobierno por parte de las “clases medias” determinó efectivamente un estrechamiento de los márgenes políticos de maniobra, que se verifica en la reducción de DNU post 2008 y en un mayor protagonismo del Congreso. Sin embargo, la relación entre Congreso y Ejecutivo tuvo los vaivenes del consenso en torno al gobierno. Se fortaleció el Congreso de la mano de la oposición después del conflicto con las patronales del campo y, especialmente, del debilitamiento electoral oficialista en 2009; se recuperó el Poder Ejecutivo a medida que la oposición sólo mostró capacidad de bloqueo y que creció nuevamente el apoyo al gobierno de la mano de la recuperación económica. La constante fue, sin embargo, el conflicto de poderes que resultó en algunos casos en el bloqueo de iniciativas del gobierno y, en otros, en prolongadas disputas que obligaron a postergar las decisiones o que dañaron la legitimidad pública de las medidas.

En segundo término, el Poder Judicial tuvo una mayor independencia. Ello fue resultado, por un lado, de las movilizaciones de 2001 y de los primeros años de la postconvertibilidad contra la Corte Suprema menemista. El gobierno de Néstor Kirchner consiguió un fuerte apoyo popular al renovar esa composición de la CSJN, modificar los procedimientos públicos de nombramiento de sus integrantes y conformar una Corte que, efectivamente, no podía calificarse como adicta. Por otro lado, de la tendencia que manifestó el Poder Judicial, y la propia Corte, de acompañar con su acción frente al gobierno los vaivenes del conflicto con el Congreso y del apoyo electoral al oficialismo.³⁴ En ese

³² Ver en este mismo libro “Los límites económicos de una lógica política”.

³³ Ver en este volumen “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)”.

³⁴ Hemos expuesto esta hipótesis en Bonnet y Piva (2013) donde recuperamos la tesis de la “defección estratégica” de las cortes supremas (Helmke, 2003) cuando se producen pér-

sentido, la relación con el Poder Judicial y con la CSJN atravesó momentos de fuerte conflictividad, acrecentada por la tendencia a la judicialización de los conflictos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.³⁵

A diferencia del período menemista, en el cual el Poder Ejecutivo consiguió subordinar al Poder Legislativo y controlar el Poder Judicial, logrando con ello la autonomía necesaria para implementar el programa de reformas neoliberales, durante la postconvertibilidad, el conflicto de poderes limitó los mayores márgenes de maniobra del gobierno, sometió al Poder Ejecutivo a procesos de deslegitimación y creó un clima de perpetua inestabilidad política a través de crisis de mayor o menor relevancia entre los tres poderes y bloqueos recurrentes.

“Keynesianismo trunco”:

los límites de la acumulación de capital a la canalización de la presión obrera y popular

Como señalamos anteriormente, el centro de las tendencias a la transformación del Estado durante la postconvertibilidad apunta a una canalización institucional del conflicto obrero y popular por medio de la traducción de la presión obrera y popular en expansión de la demanda. El éxito de una estrategia de este tipo requiere de la compatibilización del proceso de satisfacción de demandas populares con las condiciones para el desarrollo de la acumulación de capital. Entre 2003 y 2007 se dieron dos condiciones que facilitaron dicha compatibilización.

En primer lugar, una fuerte expansión económica –analizada en la primera parte de este libro– que, sustentada en factores internos como externos, tuvo características inusuales para la historia del capitalismo argentino: altas tasas de crecimiento con superávit comercial y fiscal.

En segundo lugar, aún en contextos de recomposición sindical y de fuerte movilización social, las demandas fueron moderadas, dado que tendieron a alinearse con lo enunciado como tolerable por el gobierno. Esta afirmación alcanza a trabajadores ocupados, desocupados y a ahorristas, que convalidaron con su desmovilización una cierta pérdida en sus ahorros. Pero, más importante, aún es que la movilización disruptiva (encarnada por “piqueteros” duros, “asambleístas”,

didas de consenso de los gobiernos o se vislumbran cambios políticos. Debo ese aporte a Alberto Bonnet.

³⁵ La larga judicialización de la ley de medios, la declaración de inconstitucionalidad de aspectos sustanciales de la reforma judicial ensayada por el gobierno en respuesta a los desafíos del Poder Judicial, el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, incluido el vicepresidente Amado Boudou, son sólo algunos ejemplos entre los más importantes.

“ahorristas estafados”, etc.) tendió a decrecer al ritmo que aumentaba la conflictividad sindical en el marco de las paritarias y el peso de los movimientos sociales oficialistas que profundizaban su articulación con el Estado. El resultado fue que bastó para recomponer el consenso y ciertos grados de “normalización” del conflicto social una estrategia gradualista de respuesta a las demandas, es decir, no se produjo ningún “shock redistributivo”.

Sin embargo, hacia el final de ese primer período, la aceleración de la inflación señaló las primeras tensiones entre acumulación de capital y canalización de demandas. Más allá de 2008, la inflación se estabilizó en niveles superiores al 20% y reaparecieron el déficit fiscal y la restricción externa. Las tensiones entre el sostenimiento de tarifas cuasi congeladas y el impacto desequilibrante de los subsidios son parte de este fenómeno.

En la primera parte, nos aproximamos a este problema a partir del análisis de los límites que la acumulación impuso a la lógica política de satisfacción gradual de demandas y del “desfase” entre acumulación de capital y política económica.³⁶ Aquí reaparece bajo la forma del impacto de esa tensión en el dispositivo estatal de institucionalización de demandas. En la medida en que los intentos de traducir la presión obrera y popular en expansión de la demanda originan inflación y desequilibrios en el desenvolvimiento de la acumulación, se originan nuevos (y agravan los ya existentes) problemas de coherencia en el aparato de Estado. La acción del Ministerio de Trabajo en la regulación de las paritarias obliga a corregir las metas de política económica y a revisar el programa monetario del BCRA. A su vez, los efectos de estas revisiones sobre la dinámica económica acentúan desequilibrios que reabren conflictos sindicales y reducen la eficacia de los programas sociales, lo que produce nuevas presiones presupuestarias. En la medida en que la agudización de desequilibrios afecta las propias capacidades institucionales del Estado, tanto por el debilitamiento fiscal como por la creciente incoherencia entre las diferentes secciones del aparato estatal, crecen las presiones para producir un ajuste que implica, al menos, reprimir demandas³⁷. Sin embargo, la agudización de las tensiones con los sindicatos y la amenaza de desborde social (recreada por el dispositivo clientelar) desatan procesos de pérdida de consenso y de deslegitimación de las políticas de ajuste que conducen bien a posponerlas o bien a una aplicación gradual que las esteriliza. El re-

³⁶ Ver en este volumen “Los límites económicos de una lógica política” y “Política económica y modo de acumulación en la postconvertibilidad”.

³⁷ Ver nota 25.

sultado es un “keynesianismo trunco”, el fracaso de los mecanismos de canalización institucional de la contradicción capital/trabajo y su sustitución por otro de desplazamiento hacia el futuro del desenlace cuya figura central es la inflación. El precio del desplazamiento es la creciente incoherencia e ineficacia de la acción estatal y la agudización de desequilibrios, en el extremo –un escenario todavía lejano– la desorganización de la acción del Estado y de la economía, característicos de las hiperinflaciones. En la tercera parte, el estudio del modo de dominación política nos llevará al análisis del neopopulismo, de la dinámica de desplazamiento del antagonismo capital/trabajo que lo caracteriza y de la inflación como su fenómeno más peculiar y articulador de economía y política. Todavía nos resta profundizar en una distinción que sugerimos en los dos artículos precedentes, la que hicimos entre consenso no institucionalizado y hegemonía, la cual podrá ser mejor comprendida a la luz de la distinción entre canalización y desplazamiento.

Hegemonía vs. Consenso no institucionalizado = Canalización vs. Desplazamiento

En los artículos precedentes, conceptualizamos la hegemonía como un modo histórico de la lucha de clases que se caracteriza por dos atributos principales. En primer lugar, por la capacidad de la burguesía para presentar las condiciones de su reproducción particular como condiciones de la reproducción del conjunto social. En segundo lugar, dicha capacidad o potencialidad hegemónica, sólo se realiza a través de “formas de Estado” determinadas. En este sentido, en el núcleo de la construcción de una hegemonía se halla la estabilización de mecanismos de canalización de las contradicciones sociales mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos rutinizados que permitan traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas del régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones (Piva 2009; 2012).³⁸ En esta definición no basta la existencia de consenso para que exista hegemonía, es central la dimensión de la institucionalización de ese consenso, su articulación estatal. A partir de esa conceptualización, concluíamos

³⁸ Este es el núcleo de lo que hemos llamado el concepto “fuerte” de hegemonía, rastreable en la obra de Gramsci. En general, y como se puede ver en nuestra caracterización de los años noventa como hegemonía, el énfasis de nuestra aproximación está puesto en la institucionalización del consenso. En oposición al concepto “fuerte” es que hemos hablado de una hegemonía “débil” durante ese período. Es decir, que “hegemonía débil” no refiere a la debilidad de la dominación sino al uso del concepto. Específicamente, al predominio de mecanismos de producción de “consenso negativo” sobre el otorgamiento de concesiones y satisfacción de demandas (Piva 2009; 2012).

que la recomposición del consenso y del poder de Estado con posterioridad a 2003 no había dado lugar a una nueva hegemonía. Con el fin de evitar falsas discusiones y de que se comprenda mejor el problema que da lugar al desarrollo que presentamos en la última parte del libro conviene precisar el sentido de esta afirmación.

En principio, ella no quiere significar que sólo haya hegemonía cuando absolutamente todos los conflictos se encuentren institucionalizados, cosa que desde ya es prácticamente imposible y representaría un cierre perfecto de la dominación. Decir que en la postconvertibilidad no se constituyó una hegemonía tampoco significa afirmar que exista un cuestionamiento masivo por parte de los trabajadores al sistema capitalista. Esta segunda aclaración reviste importancia porque para cierto uso establecido del término sólo existe una crisis de hegemonía cuando la clase obrera busca terminar con el régimen capitalista o, al menos, existe un creciente cuestionamiento a la dominación de clase. Este uso del término iguala *crisis revolucionaria*, *crisis orgánica* y *crisis de hegemonía*. Si se pretendiera reservar el uso del término hegemonía para referir a toda situación en la que existe una aceptación masiva (aunque sea de hecho) de los pilares del régimen capitalista (propiedad privada de los medios de producción, libertad de compra y venta de la fuerza de trabajo, etc.) y se equiparara tal aceptación masiva con la vigencia de la dirección ética de la clase dominante, deberíamos afirmar que no ha existido crisis de hegemonía en 2001 y que el kirchnerismo ha representado una variedad de hegemonía. Si, por el contrario, consideramos que la hegemonía es una forma histórica de dominación de clase en el capitalismo y que han existido y existen formas de dominación política, algunas de gran estabilidad, que no pueden caracterizarse como tales, pueden existir crisis de hegemonía en las que no esté en cuestión concretamente la continuidad del capitalismo y tiene sentido preguntarse si una nueva dominación puede caracterizarse como hegemónica.³⁹ Por otra parte, más allá de que, entendemos, Gramsci no consideraba toda estabilización de la dominación capitalista, ni la mera inexistencia de cuestionamientos serios al régimen, como suficientes para hablar de hegemonía⁴⁰, creemos, y

³⁹ Es decir, puede existir una crisis de dominación aunque no exista una alternativa anti-capitalista ni un cuestionamiento serio al capitalismo. Y no se trata necesariamente de un evento menor, una crisis orgánica (en el sentido de una crisis del conjunto de las relaciones sociales capitalistas) en ausencia de una alternativa anticapitalista puede abrir largos períodos de irresolución y de disolución social. La articulación de una alternativa anticapitalista en contextos de crisis orgánica es lo que Gramsci denomina crisis revolucionaria (Gramsci, 1998; Piva, 2009; 2012).

⁴⁰ Para Gramsci, la "hegemonía" es una categoría aplicable a procesos de dominación y lucha de clases sólo a las sociedades capitalistas centrales desde el último cuarto del si-

este es el punto central de la discusión, relevante la distinción. Es relevante porque permite diferenciar dinámicas de dominación y lucha de clases que son claves para interpretar acontecimientos, desarrollos políticos, modalidades de crisis, etc. El análisis de procesos concretos exige categorías concretas.⁴¹

Para acotar la discusión, que tiene sin duda muchas aristas, voy a ceñirme a la distinción entre “canalización” y “desplazamiento” de la contradicción capital/trabajo que es central en la distinción que aquí se hace. La noción de canalización, tal como aquí la introducimos, refiere, en principio, al modo en que Marx trata la mecanización del proceso de trabajo en tanto respuesta de los capitalistas a la lucha obrera por aumentos de salario (Marx, 1998). Dicha respuesta equivale a transformar el antagonismo obrero en motor del desarrollo capitalista. Y, por medio de ella, la producción de plusvalor relativo permite compatibilizar aumento de salarios y aumento del plusvalor.⁴² Gramsci tiene presente este mecanismo a la hora de evaluar el pasaje a la hegemonía como modalidad de la dominación y la lucha de clases en el último cuarto del siglo XIX y, en particular, al analizar el fordismo. Antonio Negri (1991), inspirado en Gramsci en este punto, caracteriza al keynesianismo como una estrategia centrada en la transformación del antagonismo obrero en expansión de la demanda efectiva.

La noción de canalización refiere entonces a la transformación de la presión obrera en parte de un dispositivo de expansión de la producción y del empleo. En ese sentido, es que se produce una “interiorización” del antagonismo obrero en la dinámica de desarrollo capitalista. Dicha “canalización” no se produce, sin embargo, de manera anárquica. A diferencia de la mecanización, que es producto de la competencia entre capitales, la integración del desafío del movimiento obrero organizado en un mecanismo expansivo requiere la rutinización de las demandas obreras a través de instituciones estatales que brinden márgenes de previsibilidad al conflicto. La imprevisibilidad y la imposibilidad de cálculo que resulta de la ausencia de dichos mecanismos genera incertidumbre, lo que puede afectar la magnitud, los plazos y

glo XIX, ya que sitúa como punto de inflexión en la dinámica de dominación y lucha la “Comuna de París” de 1871. Es importante destacar que las periodizaciones y la aplicación del término son para Gramsci dependientes de la historia de cada formación social (Piva, 2009; 2012).

⁴¹ La exigencia leninista de “análisis concreto de situaciones concretas” como condición de cualquier caracterización política que permita el pasaje a la acción, no puede terminar en la constatación del carácter capitalista de la sociedad, del carácter burgués de un Estado y de la condición subordinada de la clase obrera. Aunque sí no empieza por allí, quien sabe dónde termina.

⁴² Marx, sin embargo, no se concentra en esta consecuencia de la mecanización.

las modalidades de la acumulación de capital. La valoración de una dominación como hegemonía depende, entonces, del grado de éxito en la “estatalización”, es decir, en la rutinización, de los procesos de canalización de las contradicciones sociales.⁴³

El desplazamiento de la contradicción supone, por el contrario, la dificultad o la imposibilidad de su asimilación. El mecanismo de dominio, entonces, aplaza hacia el futuro una resolución que aparece como catastrófica, ya que representa la apertura de la crisis, o bien la desplaza hacia conflictos alejados de su centro, produciendo polarizaciones no clasistas.⁴⁴ Como señalábamos antes, el aplazamiento no es gratuito. El caso típico de desplazamiento de la contradicción es el del crédito. El crédito difiere una situación de crisis al futuro, pero en la medida que aplaza la resolución la magnitud del problema tiende a aumentar y a afectar más y más áreas de la reproducción económica de la sociedad. En ese sentido, Holloway (1994) se equivoca cuando pone en el centro del análisis del keynesianismo la expansión del crédito, en particular, la expansión de dinero fiduciario y su vínculo con la inflación. El centro del mecanismo keynesiano es la canalización de la contradicción capital/trabajo por medio de permanentes aumentos de productividad que impiden la caída de la tasa de ganancia (Aglietta, 1979).

La “interiorización” del antagonismo, sin embargo, nunca es plena. En este sentido, existe siempre cierto grado de desplazamiento cuyo precio era, en Europa y EEUU de posguerra, una inflación moderada. Si fuera posible una aproximación cuantitativa a la magnitud del desplazamiento, la comparación entre una inflación anual que difícilmente superaba el 6% en los países centrales durante los “años dorados” y una inflación anual promedio del 25% en Argentina durante la misma época puede brindarla. En la medida en que el conflicto obrero resulta más difícil de “canalizar”, la inflación es más alta y la desorganización de la economía y de la acción del Estado es mayor.

⁴³ Por ello, aunque no podemos desarrollarlo aquí, resulta esencial para el análisis de la forma de Estado y, en particular, de la hegemonía una comprensión más acabada de la burocracia (Piva 2012b).

⁴⁴ En este sentido, la concepción de hegemonía de Laclau y Mouffe (2004) y, en particular, la de populismo (Laclau, 2010), formalizan modos de dominación política no hegemónicos o caracterizados por la imposibilidad de “canalización” institucional de las contradicciones sociales. Su dinámica se aproxima a la que Gramsci (1998) denomina como “revolución permanente” y que considera no hegemónica o pre hegemónica, reteniendo la concepción de Marx y Engels (1974) en la “circular de 1850” más que la de Trotsky (1988).

El déficit de institucionalización del consenso durante la postconvertibilidad y las relaciones de fuerza entre las clases

La oposición canalización/desplazamiento no es, sin embargo, una cuestión económica. Como señalábamos arriba, detrás de la tensión entre continuidades y rupturas, y detrás de los rasgos de desorganización y falta de coherencia en el funcionamiento del aparato de Estado, hay relaciones de fuerza que no encuentran mecanismos institucionalizados de desenvolvimiento y estabilización dinámica.

Sobre el final del artículo precedente enumerábamos cuatro indicadores de la ausencia de hegemonía en la postconvertibilidad:

1. La apelación generalizada a la acción directa, no institucionalmente mediada, y en muchos de los casos, especialmente en manifestaciones no obreras, directamente antiinstitucional;
2. El rasgo antipolítico –o de rechazo de la política– de las protestas, como síntoma de una incompleta resolución de la crisis de representación;
3. La tendencia al apoyo y apelación a la acción directa y antiinstitucional por parte de la oposición parlamentaria en 2007 y 2008;
4. La persistencia de la crisis del sistema de partidos que obstaculizó la traducción política electoral de la oposición al kirchnerismo. A su vez, la inexistencia de un eje articulador del sistema de partidos –centro derecha/centro izquierda; populismo/institucionalismo, etc.– impidió cualquier representación que permitiera una lectura, una dotación de sentido, de esa oposición.⁴⁵

Durante los años noventa, las fuerzas políticas mayoritarias adhirieron a la convertibilidad y suscribieron al corazón de las reformas neoliberales. Ello significó un acuerdo tácito en torno a los dispositivos institucionales de producción de consenso que dieron marco a la lucha política en el período. Por el contrario, concluíamos antes, todos los indicadores enumerados señalan la existencia durante la postconvertibilidad de una disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de canalización del conflicto social que constituyen el núcleo de una hegemonía. La convertibilidad cristalizaba una relación de fuerzas entre las clases. Su quiebre, por la rebelión popular de 2001, significó la alteración de esa relación de fuerzas, pero no su condensación en dispositivos institucionales que permitieran su estabilización dinámica, su traducción como “voluntad general” a través de una sucesión de equilibrios inestables, al decir de Gramsci (1998).

⁴⁵ Ver en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)”.

La explicación de ello se encuentra en el carácter paradójico de la alteración en la relación de fuerzas entre las clases, su combinación de continuidades y rupturas.

Si, por un lado, la rebelión de 2001 puso un límite a la ofensiva del capital por la vía deflacionaria, por otro lado, ésta alcanzó su fin por la vía inflacionaria. Si, por un lado, la rebelión exigió al régimen político responder al desafío popular recuperando demandas de los grupos sociales movilizados, por otro lado, la resolución de la crisis a través de una devaluación brutal con caída salarial y aumento del empleo en negro puso límites a esa respuesta. Si, por un lado, la devaluación forzó cambios en la estrategia de acumulación, éstos se desarrollaron en el marco de continuidades estructurales profundas.

Como señalábamos en la primera parte de este libro, si bien se produjeron modificaciones en las relaciones de fuerza, en su interior no puede hablarse de un cambio del “bloque en el poder” y es visible la persistencia de una fuerte unidad entre las distintas fracciones de la burguesía en torno a los rasgos centrales del modo de acumulación desarrollado a partir de 1989 y cuyas fuertes continuidades ya analizamos.

Algo similar puede decirse de la situación de los trabajadores. Durante los años noventa, la tendencia a la caída de la conflictividad obrera, la fragmentación y la segmentación según fracciones mostraron un escenario de *desorganización de la acción de los asalariados como clase*. Esta desorganización de los asalariados como clase es el indicador más exacto de la ofensiva del capital contra el trabajo y de la alteración de las relaciones de fuerza entre las clases. Si en tanto relación social objetiva se asiste durante los noventa a un proceso de constitución creciente de las relaciones entre individuos como relaciones entre clases, es decir, a un aumento del número de obreros como clase económica, simultáneamente, se desarrolla un proceso de desorganización de clase en términos subjetivos.⁴⁶ *El aumento del espacio social ocupado por las personificaciones individuales del trabajo es correlativo a la disminución de la densidad y el volumen ocupado por las organizaciones obreras en el espacio de las luchas sociales.*⁴⁷

En líneas generales, puede verse en la recomposición del conflicto sindical post 2003 una reversión del proceso de desorganización de la

⁴⁶ Sobre la profundización del proceso de proletarización y de aumento del número de asalariados entre 1989 y 2001, ver Donaire y Rosati (2012). Un análisis propio en Piva (2011; 2012).

⁴⁷ En la tercera y última parte desarrollaremos este aspecto central de las transformaciones durante la década de los noventa. Ver en este libro “¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001”.

acción de clase de los trabajadores. Sin embargo, esta reversión es parcial y enfrenta varios límites.

En primer lugar, el peso del conflicto sindical se demuestra inferior al que tenía en los años ochenta cuando se intenta avanzar en periodizaciones más o menos generales de los ciclos de lucha y, mucho más, a la hora de establecer periodizaciones del ciclo político. El principal evento de conflicto social desde 2001 fue, sin duda, el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y la burguesía agraria en la primera mitad de 2008, siendo el papel de la clase obrera en ese conflicto bastante deslucido. Siendo, como lo fue, la CGT uno de los principales apoyos del gobierno, la movilización de los trabajadores cedió el estrellato a la de los “sectores medios” de la ciudad y del campo; el centro de la escena lo ocuparon el gobierno y la fracción agraria de la burguesía, con el trasfondo de una sorda (y poco clara) disputa interburguesa. Desde el punto de vista cuantitativo, cualquier medida (cortes de ruta, movilizaciones, número de manifestantes) refleja ese predominio. Más allá de 2009, el masivo paro general del 20 de noviembre de 2012 enrojece frente al “cacerolazo” del 8 de Noviembre (8N).

En segundo lugar, la reducción cuantitativa de las luchas de desocupados no tendió a homogeneizar el conflicto obrero. Por un lado, como observamos, se evidencia en términos estructurales una mayor dualización de la fuerza laboral entre formales y precarios. Por otro lado, los movimientos de desocupados no desaparecieron, pero en muchos casos mutaron y tendieron a adquirir un carácter más territorial.

De conjunto, por lo tanto, si bien se ha producido una cierta recomposición de la clase obrera, ésta no rompió con el largo período de debilidad relativa inaugurado por la derrota de 1989.

Sin embargo, afirmar que no se constituyó una nueva hegemonía no significa ignorar la recomposición del consenso y del poder de Estado que se desarrolló desde 2003. En todo caso, abre la pregunta sobre las características que asumió la reconstrucción de la dominación política. La distinción entre canalización institucional y desplazamiento de la contradicción capital/trabajo que señaláramos arriba nos da una clave para encontrar la respuesta y, en la última parte de este libro, veremos cómo se vincula con la modalidad neopopulista de dominación política.

III

EL MODO DE DOMINACIÓN POLÍTICA

¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001¹

Introducción

Durante la última década, un conjunto de gobiernos latinoamericanos, constituidos a partir de procesos de movilización social contra el Estado neoliberal de los años noventa, han hecho resurgir el interés por el populismo. Estos gobiernos recompusieron el poder político estatal y las condiciones para la acumulación de capital sobre el fundamento de la incorporación de demandas y de la inclusión política de parte de los movimientos sociales protagonistas de los procesos de movilización social. En el plano teórico, la aparición de *La razón populista* de Ernesto Laclau devolvió actualidad a una vieja pregunta: ¿qué es el populismo?

En este trabajo nos aproximamos al problema de la relación entre “neopopulismo”, término con el que denominamos la reemergencia de gobiernos y movimientos que se reivindican nacional populares, y “populismo” en el caso argentino, a través del análisis de la relación entre kirchnerismo y primer peronismo. En la medida que se trata de una primera aproximación, partiremos de un balance de la tradición clásica de estudios sobre el primer peronismo para intentar establecer en qué medida los problemas, categorías y análisis históricos que la caracterizan permiten conceptualizar y comprender el proceso de re-

¹ Artículo escrito en la segunda mitad de 2012 y publicado originalmente en el número 21 de la revista *Trabajo y sociedad* en el invierno de 2013.

composición del poder político durante el período kirchnerista.² Dada la variedad y cantidad de los aportes al debate clásico sobre el populismo latinoamericano y el peronismo, sólo expondremos más extensamente aquellos que resultan especialmente relevantes para nuestro desarrollo posterior; ello explica la desigualdad en la exposición de los diversos autores. Por otra parte, aun cuando dichos autores son de sobra conocidos, se nos excusará, entonces, por la exposición extensa de sus posiciones, en la necesidad de hacer explícitos los problemas, categorías y análisis históricos que retomamos para el estudio del kirchnerismo.

El misterio del populismo y la doble anomalía del peronismo

Muchos intentos de definir al populismo han fracasado a lo largo de seis décadas. Ha contribuido a ello la multiplicidad de gobiernos, regímenes, partidos y movimientos denominados como “populistas”. También sigue siendo un obstáculo cierta aceptación acrítica en el campo académico de un término cuyo uso cotidiano tiene una connotación negativa y que tuvo y tiene su correlato en una asociación demasiado rápida de populismo y autoritarismo.³

Laclau hizo de la indefinición del populismo el punto de partida de su análisis (2010). Su conceptualización, como una lógica política formal de constitución de identidades populares, señala la vacuidad del concepto de “pueblo” como una condición del proceso mismo de constitución de sujetos. Desde esa perspectiva, el populismo se especificaría por un énfasis en la lógica equivalencial, común a toda política, cuyo resultado más significativo sería la división dicotómica de la sociedad en dos campos antagónicos, uno de los cuales –el “pueblo”– se reivindica como la totalidad. Dicha representación del populismo extiende su ámbito de validez a una amplia gama de fenómenos que incluyen desde el maoísmo hasta el nazismo, pasando por el peronismo y ciertas formas de neoconservadurismo. A pesar de ello, hay un elemento que es central a esta definición y que nos interesa retener: el populismo supone la absorción de demandas democráticas a través de su articulación en una cadena equivalencial, esto es, su transforma-

² La “tradición clásica”, tal como la entendemos aquí, incluye tanto a la estrictamente clásica (el trabajo de Germani y el conjunto de análisis inspirados por él) como a las entonces denominadas “tesis revisionistas” (que cuestionaron el papel de la distinción entre obreros nuevos y viejos), siendo cerrada por el trabajo de Juan Carlos Torre. Creemos que todos ellos comparten un nudo de problemas que difiere radicalmente de aquellos que están en el centro de la mirada de Laclau y de las aproximaciones postestructuralistas o postfundamentalistas en general.

³ Un ejemplo de ello en Bartra (2007).

ción en demandas populares. Ello supone la inscripción de demandas insatisfechas en un orden político que, por medio de su oposición a un orden excluyente, se reivindica universal. Sin embargo, el carácter puramente formal del concepto excluye cualquier referencia a grupos sociales presupuestos al proceso de constitución de identidades populares.

En otro lugar hemos señalado los límites de la pretensión de Laclau de expurgar cualquier resto de determinación material de los procesos de constitución de sujetos (Piva, 2011), aquí basta con plantear que, en la explicación de los populismos latinoamericanos, difícilmente pueda prescindirse de alguna caracterización de los grupos sociales cuyas demandas resultan políticamente incorporadas, lo que es especialmente cierto en el caso del peronismo. El modo de interpelación del sujeto político, la división dicotómica de un campo social fracturado internamente por su antagonismo, etc., serán, sin embargo, recuperados en el análisis del modo de incorporación política, aun cuando allí no puede encontrarse la especificidad de los populismos latinoamericanos. Dicha tarea exige una recuperación de la tradición clásica de análisis del populismo latinoamericano. Aquí, aunque nos referiremos al fenómeno general, nos detendremos en el caso del peronismo.

El estudio clásico de Germani (1977; 1977b; 2003) se inscribió en las denominadas teorías de la modernización.⁴ Lo determinante en dicho análisis era el desfase entre la intensa movilización social, provocada por el pasaje acelerado de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, y la capacidad de integración de las instituciones políticas. Lo que habría faltado en el proceso de modernización latinoamericano es la correspondencia entre la movilización gradual de porciones crecientes de la población y la aparición de múltiples mecanismos de integración. Desde otras perspectivas, el populismo, con importantes diferencias y no siempre representando su problema central, aparece como un fenómeno de alianza de clases que incluye de modo subordinado a la clase obrera (Cardoso y Faletto, 1992; O'Donnell, 1972, 1996; Murmis y Portantiero, 1984; Portantiero 1973, 1977). Como substrato de dicha alianza, subrayan el vínculo entre populismo y políticas orientadas a la industrialización y a la expansión del mercado interno centrada en el crecimiento del consumo. Carlos Vilas hace de la orientación hacia un modo de acumulación basado en la expansión del consumo interno el rasgo definitorio del populismo latinoamericano (Vilas, 1988), aun-

⁴ Esta corriente incluye otros autores también importantes como Di Tella (1977) y Stein (1980). Aquí, nos concentramos en Germani por la importancia de su trabajo y porque brindó el marco teórico fundamental para el abordaje del populismo latinoamericano en clave funcionalista.

que en un trabajo posterior subraya la afirmación de que esta constituye el fundamento de una incorporación política de las clases populares (Vilas, 1994). Por último, y sin pretender agotar la variada producción sobre el tema, Touraine (1987) prefirió hablar de “políticas nacional populares” para referir al populismo latinoamericano. El populismo abarcaría, según Touraine, todas las formas antielitistas de control del cambio social y las políticas nacional-populares en Latinoamérica se especificarían por la articulación de tres temas: la independencia nacional, la integración política y la participación popular.

El trabajo de Touraine es particularmente interesante para nuestro objetivo, porque señala un conjunto de características de dichas políticas nacional-populares que permitirán, más adelante, contrastar aspectos del neopopulismo kirchnerista respecto del populismo peronista, tal como fue representado por la tradición clásica. Permítase-nos, entonces, dedicarle algo más de atención que a los otros autores mencionados.

La cuestión central, según Touraine, en torno a la que se anudan los temas que caracterizan a esas políticas, es la incorporación de fuerzas y demandas sociales al proyecto nacional del Estado. Sin embargo, la heterogeneidad de sus componentes tiene importantes consecuencias para los movimientos, partidos y Estados definidos como nacional-populares.

En primer término, los populismos no pueden mantener la unidad de sus componentes fuera de la intervención personal y permanente del líder. Ésto los vuelve inestables y con tendencia a la descomposición. En segundo término, a la heterogeneidad de sus bases sociales se agrega la dualidad propia de políticas que, al mismo tiempo, se plantean como cuestionadoras de la dominación social y tienen como objetivo la integración nacional en los marcos del desarrollo capitalista. Ello conduce a una dualidad entre fines –caracterizados por la expresividad, el voluntarismo y la ausencia de programas y estrategias definidos– y medios absolutamente flexibles. En tercer término, las políticas nacional-populares se caracterizan por producir una fuerte dualización social entre el sujeto popular y un enemigo impersonal y todo poderoso, indispensable para la unidad interna de componentes heterogéneos que determinan la vaguedad ideológica de dichas políticas. El discurso populista tiende a oponer “pueblo” y “anti pueblo”; “patria” y “anti patria”, etc. En cuarto término, las políticas económicas basadas en la expansión del consumo interno tienden a reducir la capacidad de inversión, lo que dificulta la compatibilización entre los objetivos opuestos de legitimación de las fuerzas que dirigen el creci-

miento y de cuestionamiento de la dominación social. En quinto término, se caracterizan por una confusión permanente entre reforma y revolución que tiene dos fuentes: por un lado, la referida dualidad de objetivos, a saber, el cuestionamiento de la dominación social y la integración nacional en los marcos del desarrollo capitalista; por otro lado, una concepción instrumental del Estado que es, al mismo tiempo que potencial instrumento de liberación, instrumento de opresión en manos de la oligarquía, etc. En sexto lugar, los sujetos de las políticas nacional-populares no son sujetos clasistas sino síntesis o mixturas de diversos niveles y orientaciones sociales, síntesis constituidas a un nivel específicamente político. Los movimientos o partidos nacional-populares pueden tener un contenido de clase pero no son formas clasistas. En séptimo lugar, el modo de incorporación política de sujetos populares de las políticas nacional-populares se caracteriza por una lógica de la participación en oposición a una lógica de la representación.

Fuera de la amplia diversidad de enfoques, un aspecto destaca en todos ellos: *los populismos latinoamericanos como modos de la incorporación política de fuerzas y demandas populares previamente excluidas, en contextos de transformaciones sociales aceleradas y de lo que podemos denominar "crisis de hegemonía"*.

Pero, ya para Germani, el peronismo aparecía como un "caso anómalo" de populismo. Es decir, el peronismo participaba de un doble desvío: el desvío del tipo de modernización de América Latina, respecto del camino seguido por el mundo desarrollado, y el desvío respecto del tipo latinoamericano. Esta última anomalía se basaba en dos diferencias fundamentales. En primer lugar, en Argentina el proceso de movilización abarcaba ya a la totalidad de la población, a diferencia de otros casos latinoamericanos donde porciones considerables de la comunidad nacional se encontraban aun fuera de los procesos políticos.⁵ En segundo lugar, el actor que se encontraba movilizado y que demandaba su incorporación política era la clase obrera. Esta segunda anomalía era la que más desafiaba los esquemas de la teoría de la modernización y los patrones funcionalistas de comprensión del comportamiento político de los trabajadores.

Desde esta perspectiva, en su adhesión al peronismo, el comportamiento obrero resultaba irracional. La división entre obreros viejos y obreros nuevos permitía, a la vez que comprender la anomalía, otorgar cierta racionalidad, al menos parcial, a la acción de los trabajadores en contraste con las clases medias europeas que adhirieron al

⁵ En términos de Germani, ésto planteaba en Argentina el problema de la construcción de una democracia representativa de participación total.

fascismo. Permitía comprender la anomalía que significaba su incorporación política por vía autoritaria en la medida que el desvío, y con él una cierta dosis de irracionalidad, podía ser atribuido a la anomia creada en el mundo popular por el paso acelerado del mundo tradicional/rural al urbano/ industrial en condiciones de exclusión política y de debilidad de los sindicatos para incorporarlos. Permitía atribuir cierta dosis de racionalidad a su acción, en la medida en que el reconocimiento político de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales y la mayor participación en sus lugares de trabajo formaban parte de sus “intereses reales”.

Desde fines de los años sesenta, varios trabajos cuestionaron el rol de la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos en los orígenes del peronismo (Kenworthy, 1973; 1975; Smith, 1972; 1974; Halperin Donghi, 1975).⁶ En este sentido, es harto conocida la crítica de Murmis y Portantiero (1984). Ella se fundó en el papel jugado por las viejas direcciones sindicales y en la común experiencia de exclusión y acumulación de demandas insatisfechas de ambos grupos de trabajadores durante la década previa.⁷

Juan Carlos Torre avanzó en una nueva síntesis al incorporar a los avances en la comprensión de los orígenes del peronismo que significó el trabajo de Murmis y Portantiero, la dimensión de la incorporación política presente en Germani (Torre, 1989; 1990). La emergencia del peronismo sería la de un movimiento social mixto, en el que coexisten tanto la dimensión de la modernización y la integración política, como las relaciones de clase y los conflictos en el campo del trabajo. Se produjo en un contexto en el cual la industrialización era un proceso avanzado y en el que la emergencia de los conflictos de clase chocaba con un orden conservador que reforzaba el despotismo tradicional en los lugares de trabajo. Simultáneamente, las demandas de participación de obreros viejos y nuevos, que crecían al ritmo de la expansión de la ocupación urbana y de su integración en el mercado de trabajo, chocaban con un orden político excluyente. El golpe militar de junio de 1943 y la política del entonces coronel Perón, aun yendo más allá de lo inicialmente planeado, removieron los obstáculos institucionales a la constitución de la acción de los trabajadores como clase y desató un proceso de movilización social que combinó las demandas propia-

⁶ Aquí recuperamos el trabajo de Murmis y Portantiero por su centralidad en el debate posterior.

⁷ Ello suponía dotar de racionalidad a la adhesión de los trabajadores al peronismo. Sobre el nexo histórico entre la maduración de ciertas tendencias en el movimiento obrero y la emergencia del peronismo, ver los ya clásico trabajos de Hugo del Campo (1983) y Hiroshi Matsushita (1983).

mente laborales con demandas de participación. Ello opone al sujeto constituido con la emergencia del peronismo –cuya homogeneidad, consistencia como clase y grado de organización le dieron una fuerza propia que le permitió subsistir al derrocamiento del régimen peronista en 1955– a los de otras experiencias populistas latinoamericanas mucho más heterogéneos y, por lo tanto, dependientes de la existencia de un agente externo que les otorgara unidad (ya sea un líder, un movimiento o el Estado).

Más allá de ciertas diferencias, algunas de las cuales se harán evidentes en nuestro análisis posterior, el trabajo de Torre tiene varios puntos fuertes que lo transforman en un sólido punto de partida para nuestro problema y del que podemos –a través de un análisis crítico– extraer una serie de conclusiones.

En primer lugar, pone de manifiesto el carácter central del peronismo: la incorporación política de los trabajadores que es, simultáneamente, su constitución como clase a nivel político.⁸ En la medida en que su participación política se realiza mediante la asunción de una identidad común peronista, ambos fenómenos son inseparables. En ese sentido, si bien la separación que hace Torre entre lucha de clases y demanda de participación parece reproducir una separación entre lo económico –nivel exclusivo de la confrontación clasista– y lo político –problema de la ciudadanía–, aun allí se esconde un elemento valioso para comprender el fenómeno peronista.

Efectivamente, el proceso de formación de clase durante los 30 o 40 años anteriores a la emergencia del peronismo, pero en particular durante el acelerado proceso de concentración y crecimiento numérico de los trabajadores de los años treinta, había encontrado un límite en la constitución de las luchas a nivel económico. Al mismo tiempo, los trabajadores eran impulsados más allá del nivel exclusivamente económico corporativo. El límite impuesto a la actividad propiamente sindical empujaba el conflicto a nivel político, como en la huelga general de la construcción de 1936. A su vez, el orden político adoptaba, con la marcha del proceso de industrialización, un carácter cada vez más marcado de exclusión de la masa de los trabajadores, es decir, un carácter marcadamente clasista. Entonces, la intervención externa del golpe militar liberó las barreras que se oponían a la unificación política de los trabajadores como clase.

⁸ Consideramos que otros aspectos, como el de una política industrializadora y el de una orientación mercado internista de esa industria, si bien son importantes en las definiciones del primer peronismo, no resultan determinantes de la oposición peronismo/antiperonismo. Véase, por ejemplo, el papel del “estructuralismo económico” en los gobiernos con posterioridad a 1955.

En ese sentido, la intervención externa supuso tanto una continuidad como una ruptura. Por un lado, la continuidad de un proceso de formación de clase, en tanto la que resulta incorporada en términos histórico-concretos es la clase obrera, que, hasta cierto punto, debe ser presupuesta a la emergencia del peronismo. Por otro lado, la ruptura que implica la supresión de las barreras a su constitución como sujeto a nivel político, mediante su participación subordinada en un movimiento de carácter popular. Sin embargo, su incorporación como clase obrera le da simultáneamente al peronismo un carácter policlasista y no “no clasista” como el de otros movimientos nacional-populares.

También resulta necesario recuperar la dimensión nacional del peronismo.⁹ La “nacionalización” de la clase obrera, su constitución como clase “nacional” y la identidad pueblo-nación, es un elemento central de la conformación de la ideología peronista. Es lo que le permitió “desplazar” permanentemente el antagonismo latente en sus orígenes policlasistas a la oposición pueblo/oligarquía como equivalente de patria/antipatria. Éste es el significado último del vínculo establecido por Germani entre antielitismo y nacionalismo.

Sin embargo, todos estos trabajos subestimaron el rol de otros modos de intermediación política, ya sea los preexistentes al peronismo o bien los novedosos. Trabajos más recientes han destacado el papel de los mecanismos “clientelares” en la incorporación política de los “sectores populares”, los que se han puesto especialmente de manifiesto con los procesos de “desproletarización subjetiva” a los que nos referiremos enseguida (Merklen, 2010; Auyero, 2001; Palermo y Novaro, 1996; Levitsky, 2005). Como fueron subestimadas, también, las organizaciones de base territorial. Ambos tuvieron un papel subordinado en el peronismo clásico de base sindical, pero serían crecientemente importantes desde 1983, cuando el peronismo accediera al ejercicio continuo del poder estatal del que fuera excluido entre 1955 y 1983, con excepción del corto interregno 1973-1976.

Las marcas del populismo como condición del neopopulismo

Los problemas que enfrentamos a la hora de analizar los gobiernos y regímenes surgidos del ciclo de rebeliones contra el neoliberalismo en Sudamérica, precedidos de transformaciones aceleradas de las estructuras sociales y de los Estados nacionales, nos acercan mucho más

⁹ Torre cuestiona el uso del término “nacional-popular”, más afín a casos en los cuales la urbanización “excede” a la industrialización, dando lugar a una masa popular heterogénea. Alternativamente, prefiere denominar al peronismo como “popular obrero”.

a las preguntas que se hiciera Gino Germani que a las que debieron responder sus críticos.

Esto no significa recaer en enfoques evolucionistas ni en juicios a priori sobre la naturaleza autoritaria de los populismos. Pero la cuestión central del abordaje de Gino Germani, la relación entre movilización social e integración política, parece estar nuevamente en el centro de los problemas a resolver.

Retomemos las conclusiones del apartado anterior. El núcleo del fenómeno populista en América Latina es la incorporación política de grupos sociales movilizados y políticamente excluidos, en contextos de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. Lo específico del peronismo fue que ese proceso de incorporación política fue el de la clase obrera sindicalmente organizada. Su unificación política como clase fue parte de un fenómeno más general: incorporación y unificación política son procesos simultáneos en todos los movimientos, partidos y Estados nacional-populares del periodo clásico. Es decir, que el proceso de incorporación política de sujetos populares clasistas o no clasistas, según el caso abordado, en la medida en que supuso su propia constitución como tales, no pudo sino que dejar marcas en sus modos de pensar, sentir y actuar; como en el modo de sus respuestas ante nuevos fenómenos de crisis y en el modo de sus propias crisis. En nuestro caso, el modo de incorporación política de los trabajadores bajo el peronismo dejaría su marca en las prácticas y en las orientaciones de clase.

Por otra parte, dicho modo de incorporación política reflejó la crisis de hegemonía. La incorporación política populista de las “masas disponibles”, en el lenguaje de Germani, no fue su institucionalización, sino, por el contrario, la manifestación política de su imposibilidad. Esto se reflejó, en el análisis del peronismo clásico y de la dinámica de la lucha de clases en Argentina hasta 1976, en conceptos como “empate hegemónico” (Portantiero, 1973; 1977) o como “alianza de clases defensiva” (O’Donnell, 1996). Ambos daban cuenta de un “exceso” de movilización respecto de la capacidad de internalización de las contradicciones sociales del régimen político. La “división dicotómica del campo social” y el desplazamiento del antagonismo interno del movimiento nacional-popular hacia una oposición patria/antipatria es también parte de este fenómeno. Volveremos sobre este punto en el análisis del kirchnerismo, en particular respecto de la cuestión de la hegemonía.

Mobilización y desmovilización

En términos de Germani, la movilización social es definida como “el ‘exceso’ (en grado, alcance o forma) de la participación de un grupo en relación con el nivel considerado normal por la vieja sociedad” (Germani, 2003: 50). Es decir, Germani intenta captar en su tipicidad un proceso de activación social y política de amplios grupos sociales respecto de una determinada capacidad de integración institucional. Sin embargo, el término “exceso” supone que la relación entre movilización social e integración política debe ser vista en términos relativos. En este sentido, y aunque exceda los límites de su definición, la reducción de las capacidades institucionales del Estado y del sistema político para incorporar demandas democráticas (para utilizar el término de Laclau) puede producir el mismo efecto en relación a un nivel de participación dada. Esta relación de carácter “casi físico”, para tomar la expresión de Torre (1989: 536), sólo se torna productiva en términos explicativos cuando se capta el nexo interno entre ambos fenómenos aparentemente exteriores.

Para ello, es útil profundizar en la concepción de Germani de “movilización”, la cual difiere del uso habitual que la reduce a su manifestación externa: el conflicto y la protesta.

La noción de “movilización” aquí referirá a la movilización política, algo que usualmente, como en el párrafo que sigue, hace el mismo Germani.¹⁰

En un viejo trabajo, Germani decía:

“movilización” corresponde al proceso psico sociológico, en cuyo transcurso grupos hundidos en la ‘pasividad’ del *pattern* tradicional (predominio de la *acción prescriptiva*, a causa del cumplimiento de normas interiorizadas) adquieren cierta capacidad de comportamiento deliberativo; alcanzan unos grados de aspiración diferentes de los fijados en el *pattern* antiguo y, por consiguiente, manifiestan cierta actividad en el terreno político. En lo sucesivo, estos grupos intervienen en la vida nacional y su intervención puede manifestarse en formas muy diversas: movimientos espontáneos de protesta, explosiones abiertamente revolucionarias, movimientos religiosos, actividades políticas dentro de los partidos, participación en las elecciones, etc. (Germani, 1977b: 20-21).

¹⁰ Germani parece referir por momentos a la movilización sin expresión política como a una movilización “coartada en su fin”: “Ha sido reconocido por largo tiempo, tanto por políticos como por científicos políticos, que un grupo movilizado o en movilización puede ser neutralizado o desviado de su expresión política directa por medio de la provisión de salidas alternativas” (Germani, 2003: 60).

En el mismo texto, el autor señala otros usos del concepto de “movilización social”, que buscan aclarar su sentido, tales como “aumento de la comunicación” según Deutsch o “una capacidad de identificación” según Lerner (Germani, 1977b: 20). Es decir, los cambios en los patrones sociales de comportamiento individual (paso de la acción prescriptiva a la acción electiva) aparecen como indisociables de un proceso de agregación colectiva. Yendo probablemente más allá de Germani, afirmaremos que el proceso de “movilización” es simultáneamente un proceso de formación de un sujeto colectivo.¹¹

Los años treinta en Argentina no dejan dudas respecto de qué sujeto: la clase obrera. Pero ¿qué es lo que ocurre en los años noventa? Todos los estudios sobre la evolución y las características de conflictos y protestas en la Argentina del período, más allá de sus diferencias, muestran un proceso de “desmovilización” de la clase obrera. Insistimos, no se trata aquí de fluctuaciones coyunturales en la cantidad de conflictos y protestas. Se trata de un proceso de “desmovilización” que refiere a lo que en otro lugar denominamos un proceso de desorganización de clase y de desproletarización subjetiva (Piva, 2011). La “movilización” y la “desmovilización”, en este sentido, no son fenómenos que le ocurren a un sujeto que les subsiste, son procesos de organización y desorganización, de formación y disolución de sujetos colectivos.

Desde esta perspectiva, el proceso de formación de clase no es algo que sucede de una vez y para siempre, sino que se produce y se reproduce, entra en crisis, se vuelve a producir... o no. Tampoco ambos procesos presuponen un vínculo mecánico entre factores “económico-demográficos” y fenómenos “socio-políticos”. Los años noventa en Argentina, lejos de ciertas imágenes recurrentes, fueron años de una profunda proletarización en términos objetivos, tanto en números absolutos como en términos relativos (Donaire y Rosati, 2009; Piva, 2011). La “desmovilización” de la clase obrera argentina en los años noventa fue la otra cara de la ofensiva neoliberal del capital contra el trabajo.

¹¹ Este vínculo entre “movilización” y constitución de sujetos políticos fue señalado por Germán Pérez, quien, además, ve en la “invasión de roles”, propia de los procesos de “movilización” tal como los conceptualiza Germani, su rasgo específicamente político: la subversión de una estructura de distribución del poder preexistente (Pérez, 2007).

Una década de transformaciones aceleradas¹²

El neoliberalismo, más allá de sus especificidades en diferentes países y regiones, fue, ante todo, una ofensiva radical del capital contra el trabajo. De modo general, las políticas neoliberales buscaron reconstituir la rentabilidad empresaria y, por lo tanto, la inversión y el crecimiento económico a través de un ataque a los salarios y a las condiciones de trabajo del conjunto de los asalariados. Su rasgo específico fue el disciplinamiento de los trabajadores por medio de la combinación de políticas monetarias restrictivas, reducción o contención del gasto público, desregulación de los mercados y apertura externa comercial y financiera. Este paquete de políticas provocó un aumento de la presión competitiva sobre los capitales individuales que, para sobrevivir, debieron reorganizar sus procesos de trabajo; incorporar nuevas tecnologías; bajar costos laborales; extender e intensificar las jornadas de trabajo; y despedir trabajadores. A su vez, la implementación de las nuevas políticas exigía una transformación del Estado y sus funciones.

En Argentina, la transición hacia políticas de corte neoliberal se inició con la dictadura militar en 1976 y su pleno desarrollo a partir de julio de 1989 transformó profundamente el capitalismo argentino. Aquí nos interesa señalar dos aspectos de dicha transformación.¹³

El proceso de reestructuración capitalista, en primer lugar, condujo desde un modo de acumulación fundado en la relativa separación del espacio nacional de valor respecto del mercado mundial y desde una orientación predominantemente mercado internista del sector industrial hacia un nuevo modo de acumulación centrado en la exportación de productos industriales, agroindustriales y agropecuarios de bajo valor agregado, con un ritmo de acumulación dependiente de la inversión extranjera directa y de los flujos internacionales de capital dinero. Su resultado fue una creciente interpenetración del capital nacional y extranjero y una tendencia a la internacionalización de la propiedad del capital local.

En segundo lugar, dicha transformación se desarrolló sobre la base de una profunda alteración de las relaciones de fuerza entre las clases consolidada por las nuevas condiciones económico-políticas. La creación de una sólida unidad al interior de la clase dominante en torno al

¹² Este párrafo reproduce aspectos desarrollados en la primera y la segunda parte. A pesar de ello no lo hemos suprimido para no interrumpir el desarrollo de la argumentación que dificultaría la comprensión del texto [agregado al artículo original].

¹³ Para un análisis de la modalidad y de los alcances de la reestructuración del capital y del Estado en la Argentina entre 1989 y 2001, ver Bonnet (2008) y Piva (2012).

nuevo modo de acumulación –que incluyó a la gran burguesía industrial y agraria– supuso la derrota de las fracciones mercado internistas de la burguesía industrial, inseparable de la derrota de una clase obrera cuya estrategia se basó en la defensa del viejo patrón de acumulación. A su vez, la dependencia de los flujos de capital, la interpenetración de capital nacional y extranjero y la internacionalización del capital local dieron fundamento duradero a una comunidad de intereses entre capital local y transnacional surgida en la coyuntura de la crisis hiperinflacionaria. Frente a este bloque en el poder unificado de la burguesía, la clase obrera emergía del proceso fragmentada y debilitada. Se invertía así la dinámica que había dominado el enfrentamiento social hasta mediados de los años setenta.

Desmovilización, resistencia e integración

La primera hipótesis que queremos sugerir es que la capacidad de integración política durante el período menemista se basó en una fuerte desmovilización de la clase obrera. Ello es lo que hizo posible la construcción de una hegemonía, aun en un contexto en el que las restricciones impuestas por el modo de acumulación a las políticas del Estado limitaban su capacidad de respuesta a un potencial incremento de las demandas sociales. Es en este marco que el incremento de la movilización social desde 1996, y fundamentalmente en el año 2001, determinó una crisis de hegemonía.

En términos cuantitativos, la desmovilización obrera se expresó en la disminución del peso de las luchas protagonizadas por organizaciones obreras y en el aumento de los conflictos articulados por identidades constituidas fuera del campo de las identificaciones clasistas (“vecinos”, usuarios, ahorristas, estudiantes, etc.).¹⁴ Esta disminución del espacio social ocupado por la lucha de clases fue simultánea a un proceso de proletarización en términos objetivos, ésto es, del número y la proporción de asalariados como “clase económica”. Es decir, se trató de un proceso de desorganización de la acción de clase y no de “desproletarización objetiva”.

El proceso por el cuál una parte considerable de los trabajadores ha

¹⁴ Una parte considerable de estas identidades corresponden a grupos sociales identificados como “sectores medios”. Ésta no es una categoría de clase sino sociocultural. Incluye a la pequeña burguesía tradicional (pequeños propietarios no liberados del trabajo) y dos conjuntos de asalariados: las llamadas “nuevas clases medias” (por ejemplo, mandos medios) y “asalariados puros” asimilados por sus prácticas y representaciones a la pequeña burguesía. Pero la desorganización de la acción de clase supuso también la acción de los trabajadores como parte de los heterogéneos “sectores populares” (Ver *infra* nota 17).

tendido a manifestarse como parte de las multitudes de pobres o de la masa indiferenciada de ciudadanos equivalió a una “desproletarización subjetiva”. Los asalariados reaccionaron frente a la crisis y el Estado, pero no lo hicieron mayoritariamente en tanto “obreros”. Sin embargo, ante la pérdida de peso del conflicto obrero, la difusión de nuevas identidades en lucha no dio lugar a la estabilización de alguna de las identificaciones que compitiera por el centro del conflicto con la lucha obrera. El resultado del proceso de desmovilización obrera fue, por lo tanto, la desagregación de la acción colectiva.

El proceso de movilización del año 2001 expresó las transformaciones ocurridas en la estructura social argentina. Desde este punto de vista, es importante destacar tres aspectos de dicho proceso de movilización.¹⁵

En primer lugar, expresó el proceso de desagregación de la acción colectiva que supuso la desmovilización de la clase obrera durante los años noventa. Todos los grupos sociales subalternos participaron del ciclo de protestas iniciado a principios de diciembre, pero no del mismo modo ni con la misma intensidad. En particular, los obreros ocupados mantuvieron mayoritariamente su repliegue. No se produjo una articulación de las demandas y de las protestas, sino una yuxtaposición, fundamentalmente temporal, de formas de protestas y demandas muy diversas en las que predominó la espontaneidad y la ausencia de organización de los manifestantes. Estos rasgos determinaron el carácter predominantemente negativo de las demandas, condensado en la consigna “que se vayan todos” del “cacerolazo” del 19 de diciembre de 2001, y la capacidad de bloqueo de la vía deflacionaria de salida de la crisis sin que, al mismo tiempo, el conjunto de los grupos sociales movilizados articulara alguna alternativa. Las limitaciones de la movilización popular dan cuenta del proceso de desagregación de la protesta, pero, por ello mismo, también de la reducida capacidad de integración política, si consideramos el grado de la crisis política.

En segundo lugar, el proceso de movilización de 2001 expresó el estrecho vínculo entre reestructuración capitalista y crisis política. El régimen de convertibilidad monetaria imponía la vía deflacionaria como única respuesta a la crisis y obligaba al Estado a producir un ajuste fiscal con el doble propósito de aliviar el déficit e inducir mecanismos deflacionarios. Sin embargo, la deflación sólo era posible a través de

¹⁵ Los siguientes párrafos reproducen aspectos de la movilización de diciembre de 2001 que fueron señalados en la primera parte, ver “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001”. No los hemos suprimido para no interrumpir el desarrollo de la argumentación que dificultaría la comprensión del texto [agregado al artículo original].

una gran caída del consumo y de la inversión; y, como consecuencia inevitable, de una agudización de las tendencias a la centralización de capitales, y a la expropiación y el empobrecimiento de los pequeños propietarios. Asimismo, la restricción monetaria desmonetizaba la economía informal afectando especialmente a los sectores más empobrecidos. La legitimación de esas políticas, lejos de estar asegurada, obligaba al Estado a responder a una serie de demandas acumulativas centradas en las consecuencias del modo de acumulación.

En términos puramente económicos, era teóricamente factible la salida deflacionaria. La crisis de 2001 fue, entonces, centralmente una crisis política. El bloqueo de la vía deflacionaria y la crisis consecuente, significaron el estallido de la contradicción entre necesidades del proceso de valorización y sus necesidades de legitimación. La amenaza hiperinflacionaria, la fragmentación de la clase obrera y el alto desempleo –que permitieron el cierre de esta contradicción a lo largo del período abierto en 1989– perdieron eficacia, fundamentalmente, entre fracciones de los “sectores medios”, los desocupados organizados y los sectores más pauperizados. Para estos grupos sociales, sometidos por la crisis a acelerados procesos de disolución social y de proletarianización y pauperización que amenazaban su reproducción social, la disolución hiperinflacionaria ya no constituía una amenaza. La gran masa de los trabajadores ocupados, por el contrario, permaneció atrapada entre la fragmentación de sus luchas y la amenaza del desempleo.

En tercer lugar, las acciones “espontáneas” de “saqueadores” pobres y “caceroleros” de sectores medios fueron posibilitadas por modos de intervención aprendidos en el tiempo, originados y desarrollados en los marcos de los modos de incorporación política que les eran característicos a ambos grupos: la mediación de la estructura de lazos clientelares en los sectores más empobrecidos y la movilización ciudadana de los sectores medios. Pusieron de manifiesto, por lo tanto, la crisis de esos mecanismos de mediación política. El impacto de la crisis fiscal sobre el aparato clientelar peronista del Gran Buenos Aires es central para entender su papel en el inicio de los saqueos, en un contexto de creciente dificultad para canalizar las demandas de los sectores empobrecidos. En el caso de los “sectores medios”, el “cacerolazo”, en un principio desarrollado en los marcos de la representación de partidos políticos –Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FRE-PASO)–, se transformó en la noche del 19 de diciembre de 2001 en una movilización de los ciudadanos contra sus representantes, es decir, en expresión de la crisis de representación. Lazos clientelares y movi-

lización ciudadana daban cuenta, además, de la pérdida de peso de la acción sindical, y de clase en general, durante los años noventa.

El kirchnerismo como neopopulismo

No podemos detenernos en las transformaciones que el fin del modo de acumulación sustitutivo de importaciones y orientado al mercado interno originó en el peronismo, ni tampoco en el papel que jugó la identidad peronista en la legitimación del proceso de reestructuración del capital y del Estado.¹⁶ Bastará decir que la apelación a la identidad peronista y la movilización electoral de su base popular durante el ciclo menemista fue posible en la medida en que ella se encontraba incorporada en los modos de sentir, pensar y actuar de trabajadores y “sectores populares”.¹⁷ Sin embargo, ello no alcanza para caracterizar al menemismo como populismo; la movilización de los símbolos y los gestos del “estilo político” populista no son suficientes. Faltó el elemento central de los gobiernos populistas latinoamericanos: la incorporación política de demandas democráticas y su articulación como “pueblo” frente al “antipueblo”.

Pero antes de mostrar en qué medida es posible considerar al kirchnerismo como neopopulismo es necesario hacer una precisión. Utilizamos en el párrafo anterior una dimensión crucial de la concepción de “populismo” de Laclau. Sin embargo, su carácter puramente formal impide de nuevo hacer distinciones fundamentales. La absorción de demandas democráticas en una cadena equivalencial y su transformación en demandas populares no permite distinguir la inclusión política de masas excluidas en situaciones como la emergencia del peronismo en Argentina, el cardenismo en México, el varguismo en Brasil, etc. de otras como el ascenso del kirchnerismo en Argentina en 2001. La pregunta es ¿puede ser equivalente la incorporación a la vida política de un país de masas antes excluidas (caso al que refiere Germani) a la recomposición posterior del consenso por la vía populista de incorporación de demandas insatisfechas en situaciones de crisis polí-

¹⁶ Sobre los cambios en el peronismo ver Palermo y Novaro (1996), Levitzky (2005) y Sidicaro (2002). Hemos tratado esta cuestión retomando críticamente a dichos autores en Piva (2012).

¹⁷ La categoría “sectores populares” es utilizada aquí para denotar que sólo una parte de la clase obrera, definida objetivamente, actúa como clase. Otra parte de ella se presenta con identidades ligadas a prácticas, sentidos de pertenencia y modalidades de incorporación política de carácter territorial. Ambos conjuntos son abarcados por la expresión “sectores populares” en una tradición que, por lo general, se ha opuesto a la categoría marxista de “clase”. Otra parte de la clase obrera actúa bajo el modo indiferenciado de “sectores medios”, ver *supra* nota 14. Para una discusión del concepto marxista de clase como relación social objetiva y como proceso de formación de clase en las luchas, ver (Piva, 2008).

tica? Para expresarlo más claramente, nos referimos a una distinción entre la que sería una “incorporación primigenia”, que determina a través del modo de incorporación aspectos fundamentales de las prácticas políticas de las masas populares durante largos períodos, y otras secundarias que reproducen, resignifican y modifican la primera. Es en este sentido que referimos a diversos gobiernos sudamericanos surgidos de la rebelión contra el neoliberalismo como “neopopulismos”.

El kirchnerismo como “neopopulismo” tiene mucho de repetición y de farsa, pero también de innovación y de evidencia de la permanencia de imaginarios y prácticas profundamente enraizados en los trabajadores argentinos y también en porciones importantes de los “sectores medios”, de fuerte tradición antipopulista.

Kirchnerismo y recomposición del consenso¹⁸

Aquí enfatizaremos tres dimensiones de la lógica kirchnerista de recomposición del consenso que reflejan sus rasgos neopopulistas.¹⁹

La primera y central dimensión de la lógica kirchnerista de recomposición del consenso es que se ha apoyado en la incorporación de demandas de grupos sociales movilizados.²⁰

La segunda dimensión de la estrategia kirchnerista de recomposición del consenso que nos interesa recuperar es la escasa o nula separación entre la integración política de demandas de grupos sociales movilizados y la incorporación de parte de las organizaciones de esos grupos a la coalición política del partido de gobierno. Este aspecto ha ocupado un lugar secundario en los análisis del primer peronismo (Germani, 2003). Aquí también ocupa un lugar subordinado en relación a la primera dimensión y a la tercera, que trataremos a continuación. Sin embargo, resulta importante a la hora de evaluar los límites a la institucionalización de los movimientos sociales y a la canalización estatal de los conflictos sociales común a los populismos y neopopulismos. Particularmente, ello refleja, como desarrollaremos en las conclusiones y adelantamos en párrafos anteriores, que el populismo, lejos de resolver la cuestión de la hegemonía que está en su origen,

¹⁸ Se suprime una introducción al párrafo que refiere a aspectos ya desarrollados en la primera y segunda parte de este libro [agregado al artículo original].

¹⁹ Dejamos de lado el muy importante aspecto del discurso político del kirchnerismo y del primer peronismo. Su especificidad y la amplia bibliografía disponible exigen un tratamiento aparte.

²⁰ A partir de aquí, se suprimen párrafos que reproducen aspectos de la estrategia kirchnerista de reconstrucción/reproducción del consenso ya desarrollados en la primera y segunda parte de este libro [agregado al artículo original].

la difiere o pospone a través de una recomposición del consenso y del poder político que no termina de cristalizar en arreglos institucionales estables.

Dicho fenómeno refiere a algo más que al lazo político establecido entre dirigentes y/o organizaciones de los grupos sociales movilizados y el partido de gobierno. Refiere a que el propio proceso de integración política de las demandas está mediado por la incorporación a la coalición política del partido de gobierno.²¹

Ésto es claro para el caso de las organizaciones de desocupados. Hubo dos dimensiones de la llamada estrategia “ni palos ni planes” seguida respecto a los denominados “piqueteros duros”.²² Un primer plano, refiere al intento de delimitar el campo de acción legítimo en una búsqueda por normalizar e institucionalizar el conflicto, lo que explica que el “garrote” no se aplicara a organizaciones no kirchneristas moderadas como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón o la Corriente Clasista y Combativa (CCC), para el período 2003-2004. Pero una segunda vía fue establecer canales de acceso diferenciales a la satisfacción de demandas por parte de aquellos grupos que adherían al kirchnerismo, buscando otorgarles un status representativo institucional que es difícilmente diferenciable de su incorporación a la coalición oficialista. Aún en la escena sindical, donde los mecanismos institucionales son más estables y legalmente regulados, la representación sindical en los órganos tripartitos (como el Consejo del Salario), el acceso a la negociación con los funcionarios de reivindicaciones sectoriales y el reconocimiento de la representatividad a nivel de tercer grado se encuentran mediados por la incorporación a la coalición oficialista. Ello supuso que el eje de oposición kirchnerismo/antikirchnerismo sea una dimensión explicativa en términos del vínculo entre el movimiento sindical y de desocupados y el Estado. Lo mismo se ha replicado en el movimiento de DDHH y de LGTTB, donde dicha oposición también se ha convertido en un eje de fractura y ha coexistido con (y se ha sobreimpuesto a) otros anteriores.

No se trata aquí de reintroducir el remanido tema de la cooptación.

²¹ Tan sólo como ejemplos, el New Deal de Roosevelt es el origen de una relación persistente entre Partido Demócrata y sindicatos. En Europa, la relación entre movimiento sindical y partidos socialdemócratas es anterior al establecimiento de lazos de reconocimiento entre Estado y sindicatos, pero, en la medida que éstos fueron establecidos bajo gobiernos de ese signo, el lazo fue reforzado. Sin embargo, en ambos casos es discernible el arreglo institucional que permite la negociación y el acceso a demandas y recursos estatales de los lazos que vinculan a dirigentes y activistas con los partidos respectivos.

²² El gobierno denominó así a la estrategia seguida frente a los grupos de desocupados que no renunciaban a las medidas radicales (cortes, ocupaciones, etc.). Indicaba la decisión de no reprimir y, simultáneamente, no negociar con ellos.

Como hemos sostenido en otros trabajos, para los desocupados, aunque se aplica en esencia al conjunto de los movimientos, no se trató de un mero intercambio de paz por beneficios materiales. La adhesión al kirchnerismo supuso, justamente como tratamos de mostrar en este artículo, la movilización de tradiciones políticas y simbólicas comunes fuertemente arraigadas en amplios grupos, que prexistían como divisiones en el seno del movimiento piquetero.²³ A su vez, el kirchnerismo retomó y resignificó perspectivas de la cuestión de los DDHH y de los derechos de LGTTB que estaban presentes en los movimientos desde mucho tiempo antes y que dividían ya a esos movimientos. Por último, la tensión entre vínculo institucionalizado con el Estado y mediatizado por el apoyo político al oficialismo atraviesa al sindicalismo peronista desde su conformación y ha sido crucial en la relación con distintos gobiernos, aun de signo no peronista. Tampoco se trata de negar algunos grados de institucionalización de movimientos y demandas, especialmente del conflicto obrero, tanto para ocupados como para desocupados.²⁴ Se trata, fundamentalmente, de señalar el hiato existente durante el kirchnerismo entre institucionalización e integración política de demandas populares que es propio del modo populista de incorporación política en América Latina.

La tercera dimensión que queremos destacar de la recomposición kirchnerista del consenso es la particular relación con las diversas fracciones de la burguesía que la caracteriza. Ciertas transformaciones en la política económica y en el modo de acumulación de capital devolvieron al Estado una mayor capacidad de arbitraje entre fracciones del capital.²⁵ La forma y el contenido de este arbitraje se hallan estrechamente vinculados a una característica crucial del populismo y del neopopulismo, del peronismo clásico y del kirchnerismo: el desplazamiento del antagonismo interno entre capital y trabajo, que atraviesa a dichos movimientos, hacia la oposición pueblo/grupos económicos, pueblo/capital financiero, pueblo/capital extranjero, pueblo/oligarquía, etc. La construcción del sujeto “pueblo” sólo es posible por medio de esta traducción de una escisión interna en oposición externa a grupos o fracciones de capitalistas que encarnan los males del capitalismo mismo. Este aspecto ha adquirido mayor importancia después del conflicto con la burguesía agraria en 2008, constituyendo

²³ Ver Cortés (2009) y en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” [agregado al artículo original].

²⁴ Ver Cortés (2009) y en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” [agregado al artículo original].

²⁵ En este pasaje se suprimen párrafos donde se alude a aspectos de esta capacidad de arbitraje ya señalados en la primera y segunda parte del libro [agregado al artículo original].

un punto de inflexión y de acentuación de los rasgos neopopulistas del gobierno. Volveremos sobre él en el próximo apartado.

Sin embargo, la reconstrucción del consenso y la normalización del conflicto mediante la interiorización de demandas a la que referimos antes encuentran su límite en la persistencia de indicadores de una incompleta resolución de la crisis de representación.²⁶

Del mismo modo que el gobierno movilizó tradiciones y creencias inscriptas en los modos de incorporación política de los trabajadores, también la movilización de los “sectores medios” puso de manifiesto la persistencia de tradiciones antipopulistas vigentes en sus formas aprendidas de intervención política. La oposición al kirchnerismo de ciertas porciones de los “sectores medios” urbanos será retomada en las conclusiones, pero adelantemos que vuelven a señalar el rasgo central del populismo y del neopopulismo latinoamericanos: la incorporación de demandas democráticas se realiza en un contexto de desfase entre movilización social e integración política. Es decir, el modo de la incorporación política de los grupos sociales subalternos señala los límites para la constitución de una hegemonía burguesa.

Disponibilidad y excedente económico

Uno de los aspectos más cuestionables del análisis clásico del peronismo es la noción de “masas disponibles”, la cual es difícil de separar de la del paso de la “sociedad tradicional” a la “sociedad de masas”. Sin embargo, Zavaleta Mercado ofreció una aproximación al fenómeno de la “disponibilidad” que es de gran utilidad para comprender los fenómenos nacional-populares (Zavaleta Mercado, 2008).

La “disponibilidad”, en el sentido que le otorga Zavaleta, tiene un doble carácter. Del lado de las masas, supone momentos de crisis identitarias en los que se hallan disponibles para un cambio radical en las creencias y disposiciones. Del lado del Estado, refiere a la capacidad institucional para responder a ese proceso de crisis; para decirlo al modo tradicional, a su capacidad de “integración nacional”. Esta forma de abordar la cuestión de la “disponibilidad” elimina cualquier resto de evolucionismo y permite vincular estrechamente la relación entre “movilización social” e “integración” con la cuestión de la hegemonía.

En este sentido, la “desmovilización” de la clase obrera durante los

²⁶ A partir de aquí se suprimen párrafos donde se describen rasgos de la movilización de “clase media” ya señalados en “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” [agregado al artículo original].

años noventa; la acelerada transformación de la economía y la sociedad del período; y el proceso de movilización y de crisis de hegemonía de comienzos del nuevo siglo en Argentina supusieron, del lado de las masas, la producción de disponibilidad para un cambio de época y, del lado del Estado, la crisis de sus reducidas capacidades de integración política.

La reconstitución del poder de Estado se realizó a través de la movilización de un imaginario y unas prácticas que recuperaron las tradiciones populistas inscriptas en los modos de incorporación política de los trabajadores y de los “sectores populares”. Esto resulta especialmente claro en el caso de los desocupados y en la “movilización” de la clase obrera sindicalmente organizada, como refiriéramos en el anterior apartado. Pero dicha recreación de pautas populistas de incorporación política no fue mera reproducción, ya que era imposible ignorar los cambios ocurridos desde 1976. La desorganización de clase y la desproletarización subjetiva, aun en un contexto de aumento de la acción sindical de los trabajadores, redujo el peso de la clase obrera sindicalizada. A su vez, el desarrollo durante dos décadas de los vínculos clientelares de intermediación política y el mayor peso del lazo territorial en la construcción de identidades y organizaciones pluralizó las bases populares del peronismo.

El resultado fue un desdibujamiento del contenido clasista del peronismo. Dicho componente pasó a ser uno más, y ni siquiera el más importante, al lado de otros en la definición del kirchnerismo, que, por lo tanto, perdió también cualquier referencia policlasista. La referencia a lo “popular” devino abstracta y puramente exterior y nominó un contenido heterogéneo, por ende, mucho más dependiente de la eficacia del agente externo para conservar su unidad. Pero eso hace también al kirchnerismo mucho más inestable y con tendencias a la descomposición. Estas transformaciones no pueden desvincularse, a su vez, de los cambios en el régimen político desde 1983 y, en particular, del peronismo desde la renovación.²⁷ Su principal efecto fue la subordinación de los sindicatos al partido y la autonomización política, organizativa y financiera de un aparato político estrechamente ligado al Estado. Ello explica que el neopopulismo se encuentre atravesado por rasgos políticamente liberales que reflejan la estabilización desde 1983 de la centralidad del sistema de partidos basado en elecciones competitivas.²⁸

²⁷ Ver *supra* nota 15.

²⁸ Este aspecto del kirchnerismo en relación al peronismo me fue sugerido por Alberto Bonnet.

Pero la “disponibilidad” del lado del Estado también encuentra un fundamento en la cuestión del excedente. Como señala correctamente Zavaleta Mercado, el problema no refiere tanto a la existencia del excedente como a la capacidad de captarlo.

Observemos resumidamente algunos aspectos parciales del lado económico del asunto. Ciertas transformaciones en la dinámica de acumulación de capital posibilitaron compatibilizar acumulación capitalista y satisfacción gradual de demandas.²⁹ Desde el año 2007, si bien la situación económica sigue siendo favorable a la continuidad de la acumulación, han comenzado a aparecer límites y no es extraño que con ello se hayan incrementado los conflictos entre el gobierno y grupos o fracciones del capital.

Por un lado, la expansión de la demanda interna volvió a ser un aspecto central de la capacidad de internalizar demandas, aspecto que emparenta también al kirchnerismo con el populismo clásico. Pero tampoco allí hay mera repetición. Los superávits “gemelos” comercial y fiscal– y la articulación de moderada sustitución de importaciones y orientación exportadora de la gran burguesía industrial muestran los efectos de las transformaciones neoliberales sobre el capitalismo argentino. Ligado a ello, la sustitución de importaciones sólo es posible con costos salariales bajos, lo que explica la persistencia de altos, aunque decrecientes, niveles de empleo en negro.

Por otro lado, la reducción de los superávits “gemelos” llevó al gobierno a disputar parte del excedente con grupos capitalistas, pero esto amenaza la continuidad de la inversión. El enfrentamiento con la burguesía agraria, la estatización de los fondos de jubilación privada (AFJP), las disputas con grandes empresas por el reparto de dividendos, la estatización parcial de YPF, etc. son aspectos de esta disputa por la captación del excedente que tienen como respuesta desde pequeñas y sórdidas peleas familiares –el “enfrentamiento” entre el gobierno y la multinacional argentino-italiana Techint– hasta crisis políticas –el “conflicto del campo” en 2008– pasando por disputas de mercado –la fuga de dólares y el dólar paralelo. Desde 2007, esto ha potenciado el neopopulismo de la economía y la política kirchneristas, que es posible resumir como *una política que desvía la contradicción capital/trabajo hacia la oposición pueblo/oligarquía, pueblo/capital financiero, pueblo/grupos económicos, pueblo/capital extranjero, etc.* El problema es que, como señalara Touraine, su profundización lleva a la manifestación de la dualidad

²⁹ En este pasaje se suprimen párrafos donde se reproducen características del modo de acumulación de capital postconvertibilidad ya señalados en la primera parte del libro [agregado al artículo original].

característica de los populismos, entre el cuestionamiento del orden social –desplazado permanentemente hacia el antagonismo parcial con grupos o fracciones económicas y/o políticas– y la legitimación de una dirección de crecimiento económico que depende del flujo de inversiones.

Las fracciones de la clase dominante que atacan al neopopulismo kirchnerista lo hacen porque no aceptan los límites a su dominación supuestos en la relación de fuerzas a medias cristalizada en el Estado después de la rebelión popular de 2001. Pero, simultáneamente, son incapaces de relegitimar el viejo papel del Estado. Sólo pueden producir, entonces, crisis políticas. Paradójicamente, eso permite la reproducción del kirchnerismo, que los posiciona una y otra vez como “el otro” de un proyecto nacional.

Conclusiones

El rasgo central del populismo latinoamericano fue la incorporación política de masas populares excluidas en contextos de desfase entre movilización social e integración política. El modo de incorporación señaló las dificultades para su institucionalización, lo que se puso de manifiesto en la producción de una división dicotómica y antagónica del espacio social. Dicha división funciona como un mecanismo que desplaza permanentemente el antagonismo interno de los movimientos nacional-populares hacia una oposición pueblo/antipueblo. En este sentido, la contradicción capital/trabajo suele asumir formas no clasistas.

Lo específico del peronismo es que realizó la incorporación política de la clase obrera y, por lo tanto, su unificación política como clase. Ello le dio un carácter policlasista o de alianza de clases y una mayor estabilidad que la de otros movimientos nacional-populares más allá de la caída del gobierno de Perón en 1955.

El kirchnerismo logró recomponer el poder de Estado después de la crisis de 2001 a través de una estrategia de incorporación de demandas y de la movilización de prácticas e imaginarios populistas enraizados en las masas populares incorporadas políticamente bajo el signo del peronismo. Sin embargo, la desorganización de clase y la desproletarización subjetiva, producto de las aceleradas transformaciones durante la década neoliberal de los años noventa, han dejado marcas en la reconstitución neopopulista, diferenciando kirchnerismo y primer peronismo.

Un contenido popular difuso, en el que el componente clasista es un

elemento secundario, da cuenta de una base popular más heterogénea y cuya unidad depende de su nominación externa y abstracta. Ésto, a su vez, torna al kirchnerismo menos estable y con mayores tendencias a la descomposición. Al mismo tiempo, las transformaciones económicas ocurridas desde 1976 se manifiestan en los límites que asoman a la estrategia de satisfacción gradual de demandas y de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo.

Tres aspectos, sin embargo, hemos dejado pendientes de análisis.

En primer término, el lugar de la satisfacción de demandas materiales y de las que podemos denominar “demandas de reconocimiento” en la lógica kirchnerista de recomposición del consenso y en el primer peronismo. Aquí sólo pretendemos plantearlo como problema y referir algunas hipótesis. Un punto fuerte del estudio de Germani, retomado por James (1990), aun frente a sus críticos posteriores, fue destacar el peso en la adhesión obrera al peronismo de su reconocimiento como clase, de la expansión de sus organizaciones sindicales y de la inclusión de la cuestión obrera en la agenda política, imposible de ignorar aun por los gobiernos post 1955. Éste fue el fundamento de un vínculo más perdurable que aquel fundado en un mero intercambio de beneficios materiales inmediatos por apoyo político.

Pareciera que, en el kirchnerismo, la referencia puramente abstracta y exterior a lo popular tiene su correlato en una dependencia mucho mayor de la satisfacción gradual de demandas materiales para el sostenimiento del consenso. La caída electoral de 2009 tuvo una relación evidente con el conflicto con la burguesía agraria, pero la pérdida de votos en los heterogéneos “sectores populares” del conurbano bonaerense parece haber reflejado también el impacto de la desaceleración de 2008-2009, vinculada tanto con la “crisis del campo” como con la crisis mundial. El peso de las “demandas de reconocimiento” es mucho más fuerte en el apoyo de las organizaciones LGTTB y de los organismos de DDHH, pero no parecen resultar determinantes de una adhesión más amplia, tanto entre los sectores medios como obreros. Paradójicamente, ya que los rasgos neopopulistas resultaron acentuados desde 2008, el peso de las “demandas de reconocimiento” en la concitación de adhesión política pareció ser mayor en los primeros dos años de gobierno de Néstor Kirchner. El reconocimiento de las organizaciones piqueteras como interlocutores legítimos del gobierno; su inclusión parcial en la coalición oficialista; la relación con las organizaciones de DDHH y los gestos vinculados con la política de juzgamiento a los genocidas; e incluso, el retorno de las paritarias y la intervención del Estado favoreciendo a los trabajadores en conflicto,

parecieron tener un fuerte impacto en la adhesión inicial. Luego, esta política parece alcanzar sus límites. Si ello es así, la adhesión resulta mucho más inestable.

De cualquier modo, la satisfacción de demandas materiales resulta inscrita en la actualización de una tradición política peronista de las masas trabajadoras cuyo impacto en el vínculo popular con el kirchnerismo no debe ser subestimado. El punto es que este vínculo siempre está mediado por la necesidad de revalidación peronista del kirchnerismo y, entonces, el círculo explicativo se vuelve vicioso ¿Depende esta revalidación de la continuidad en la satisfacción gradual de demandas materiales? La resolución de este problema requiere de mayor investigación. Más allá del problema puntual, sin embargo, es necesario preguntarse aun por la naturaleza de ese vínculo de los trabajadores con el peronismo. No se trata de una herencia persistente o de una esencia inmodificable del “ser peronista”, sino de una subsistencia mediada por la actualización de prácticas políticas y por las formas de movilización política de los trabajadores. Ello implica que el peronismo muta, que es rehecho cada vez y que ello, junto a su carácter cada vez más vacuo y exterior, no pueden dejar inmodificado el contenido que es movilizad³⁰.

El segundo aspecto es el referido al nacionalismo. Éste, como señalamos, fue un elemento central de la ideología peronista, pero lo es mucho menor medida del kirchnerismo. Si bien la retórica nacionalista se ha potenciado junto con la profundización de los rasgos neopopulistas desde 2008 –por ejemplo, el retorno del tema Malvinas–, lo cierto es que está ausente el rasgo “antiimperialista” del peronismo clásico. Al mismo tiempo, el latinoamericanismo se halla acentuado respecto del primer peronismo. Ambas diferencias reflejan la tendencia a la integración económica regional en el marco de una creciente internacionalización de la producción capitalista. Un aspecto de ese proceso es la interpenetración entre burguesía nacional y extranjera en la Argentina, un aspecto de clara continuidad con la década menemista.

El tercer aspecto resulta más central a nuestro análisis y tiene que ver con la cuestión de la hegemonía.³¹

³⁰ Para una discusión sobre la persistencia del vínculo de los trabajadores con el peronismo y el problema del “esencialismo” en los estudios sobre el peronismo, ver Sigal (2008, 2009) y Balbi (2009).

³¹ En este punto se suprime la reproducción de la definición de hegemonía expuesta en la segunda parte. Ver “Postdata. Las transformaciones del Estado en la Argentina postconvertibilidad: de la desorganización del Estado neoliberal al “keynesianismo trunco” [agregado al artículo original].

Desde 2003, el conflicto obrero da muestras de normalización e institucionalización. A pesar de ello se evidencian dificultades para la traducción institucional de un amplio abanico de conflictos y demandas.

A causa de la reducción del espacio social abarcado por las confrontaciones clasistas, aun en un contexto de recomposición de la acción y de la organización de los trabajadores, no es extraño que la institucionalización del conflicto obrero no sea suficiente para la estabilización de una dominación hegemónica.³²

Lo que ello señala es el exceso de movilización social respecto de la capacidad de integración que vino a ser ocupado por una estrategia neopopulista de incorporación de demandas. Pero el déficit de institucionalización significa que el éxito del gobierno en polarizar el espacio político en términos de oposición kirchnerismo-antikirchnerismo oculta y expresa al mismo tiempo la dificultad para la constitución de una hegemonía que brinde estabilidad a la dominación.

Ha contribuido a ello una fuerte tradición antipopulista de los “sectores medios” urbanos que se movilizaron y se movilizan contra el gobierno con cada oportunidad política. Un aspecto destacado por Touraine, y que se aplica con extrema facilidad al peronismo, es la preminencia de una lógica de la participación frente a una lógica de la representación. Ello funda un estilo político verticalista y poco propenso a la deliberación, que es identificado por aquellas porciones de los “sectores medios” de tradición política liberal como autoritario. Esa identificación fue central para la capacidad de movilización contra las retenciones demostrada por la burguesía agraria durante el conflicto del año 2008.

La extrema fluidez de la situación política, con un gobierno que en poco tiempo pasó de niveles altísimos de adhesión popular a la derrota de 2009 y a una nueva victoria aplastante en 2011, indica que el final permanece abierto.

³² En este pasaje se han suprimido partes que resultan redundantes tras lo expuesto en la segunda parte del libro. Ver “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)” [agregado al artículo original].

La inflación argentina en la postconvertibilidad (2002-2013)¹

Introducción

La inflación es un fenómeno pluricausal. Las causas del aumento de precios en coyunturas determinadas pueden hallarse en una multiplicidad de fenómenos que van desde la puja distributiva hasta tensiones originadas en el comercio exterior, fenómenos que en otros contextos no originan subas generalizadas de precios. El primer problema a resolver, entonces, no debiera ser cuáles son las causas de la inflación, sino más bien cuál es el marco que posibilita que una diversidad de fenómenos se expresen de manera inflacionaria. La primera pregunta que intentaremos responder en este trabajo es, por lo tanto, cuáles fueron las condiciones que posibilitaron el retorno de altas tasas de inflación en Argentina entre 2003 y 2013. Por otra parte, la inflación es un fenómeno esencialmente conflictivo y la experiencia demuestra que no resulta neutro ni en términos de la distribución del ingreso ni de la distribución del poder político. En este sentido, la segunda pregunta que intentaremos responder es cuál fue el vínculo entre la

¹ Una versión más extensa de este trabajo se encuentra en prensa en la revista *Realidad Económica*. Allí presentamos, primero, una discusión de las distintas teorías de la inflación, después un mayor desarrollo –incluyendo un análisis econométrico– del lado monetario de la inflación y, por último, también un mayor desarrollo de la parte final. También en esta versión se ha simplificado la exposición de la primer parte, lo que supone la desventaja de una menor precisión. Quiero agradecer especialmente a Julio Fabris, que discutió conmigo las distintas fases de elaboración de este trabajo e hizo importantes sugerencias. También al Centro de Investigación y Formación de la República Argentina–Central de Trabajadores de la Argentina (CIFRA-CTA) por facilitar los datos del IPC 9 Provincias.

dinámica de la inflación y la dinámica de la lucha de clases durante la postconvertibilidad.

La hipótesis que plantearemos es que, tras la crisis de 2001, una dimensión central de la recomposición del poder político fue la canalización de las demandas obreras y populares a través de políticas de expansión de la demanda. Pero las políticas de expansión de la demanda se vieron doblemente limitadas. En primer lugar, el carácter limitado de las funciones dinerarias de la moneda nacional condujo a que, más allá de cierto punto, los aumentos de la oferta de dinero tendieran a traducirse en aumentos de la demanda medida en dinero, para usar la expresión de Ciafardini (1990).² En segundo lugar, las restricciones de la oferta –las estructurales, enraizadas en el carácter dependiente del capitalismo argentino, y las ligadas al modo de acumulación– limitaron la respuesta productiva al aumento de la magnitud monetaria de la demanda. Bajo estas condiciones, las políticas de expansión de la demanda se tradujeron en aumentos de precios.

En lo que sigue, haremos primero una breve referencia a los debates sobre la inflación en Argentina de la última década. Luego, pasaremos al análisis del marco que constituyó la condición de posibilidad del proceso inflacionario. En primer lugar, abordaremos el lado monetario del fenómeno y, en segundo lugar, las restricciones de la oferta. Finalmente, trataremos la relación entre inflación y lucha de clases, lo que nos permitirá cuestionar la distinción endógeno/exógeno que articula el debate de la cuestión monetaria en la ciencia económica.

El debate sobre la inflación en Argentina en la postconvertibilidad

Los debates más interesantes en torno a las causas y dinámica de la inflación desde la salida de la convertibilidad se han dado en la heterodoxia. La ortodoxia ha visto la causa de la inflación en la expansión monetaria determinada por la expansión del gasto público (Capello, Grión y Valsagna, 2013; Argañaraz, 2013). Heymann y Ramos (2010) también adjudican el proceso inflacionario al aumento del gasto y al señoreaje. Esta explicación fue parcialmente aceptada incluso por economistas partidarios del “modelo de tipo de cambio alto competitivo”, que atribuyen la aceleración y persistencia de la inflación a la política fiscal expansiva (Damill y Frenkel, 2013; Frenkel, 2008).

En el terreno crítico a las tesis ortodoxas, encontramos tres grandes conjuntos de explicaciones. En primer lugar, una explicación del tipo “inflación oligopólica”, inspirada en el modelo de Kalecki (Manzanelli

² Ver más abajo el significado de este término.

y Schorr, 2013). Manzanelli y Schorr explican centralmente la suba de precios por la profundización de la concentración y centralización del capital desde 2002. Señalan, en este sentido, que los precios aumentaron por encima del promedio en aquellas ramas de mayor nivel de concentración. La recomposición de márgenes vía aumento de los precios habría sido acompañada por una baja tasa de reinversión de utilidades y un reinicio, luego de los primeros años postconvertibilidad, de la dinámica de fuga de capitales.

En segundo lugar, encontramos una explicación por puja distributiva. Amico (2008; 2013) y Asiaín (2010) son ejemplos polares en cuanto a la naturaleza interna o “importada” de la inflación en el período. Amico señala que la economía argentina, después de la devaluación de 2002 y la fuerte caída inicial del salario real, se caracteriza por una dinámica interna de puja distributiva originada en la aspiración de los trabajadores a alcanzar mayores salarios reales y en las respuestas defensivas de los empresarios para sostener su participación en el producto. Por lo tanto, otorga un lugar secundario a la influencia del aumento del precio de los alimentos a nivel mundial. Asiaín, por el contrario, da una importancia central a dicho aumento, que desataría una dinámica inflacionaria explicada por un desajuste entre la expresión en dólares del salario real al que aspiran los trabajadores y el exigido por un tipo de cambio que torne competitiva a la industria.

En tercer lugar, desde una perspectiva marxista, Astarita (2013) terció en el debate entre defensores de la puja distributiva y de la inflación oligopólica. De acuerdo a Astarita, la tesis de la inflación oligopólica carece de fundamentos teóricos (ver *supra*) y empíricos.³ A su vez, la puja distributiva sólo desata procesos inflacionarios en la medida en que exista un régimen monetario que permita la desvalorización del dinero. En este sentido, las condiciones de la inflación deben buscarse en la ruptura de la restricción monetaria que significó la salida de la convertibilidad y la devaluación desde 2002. Por lo tanto, la emisión monetaria y, en particular, la monetización del déficit fiscal no pueden ser subestimadas. Pero el aspecto monetario de la inflación no puede analizarse fuera de su relación con las restricciones estructurales de la economía argentina, que la conducen periódicamente a crisis externas y devaluaciones: su carácter dependiente y atrasado.

³ Según Astarita (2013), los propios datos que utilizan Manzanelli y Schorr no muestran una relación entre grado de concentración de la rama y aumento de precios.

La inflación en Argentina desde 2003: un problema ¿económico?

El lado monetario del fenómeno

EL PUNTO DE PARTIDA: LA CRÍTICA DE MARX AL ENFOQUE CUANTITATIVO DEL DINERO Y EL DINERO FIDUCIARIO

Cuando se abandona el supuesto de que el dinero es el oro y la crítica de Marx al enfoque cuantitativo es aplicada al caso de dinero fiduciario, se plantean una serie de problemas que exigen una mirada previa, conduciendo hacia la concepción de Marx del dinero. Con ese objetivo, es interesante partir de una aparente paradoja que plantea el capítulo 3 de *El Capital* (Marx, 1998). El capítulo se titula “El dinero, o la circulación de mercancías” e, inmediatamente, nos introduce en el análisis de dos de sus funciones: como medida general de los valores y como medio de circulación (en cuya exposición se encuentra la crítica al enfoque cuantitativo). Pero puede sorprender que después de exponer ambas funciones, y habiendo pasado más de la mitad del capítulo, nos encontremos con un nuevo subtítulo, “El dinero”, a partir del cual se exponen las funciones de atesoramiento, medio de pago y dinero mundial.

Pero, entonces, ¿de qué nos estuvo hablando Marx hasta ese punto? Claro está que del dinero. La aparente paradoja es fruto de que el dinero, según Marx, sólo aparece plenamente como tal cuando se presenta como *figura autónoma de valor*. Ésto es, como unidad de cuenta ideal presupone esa figura, pero todavía no aparece su cuerpo representando ese papel. Como medio de circulación, y en la medida en que sólo consideremos al dinero cumpliendo esa función, su aparición como figura autónoma del valor de las mercancías que se le enfrentan “no es [...] más que una aparición fugitiva” (Marx, 1998: 157), ya que, más o menos velozmente, una mercancía sustituye a la otra en el juego de los intercambios. Es por ello que, como medio de circulación, el dinero puede ser reemplazado por signos de valor (billetes de curso legal) y por crédito monetizado. Confrontemos esta situación con aquella en la que el dinero es medio de pago. Cuando el dinero se presenta como medio de pago, el intercambio ya ha ocurrido, el dinero no es medio del establecimiento de vínculos entre compradores y vendedores, sino que se presenta saldando la deuda como figura autónoma de valor. Veamos la cuestión un poco más de cerca.

El dinero no es exógeno a los intercambios, surge del propio proceso de circulación, en el curso del cual una mercancía es separada de las demás e investida como expresión general del valor y, por lo tanto, con capacidad de representar el valor de todas las demás mercancías. Es por ello que Marx llama al dinero como medio de circulación, cuando

aparece como figura de valor frente a una mercancía en venta, “larva del dinero” (Marx, 1998:140), es decir, dinero todavía no desarrollado. “Larva del dinero”, en primer lugar, porque, si estudiamos su génesis, es a través de su reiterada aparición como figura de valor en los intercambios que una mercancía surge como dinero. Pero, en segundo lugar, porque esa mercancía es plenamente dinero sólo cuando *con independencia de los intercambios* cumple un crescendo de funciones –reserva de valor, medio de pago y dinero mundial–, a través de las cuales es *validada* como encarnación de valor. Si ocurriera el proceso inverso, si una mercancía perdiera paulatinamente su capacidad de cumplir las funciones más propias del dinero y fuera crecientemente condenada a circular de modo permanente, estaríamos ante un proceso de *muerte* del dinero. En el extremo, sería rechazada aun como medio de circulación, caso típico de las hiperinflaciones.

El corazón de la crítica de Marx al enfoque cuantitativo está en esta concepción del dinero. Si se produjera un exceso de dinero, para una suma de precios y dada una velocidad de circulación, ese exceso saldría de circulación, se atesoraría. Pero esta afirmación es válida, de modo general, sólo para aquella mercancía que es dinero, esto es, que es figura autónoma de valor. No lo es para el signo de valor, no lo es para el dinero-crédito.

Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el dinero ya no es una mercancía cuyo valor dependa, en última instancia, del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, cuando el dinero es dinero fiduciario? En este caso, lo que suceda dependerá del grado en el que la moneda emitida por el Estado nacional funcione como dinero.⁴ Y, para el caso de dinero con garantía del Estado, la confianza es un factor central. Como indica Ciafardini (1990), en la medida en que la moneda nacional es validada como dinero, las cosas tienden a funcionar como fue expuesto. Cualquier exceso de dinero respecto de las necesidades de circulación será retirado de la circulación por un aumento del atesoramiento. Pero, en la medida que la desconfianza en el valor de la moneda local se expanda, su capacidad de funcionar como dinero se verá crecientemente limitada y, si se viera condenada a circular sin fin, el presagio monetarista se volvería realidad.

⁴ Dejamos aquí de lado la cuestión de si el oro sigue o no teniendo un rol monetario (Astarita, 2003). En la escala que tratamos el problema, los protagonistas de esta historia son el peso y el dólar. El valor del dólar para los fines propuestos está dado y si se vincula o no a su relación formal (convertibilidad) o informal (inconvertibilidad) con el oro puede dejarse en suspenso. También queda, por lo tanto, provisoriamente a un lado el problema de la relación valor-dinero fiduciario como cuestión teórica de orden general.

EL DINERO NO ES TODO, PERO COMO AYUDA... O EL LADO MONETARIO DE LA INFLACIÓN

La evolución de los precios durante la postconvertibilidad presenta tres momentos claramente diferenciables [gráfico 2]. Un primer momento se inicia en 2002, que registra la variación anual más alta del período, y remite a la devaluación como su causa. Es el clásico caso de inflación cambiaria estructural. La desaceleración de 2003 y 2004 marca el fin de esta primera etapa. Pero, a fines de 2004 y durante 2005, comienza una nueva aceleración que continúa hasta el año 2006. La inflación vuelve a alcanzar y superar el 10% anual. La siguiente etapa comienza en 2007, cuando la inflación se acerca o supera al 20% anual, con excepción del año 2009, que fue un año recesivo. Veremos, por razones que en parte discutiremos en esta sección y en parte más adelante, que esta etapa puede subdividirse a su vez en dos, una hasta el año 2010 y otra a partir de 2011.

En esta sección, nos limitaremos específicamente al lado monetario, por lo tanto, no pretendemos agotar la discusión de la dinámica del aumento de precios.

Según lo expuesto anteriormente, en la medida en que la moneda local sea validada como dinero –y que, por lo tanto, funcione como reserva de valor–, todo exceso respecto de las necesidades de circulación se atesorará. Pero, si la confianza en el dinero nacional se reduce, *aumentos en la cantidad de moneda se traducirán en un aumento de la demanda medida en dinero* (Ciafardini, 1990). Es decir, se podrá producir un incremento de la magnitud monetaria de la demanda sin correspondencia con el poder de compra originado en la producción de valor.

¿Es posible observar en la Argentina de la postconvertibilidad cambios de esta naturaleza que ayuden a comprender el fenómeno y la dinámica inflacionaria? Entendemos que sí, *nuestra primera hipótesis es que la moneda local funciona limitadamente como dinero*, por lo tanto, los intentos de sostener (o la imposibilidad de evitar) una política monetaria expansiva encuentran un primer límite de carácter específicamente monetario.⁵

Las teorías ortodoxas de la inflación son distintas derivaciones y variantes del enfoque cuantitativo del dinero que tiene su formulación clásica en la vieja ecuación de Fischer:

$$MV = PT^6$$

⁵ El otro lado del problema, el de la inversión y las restricciones de la oferta, será analizado más adelante.

⁶ M= cantidad de dinero; V= velocidad de circulación del dinero; P= precios; T= número de transacciones.

Luego reemplazada por la ecuación de Cambridge:

$$MV = Py\acute{o}$$

$$M = kPy^7$$

Ambas formulaciones no son más que identidades contables y no implican relación causal alguna.

$$\text{Si } M = kPy$$

$$\text{Entonces } M/y = P(M/Py)$$

Es decir, el impacto sobre los precios (P) de un aumento de la cantidad de dinero respecto del ingreso real (M/y) está mediado por la demanda de dinero (M/Py). Aquí nos interesa comparar las evoluciones de las distintas variables, por lo tanto, podemos aproximarnos a esas variaciones estimando M/y con M2/PBI a precios constantes (1993) y M/Py con M2/PBI a precios corrientes.

En el cuadro 18, dejamos fuera la inflación de 2002 y 2003 –ya que sabemos que se debe a la devaluación y no presenta mayores dificultades de comprensión– y nos concentramos en las siguientes etapas de la evolución del aumento de precios que señaláramos antes. La razón por la que decidimos utilizar M2 como medida de la cantidad de moneda, y no la base monetaria, es porque la variación de M2, al incluir las cajas de ahorro, es más sensible al desatesoramiento con fines de consumo. Como puede observarse la variable proxi de demanda de dinero (M2/PBI a precios corrientes), luego de aumentar en 2004 y 2005, cae en 2006. Una hipótesis posible para explicar las variaciones expuestas en el cuadro 1 es que, desde 2006, se desarrolla una tendencia de los agentes a desprenderse de pesos comprando bienes, lo que comprende fenómenos de desatesoramiento. Ello explica la aceleración de la inflación aun con aumentos de M2 respecto del PBI real menores que en 2004 y 2005. Lo que supone esta hipótesis es una creciente pérdida de la función de reserva de valor del peso. Ello mismo explicaría el aumento de la demanda de dinero en 2011 y 2012. A partir de 2011, los agentes con capacidad de ahorro ya no se desprenden de dinero sólo adquiriendo bienes, sino que utilizan esos pesos para demandar dólares como reserva de valor.⁸ Por esta primera razón es que antes decíamos que la etapa de alta inflación iniciada en 2007 podía subdividirse en dos etapas, una hasta 2010 y otra desde 2011.⁹

⁷ y = Ingreso real reemplaza a T; k = inversa de la velocidad del dinero (M/Py) mide la demanda de dinero.

⁸ Veremos después que 2011 es un año de fuerte fuga de capitales y remisión de utilidades al exterior. A pesar de que la tendencia es anterior a ese año, el impacto sobre los minoristas de estas señales de los grandes jugadores no debe subestimarse.

⁹ En la versión extensa de este trabajo incluimos aquí un análisis de cointegración para

Pero, ¿por qué la caída de la demanda de dinero se inicia en 2006?

En 2006 existía superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. Durante 2005, se había cerrado con éxito la renegociación de la deuda externa con la mayor parte de los acreedores. El alto nivel y la rápida recomposición de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) después del pago de la deuda al FMI eran señales de respaldo al peso. Parece claro que este contexto pone aun más en evidencia la limitada capacidad de la moneda local para funcionar como dinero. Respecto de las posibles causas desencadenantes, aquí sólo podemos sugerir algunas hipótesis vinculadas a razones de orden coyuntural sobre cuyo significado volveremos más extensamente en las conclusiones.

Como vimos en la primera y la segunda parte del libro, la salida del gobierno del ministro de economía Roberto Lavagna, a fines de 2005, se produjo en el marco de una disputa sobre cómo responder a la aceleración de los incrementos de precios de ese año. Lavagna era partidario de frenar los aumentos salariales y de enfriar la demanda interna. Su salida significó una señal de que continuarían las políticas de recuperación del salario real a través de las paritarias libres recientemente reinstauradas –ello a pesar de los techos informales puestos a los aumentos salariales– y de expansión de la demanda.¹⁰ En segundo lugar, en el año 2006, la política del Banco Central tendiente a sostener el tipo de cambio alto fue especialmente activa. En un marco de presión del mercado hacia la apreciación del peso, después de dos años de estabilidad del tipo de cambio nominal, se produjo una depreciación del 5%. La compra del exceso de oferta de divisas explica gran parte de la fuerte expansión de la base monetaria –23,6% contra 12% de 2005¹¹–, a pesar de que fue parcialmente esterilizada por el BCRA (Albrieu y Corso, 2008).

Sin embargo, ambos motivos resultan débiles confrontados con la solidez de la situación fiscal y externa.¹² En todo caso, si tuvieron algún papel, lo fue en el marco de una limitada capacidad de la moneda local para funcionar como dinero, que entendemos debe ser explicada, en última instancia, en el contexto de la reiterada tendencia a la disolución del dinero nacional desde 1975.¹³ Es decir, la aceleración de

testear la hipótesis sugerida.

¹⁰ En las próximas secciones nos referiremos al vínculo entre aumentos salariales e inflación.

¹¹ Fuente: Banco Central de la República Argentina.

¹² En lo referente al margen de acción del Banco Central, Frenkel (2007) señala el importante grado de autonomía monetaria para implementar políticas de esterilización sostenibles que existía en 2006.

¹³ Entre 1950 y 1974, el tipo de cambio nominal aumentó un 5180,8%. Entre 1974 y 1989, un

los aumentos de precios entre 2005-2006 y las señales de continuidad de las políticas de expansión de la cantidad de dinero y de la demanda encendieron las alarmas respecto de la capacidad del peso de constituir un buen refugio de valor. La tasa de interés por plazos fijos a 30 días pasaron del 3,76% promedio en 2005 al 6,42% en 2006¹⁴, para una inflación promedio del 9,3% y 10,7% respectivamente¹⁵. Si bien son tasas negativas, se trata de pérdidas leves de poder de compra, la pérdida de poder de compra es menor en 2006 que en 2005 y, en ambos años, los rendimientos son mayores que los que arroja la apreciación del dólar. Si este último dato puede explicar la opción por aumentar la demanda de bienes, ciertamente las tasas de interés negativas no parecen dar cuenta de la evolución de la demanda de dinero, ya que, en 2005, crece la demanda de dinero a pesar de las tasas de interés negativas y de la estabilidad del dólar. Más bien parece ser al revés, la limitada capacidad del peso para funcionar como dinero exige tasas de interés más altas para inducir atesoramiento. En tal caso, sucesos coyunturales, en el marco de una moderada aceleración del aumento de precios, activaron comportamientos defensivos aprendidos y cristalizados en procesos de largo plazo.

La atención se traslada ahora, por lo tanto, a la aceleración moderada de precios para 2005-2006 y sus vínculos con la primera y la tercera fase identificadas.

Veamos, en primer lugar, el vínculo con la primera fase. El aumento de precios provocado por la devaluación durante 2002 y 2003 fue limitado por la debilidad de la demanda de bienes de consumo, a causa de los pobres incrementos salariales otorgados durante dicho período. Ésta es la otra cara del éxito de la devaluación en reducir salarios reales e incrementar tasas de ganancia, fundamentalmente para los exportadores. Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, los precios aumentaron un 41,2%¹⁶ para una devaluación del 206,5%¹⁷, mientras que, durante 2003 y 2004 (siempre diciembre contra diciembre), los precios tuvieron aumentos del 3,7% y del 6,1% respectivamente, para un tipo de cambio nominal levemente apreciado (-3,4% en 2003 y 0,8%, prácticamente estable, en 2004).

El aumento de la demanda originado fundamentalmente en la recuperación salarial entre 2004 y 2006 impulsó una segunda ronda de ajustes de precios postdevaluación, es decir, se trata, en lo central, de

84667999900% (Fuente: CEPAL).

¹⁴ Fuente: Banco Central de la República Argentina.

¹⁵ Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

¹⁶ Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

¹⁷ Fuente: CEPAL.

un fenómeno de reacomodamiento inflacionario de precios o de inflación cambiaria. Dicho de otro modo, la alta devaluación inicial y los moderados aumentos de precios en 2002 y 2003, dejaron margen para el aumento de precios que se desarrolló en cuanto la demanda comenzó a reactivarse.

Observemos con más detenimiento ambos aspectos del fenómeno.

Por un lado, los aumentos de salario nominal se tradujeron sólo muy parcialmente en aumentos de precios, lo que explica la recuperación del salario real [cuadro 19]. Por otro lado, Kicillof y Nahón (2006) señalaban, en ese contexto, que durante la primera fase de aumentos de precios (2002/2003), los que lideraron los aumentos fueron los bienes transables mientras que, en la aceleración de 2005 y 2006, los aumentos fueron liderados por los no transables.¹⁸ Ambos hechos abonan la hipótesis de que la aceleración inflacionaria de 2005 y 2006 fue una segunda ronda de inflación cambiaria en un contexto de alza de la demanda.

Pero, al mismo tiempo, de manera subterránea, se producía durante 2006 una inversión en el comportamiento de la demanda de dinero que vincula esta segunda fase con la siguiente iniciada en 2007 [cuadro 18]. Este hecho, de difícil percepción en ese momento, señala también la anterioridad temporal y lógica de la pérdida de funciones dinerarias de la moneda local como condición de posibilidad de la relación entre aumento de la cantidad de moneda y aumento de la demanda medida en dinero que explica, por el lado monetario, la aceleración inflacionaria post 2007.

A partir de 2006, se evidencian los límites de la moneda local para funcionar como dinero y los aumentos de precios son parcialmente atribuibles a un fenómeno estrictamente monetario. Pero, durante esta etapa, quienes se desprenden de los pesos lo hacen fundamentalmente para comprar bienes. En la fase que se inicia en 2011, la situación es distinta. Parte del aumento de la cantidad de dinero, que se acelera notablemente, se traduce en atesoramiento en moneda extranjera y la demanda de dólares como reserva de valor presiona hacia la devaluación. A su vez, la inflación da señales de autonomización y tiende a estabilizarse en niveles superiores al 20% anual.¹⁹ Esta

¹⁸ Kicillof y Nahón (2006) articulaban en su explicación el impacto de la devaluación con fijaciones de márgenes extraordinarios en mercados oligopólicos.

¹⁹ Obsérvese que esta “autonomización” de la inflación no tiene nada que ver con la noción de “inercia inflacionaria”, ya que su fundamento es el proceso de pérdida de las funciones dinerarias del peso.

situación no es indiferente del contexto de reaparición del déficit fiscal y de cuenta corriente.

Como vimos en capítulos anteriores, las tensiones en el frente fiscal se evidenciaron primero. Ya en 2010 reapareció el déficit primario –si se descuentan a los ingresos corrientes las rentas de la propiedad, entre las que destacan los aportes del BCRA– y el resultado financiero fue negativo en 2009. Desde 2012, el déficit primario es abierto, aun contabilizando las rentas de la propiedad.²⁰ En 2011, la cuenta corriente volvió a ser negativa, por primera vez desde 2001.²¹ La monetización del déficit y la reaparición de tensiones cambiarias, que culminaron en la implantación del control de cambios, activaron comportamientos defensivos aprendidos a lo largo de las severas crisis de los últimos 40 años, que autonomizaron la inflación y pusieron cada vez más en el centro de las expectativas la cotización del dólar paralelo. La importancia de esta fase radica en que es el prolegómeno de la inversión de la relación entre tipo de cambio e inflación. Es decir, a partir de determinado punto, la pérdida creciente del carácter de dinero de la moneda local lleva a que los precios comiencen a ajustarse por el tipo de cambio, el peso pierde las funciones de medida de los valores y de unidad de cuenta. La Argentina de la postconvertibilidad no llegó a ese punto, pero la fase iniciada en 2011 pudo conducir allí y el peligro está latente.²²

El otro lado de la inflación: las restricciones de la oferta

Hasta aquí hemos visto que, debido a las limitaciones de la moneda nacional para funcionar como dinero, los aumentos de la oferta monetaria tendieron a transformarse, desde 2006, en aumentos de la magnitud monetaria de la demanda. Sin embargo, ello no es suficiente para explicar la inflación, es necesario explicar por qué este incremento de la demanda medida en dinero no dio lugar a un aumento suficiente del producto para neutralizarla. Los años comprendidos en el período 2003-2007 fueron de alta rentabilidad de las empresas y de indicadores sólidos en el plano fiscal y en el sector externo. Sin embargo, existen indicios de que, aun en un contexto de fuerte crecimiento, la inversión privada fue inferior a la potencial y no siguió a la expansión de la demanda.²³

²⁰ Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas, Ministerio de Economía de la Nación.

²¹ Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

²² Queda fuera de los límites de este trabajo el análisis de la maxievaluación de enero de 2014 y el manejo posterior de la política monetaria que evitaron el pasaje a la fase siguiente de pérdida de funciones dinerarias del peso.

²³ También abona esta tesis que el período de aceleración de la inflación coincide con el fin de la reactivación y comienzo del crecimiento y, con ello, del fin del crecimiento basado

Entre 1993 y 2000, la Formación Bruta de Capital Fijo fue sistemáticamente superior al Ahorro Nacional Bruto, lo que quiere decir que se financió parcialmente con ahorro externo. En otros términos, como decíamos antes, en los años noventa, el endeudamiento financió inversión y fuga de capitales. Desde 2003, el Ahorro Nacional Bruto fue sistemáticamente superior a la Formación Bruta de Capital Fijo²⁴. La contrapartida de esto fueron la remisión de utilidades al exterior y la fuga de capitales (ver *infra*). En este sentido, Manzanelli y Schorr (2013) aportan datos contundentes en relación al comportamiento inversor de las firmas industriales que integran el panel de las 500 empresas de mayor tamaño. Mientras las utilidades sobre el valor agregado crecieron más del doble entre 2002 y 2010 respecto de la convertibilidad (33,1% contra 14,5% entre 1993 y 2001), la tasa de inversión de esas firmas se redujo del 18,5% al 11,1% entre ambos períodos (Manzanelli y Schorr, 2013: 44).

Lo que se refleja en estos datos es un comportamiento reticente de la inversión que ha sido señalado por diversos autores y que ha dado lugar a importantes debates sobre sus causas (Schvarzer, 2000; Basualdo, 2000; Azpiazu y Manzanelli, 2011).

En este sentido, Astarita (2012b) plantea una hipótesis sugestiva. Siguiendo el enfoque de la Estructura Social de la Acumulación (Gordon, 1980), Astarita plantea que la inversión no responde sólo a la tasa de ganancia, tesis central del marxismo, sino que los capitalistas también toman en cuenta un conjunto de factores que refieren al ambiente social en el que se desarrollan los negocios y cuyo entramado constituye la estructura social de la acumulación. De este modo, la historia de inestabilidad económica y política, marcadas por crisis recurrentes, que a su vez dieron lugar a importantes cambios en el marco social de la acumulación, reducen el horizonte temporal de la inversión y generan comportamientos reticentes a invertir y la propensión de capitales nacionales y extranjeros a formar ahorros en moneda extranjera.²⁵

Lo que aquí nos interesa subrayar es que este comportamiento inversor reticente constituye un límite de largo plazo a las políticas de crecimiento basadas en la expansión de la demanda. Cabe destacar,

en el aumento de la utilización de la capacidad instalada. Esta relación ha sido señalada por Katz, quien considera que la inflación del período se debe centralmente a restricciones de oferta (2013).

²⁴ Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.

²⁵ Sin embargo, este trabajo, dados sus límites, no podría tratar el problema de las causas de la reticencia inversora. La adopción de otra hipótesis no afecta el hecho de que la reticencia inversora tuvo un rol central en la evolución de la oferta y, por ese medio, en el desarrollo de la inflación entre 2002 y 2013.

en este sentido, que la fuga de capitales y la remisión de utilidades experimentaron un fuerte salto en 2007 y permanecieron en niveles elevados hasta 2011, cuando a fines de año se instrumentó el control de cambios y se limitó o, directamente prohibió, la remisión de utilidades. La formación de activos en el exterior del sector privado no financiero ya experimenta un crecimiento significativo en 2007, pasando de -2939 millones de dólares a -8872 millones de dólares en sólo un año. Pero, en 2008, la fuga llega a los 23.098 millones de dólares y se mantendrá en niveles superiores a los 10.000 millones de dólares en 2009 y 2010. La remisión de utilidades al exterior supera los 3.000 millones de dólares anuales desde 2008 y los 4.000 millones de dólares en 2010, habiendo alcanzado sus máximos anteriores en 2007 con 1.725 millones y, en 2006, con 1.020 millones de dólares. Desde 2011 el balance cambiario es negativo. En 2011, la fuga de capitales vuelve a superar los 21.000 millones de dólares y la remisión de utilidades al exterior, los 4.000 millones. Es decir, el período de despegue de la inflación coincide con el de mayor salida de divisas por fuga y remisión de utilidades al exterior. Por otra parte, además de alimentar la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior, parte del mayor excedente (en particular, el excedente agropecuario) se tradujo en un aumento del consumo suntuario y de la especulación inmobiliaria que alimentaron la inflación.

Este comportamiento reticente de la inversión tiene su fundamento último en la restricción externa al crecimiento que conduce a crisis externas periódicas, siendo –como ha estudiado el estructuralismo cepalino– una restricción que se enraiza en el carácter dependiente del desarrollo capitalista. El desarrollo dependiente conduce a una reproducción de la heterogeneidad estructural del capitalismo argentino²⁶, de la dependencia tecnológica y financiera y, por lo tanto, de la acumulación de desequilibrios durante la fase expansiva.

Como analizamos en la primera parte del libro, desde 2003 se profundizó la heterogeneidad industrial entre un sector orientado a la exportación y otro orientado al mercado interno de baja productividad internacional, al tiempo que el intercambio comercial de la industria en su conjunto continuó siendo deficitario.²⁷ Además de incidir en el comportamiento inversor, la acumulación de desequilibrios en las fases expansivas y la consiguiente restricción externa al crecimiento imponen un límite a la expansión de la oferta y, por esa vía, constitu-

²⁶ Heterogeneidad entre sectores exportadores de alta productividad y sectores orientados al mercado interno de baja productividad, que hoy no divide agro de industria, sino que atraviesa a la propia industria.

²⁷ Ver en este libro “Postdata. Política económica y modo de acumulación en la postconvertibilidad”.

yen una barrera a las políticas de crecimiento basadas en la expansión de la demanda. Si el comportamiento inversor está claramente relacionado con la fase de aceleración de la inflación, la reaparición de la restricción externa evidenciada en el déficit de cuenta corriente desde 2011 señala, junto con el déficit fiscal, el paso a la última fase inflacionaria del período estudiado.

También es posible encontrar límites de la oferta vinculados a la dinámica de acumulación de capital desde 2002-2003. Como señalamos en capítulos anteriores la acumulación de capital desde 2002-2003 ha sido predominantemente capital-extensiva. Es decir, se ha basado en la profunda renovación de capital fijo de la reestructuración capitalista de los años noventa. Ello ha derivado en aumentos de productividad más bajos para tasas de inversión similares a las de aquella década.

La evolución de la composición de la inversión también revela que la inversión pública aumentó más que la inversión privada desde 2003, inversamente a lo ocurrido en los años noventa. La inversión pública pasó de representar un 9% de la IBIF en 2003 a un 20% en 2010 (Dirección Nacional de la Inversión Pública, 2011). A su vez, entre 2003 y 2006, la inversión pública en equipo durable de producción pasó de representar un 2,5% del total a un 3% del total. No podemos demostrar con los datos disponibles que la inversión pública haya tenido sistemáticamente un impacto menor en la productividad que la inversión privada, pero es una hipótesis plausible.

Por último, las políticas orientadas a evitar aumentos de las tarifas de las empresas de servicios públicos también han jugado su rol por el lado de la oferta. Como planteábamos antes, la aplicación de subsidios representó una solución de compromiso que incluyó, como contrapartida del cuasi congelamiento de tarifas, la reducción o directa desaparición de la inversión en infraestructuras ligada a las privatizadas. El impacto es difícil de medir, pero sin duda la inversión en telecomunicaciones de las telefónicas en los años noventa fue un factor relevante en los aumentos de productividad de esa década. Su reducción, por lo tanto, debió también impactar negativamente en la evolución de la productividad desde 2003.

Por lo tanto, encontramos restricciones tanto estructurales como ligadas al desenvolvimiento de la acumulación desde 2003 al aumento de la oferta que explican el impacto inflacionario del aumento de la demanda medida en dinero. A partir de 2011, la reaparición del déficit de cuenta corriente y las tensiones cambiarias consiguientes dieron lugar a una autonomización del proceso inflacionario. Ciafardini (1990) explicaba que, llegados a este punto, la inflación afecta la actividad

económica al tiempo que se acrecienta la crisis del peso como dinero, lo cual origina un estancamiento e incluso reducción del número de transacciones y un aumento de la velocidad de circulación que explican la autonomización del proceso inflacionario y el fenómeno de la estanflación.

Inflación y lucha de clases

Hasta aquí hemos visto que las políticas de crecimiento basadas en la expansión de la demanda encuentran un límite en la validación de la moneda local como dinero y en las restricciones de la oferta. Sin embargo, esto permite comprender muy poco de lo sucedido. Puede resultar suficiente para quienes se contentan con atribuir la expansión monetaria a una “mala política” de los gobiernos o para quienes consideran los fenómenos económicos como sujetos a leyes objetivas independientes de la voluntad de los hombres. Pero, para una perspectiva que pretenda penetrar en el carácter social de los fenómenos inflacionarios, es indispensable establecer el nexo entre inflación y lucha de clases. Eso es lo que vamos a intentar hacer en lo que resta de este capítulo.

Inflación y neopopulismo

El neoliberalismo constituyó, en lo esencial, una estrategia de reconstitución de la rentabilidad empresaria y de las condiciones de acumulación de capital a través de una profunda ofensiva contra el trabajo. Su especificidad fue que dicha ofensiva se desarrolló mediante la supresión de las trabas a la plena vigencia de la ley del valor. Ello supuso la articulación de restricción monetaria con desregulación y apertura internacional de los mercados –intensificación de los mecanismos de mercado– y privatizaciones –extensión de los mecanismos de mercado. Bonnet (2011) ha condensado esta estrategia con el concepto de “disciplinamiento dinerario”. Este concepto expresa una metamorfosis de la relación Estado-mercado. El Estado articula la ofensiva contra el trabajo a través de la subordinación de las relaciones mediadas por la ciudadanía a las relaciones mediadas por el dinero. Ésto se traduce en una aparente despolitización del Estado (tecnocracia) y en la sustracción de la política monetaria a la lucha de clases (independencia del Banco Central).²⁸ El régimen de convertibilidad en la

²⁸Sobre las transformaciones en el Estado y su aparente despolitización y repolitización en los años noventa y durante la postconvertibilidad, ver en este libro “Una aproximación a los cambios en la forma de Estado en Argentina (2002-2009)”.

Argentina de los años noventa fue una variable extrema de dicha estrategia.

Tras la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad, parcialmente desde 2002 y fundamentalmente desde 2003, se desarrolló un proceso de recomposición de la acumulación de capital y del poder de Estado que expresó de diversos modos esos cambios en las relaciones de fuerzas, tanto entre la burguesía y la clase obrera como al interior de la clase dominante. Como hemos visto, su rasgo central fue la reconstrucción del consenso a través de la satisfacción gradual de demandas obreras y populares. Por lo expuesto, la transformación del régimen monetario constituyó el aspecto crucial de ese fenómeno. La devaluación, al suprimir la restricción monetaria, permitió la redistribución inflacionaria de los costos de salida de la crisis, pero también hizo posible la posterior traducción inflacionaria de la presión obrera y popular.²⁹

Las restricciones de la oferta –expuestas anteriormente– implicaron límites para la canalización de las demandas obreras y populares por la vía de incrementos de productividad. En este contexto, la lógica de reconstrucción del consenso daba lugar a políticas de expansión de la demanda que incrementaban la oferta de dinero por encima de las necesidades de la circulación. El carácter limitado de la moneda local para funcionar como dinero tendió a originar, más allá de cierto punto, incrementos de la magnitud monetaria de la demanda sin correspondencia con la capacidad de compra originada en la creación de valor y, por lo tanto, aumentos de precios.

Está dinámica económico-política plantea dos consecuencias. En primer lugar, pone en crisis la distinción entre variables endógenas y exógenas al sistema económico, propia de la ciencia económica y que atraviesa todo el debate sobre las determinaciones de la oferta de dinero. La oferta de dinero originada en la política monetaria del Estado sólo puede considerarse exógena si el Estado se considera exógeno al sistema económico y si la lucha de clases se considera exterior al Estado. Sin embargo, el aumento de la oferta de dinero entre 2002 y 2013 no es el resultado de una decisión autónoma del gobierno y exógena al sistema económico, sino el producto del modo específico en que se recompusieron las condiciones económico-políticas de la reproducción del capital. Es decir, economía y política son momentos internos y necesarios de dicha reproducción concebida como totalidad orgánica.

²⁹ Astarita (2013) señala la importancia de la ruptura de la restricción monetaria para comprender la posibilidad de la traducción de las subas salariales en aumentos de precios.

En segundo lugar, la dinámica descrita constituye un mecanismo de desplazamiento hacia el futuro del desenlace del antagonismo entre capital y trabajo. Las restricciones al procesamiento de las demandas obreras y populares por la vía de incrementos de productividad no derivan en sus desenlaces posibles –represión³⁰ de las demandas o reducción de las ganancias– debido a la traducción de la presión obrera y popular en aumentos de precios. Este aspecto del fenómeno se conecta estrechamente con la lógica que organizó la recomposición y la reproducción de la dominación política en la postconvertibilidad, a la que hemos denominado “neopopulista”.

En el capítulo precedente, sosteníamos que el núcleo del fenómeno populista (y neopopulista) en América Latina es la incorporación política de grupos sociales movilizados y políticamente excluidos, en contextos de transformaciones aceleradas y de crisis de hegemonía. También que los populismos y neopopulismos latinoamericanos no resuelven la crisis de hegemonía por la vía de la institucionalización de las contradicciones sociales, sino que son expresión de la imposibilidad de dicha institucionalización. En este sentido, la “división dicotómica del campo social” y el desplazamiento del antagonismo interno al movimiento nacional-popular hacia una oposición externa –patria/anti-patria o pueblo/antipueblo– es inherente a la lógica (neo)populista de recomposición y reproducción del poder político. A su vez, Carlos Vilas (1988) señalaba como rasgo característico de los populismos latinoamericanos su orientación hacia políticas de crecimiento basadas en la expansión del consumo interno. Ambas aproximaciones al fenómeno son fácilmente conciliables y permiten establecer el vínculo entre lógica neopopulista e inflación en el caso Argentino. La incorporación de demandas obreras y populares por la vía de políticas de expansión de la demanda choca con las restricciones estructurales de la oferta –enraizadas en el carácter dependiente del capitalismo argentino– que las reducen a un “keynesianismo trunco”. La inflación señala los límites a la canalización de las demandas obreras y populares al tiempo que desplaza hacia el futuro el desenlace del antagonismo, del mismo modo que la traducción del antagonismo interno al movimiento nacional-popular en oposición exterior lo expresa y lo desplaza al mismo tiempo.

Esta dinámica de canalización/desplazamiento de las contradicciones sociales se expresó concretamente a través del impulso de un

³⁰ El término represión es utilizado aquí en su significado más general, como contener, refrenar u oprimir, y no remite sólo al sentido estrecho de reprimir por la vía del uso de la violencia material del Estado.

conjunto de causas de la expansión de la demanda medida en dinero. Dichas causas suelen presentarse como mutuamente independientes –y, en muchos casos, los debates sobre la inflación las presentan como excluyentes. A continuación, trataremos de ver, por medio del análisis de cada una de ellas, cómo se articularon modo de dominación política e inflación durante la postconvertibilidad.

El sostenimiento del tipo de cambio alto

Las altas tasas de crecimiento del período 2003-2007, que permitieron la sostenida caída del desempleo, tenían su fundamento en la devaluación de 2002 y en el sostenimiento del tipo de cambio alto competitivo. Pero, desde la perspectiva de una lógica de reconstrucción del consenso sustentada en la satisfacción gradual de demandas, ello entrañaba un potencial conflicto entre la continuidad del crecimiento económico sobre esas bases y el ascenso de las demandas salariales. Ya hemos referido a la salida de Lavagna como ministro de economía y a su significado, tanto como síntoma de un cambio en la relación entre acumulación y legitimación, como de la inversión de la jerarquía entre economía y política al interior del Estado. Ambos aspectos aparecen como dos caras del mismo problema cuando observamos la disputa de gabinete a luz del dilema de política económica que planteaban el modelo de tipo de cambio alto y la estrategia de producción de consenso.

El núcleo de las disputas era la posición de Lavagna de limitar las subas salariales –a las que atribuía la aceleración de la inflación– y en menor medida la expansión fiscal, por el mismo motivo. La posición de Lavagna era consistente con un patrón de acumulación delineado desde la salida de la convertibilidad, sustentado en la exportación a partir de costos salariales bajos. Bajo esas condiciones, en ausencia de aumentos de la productividad más vigorosos, resultaba necesario limitar los aumentos salariales y la expansión de la demanda.

La cuestión tiene varias aristas relacionadas con la inflación, aquí sólo nos concentraremos en aquellas que consideramos más relevantes para nuestro problema.

En primer lugar, como vimos antes, e independientemente de los argumentos sobre los que Lavagna basara su posición, durante 2005 se desarrollaba una segunda fase de inflación cambiaria posibilitada por la recuperación de la demanda interna. Es decir, una condición para evitar el alza de precios, posibilitada por la devaluación y posterior sostenimiento del tipo de cambio, era reprimir las demandas salariales y la expansión del gasto público. Pero eso significaba prolongar

en el tiempo la situación de debilidad de los trabajadores ocupados que explicó el “éxito” de la devaluación. En contraposición, los años 2004-2006 fueron de disminución del desempleo, aumento de los conflictos laborales y de recuperación del poder sindical.

En segundo lugar, como señalábamos más arriba, la emisión monetaria originada en la intervención del BCRA en el mercado cambiario sólo era parcialmente neutralizada por las políticas de esterilización. El aumento de la demanda medida en dinero allí originada y las restricciones de la oferta tendieron a traducir esa emisión en presión inflacionaria. Las recomendaciones de contener la expansión monetaria y fiscal para limitar las consecuencias inflacionarias ligadas al sostenimiento del tipo de cambio alto competitivo, expuestas por economistas afines a dicho modelo, apuntaban a este problema (Damill y Frenkel, 2009). Nuevamente, la aplicación de políticas fiscal y monetaria restrictivas chocaban contra una lógica política de incorporación de demandas mediante políticas expansivas.

En tercer lugar, el aumento del salario real sin mediar nuevas devaluaciones equivale a un aumento del salario en dólares. Más allá de cierto punto, la recuperación salarial presiona sobre el nivel del tipo de cambio competitivo y, por esa vía, sobre los precios. El planteo de Asiaín (2010), que explica la inflación argentina del período por un desajuste entre la expresión en dólares del salario real al que aspiran los trabajadores y el salario en dólares requerido por un tipo de cambio competitivo para la industria, apunta a esta tensión. Aunque Asiaín enfatiza el impacto del aumento del precio internacional de los alimentos en esta dinámica, la tensión es inherente al modelo, en el sentido que, nuevamente, en presencia de una clase obrera revitalizada y en ausencia de aumentos de productividad suficientemente vigorosos, los intentos de sostener simultáneamente tipo de cambio competitivo y recomposición salarial se traducen en aumento de precios.

Aumentos salariales y puja distributiva

Amico (2013) sostiene una explicación de la inflación por puja distributiva y señala que, con la excepción de 2007 y 2008 que atribuye al alza mundial de los alimentos, el salario real aumenta, lo que estaría manifestando que el impulso de la puja proviene de la lucha de los trabajadores por incrementar su salario real. Podemos agregar que esa tendencia vuelve a interrumpirse en 2013 y que el salario real ha caído nuevamente en 2014. Después volveremos sobre los problemas que plantea la interpretación de esta evolución [cuadro 12].

Pero la pregunta que surge inmediatamente es bajo qué condiciones

los aumentos de salarios se traducen en incrementos de los precios. Si se considera, como los poskeynesianos, al salario un componente del costo de producción y al precio determinado por los costos, la conclusión es que todo aumento de salarios debe traducirse con mayor o menor retardo en aumento de precios. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría del valor-trabajo, los aumentos de salarios pueden o no dar lugar a aumentos de precios. Ello dependerá del régimen monetario. En un régimen monetario que permite la desvalorización del dinero, y en la medida en que el Estado rompe la restricción monetaria, la oferta monetaria se acomoda convalidando el traslado a precios de los aumentos salariales. Esto equivale a la creación de poder de compra sin correspondencia con el poder adquisitivo creado en la producción.

Esta distinción es central para el problema que estamos tratando, porque remite a una modalidad específica de respuesta estatal frente a las demandas de aumento salarial y no a una ley general. Aglietta (1979) muestra para el caso de Estados Unidos que los aumentos de salarios durante el período de vigencia del patrón oro solían reducir las ganancias mientras que la ruptura de la restricción monetaria generalizó la expresión inflacionaria de la puja distributiva. Shaikh (2006) y Aglietta (1979) muestran, además, que, en los Estados Unidos de la segunda posguerra, la inflación constituyó un efectivo mecanismo de ajuste del salario real. Ambos, más específicamente, señalan cómo los aumentos de productividad en dicho período permitieron aumentos conjuntos del salario real y la tasa de plusvalor, que, en condiciones de incremento o estabilidad del salario nominal, requirieron de la desvalorización del dinero y de los consiguientes aumentos, en general moderados, o de la estabilidad de los precios.

En la Argentina de la postconvertibilidad, el aumento de las demandas salariales –en un contexto de caída del desempleo, fortalecimiento sindical y salarios formales determinados en negociaciones colectivas centralizadas por rama de producción– se articuló con pobres aumentos de productividad. La alternativa a la constricción de las ganancias o a la represión de las demandas salariales fue la convalidación de aumentos de precios mediante el acomodo de la oferta monetaria.

La acomodación de la oferta monetaria es central para comprender el desplazamiento inflacionario del antagonismo capital/trabajo como forma particular de desarrollo de la lucha de clases. Este mecanismo es naturalizado en los planteos poskeynesianos y, más en general, por todos aquellos que consideran la inflación originada en aumentos salariales como un caso más de inflación de costos. Se oscurece también

de este modo el vínculo entre el cambio en el régimen monetario y el desarrollo de las luchas sociales y, en particular, de la lucha de clases. Si la crisis de la convertibilidad se originó en el bloqueo popular a la vía deflacionaria de salida de la crisis, la devaluación fue, al mismo tiempo, la respuesta capitalista, es decir, la ofensiva inflacionaria contra el trabajo. Sin embargo, la recomposición de la acumulación y de la dominación lograda por esa vía debía registrar el bloqueo al ajuste neoliberal que la había originado.

El sendero de recomposición del salario real, junto con los contraataques inflacionarios de 2007-2008 y 2013-2014, señalan las tensiones y los límites de una lógica de incorporación de las demandas salariales por la vía de políticas expansivas en un contexto de restricciones de la oferta. La desvalorización continua de la moneda, requerida por el desplazamiento inflacionario del antagonismo capital/trabajo, acaba por afectar la acumulación de capital. Es decir, el mecanismo de desplazamiento no es ilimitado y en algún momento la crisis estalla. En esos contextos, la persistencia en la expansión monetaria conduce, en el extremo, a la disolución del dinero y a la hiperinflación. La reimposición de la restricción monetaria requiere, a su vez, de una derrota de la clase obrera que vuelva viable su disciplinamiento. El año 1989 demuestra que ambas posibilidades pueden ir de la mano. Los años 2013 y 2014 señalan que Argentina todavía está lejos de esos escenarios, aunque la distancia lógica no es reducible a distancia temporal.

Otra vez los subsidios

El aumento de los subsidios expresó la lógica de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo como ninguna otra variable de política económica.

La salida de la convertibilidad, decíamos, supuso cambios en las relaciones de fuerza entre clase dominante y clase dominada y, también, al interior de la clase dominante. La contención de las tarifas expresó la imposibilidad de restaurar la legitimidad política quebrada en 2001 desplazando, siquiera parcialmente, los costos de la devaluación para las privatizadas sobre trabajadores y pequeños propietarios. Pero, al mismo tiempo, el congelamiento de las tarifas significó una alteración de precios relativos favorable al capital productivo, especialmente el orientado a las exportaciones, que pudo recuperar su tasa de ganancia descargando parcialmente los costos sobre los perdedores

inmediatos de la contienda, bancos y, fundamentalmente, privatizadas.³¹

Sin embargo, como vimos, ni el gobierno de Duhalde ni los gobiernos kirchneristas desarrollaron una política de ruptura con el proceso privatizador. Los subsidios constituyeron un compromiso frente a la contradicción entre la lógica política de reconstrucción del consenso, que impedía aumentar las tarifas, y la continuidad respecto de las privatizaciones realizadas en los años noventa, que exigía compensar aunque sea parcialmente a las concesionarias.

Pero el compromiso no significó una resolución, sino su desplazamiento hacia el futuro. En la medida en que se aceleró la inflación, se desarrolló un proceso de retroalimentación entre inflación y subsidios, y los intentos del gobierno de desactivarlo iniciando procesos de recorte chocó con los límites de la legitimidad política y, en el mejor de los casos, consiguió aplicar recortes marginales.

A partir de 2009, reapareció el déficit fiscal y la asociación entre aumentos de los subsidios y asistencia del BCRA al Tesoro señala el rol de los subsidios en la reaparición del déficit y la determinación por esta vía del aumento de la emisión monetaria (Capello, Grión y Valsagna, 2013). Pero la monetización del déficit tiene límites, agudizados en condiciones de moneda débil y restricciones estructurales a la expansión de la oferta, al igual que tienen límites los intentos de conciliar aumentos de salario real y sostenimiento del tipo de cambio alto competitivo o de postergar el desenlace de la puja distributiva convalidando con acomodo de la oferta monetaria el traslado a precios de los aumentos salariales. Todos estos factores incidieron en uno u otro momento, a veces combinados, en la aceleración o sostenimiento de altos niveles de inflación y todos expresan los límites de los intentos de canalizar demandas populares por medio de políticas de expansión de la demanda en una economía dependiente.

*El conflicto con la burguesía agraria de 2008,
el déficit fiscal y el sacrificio de la moneda*

El vínculo entre déficit e inflación en el pensamiento marxista pre-

³¹ El sector bancario fue inicialmente afectado por la caída de las tasas de interés y la notable reducción inmediata del negocio bancario. Pero la pesificación asimétrica de los créditos y depósitos fue financiada por el Estado a través de una amplia emisión de bonos que se pagaron puntualmente y, una vez recuperado el negocio bancario, la tasa de ganancia bancaria fue superior a la de los años noventa. Eso explica la casi inexistencia de conflictos entre los gobiernos de la postconvertibilidad y el sector financiero local, aun en ocasión de la estatización de las AFJP.

senta dos aproximaciones posibles que, además, son complementarias. En primer lugar, la emisión de signo de valor como mecanismo de financiamiento del déficit público. En segundo lugar, especialmente para el caso del dinero fiduciario, las dificultades del Estado para financiar el déficit mediante el incremento de la presión impositiva afectan la legitimidad de la política monetaria (Aglietta y Orlean, 1990; Brunhoff, 1980). Desde esta perspectiva, puede comprenderse la relevancia que tuvo para la evolución de la inflación el resultado del conflicto de 2008 entre el gobierno y la burguesía agraria en torno a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.³²

En 2008 todavía las cuentas públicas exhibían superávit fiscal primario y financiero. Sin embargo, se encendían las luces de alarma debido a dos fenómenos alimentados por la aceleración de la inflación el año anterior. En primer lugar, el ritmo de aumento de los subsidios a la energía, el transporte y los servicios públicos. En segundo lugar, el impacto en el resultado financiero del pago de intereses de la deuda externa, que se vería agudizado en los años siguientes menos por el aumento de los intereses pagados que por la aceleración de la tasa de devaluación del peso. La aceleración de la tasa de devaluación estaba, a su vez, directamente vinculada a la aceleración de la inflación durante 2007 y 2008. Estos fueron años de fuertes incrementos en el precio de los alimentos a nivel mundial. Este hecho impactaba en la aceleración de la inflación, aunque refractado y amplificado por los rasgos estructurales y la dinámica económico-política hasta aquí descritos.

La amenaza de reaparición del déficit fiscal –al igual que la reaparición del déficit de cuenta corriente desde 2011– resultaba preocupante debido a la exclusión de facto del Estado argentino del mercado internacional de crédito. Ello suponía pocas alternativas: endeudamiento interno, monetización del déficit o ajuste fiscal. Éste fue el contexto en el que, en marzo de 2008, se anunció la Resolución N°125, la cual establecía un régimen de retenciones móviles a la exportación de productos agropecuarios. Su implementación suponía, dados los precios internacionales vigentes, un fuerte aumento de los derechos de exportación. De este modo, las retenciones móviles cumplían en la coyuntura dos funciones: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales, pero, fundamentalmente, incrementar la presión impositiva sobre el sector y, por lo tanto, los recursos tributarios.

³² Al igual que la salida de Roberto Lavagna y la reaparición de la restricción externa, la llamada “crisis del campo” es un hito recurrente en estas páginas. En las conclusiones generales volveremos sobre los problemas de periodización de la década kirchnerista.

La derrota del gobierno frente a la rebelión de las patronales agropecuarias significó un bloqueo objetivo, sostenido en las relaciones de fuerzas sociales que se pusieron de manifiesto en el conflicto, al aumento de la presión impositiva sobre la gran burguesía exportadora, no sólo la agraria. La respuesta del gobierno fue la salida hacia adelante.

Como señalamos antes, las necesidades de financiamiento para sostener subsidios y, en menor medida, pagar deuda externa, no dieron lugar inmediatamente al ajuste del gasto público. En cambio, se produjo una profundización de la disputa por el excedente a través de la estatización de las AFJP; la presión para que las empresas de las cuales el Estado es accionista –producto de la estatización de las AFJP– distribyeran más dividendos; la puja con la oposición política, y en menor medida sectores del capital bancario y financiero, por el uso de las reservas del BCRA para pagar deuda externa, etc.

Sin embargo, al mismo tiempo, la exclusión de un aumento de la presión impositiva sobre la gran burguesía dio lugar, tendencialmente, a una estructura tributaria más regresiva y a una caída de la proporción de ingresos tributarios sobre los ingresos corrientes. Los derechos a la exportación como porcentaje del PBI habían aumentado desde el 2,45% en 2003 al 3,49% en 2008, pero cayeron hasta 2012 al 2,83% (un 8,9% respecto de 2008). Desde 2008 también creció, dentro de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el peso de la tributación a las personas físicas, que incluye a la cuarta categoría correspondiente a asalariados. El Impuesto a las Ganancias a corporaciones y otras empresas, que había incrementado su porcentaje del PBI desde el 2,28% en 2003 al 3,20% en 2008 (un 40,3%), lo hizo un 16,25% desde 2008, representando un 3,72% del PBI en 2012. Mientras que la tributación de ganancias de las personas físicas, que había incrementado su porcentaje respecto del PBI desde el 1,32% en 2003 hasta 1,7% en 2008 (28,8%), lo hizo desde 2008 hasta 2012 un 47,6%, representando ese año un 2,51% del PBI. A su vez, la proporción de ingresos tributarios sobre los ingresos corrientes, que desde 2003 hasta 2006 se mantuvo en niveles cercanos al 80%, ya en 2007 y 2008 descendió debajo del 70% y, desde 2009, debajo del 60%. La contracara fue el aumento de la asistencia del BCRA y el endeudamiento con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Tenemos, entonces, dos resultados del bloqueo de la gran burguesía al aumento de la presión impositiva. En primer lugar, la fuga hacia adelante para evitar el ajuste cobró la forma de una intensificación de los conflictos con sectores empresarios. Se profundizó la lógica neopo-

pulista de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo hacia la oposición con fracciones del capital o grupos económicos particulares, cuyo caso más emblemático –pero poco relevante para la cuestión aquí tratada– es el del grupo Clarín. Sin embargo, la exclusión de la alternativa de descargar el creciente déficit sobre la tributación de la gran burguesía resultó en un incremento de la presión impositiva sobre los asalariados registrados. De modo que el aumento de las transferencias a los más pobres ocurrida desde 2009 fue una redistribución entre grupos de trabajadores más que entre capitalistas y trabajadores. A su vez, el desplazamiento hacia adelante del ajuste se hizo cada vez más difícil. Todo indica que desde 2013, y particularmente en 2014, comenzó una fase de ajuste fiscal que incluye la reducción salarial real, pero que avanza con tensiones y retrocesos, dado que se opone (y debilita) a la lógica de construcción de consenso del kirchnerismo.

Pero, en segundo lugar, sobre esta base impositiva estrecha, la monetización del déficit consolidó la inflación. Es importante destacar aquí que no hay una relación mecánica entre ambos fenómenos, pero que si, por un lado, la monetización del déficit no puede realizarse indefinidamente sin socavar el valor de la moneda, el veto de la gran burguesía al aumento de la presión impositiva socava la legitimidad de la política monetaria expansiva. Es decir, la canalización de las demandas obreras y populares mediante la expansión de la demanda se traduce en desvalorización del dinero y aumento de precios, ya que no se sostiene ni sobre la base de un aumento correspondiente de la producción ni en un incremento de la apropiación del excedente por parte del Estado. Aglietta y Orléan (1990) señalan que en Alemania, en vísperas de la hiperinflación, la clase dominante alimentaba la suba de precios mediante el veto a la apropiación de su riqueza por la vía impositiva y la exportación masiva de capital y obtenía a cambio la posibilidad de ceder a las reivindicaciones obreras sin costo verdadero. Conocemos esa historia. En 1989, la burguesía local, la nacional y la extranjera, sacrificó al dinero para obtener la rendición incondicional de la clase obrera. Hoy, muy lejos de una hiperinflación, quizás espera que el recuerdo sea suficiente.

Conclusiones

A lo largo del artículo, hemos tratado de comprender la naturaleza de la inflación en Argentina durante la postconvertibilidad. La inflación es, en lo fundamental, un modo particular de existencia del antagonismo entre capital y trabajo. La pregunta, entonces, no debe ser cuáles son las causas de la inflación, sino, más bien, cuál es el marco

que posibilita que las contradicciones sociales se expresen de manera inflacionaria. La diferencia entre ambas preguntas es sensible, ya que las causas del aumento de precios en coyunturas determinadas pueden hallarse en una multiplicidad de fenómenos que van desde la puja distributiva hasta tensiones originadas en el comercio exterior, fenómenos que en otros contextos no originan subas generalizadas de precios.

Lo que hemos planteado es que, tras la crisis de 2001, una dimensión central de la recomposición neopopulista de la dominación política fue la canalización de las demandas obreras y populares a través de políticas de expansión de la demanda. Pero las políticas de expansión de la demanda se vieron doblemente limitadas. En primer lugar, el carácter limitado de las funciones dinerarias de la moneda nacional condujo a que, más allá de cierto punto, los aumentos de la oferta de dinero tendieran a traducirse en aumentos de la demanda medida en dinero, para usar la expresión de Ciafardini (1990). En segundo lugar, las restricciones de la oferta –las estructurales, enraizadas en el carácter dependiente del capitalismo argentino, y las ligadas al modo de acumulación– limitaron la respuesta productiva al aumento de la magnitud monetaria de la demanda. Bajo estas condiciones, las políticas de expansión de la demanda se tradujeron en aumentos de precios. Es decir, la cantidad de dinero en curso excedió las necesidades de la circulación de mercancías o, lo que es lo mismo, el poder de compra medido en dinero excedió a aquél determinado por la producción de valor.

De esta hipótesis se deducen varias conclusiones.

En primer lugar, la inflación tiene un componente específicamente monetario, es decir, requiere de la ruptura de la restricción monetaria o, lo que es lo mismo, de un régimen monetario que permita la desvalorización del dinero. Como plantea Aglietta (1979), la restricción monetaria es objetiva, ya que depende de la producción de valor, y su violación equivale a una desvalorización del dinero. Sin embargo, los límites de la expansión monetaria no inflacionaria son bastante flexibles. Esos límites dependen del grado en que el dinero fiduciario funcione como dinero, es decir, como equivalente general o figura autónoma de valor. En la medida que esto ocurra, todo exceso de moneda respecto de las necesidades de circulación se atesora. Lo que hemos sostenido es que esos límites en Argentina se demostraron bastante estrechos.

En segundo lugar, el fenómeno inflacionario no es exclusivamente monetario y exige un análisis de la respuesta de la oferta a los aumen-

tos de la demanda. Esta respuesta no es mecánica y, para el caso estudiado, se evidencian un conjunto de restricciones. En primer lugar, una restricción estructural que impone límites a la expansión de la producción a raíz de los desequilibrios acumulativos originados en la dependencia tecnológica y financiera de la acumulación de capital. La acumulación de desequilibrios durante la fase expansiva impacta especialmente en el sector externo y origina presiones devaluatorias. Una segunda restricción debida a lo que se ha denominado reticencia inversora del capital local (nacional y extranjero), que se traduce en una inversión inferior a la potencial y que tiene como contracara la formación de ahorros en moneda extranjera y la remisión de utilidades al exterior. Este comportamiento impacta en la evolución de la oferta y también agudizando los desequilibrios en el sector externo. Por último, una restricción originada en el carácter predominantemente capital-extensivo de la acumulación de capital desde 2003, que ha limitado los aumentos de productividad.

En tercer lugar, lo dicho constituye sólo condición de posibilidad de la inflación y no basta para explicarla. La inflación ha tenido lugar porque, en dicho contexto, se desarrolló durante el período una política monetaria expansiva originada en la búsqueda de canalizar las demandas obreras y populares a través de la expansión de la demanda. Este modo de considerar la relación entre expansión monetaria y lucha de clases pone en crisis la distinción exógeno/endógeno propia de la ciencia económica. La expansión monetaria fue función de la presión obrera, o lo que es lo mismo, restringir la emisión monetaria era equivalente a reprimir las demandas obreras. Pero eso no depende simplemente de la voluntad política sino de las relaciones de fuerzas sociales. De la voluntad política depende la decisión o no de reprimir las demandas obreras, su éxito es otra cosa.

Sin embargo, en cuarto lugar, las relaciones de fuerza implican al menos dos polos y si esa presión obrera se ha traducido en inflación es también porque los empresarios han podido trasladar los aumentos salariales a precios –conservando sus ganancias–, limitar la inversión y fugar capitales. De este modo, la acomodación de la oferta monetaria a las demandas obreras y populares equivale a un desplazamiento hacia el futuro de la resolución del antagonismo entre capital y trabajo cuyo costo es la inflación o, su otra cara, la desvalorización de la moneda y su pérdida creciente de funciones dinerarias. Ésto se ha manifestado con crudeza con la reaparición del déficit fiscal en condiciones en las que la burguesía fue capaz de bloquear el aumento de la presión impositiva– y del déficit de cuenta corriente, en el que –sobre

la base de la restricción externa estructural– tuvo un papel central la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior. La nueva situación significó el pasaje a una fase ulterior de debilitamiento de la moneda local y a un cambio de dinámica de la inflación.

En este sentido, hemos identificado diferentes fases de la inflación a lo largo del período.

Una primera fase (2002-2003) corresponde a una primera ronda de inflación cambiaria, cuyo impulso provino esencialmente del ajuste de precios de los bienes transables. Este primer aumento de los precios resultó limitado por la magnitud de la crisis que derrumbó la demanda y, en particular, por la debilidad obrera, herencia de los años noventa, que explica el “éxito” de esta devaluación en comparación con otras anteriores.

Una segunda fase se inicia a fines de 2004 y se extiende hasta 2006, pudiendo considerarse como una segunda ronda de inflación cambiaria. Este reajuste de precios postdevaluación fue liderado por los no transables y tuvo su condición de posibilidad en la recuperación de la demanda, en particular, en la revitalización de la acción obrera que impulsó, en el marco de negociaciones paritarias, la recuperación salarial. El año 2006 constituye, sin embargo, un año de transición, ya que muestra una caída de la demanda de dinero que señala límites monetarios a las políticas expansivas del gobierno. La pérdida –en principio limitada, pero creciente– de la función de reserva de valor del peso se traduce inicialmente en la tendencia de los agentes a deshacerse de los pesos a cambio de bienes. Es a partir de aquí que las condiciones arriba señaladas, acomodación de la oferta de dinero a la presión obrera y popular en condiciones de moneda débil y restricciones de la oferta, comienzan a operar plenamente. Los mecanismos concretos a través de los cuales esta lógica opera, esto es, las causas inmediatas del aumento de precios, son variados: sostenimiento del tipo de cambio, puja distributiva y aumento de los subsidios a servicios privatizados, transporte y energía son los que analizamos.

A partir de 2011, en condiciones de déficit fiscal y de cuenta corriente, se inicia una última fase en la que se desarrolla el atesoramiento en moneda extranjera y el aumento de precios se autonomiza de la emisión monetaria.³³ Esta autonomización se origina en la pérdida

³³ Aunque no lo hemos analizado en detalle, el atesoramiento en moneda extranjera se acrecentó en la medida en que las tasas de interés permanecieron debajo de la tasa de inflación. Pero éste es otro aspecto del mismo fenómeno, se evita el ajuste y la reimposición de la restricción monetaria buscando canalizar la presión obrera por medio del aumento o al menos sostenimiento de la demanda agregada, lo que se torna cada vez más difícil dada la debilidad de la moneda y las restricciones de la oferta.

creciente de funciones dinerarias del peso y nada tiene que ver con la inflación inercial. Se trata del paso a previo al ajuste pleno de los precios en función de la variación del tipo de cambio. Cuando esto último sucede, el peso ha perdido toda función como medida de los valores y unidad de cuenta y se limita a ser un medio de circulación, lo que puede conducir a situaciones de hiperinflación. Esto no ocurrió y lo sucedido después de la devaluación de enero de 2014 parece haber alejado esa posibilidad.

A lo largo del trabajo hemos referido que el carácter limitado de la moneda nacional como dinero y la reticencia inversora, dos hipótesis que resultan centrales para la argumentación, se fundamentan en la adaptación de los comportamientos a procesos de largo plazo. Ya que su explicación requiere una investigación más vasta, de carácter comparativo y de largo plazo, en los límites de este trabajo debimos conformarnos con constatar su existencia. Sin embargo, respecto de la primera hipótesis y, al menos para comprender ciertos comportamientos de corto plazo, resulta sugerente una distinción que realiza Suzanne de Brunhoff (1980).

Suzanne de Brunhoff distingue dos prácticas monetarias del Estado: la administración y la sanción política. Ambas prácticas monetarias están subordinadas al imperativo último de toda intervención estatal sobre la moneda, la reproducción del equivalente general. No se trata de un imperativo moral o de una regla fijada por ninguna ley orgánica del Banco Central, se trata de una restricción impuesta por el rol que juega el dinero para la vigencia de la ley del valor. Es decir, el carácter objetivo de la restricción monetaria a la que nos referíamos antes.

La administración monetaria refiere a la práctica cotidiana del Banco Central y se caracteriza por la adecuación de la emisión monetaria a la demanda de dinero. En la medida en que la administración monetaria viene a cerrar el circuito monetario temporariamente desfasado, no se trata más que de un desplazamiento de la obligación monetaria desde el dinero bancario al dinero nacional. Esta práctica no reviste consecuencias graves a menos que el mecanismo de desplazamiento de las obligaciones ponga en riesgo la validez del dinero nacional amenazando con la crisis a todo el sistema monetario. Cuando esto sucede, la reproducción del equivalente general exige una sanción política, es decir, una intervención estatal que reconstituya la validez del dinero nacional reimponiendo la restricción monetaria, típicamente la devaluación de la moneda.

Lo importante para lo que estamos considerando es que ambas prácticas estatales, para ser exitosas, deben proceder como si se tratara de

intervenciones autónomas, orientadas a preservar la validez, estabilidad y neutralidad de la moneda. En particular, la sanción política debe aparecer como un arbitraje del Estado, situado por encima de los conflictos y hecho a título del interés general. En la medida en que la administración monetaria del Banco Central aparece subordinada a “intereses privados”, o que la sanción política aparece como una intervención discrecional y/o incoherente, ello afecta la validez del dinero. Si bien se trata de una ilusión, lo que ella encubre no es la pura arbitrariedad, sino el carácter clasista de la reimposición de la restricción monetaria necesaria para restaurar la validez del equivalente general.

La independencia del Banco Central, propia de las políticas neoliberales, equivale a la sustracción de la política monetaria a la lucha de clases y, precisamente por eso, su subordinación más plena a las necesidades de la acumulación capitalista. La continuidad de la traducción de la presión obrera en expansión monetaria equivale a la absorción de la política monetaria por el conflicto capital/trabajo y, precisamente por eso, su autonomización respecto de las necesidades de la acumulación. La administración monetaria acomoda la oferta a las demandas obreras, pero a costa de disolver el dinero.

Desde esta perspectiva resulta comprensible que, sobre la base de comportamientos aprendidos en procesos de largo plazo, la salida de Lavagna a finales de 2005 o la continuidad de la expansión monetaria y fiscal en momentos de suba de precios, resultaron evidencias suficientes de la renuncia a la sanción política para la conservación y/o restauración de la validez del dinero. Si esta hipótesis pudiera extenderse a aquellos procesos de más largo plazo, quizás descubriéramos que el secreto más recóndito de la inflación recurrente y de la crisis del dinero en Argentina es la capacidad de los trabajadores de resistir las ofensivas del capital y de presionar para la obtención de conquistas. Comparaciones de largo plazo con Chile y Brasil permitirían confrontarlo.

POSTDATA

Las “clases medias” frente al kirchnerismo: entre la crisis de representación y el rechazo del populismo

En la segunda parte de este libro, dedicamos una buena parte del análisis de la protesta y la conflictividad social durante la postconvertibilidad a la creciente movilización de las “clases medias” especialmente las urbanas— desde 2006; a su rol en el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria; y a los “cacerolazos” de 2012 y 2013. También referimos brevemente a la tradición antipopulista de las “clases medias” urbanas. En ese sentido, señalamos cómo la distinción representación/participación afectó a su relación con el régimen político postconvertibilidad y con la modalidad neopopulista de dominación política.

La comprensión cabal de aquel proceso de movilización y de la evolución de la relación entre “clases medias” y gobierno requiere, sin embargo, una mayor profundización en el análisis del vínculo que la movilización antikirchnerista de “clase media” manifiesta entre crisis de representación, rechazo de la política y antipopulismo.

Dada la importancia que ha tenido la acción de las “clases medias” en la dinámica política y en la modalidad de resolución de las crisis desde 1989, vamos a dedicar a ello las próximas notas¹, antes de pasar a las conclusiones generales en las que intentaremos una aproximación de conjunto a la dinámica económico-política de la Argentina kirchnerista.

¹ Estas notas reproducen en gran medida lo expuesto en Piva (2014).

La “clase media”: ¿clase o identidad?

El problema de los “sectores medios” o de las “clases medias” ha ocupado un lugar ciertamente importante en la historia de las ciencias sociales, en particular, en la sociología. El término “clase media” se remonta a su utilización para denominar a la burguesía ascendente, así como diversos esquemas o modelos de tres o más clases o estratos son anteriores a la sociología y a la disputa con el marxismo. Sin embargo, su papel en el rechazo de los modelos basados en el antagonismo capital/trabajo, propios de la tradición marxista, es inocultable desde la obra de Weber, pasando por el funcionalismo de Parsons, hasta las teorías de la estratificación y de la movilidad social de la segunda posguerra. Por otro lado, son inocultables las dificultades para salir del clásico esquema dicotómico. Las “clases medias” se han convertido en una especie de bolsa donde termina todo lo que no encaja ni en “burguesía” ni en “clase obrera” –en muchos casos siendo lo único que tienen en común entre sí– o que, pudiendo encajar, le es sustraído en cuestionables decisiones teóricas. También debe decirse que el problema de las “clases medias” fue el pantano del que nunca pudo salir el pensamiento marxista o, al menos, del que no salió sin desgarramientos y transformaciones que afectaran su coherencia interna. Detrás de ello se ocultaba la ausencia de una teoría marxista de las clases, nunca desarrollada por Marx y abordada de manera incompleta o insatisfactoria por sus sucesores.

Más allá de los debates y del papel ideológico de la noción de “clase media”, la evidencia indica, y ello funda el verdadero problema, la existencia de actitudes, representaciones, modos y orientaciones de la acción de determinados grupos de individuos que se diferencian de otros grupos subalternos –constituidos mayoritariamente por asalariados– y de la clase dominante –constituida mayoritariamente por capitalistas de la ciudad y del campo. Pero que, además, generalmente, se orientan hacia tal diferenciación, es decir, que la búsqueda de dicha diferenciación es un motivo de sus acciones.

La explicación de este hecho condujo a muchos investigadores –incluidos los marxistas– a buscar un fundamento objetivo, de orden económico-material y/o normativo, basado en juicios de valor, de la existencia de “sectores medios”.

Empecemos planteando que ni para los marxistas ni para los sociólogos fueron un problema las “viejas clases medias”, constituidas por la pequeña burguesía, propietarios de medios de producción y cambio no liberados del trabajo. Éstas tienden a reducir su proporción en la sociedad con el desarrollo del capitalismo y se comprende fácilmente

su diferencia con la burguesía y el proletariado. El desafío lo presentaron las denominadas “nuevas clases medias”, constituidas mayoritariamente por asalariados que presentan orientaciones que divergen significativamente de los otros grupos obreros y que se asemejan en diversos aspectos a la vieja pequeña burguesía. Estas “nuevas clases medias” crecieron en términos absolutos y relativos durante el siglo XX y sus actitudes, representaciones, orientaciones y modos de actuar han sido descriptos, pero no satisfactoriamente explicados.

La búsqueda de un fundamento objetivo a dichos fenómenos se remonta a Weber, con su distinción entre situación de clase –originada en capacidades diferenciales de competencia en el mercado– y situación de status, debida al prestigio social (Weber, 1996). En Parsons, y el funcionalismo en general, se otorgó centralidad a la construcción de escalas ocupacionales ordenadas según prestigio social, además de haber puesto a las orientaciones de las “clases medias” y a la adecuación/inadecuación entre roles y expectativas en el centro de las explicaciones del nazismo y el fascismo (Parsons, 1976). Fue en ese marco, y fundamentalmente en la sociología de posguerra, donde se vinculó más claramente ese conjunto de orientaciones de la acción con las ocupaciones asalariadas no manuales y con aquellas que requerían calificaciones técnico-profesionales, al tiempo que se planteaba la tendencia al crecimiento absoluto y relativo de esos empleos. No tenemos espacio aquí para referirnos a la multitud de trabajos y diversidad de enfoques, sólo para mencionar algunos remitimos a Lipset y Bendix (1963), Mayer (1961), Lockwood (1962) y Dahrendorf (1979). Cabe destacar la influencia en las últimas dos décadas de las investigaciones de Goldthorpe sobre estratificación social, aunque su trabajo se remonta a fines de los años sesenta. En particular, sobre la cuestión de las “clases medias”, se ha difundido el uso de las categorías de “clase de servicio” –constituida por profesionales, funcionarios, gerentes y mandos medios no manuales en general– y de “clases intermedias” –que incluyen empleados no manuales, técnicos y supervisores no manuales y manuales y a la vieja pequeña burguesía² (Goldthorpe y McKnight, 2004). Ha sido muy importante también la influencia de Bourdieu (1988) en los estudios sobre las representaciones y prácticas que caracterizan a estos sectores y sobre sus estrategias de reproducción y distinción.³

² En la diferencia entre ambas categorías incide, entre otras variables, el tipo de relación de empleo, lo que incluye el tipo de contrato y la calidad, beneficios y oportunidades de promoción que ofrece el empleo.

³ Para una introducción a los debates conceptuales sobre estructura de clases y estratificación social y en particular sobre “clases medias”, ver Crompton (1994) y Sembler (2006).

En definitiva, la sociología ha tendido a identificar a las “nuevas clases medias” con el trabajo no manual y con la posesión de determinados conocimientos, grados de control y autonomía en el proceso de trabajo.

En el marxismo, más allá de la estrecha definición de clase obrera de Poulantzas (1985), que excluía todo el trabajo improductivo, el esfuerzo estuvo orientado a la especificación de “posiciones ambiguas” o “situaciones contradictorias de clase” (Carchedi, 1977; Wright, 1983), es decir, las de aquellos asalariados que son constituidos por las relaciones sociales en las que existen como personificaciones del capital frente al trabajo y del trabajo frente al capital (Piva, 2008).⁴

De un modo general y provisorio, podemos decir que, en todos estos casos, se destaca un sector de los asalariados con una capacidad diferencial para competir en el mercado de trabajo, lo que tiene efectos, entre otras variables, en el tipo de empleo, los ingresos y el grado de control y autonomía en el proceso de trabajo. Este “fundamento objetivo” puede ciertamente tener efectos sobre ciertas representaciones y prácticas que los identifiquen como “clase media”,

1. Porque la capacidad diferencial de venta de la fuerza de trabajo se traduce en condición de posibilidad de una diferenciación de status;
2. Porque la posibilidad objetiva de movilidad social ascendente, promoción, logros de carrera, etc. posibilitan el desarrollo de actitudes individualistas, del ideal de promoción y logro como motivo de la acción y actitudes conservadoras del status quo, etc. que los acerquen a la vieja pequeña burguesía;
3. Porque las chances diferenciales de vida vuelven posible (aunque esto es muy variable entre épocas y regiones) la interacción regular y la vecindad geográfica entre sí y con la vieja “clase media” propietaria, así como la difusión de representaciones y pautas de comportamiento comunes y diferenciadas de las de obreros y capitalistas;
4. Porque en situaciones de crisis, dado que su status se basa en la reproducción de la estructura de diferencias, pueden “experimentar” pánico de status o de amenaza de privación de status (para decirlo en términos de la sociología funcionalista) que la aproximen, identifiquen o unifiquen con la vieja “clase media” en su respuesta.

⁴ El último Wright (1994) avanzó en un modelo de explotaciones múltiples –basado en la noción de explotación de Roemer (1989)– en el que la explotación capitalista se articula con otras como las de organización y calificación.

Sin embargo, la tesis del fundamento objetivo de una “clase” –en el sentido fuerte del término– “media”, tiene una aplicación débil por varias razones: a) porque posibilidad no es necesidad, lo cual no es sólo una verdad evidente, ya que muchos de los asalariados incluidos en las “clases medias” pueden desarrollar en sus trabajos la tendencia a organizarse sindicalmente y a aproximarse a otros grupos de clase obrera; b) porque aun la existencia de actitudes y orientaciones comunes no se traduce necesariamente en acciones y/o identidades colectivas –de hecho, la experiencia histórica muestra cómo tienden a la dispersión o a la fractura en coyunturas críticas–; y c) porque la heterogeneidad de estos grupos de individuos –propietarios y no propietarios; asalariados con mando y sin mando; burócratas estatales y profesionales del sector privado; etc.– plantea dificultades para considerarlos algo más que una categoría de clasificación socioeconómica según atributos comunes. Pero, fundamentalmente, porque dado que los asalariados que “caen” dentro de la “clase media” lo hacen en virtud de una capacidad diferencial de competencia en el mercado de trabajo, la variabilidad histórica y geográfica de lo que es y no es “clase media” es enorme.

Por dar sólo un ejemplo, un estudio de la CEPAL muestra que, en Latinoamérica en los últimos 20 años, la diferencia entre ocupaciones manuales y no manuales de nivel bajo tiene menos relevancia para explicar la diferencia de ingresos y que la educación ha visto devaluado su papel en la generación de ingresos (Franco, Hopenhayn y León, 2011). Las dificultades para sostener una diferencia de clase entre asalariados manuales y no manuales es cada vez mayor, en todo el mundo. La difusión de calificaciones y la introducción de nuevas tecnologías son factores de pérdida masiva de capacidades diferenciales de competencia en el mercado de trabajo y de creación de nuevas. Su velocidad, además, contrasta con la capacidad de asimilación de estos cambios y de reestructuración de sus identidades por individuos y grupos, los cuales están mediados por aspectos independientes de la mera estructura de diferencias económico-sociales.

De hecho, la “clase media” como hecho objetivo o es difícil encontrarla como actor colectivo o cuando existe –como en el caso argentino– abarca bastante más que su “fundamento objetivo” y algo menos también.

No intentamos negar la importancia para ciertas explicaciones de aquellas determinaciones, sino enfatizar, especialmente para la Argentina de los últimos 60 años, que “clase media” es ante todo una categoría sociocultural; que refiere a ciertas prácticas y representaciones

comunes a un muy heterogéneo conjunto de individuos; y que constituye una identidad política, pero no una clase.

Los orígenes del peronismo, la doble movilización y la constitución de una identidad de “clase media”

Como muestra Ezequiel Adamovsky en su *Historia de la clase media argentina* (2009), en el caso argentino en particular, dicha identidad política y el conjunto de valores y representaciones a ella adherida-, tiene fecha de nacimiento con el surgimiento del peronismo. Es, entonces, en la oposición al peronismo que se construyó la “clase media” argentina. Nuevamente, por razones de espacio remitimos al trabajo citado, pero baste decir que dicho proceso de construcción de la nueva identidad se apoyó en procesos de diferenciación y de cambio cultural desarrollados desde la última parte del siglo XIX y, particularmente, durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, hasta los años cuarenta, dichos procesos no dieron lugar más que a una serie de actitudes y orientaciones individuales e individualistas, aunque relevantes en términos de la modelación de los conflictos sociales y de los modos de dominación política. Fue a partir del golpe de Estado de 1943 y de la emergencia del peronismo que, en el marco de un intenso proceso de movilización social, aquellos elementos se articularían cobrando un nuevo significado y constituyendo el fundamento de una identidad colectiva.

Gino Germani (2003) señalaba que los estudios sobre los orígenes del peronismo prestaron especial atención a la movilización de los trabajadores, pero que, en el período abierto con el golpe de junio del 1943, se desarrolló de manera simultánea un doble proceso de movilización: el de los trabajadores y el de las “clases medias”. De acuerdo a Germani, la de esta última era una “movilización secundaria” (ya que esas masas se encontraban integradas a la vida política) y su objetivo era la recuperación de las libertades políticas. Si la movilización de los trabajadores culminó en su propia constitución como sujeto político bajo el signo del peronismo, la movilización de los “sectores medios” dio lugar a la formación de la “clase media” como identidad política, en un proceso que abarcaría los dos gobiernos peronistas y el período posterior al golpe de 1955.⁵

Por lo tanto, la oposición populismo/antipopulismo fue constitutiva de la “clase media” como identidad política. Si, como plateábamos

⁵ Para una conceptualización de la categoría de “movilización” como proceso de constitución de sujetos, ver Pérez (2007) y, en este libro, “¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001”.

antes, la constitución de los trabajadores como sujeto político bajo el signo del peronismo dejó marcas en sus modos de pensar, sentir y actuar y, por lo tanto, en el modo de sus respuestas ante nuevos fenómenos de crisis y en el modo de su propia crisis, lo mismo es cierto para la “clase media”. No se trata, tampoco en este caso, de herencias persistentes o de esencias inmodificables, sino –como señalábamos para el mundo obrero y popular– de una subsistencia mediada por la actualización, resignificación y transformación de prácticas y formas de movilización políticas.

Impacto en la “clase media” de las transformaciones estructurales de la década del noventa

Esta existencia de la “clase media” como identidad otorga relevancia al análisis de ciertos cambios en la estructura social, en la medida en que pueden ser significados desde marcos normativos y a partir de ciertos elementos básicos de una cosmovisión compartidos por quienes así se identifican.

Nuevamente, por razones de espacio seremos muy breves, además de tratarse aquí de hechos conocidos.

En primer lugar, desde 1995 se observa una tendencia a la caída de los salarios que afecta a casi la totalidad de los asalariados. Como vimos en la primera parte, esta tendencia refleja un cambio de etapa posterior a la “crisis del tequila”. A partir de allí, los más moderados aumentos de productividad dieron un lugar predominante, en las estrategias de competitividad, a la extensión e intensificación de la jornada laboral y a la reducción del salario nominal, en un marco de apertura externa y tipo de cambio fijo. Ésto se combinó con las crecientes presiones por la reducción del gasto público.

En segundo lugar, toda una serie de estudios señalan la existencia de un proceso de heterogeneización y fractura de las “clases medias” sociológicamente definidas. Por un lado, señalan la fractura entre ganadores y perdedores (Svampa y González Bombal, 2002). Un sector de ganadores pudo aspirar a más altos estándares de consumo y su diferenciación como capa social se expresó en un nuevo estilo de vida, en su aislamiento y el cierre espacial a través de barrios cerrados y *countries*, etc. Los perdedores vieron caer sus ingresos y precarizar sus condiciones de trabajo y de vida. Dentro de ellos, se desarrolló una fracción de “nuevos pobres” y, junto con el empobrecimiento, se formaron estrategias adaptativas que apelaron a las diferencias de capital social y cultural respecto de los otros desposeídos (Kessler y Di Virgilio, 2008). Trabajos más recientes han confirmado el incremento

de la desigualdad, el predominio de una movilidad social de corta distancia –frente a las mayores posibilidades de movilidad social de larga distancia en la década del sesenta– y una mayor fragmentación de los “sectores medios” (Dalle, 2011; Salvia y Quartulli, 2011).

En tercer lugar, esta fractura y heterogeneización se manifiesta también entre los pequeños propietarios, entre los cuales muchos sufrieron empobrecimiento y/o expropiación, mientras que algunos sectores pudieron prosperar.

En cuarto lugar, en un nivel más coyuntural, aunque relevante para entender la generalización del proceso de movilización en 2001-2002, desde 1999 todas las capas de las “clases medias” –cualquiera sea su clasificación resultaron afectadas por la extensión y profundización de la crisis.

Sin embargo, no es posible establecer un vínculo mecánico entre la afectación de las condiciones materiales de existencia de asalariados y pequeños propietarios y la movilización de muchos de ellos como “clase media” en 2001-2002. En este sentido, la pregunta que se plantea es ¿en qué medida aquellos marcos normativos y elementos básicos de una cosmovisión compartidos por quienes se identifican como “clase media” determinaron su activación y los modos de su intervención? Pero, además, la fractura y heterogeneización de la “clase media”, ¿se tradujo en diferencias significativas en las respuestas frente a la crisis?

La movilización de la clase media en 2001 y la crisis de representación

Anteriormente, planteábamos que Germani señalaba la existencia a partir de junio de 1943 de un doble proceso de movilización: el de los trabajadores y el de las “clases medias”. Afirmábamos nosotros, retomando también a Adamovsky (2009), que esa movilización es la que daría lugar a la constitución de una identidad política de “clase media”.

La crisis de 2001 también estuvo caracterizada por un proceso de movilizaciones simultáneas, aunque, en este caso, todas se orientaron (u objetivamente confluyeron) contra el gobierno. La imagen difundida –por la militancia política, el periodismo y rápidamente popularizada– de “piquetes” y “cacerolas” como protagonistas de las protestas, simplifica lo que en realidad fue un proceso de movilizaciones múltiples, yuxtapuestas temporalmente, pero con escaso o nulo grado de articulación y un alto grado de heterogeneidad en sus orientaciones, demandas y modos de acción. Sin embargo, tiene el mérito de poner

de relieve –al modo de las caricaturas– la presencia de una movilización “popular” y de otra de “clase media”. La “popularización” de esta imagen es todo un dato que debiera ser analizado en sí mismo y que, además, se corresponde con la oposición, también popularizada, entre el “19 de diciembre” (pacífico y poblado de ciudadanos y/o familias de clase media con sus cacerolas) y el “20 de diciembre” (violento y con protagonismo de la izquierda y de los piqueteros). Y, más allá de las simplificaciones, “algo de esto hubo”. La autoidentificación de los manifestantes como “personas de clase media” atravesó un sinnúmero de protestas, al tiempo que las inferencias ecológicas, por la zona de residencia de los manifestantes cuando las noticias lo informan, o las que pueden realizarse por el cruce de demandas, tomando en consideración que existe una serie de demandas tradicionalmente formuladas por la “clase media”, recortan una serie de protestas como un subconjunto particular (Piva, 2012).

En los capítulos precedentes, señalamos que la crisis de 2001 fue centralmente una crisis de los mecanismos de intermediación política. También que los modos de intervención expresaron la crisis de los mecanismos de mediación política que eran específicos de los diferentes grupos sociales. Si los saqueos expresaron el desborde y la crisis de los mecanismos de mediación clientelar, la movilización de la “clase media” tendió a convertirse en una movilización de los “ciudadanos” contra sus representantes, en una crisis del lazo de representación.

El vínculo clientelar –o, como lo define Auyero, la resolución de problemas a través de la mediación política personalizada (Auyero, 2001)– no es un vínculo de representación. No se trata de una relación simétrica: el pobre está inserto en un mundo de necesidades y su vínculo al esquema clientelar es fundamental en su estrategia de reproducción, pero, al mismo tiempo, es la reproducción de un modo de incorporación política, de una cultura o tradición política. Su éxito y continuidad se basa, sin embargo, en la capacidad –limitada y dependiente– del “patrón” para responder a las demandas de los detentadores de problemas, los “clientes” (Auyero, 2001). Dicho mecanismo no suprime la competencia electoral, sino que se articula con ella. Los mediadores pueden tener relaciones de competencia y reportar a distintos jefes políticos. No existe, por otra parte, una relación mecánica entre distribución de bienes materiales y simbólicos y voto. El voto, más que un contradón –las acciones de reciprocidad se ubican fundamentalmente en el nivel cotidiano– es una convalidación del éxito de la relación y una expresión de confianza en su continuidad. Es decir, supone la validación de un vínculo de reciprocidad, asimetría y distan-

cia, pero cuya estructura no es de representación. El vínculo clientelar es la forma extrema de una noción de la política y del vínculo político dominante en los “sectores populares” y que es parte fundamental de la cosmovisión peronista: la política como resolución de problemas (“mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”; “gobernar es resolver problemas concretos”; etc.). Ello es correlativo a un énfasis en la “participación” más que en la “representación”, aspecto común a populismos y neopopulismos latinoamericanos (Touraine, 1987).

En otras palabras, si la crisis política y el rechazo a los partidos políticos fueron generalizados en Argentina a comienzos del nuevo siglo, la “crisis de representación” *stricto sensu* fue un fenómeno predominantemente de “clase media”. Ello explica la centralidad, durante la crisis de 2001-2002, que adquirió esta temática en la experiencia de las asambleas populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del aspecto institucional/republicano en el cuestionamiento a la Corte Suprema de Justicia, el cercamiento del Congreso frente al asedio de los “ciudadanos” manifestantes, etc. Éste fue, además, el contexto significativo de las demandas de los “ahorristas estafados”. Ello explica también el impacto diferencial de la crisis del sistema político en el peronismo y en los partidos de la oposición (Torre, 2003). El peronismo sufrió fundamentalmente la apertura de una lucha al interior del aparato político que interiorizó la disputa a nivel social, lo que lo posicionó, nuevamente como en 1989, como partido del orden (Piva, 2012). La oposición experimentó una fragmentación y una pérdida de votos de la que aún no se recupera (Torre, 2003).

Con la crisis del alfonsinismo, el voto de la “clase media” tendió a dividirse en tendencias de centro derecha –UCEDE, Acción por la República, RECREAR– y de centro izquierda Frente Grande, FREPASO, ARI, Proyecto Sur– (De Riz y Adrogué, 1991; Torre, 2003). En este sentido, ya desde 1993 algunas fracciones de los “sectores medios” se manifestaron electoralmente a través de la oposición política de centro izquierda. Las principales demandas que se expresaban en ese voto eran el rechazo a la corrupción, a la centralización de atribuciones en el Ejecutivo, a la falta de independencia del Poder Judicial, al poco apego a las normas constitucionales y todo ello tendía a condensarse en un rechazo al “estilo político” del gobierno. También se contaban entre las causas del distanciamiento político respecto del oficialismo el rechazo a la política de DDHH, a la política educativa y a las que, sobre todo después del “Santiagazo” de diciembre de 1993, se dieron en llamar las “consecuencias sociales” del modelo.

Todos estos tópicos siguieron presentes en la creciente moviliz-

ción de la “clase media” desde 1996, pero adquirió mayor centralidad la temática educativa impulsada por el conflicto docente, que actuaría como articulador del conflicto social durante el período 1997-1999. Puede plantearse como hipótesis que la tendencia a la pauperización y expropiación a que estuvieron sujetos estos sectores –a la que nos referimos en el apartado anterior– actuó como condición de posibilidad de una movilización que fue estructurada por su percepción generalizada de afectación de valores y demandas históricos y que, en tanto representaciones compartidas, los constituía como “clase media” a pesar de su heterogeneidad interna. Este hecho es fundamental en la medida que enmarcó la respuesta a los efectos de la reestructuración del capital en términos de ingresos y propiedad. Éstos tendieron a ser representados como “consecuencias no deseadas del modelo” y atribuidos a la “corrupción” y a “la ausencia de transparencia institucional”. Esta caracterización tendió a fundamentar una actitud dual hacia el programa de reformas: apoyo a su núcleo duro –principalmente, privatizaciones y convertibilidad– y rechazo de sus consecuencias indeseadas. Dicha posición subsistió hasta que, desde el año 2000 y especialmente durante el año 2001, las tendencias a la pauperización y expropiación de estos sectores se volvieron masivas y amenazaron su reproducción como colectivo, como categoría social.

La tensión centro derecha/centro izquierda –que internalizó el voto de la Alianza– es expresión de una dimensión más general. Como discutimos en la segunda parte, aquellas demandas comunes, que expresan hábitos y representaciones compartidos por la “clase media” y que constituyen el núcleo de su identidad política, carecen de un significado claramente fijado, funcionan como “significantes flotantes” y su articulación con otras demandas puede darles un carácter conservador o reformista y, en situaciones de crisis, restaurador del orden o tendiente a su cambio.⁶ Esa disputa se desarrolló al interior de la “clase media” y tuvo como un escenario particularmente importante de ese desarrollo, especialmente en diciembre de 2001, a las propias acciones de protesta. Pero es claro que en su oposición al menemismo, en el rechazo de su “estilo político”, el elemento antipopulista estuvo presente, sólo que, en un contexto de ofensiva neoliberal contra el trabajo, la distribución de los grupos y fuerzas sociales en los enfrentamientos le otorgó un lugar subordinado.

Si bien en la resolución de esas tensiones pudo haber influido la fractura de las “clases medias” a la que refieren los estudios antes citados,

⁶ Ver en este libro “¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina post crisis (2003-2010)”.

lo cierto es que la respuesta colectiva motivada en marcos normativos comunes parece resultar más relevante a la hora de explicar las orientaciones y los modos de la movilización de la “clase media” en 2001. Aquellas prácticas y representaciones comunes, constituidas y reproducidas en la lucha contra el peronismo y movilizadas por el alfonsinismo, envolvían ahora en su crítica al conjunto del sistema político, en lo que se presentaba como una crisis de representación sin precedentes.

Las “clases medias” frente a la recomposición kirchnerista del consenso desde 2003

En diversos pasajes de este libro, discutimos como entre 2003 y 2005 el nuevo gobierno de Néstor Kirchner abarcó en su estrategia de reconstrucción del consenso a buena parte de los “sectores medios”. También como en los años 2006-2007 se produjo un alejamiento de las “clases medias” respecto del kirchnerismo, expresado en el aumento de las protestas y en el terreno electoral.

¿Cuál es la causa del alejamiento y de la creciente oposición al kirchnerismo de esos sectores? Se trata de un período de altas tasas de crecimiento económico, de caída del desempleo, aumento de los salarios reales y de fuerte aumento del consumo. Todos estos indicadores impactaron fuertemente y de manera positiva en las denominadas “nuevas clases medias” y también en los pequeños propietarios.

Nuestra hipótesis es que la causa debe hallarse en un rechazo de la “clase media” a la consolidación de una estrategia neopopulista de recomposición del poder político y del consenso postcrisis. Dicha estrategia permitió una reconstrucción –con los límites ya señalados– de los mecanismos de mediación política con el mundo popular, a través de una reconstrucción del tejido político territorial, de una cuasi institucionalización de los conflictos con los movimientos sociales y de un retorno de la centralidad del actor sindical, en particular de la lucha salarial institucionalizada. Pero no logró, e incluso obturó, una reconstrucción del lazo de representación que afectaba fundamentalmente a la “clase media”.

Esta hipótesis permite enlazar el antipopulismo de la “clase media” con la persistencia de la crisis de representación y del rechazo de la política, de tal modo que resultan más claros algunos hechos y tendencias de la conflictividad de estos sectores que describimos y explicamos parcialmente en la segunda parte.

La consolidación de una estrategia neopopulista fue simultánea con

el fin de la transversalidad o, al menos, con su subordinación a una estrategia de armado político con centro nuevamente en el Partido Justicialista. De conjunto, ambas habilitaron la identificación del kirchnerismo con la “vieja política”. El rechazo de la denominada “vieja política” ocupó un lugar importante en la crítica a la UCR y al PJ en los años noventa, sobre todo desde el pacto de ambos partidos para la reforma de la constitución en 1993-1994. Fue central en el crecimiento del Frente Grande y el FREPASO, tanto como en el ascenso del posterior presidente Fernando De la Rúa dentro del radicalismo. Se expresó también en la Alianza y –por centroizquierda y centroderecha– en el voto al ARI, Acción por la República, RECREAR y otros. Pero, fundamentalmente, se anudaba con la vieja tradición ciudadana, institucionalista y antipopulista de la “clase media”. Sin embargo, la crítica de la “vieja política” tendió a convertirse, con mucha facilidad, en el marco de la crisis de representación, en un simple rechazo de la política. A su vez, aunque el “rechazo de la política” no es específico de la “clase media”, sí lo es su articulación con una crítica al estilo político del gobierno en clave antipopulista.

El aumento de la protesta, como vimos en la segunda parte, fue simultáneo con una serie de conflictos que concitaron la atención de la “clase media” e incidieron en su movilización. Entre ellos, los intentos reeleccionistas de gobernadores peronistas en 2006; la denuncia de fraude en Córdoba del hasta entonces kirchnerista Luis Juez en 2007; o el conflicto en torno a la intervención del INDEC y el falseamiento de estadísticas oficiales durante el mismo año. Destacábamos también la similitud de la dinámica del conflicto desatado por la lucha docente en Santa Cruz en 2007 con la del “conflicto del campo” en 2008. Todos ellos, decíamos, señalan un hiato entre los “sectores medios” y el gobierno, pero que, sin embargo, refiere de manera más general a una crisis de confianza en el sistema político que tiende a empalmar con una crítica al “estilo político” del gobierno.

Este enlace entre antipopulismo, obturación de la resolución de la crisis de representación y rechazo de la política permite comprender mejor el éxito de la burguesía agraria en identificar el rechazo del arbitraje del gobierno entre fracciones del capital con el rechazo de la “clase media” al estilo político populista, así como el apoyo masivo a las demandas de la gran burguesía agraria en las ciudades. Ese enlace entre antipolítica y antipopulismo ha continuado presente, y aun de manera más explícita, en las convocatorias a las masivas movilizaciones

de septiembre y noviembre de 2012, realizadas a través de las redes sociales con un carácter pretendidamente “no político”.⁷

La apertura del significado de la protesta de “clase media”, la “universalidad inmediata” de las identidades asumidas –la “gente”, los “vecinos”, los “ciudadanos”– y la ausencia de referencia al orden social como totalidad permiten comprender que los mismos tópicos pudieran adquirir significados incluso opuestos en el marco de la insurrección de diciembre de 2001 y en el contexto de la rebelión de la burguesía agraria en 2008. Pero la acción colectiva de “clase media” desde 2003, y particularmente desde 2006, puede ser comprensivamente explicada a partir del lugar ocupado por el tópico antipopulista en la movilización antikirchnerista y de su articulación con el “rechazo de la política”, que tiñe su significado y lo torna inteligible.

Por otra parte, el hecho de que el gobierno lograra, desde 2009, captar el apoyo de una parte de la “clase media” a través del relanzamiento de una agenda democrática (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, etc.), confirma la interpelación ciudadana de esos sectores, así como su oscilación ideológica entre centroizquierda y centroderecha. Pero la persistente y masiva oposición de la “clase media” al kirchnerismo en protestas y elecciones (a través de opciones de centroizquierda y de centroderecha) antes y después de ese retorno a una agenda democrática, pone de manifiesto la centralidad de un marco normativo constituido en el enfrentamiento con el populismo y de contornos institucionalistas y políticamente liberales. Ello y las oscilaciones ideológicas –las más relevantes a la hora de entender fracturas políticas en la “clase media”– ponen de nuevo entre paréntesis la influencia de las transformaciones en la estructura social sobre las orientaciones y los

⁷ Dados los problemas que abordan los artículos contenidos en este libro, hemos privilegiado en la explicación de la difundida actitud “antipolítica” la crisis de representación abierta con la crisis de 2001, en la que entendemos que se inscribe la movilización antikirchnerista de “clase media”. Ello no significa negar el rol de la dictadura militar en la génesis de una orientación antipolítica en amplios grupos sociales. Sin embargo, el vínculo entre antipolítica y dictadura no explica la asociación entre antipolítica y crisis de la democracia representativa, desarrollada al inicio del nuevo siglo en varios países latinoamericanos junto con la irrupción de demandas democráticas y populares, y también presente en la crisis de 2001 en Argentina. Tampoco permite dar cuenta de la antipolítica como fenómeno general en los países centrales desde los años ochenta y noventa y su articulación con las reformas neoliberales. Nun (1995) fue uno de los primeros en señalar la relación entre el bajo grado de deliberación pública y la apatía política que caracterizaron a la democracia argentina de los años noventa y la articulación conflictiva desde 1983 de una doble transición: hacia un régimen político democrático y hacia un régimen social de acumulación neoliberal. En Piva (2012), desde una perspectiva diferente, hemos abordado este problema a través de la relación entre reestructuración capitalista y hegemonía.

modos de acción colectiva de un conjunto desde siempre extremadamente heterogéneo en sus determinaciones económico-sociales.

Conclusiones

La identidad política de “clase media” está atravesada desde su origen por la oposición populismo/antipopulismo. Ello permite explicar que, tras la crisis de 2001, la recomposición neopopulista del consenso, a partir de 2003, pudiera reconstruir los mecanismos de mediación política del mundo popular, pero no lograra recomponer el lazo de representación e incluso lo impidiera. Ese es el marco que permite dar cuenta del enlace entre la dimensión “antipolítica” o de “rechazo de la política” y la dimensión de oposición al “estilo político” del gobierno en clave antipopulista presentes en una multiplicidad de protestas protagonizadas por individuos de “clase media”.

En 1989 y en 2001, la acción de la “clase media” fue central, tanto en la apertura de la crisis, como en la definición del curso de su resolución. En 1989, lo fueron la demanda de orden y la adhesión de la “clase media” a la salida neoliberal de la crisis. Esas acciones se desarrollaron en un contexto de disolución hiperinflacionaria de los lazos sociales y de desorganización de la acción de la clase obrera, que tuvieron su clímax en los saqueos masivos a comercios. En 2001, fue definitoria la movilización de la “clase media” contra el estado de sitio en la Ciudad de Buenos Aires, al final de otra jornada de saqueos masivos. Una acción dominante en la “clase media” tendiente a la “restauración del orden”, como la que se verificó en gran parte del conurbano bonaerense, hubiera probablemente posibilitado resoluciones muy diferentes a la finalmente ocurrida.

La pregunta que surge es ¿por qué la persistente movilización de franjas importantes de la “clase media” contra el kirchnerismo no ha tenido el mismo carácter definitorio de la situación política? Una hipótesis es que la recomposición neopopulista del consenso, al mismo tiempo que inhibió la resolución de la crisis de representación de la “clase media”, determinó su aislamiento social y político. La reconstitución de los lazos de mediación política con el mundo popular dejó aislada a una “clase media” que retomó la movilización desde 2006. Tanto en 1989 como en 2001, fue la crisis política generalizada, en el marco de auténticos escenarios de crisis orgánica, y la debilidad de la clase obrera los que otorgaron el rol fundamental a la acción de la “clase media” en el curso y modo de resolución de la crisis.

Ese aislamiento se ha manifestado en “las calles” y en el terreno electoral. En la medida en que la movilización y el conflicto en el mundo

obrero y popular tendieron a ser normalizados con relativo éxito, las protestas de la clase media no han encontrado ni articulación ni confluencia objetiva con las de otros grupos sociales. En el terreno electoral, el kirchnerismo ha ganado las elecciones presidenciales de 2007 y de 2011 con porcentajes cercanos o superiores al cincuenta por ciento de los votos, aun perdiendo en aquellos distritos donde es mayoritario el peso electoral de los “sectores medios”.

La impotencia de la oposición política para constituirse en alternativa electoral al kirchnerismo es posible referirla también a este fenómeno. Con serias dificultades para interpelar el voto obrero y popular, ha quedado reducida a aquella base estrecha de “clase media”, siendo incapaz de articular una salida política a dicha situación de aislamiento. Esa incapacidad se encuentra relacionada también con la crisis de representación de la “clase media”, que disuelve la acción opositora al envolverla en una crítica generalizada a la lucha política, fragmenta su acción política y mantiene irresuelta la oscilación centroizquierda-centro derecha característica de su expresión electoral. Ésto último hasta el punto en que una parte, aunque minoritaria, de la “clase media” regresó, después de 2009, al redil kirchnerista del que se alejara desde 2006.

El período muestra, sin embargo, dos importantes excepciones. La primera entre 2003 y 2005, cuando el kirchnerismo parecía lograr el prodigio de sustentar al peronismo en una alianza de clase obrera y “clase media”. Ello se expresó categóricamente en la victoria de Aníbal Ibarra sobre Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires para la elección de Jefe de Gobierno en 2003, en un pico de popularidad del entonces presidente Kirchner. La segunda excepción se desarrolló entre la denominada “crisis del campo” de 2008 y las elecciones legislativas de junio de 2009, cuando los sectores más pauperizados de la clase obrera de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron sus lealtades locales, pero dividieron sus opciones electorales a nivel nacional, en lo que constituyó un giro a la derecha del resultado electoral.

La nueva merma electoral del kirchnerismo en 2013 plantea un escenario nuevamente abierto. En este marco, ¿qué clase de articulación será más probable en caso de que la coalición política que sustenta al kirchnerismo no encuentre continuidad más allá de 2015?

CONCLUSIONES

Las conclusiones tienen siempre, más allá de la voluntad del autor de clausurar un análisis, un cierto grado de apertura. Sin embargo, dado el carácter de este libro y la naturaleza de los problemas que trata, las conclusiones que de él se extraigan serán particularmente provisionarias. Ésto se debe a la naturaleza del objeto y a la estructura del libro, ligada a ella, de las que habláramos en la introducción. Como allí decíamos, la opción de publicar los resultados parciales alcanzados en cada momento seguidos de una postdata que refleja un balance y estado actual de la investigación supone, necesariamente, abrir parcialmente las conclusiones a los lectores. En este sentido, las conclusiones que presentamos pueden leerse como un intento por sistematizar una mirada sobre el proceso económico-político abierto en 2002. Intento que puede ser contrastado con los materiales que lo soportan, los cuales exponen huecos y giros y, por lo tanto, pueden dar lugar a conclusiones diferentes.

En lo que sigue, entonces, trataremos primero de exponer, brevemente, un análisis de conjunto que nos aproxime a una conceptualización de la dinámica económico-política del período postconvertibilidad. En dicha conceptualización, se advertirá un hilo conductor que otorga inteligibilidad a la dinámica económico-política: las contradicciones originadas en el despliegue de una estrategia de reconstrucción y reproducción del consenso, en un marco complejo de continuidades y rupturas respecto de los años noventa. En particular, los límites impuestos por la continuidad de rasgos nodales de la reestructuración

neoliberal del capital y el Estado a una estrategia de recomposición del poder político sobre la base de la incorporación de demandas obreras y populares. En el centro de esa contradicción, se encuentra una relación de fuerzas sociales cristalizada a medias por los dispositivos institucionales del Estado.

En segundo lugar, intentaremos, sobre la base de lo anterior, aproximarnos a los límites del proyecto kirchnerista. No entendemos, sin embargo, esta tarea como una evaluación del kirchnerismo a partir de criterios exteriores, es decir, como un análisis normativo. Creemos que ese tipo de crítica empobrece los análisis y, por lo tanto, tiene muy poco valor. Aproximarse a los límites del kirchnerismo exige partir del fenómeno tal como lo llegamos a representar después del estudio realizado y profundizar en esa conceptualización, con el objetivo de alcanzar sus contradicciones más profundas, aquellos obstáculos –internos a su concepto– a la realización de su estrategia.

La dinámica económico-política de la década kirchnerista

Como señalamos a lo largo del trabajo, el rasgo más definitorio y singularizador del kirchnerismo ha sido su rol en la recomposición del poder político post crisis de 2001. Esta “marca de origen” ha sido su señal de identidad y de ruptura respecto del proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación iniciado con el interregno duhaldista. Sin embargo, al mismo tiempo que le ha permitido construir su *differentia specifica* con la oposición política, lo ha condicionado en su capacidad de reorientar su acción de gobierno.

Obligado por las circunstancias de arribo, el gobierno de Néstor Kirchner enfrentó la doble tarea de reconstruir el consenso en torno al ejercicio del poder político –como fundamento de la estabilización de la dominación política y económica del capital– y de construir consenso en torno a su figura, dada su debilidad de origen. Empezó esta tarea desarrollando una estrategia de incorporación de demandas de los grupos sociales movilizados contra el neoliberalismo en la segunda mitad de los años noventa y los primeros años del nuevo siglo, habiendo sido éstos actores centrales en el quiebre de la convertibilidad y en el acortamiento del interregno duhaldista. El kirchnerismo nació, entonces, atravesado por esa contradicción. Si el motivo dominante de su acción era la restauración del orden, el medio para alcanzarlo lo convirtió en expresión de un conjunto de demandas que emergieran desafiantes en las calles, plazas y rutas de diferentes partes del país. Su relación con esa movilización y esas demandas, sin embargo, estuvo

mediada por la tarea de recomposición del poder de Estado y, por lo tanto, de clausura de la rebelión.

El kirchnerismo es exterior al proceso de movilización. Ello lo opone a otros movimientos políticos –tales como el chavismo en Venezuela o el MAS en Bolivia–, nacidos al calor de un proceso de movilización política disruptiva y constituidos en dirección de ese proceso. Las características del proceso político en esos países, desenvueltos en los límites –continuamente forzados y desbordados, pero no traspasados– de capitalismo periféricos, hizo (y hace) emerger, en diferentes momentos, la contradicción entre su función de garantes del orden y de dirección política de los procesos de movilización y rebelión popular que les dieron origen. Pero su función no fue principalmente restauradora, sino de transformación con contenido democrático-radical. El kirchnerismo, por el contrario, persiguió la incorporación política de la clase obrera y de los grupos sociales desafiantes en los límites de un proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación sin reversiones radicales de la reestructuración del capital y del Estado producidas durante los años noventa. Allí radican los límites y contradicciones del proceso impulsado por el kirchnerismo, consistente en la recomposición del poder político por la vía de la satisfacción de demandas.

Esos límites y contradicciones se han puesto de manifiesto al analizar la modalidad de acumulación de capital, los cambios en la forma de Estado y el modo de dominación política.

Desde 1989 se ha desarrollado y profundizado una estrategia de acumulación impulsada por la exportación de productos agrarios, agroindustriales e industriales de bajo valor agregado. Dicha modalidad de acumulación desarrolló y profundizó, a su vez, la dualidad estructural entre un sector moderno y uno atrasado, tanto al interior de la industria como en el conjunto de la economía; y la concentración, centralización e internacionalización del capital local.

Sobre el trasfondo de esas profundas continuidades, es posible advertir dos subperíodos cuyo quiebre fue la rebelión popular de 2001.

Un primer subperíodo fundacional, que podemos denominar “neoliberal”, caracterizado por políticas de apertura y tipo de cambio fijo que intensificaron la competencia y, por esa vía, indujeron un profundo proceso de reestructuración productiva. Y un segundo subperíodo que, partiendo de las políticas que lo caracterizaron, podemos denominar “neodesarrollista/populista”. Este subperíodo se caracterizó por una acumulación predominantemente capital-extensiva, que tuvo como fundamento la renovación de capital fijo desarrollada en la

primera mitad de los años noventa, una limitada sustitución de importaciones –posibilitada por el paraguas cambiario, basada en bajos costos laborales y articulada/subordinada a la orientación exportadora de la gran burguesía industrial– y, por último, lo que hemos denominado “latencia” de la dependencia financiera. Dicha “latencia” se explica por la reversión del deterioro de los términos de intercambio, que posibilitó el superávit comercial, de cuenta corriente y fiscal entre 2003-2008; y que permitió ignorar temporalmente la exclusión del Estado argentino de los mercados financieros internacionales.¹ Sobre ese fundamento, el Estado adquirió mayores capacidades de arbitraje entre clases y fracciones de clase. Justamente, ese punto es el que hemos enfatizado en este trabajo.

Caracteriza a la postconvertibilidad un desfase entre política económica y acumulación capitalista, la cual expresa una alteración de la relación de fuerzas favorable a los trabajadores, base sobre la cual debió reconstruirse –después de su crisis– y reproducirse el poder político. Esta dimensión constitutiva del Estado, la de la reconstitución y reproducción de la dominación política, sobredeterminó la política económica e imposibilitó la correspondencia típico ideal entre política económica y necesidades de la acumulación capitalista.

En este sentido, después de una primera fase de compatibilización entre acumulación y legitimación, las mismas condiciones que posibilitaron una intervención orientada a la incorporación política y satisfacción gradual de demandas populares –tipo de cambio alto, precios elevados de las mercancías de exportación, costos salariales iniciales históricamente bajos, acumulación predominantemente extensiva– le impusieron tendencialmente límites a través de la inflación, el alza de salarios, la apreciación cambiaria y el agotamiento de los superávits “gemelos”.

Por un lado, dicha intervención encontró un límite en la dinámica dualizadora de la acumulación de capital, que impuso un piso a la reducción de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el empleo precario. Más allá de ese límite, el desfase entre política económica y acumulación sólo conduce a niveles crecientes de desequilibrio y de contradicciones macroeconómicas. Pero, por otro lado, la restricción externa al crecimiento –propia de una estructura dual, atrasada y dependiente– aparece como un límite infranqueable al desarrollo mismo de esa acumulación y, por lo tanto, a la aparente autonomía de la

¹ Esa reversión se origina en la fuerte demanda de *commodities*, sobre todo debido a China, cuyo acelerado desarrollo capitalista es resultado del proceso de mundialización capitalista que caracteriza a la etapa abierta a fines de los años ochenta.

política económica respecto del capital. Llegados a este punto, lo que se pone en cuestión es la posibilidad misma del desfase entre política económica y acumulación de capital. La crisis de la acumulación capitalista disuelve el fundamento mismo de la intervención estatal “autónoma”, al tiempo que el déficit fiscal y externo presionan por un ajuste que parece cada vez más urgente en la medida en que el Estado pierde capacidades institucionales.

Si la acumulación de capital –el espacio de mayores continuidades respecto de los años noventa– resulta atravesada y desequilibrada por la alteración de las relaciones de fuerza post 2001, el Estado es el centro de las transformaciones postconvertibilidad. De la estructura institucional que soportara el disciplinamiento dinerario no queda nada o casi nada. Este conjunto de transformaciones es síntoma del desplazamiento desde una hegemonía sustentada en la acción de mecanismos coercitivos productores de consenso negativo –la que hemos denominado “hegemonía débil” (Piva, 2012)– a una estrategia de reconstrucción/reproducción de consenso basada en la satisfacción gradual de demandas.

En el centro se encuentra la subordinación de la política económica a los objetivos políticos de reconstrucción/reproducción de consenso y la subordinación/adecuación de la política monetaria a los objetivos de política económica. En la base se encuentran los mecanismos institucionalizados de interiorización de las demandas populares. La determinación de los salarios en negociaciones paritarias institucionalizó y normalizó el conflicto salarial de los trabajadores registrados. La asistencia social centralizada a través de la AUH, más la ampliación de la cobertura previsional y la asistencia social focalizada en el núcleo duro del desempleo, tendió a institucionalizar las demandas de los precarizados y desempleados. De este modo, la articulación de los mecanismos de incorporación de demandas –“neocorporativismo segmentado” más asistencia social centralizada– traduce institucionalmente la dualización de la fuerza de trabajo.

De conjunto, estos dispositivos institucionales y las nuevas relaciones entre secciones del aparato de Estado apuntan a una canalización institucional del conflicto obrero y popular por medio de la traducción de la presión obrera y popular en expansión de la demanda (Negri, 1991). Sin embargo, lejos de que este núcleo institucional se haya transformado en el centro de una reorganización del aparato de Estado que permitiera articular una nueva hegemonía, el resultado parece más bien haber sido un proceso de desorganización sin reorganización. Los límites que la dualización de la fuerza laboral impone

a la traducción institucional de las demandas obreras se expresan en el desarrollo de dispositivos cuasi estatales de mediación clientelar, sólo parcialmente complementarios con la asistencia social del Estado, tendiendo a producir incoherencias y desorganización mutua en sus funcionamientos.

El procesamiento estatal de demandas que transcurren por vías paralelas a las de la democracia representativa y el sistema de partidos exige cierta autonomía del Poder Ejecutivo, ya sea de los tiempos y la agenda legislativa, así como de los controles de constitucionalidad del Poder Judicial. Pero el mayor margen de maniobra respecto de las diversas fracciones del capital que ello supone –en un contexto de recuperación de las capacidades institucionales del Estado y de liberación de las trabas que imponía el régimen de convertibilidad– y su impugnación creciente por importantes porciones de la burguesía –con apoyo de sectores de “clases medias” y de la oposición política– abrieron el espacio para un escenario de conflicto de poderes que atravesó los dos gobiernos de Cristina Kirchner.

Por último, el desenvolvimiento de la acumulación impuso un bloqueo a la traducción de la presión obrera en expansión de la demanda, que originó una agudización de las incoherencias de funcionamiento entre las secciones del aparato de Estado. Los dilemas de política pública creados por la continuidad del legado privatizador son un caso particularmente importante de estas incoherencias. Ellos revelan las tensiones producidas por los intentos de incorporación política de demandas excluidas en los años noventa, en un contexto de reversión parcial de la reestructuración del capital y del Estado gestada sobre esa base. Estas tensiones son reveladas al tiempo que muestran la impugnación a medias que hace el kirchnerismo de la crítica neoliberal del Estado populista.

El fracaso de la canalización institucional de las relaciones de fuerzas alumbradas por la rebelión de 2001 condujo a su sustitución por un mecanismo de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo, el cual se encuentra en la base de la estrategia neopopulista de producción de consenso. El rasgo central del populismo latinoamericano fue la incorporación política de masas populares excluidas en contextos de desfase entre movilización social e integración política. El modo de incorporación señaló las dificultades para su institucionalización, lo que se puso de manifiesto en la producción de una división dicotómica y antagónica del espacio social. Dicha división funciona como un mecanismo que desplaza permanentemente el antagonismo interno de los movimientos nacional-populares hacia una oposición pueblo/antipueblo.

La recomposición del poder de Estado después de la crisis de 2001 tuvo un fuerte fundamento en la movilización de prácticas e imaginarios populistas, aquellos enraizados en las masas populares incorporadas políticamente bajo el signo del peronismo. Sin embargo, la desorganización de clase y la desproletarización subjetiva, producto de las aceleradas transformaciones durante la década neoliberal de los noventa, han dejado marcas en la reconstitución neopopulista que diferencian al kirchnerismo del primer peronismo.

Un contenido popular difuso, en el que el componente clasista es un elemento secundario, da cuenta de una base popular más heterogénea, cuya unidad depende de su nominación externa y abstracta. Esto, a su vez, torna al kirchnerismo menos estable y con mayores tendencias a la descomposición. Al mismo tiempo, las transformaciones económicas ocurridas desde 1976 –y, particularmente, durante los años noventa– se manifiestan en los límites que el modo de acumulación impone a la estrategia de satisfacción gradual de demandas y de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo.

En este sentido, el vínculo entre inflación y neopopulismo es particularmente importante, ya que en su dinámica revela la unidad de lo económico y lo político, su carácter de momentos (problemáticamente) diferenciados del desarrollo de una modalidad de dominación del capital sobre el trabajo. Y, en este caso, de una modalidad de dominación muy particular: una en la que las relaciones de fuerza no encuentran mecanismos institucionalizados de desenvolvimiento y estabilización dinámica.

En un contexto de largo plazo determinado por el carácter atrasado y dependiente del capitalismo argentino, la inflación postconvertibilidad –un fenómeno aislado en Latinoamérica y en el mundo, a diferencia de lo ocurrido entre los años cuarenta y ochenta– expresa el fracaso para traducir la presión obrera en expansión de la demanda efectiva. Este modo de considerar la relación entre expansión monetaria y lucha de clases pone en crisis la distinción exógeno/endógeno propia de la ciencia económica.

La expansión monetaria fue función de la presión obrera. En otras palabras, restringir la emisión monetaria era equivalente a reprimir las demandas obreras. Pero eso no depende simplemente de la voluntad política, sino de las relaciones de fuerzas sociales. Sin embargo, las relaciones de fuerza implican al menos dos polos y, si esa presión obrera se ha traducido en inflación, es también porque los empresarios han podido trasladar los aumentos salariales a precios –conservando sus ganancias–, limitar la inversión y fugar capitales. De este

modo, la acomodación de la oferta monetaria a las demandas obreras y populares equivale a un desplazamiento hacia el futuro de la resolución del antagonismo entre capital y trabajo, cuyo costo es la inflación o, su otra cara, la desvalorización de la moneda y su pérdida creciente de funciones dinerarias. Esto se ha manifestado con crudeza con la reaparición tanto del déficit fiscal, en condiciones en las que la burguesía fue capaz de bloquear el aumento de la presión impositiva; como del déficit de cuenta corriente, en el que tuvieron un papel central la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior, sobre la base de la restricción externa estructural.

Esa relación de fuerzas alumbrada por la rebelión de 2001, y que referimos como paradójica, combina rupturas y continuidades.

Por un lado, se produjeron cambios en las relaciones de fuerza al interior del “bloqueo en el poder”, que significaron el fortalecimiento y ratificación del comando de las fracciones productivas orientadas a la exportación, especialmente, la gran burguesía agroindustrial e industrial exportadora. Es visible, desde 2002, la subordinación de las fracciones de capital bancario y financiero, e incluso de aquellas fracciones ligadas directamente a la producción primaria, al pleno desarrollo de la estrategia de acumulación liderada por el gran capital agroindustrial e industrial local internacionalizado, fuertemente concentrado y orientado a la exportación de productos de bajo valor agregado. No sólo la devaluación permitió el fortalecimiento relativo de esas fracciones, sino que influyeron decisivamente los cambios a nivel mundial que impulsaron la mejora de los términos de intercambio y, con ello, la autonomía financiera temporal de la acumulación local. También tuvieron un peso significativo los cambios económicos y políticos a nivel regional, los cuales potenciaron dicha autonomía para establecer marcos sociales de acumulación acordes a esa estrategia (Kan y Pascual, 2013).² Pero fue determinante, como surge al comparar las mucho más fuertes continuidades en Brasil, Uruguay o Chile, el desafío popular de 2001, el cual otorgó potencialidad hegemónica a la estrategia de esas fracciones.

Sin embargo, decíamos que también hubo continuidades profundas en la persistencia de una sólida unidad del conjunto de la gran burguesía en torno a los rasgos fundamentales del modo de acumulación desarrollado desde 1989. Esa continuidad impuso límites a la asimilación del desafío obrero y a la capacidad de otorgar concesiones y satisfacer demandas. Hubo cambios también en el campo del trabajo,

² Para un análisis del vínculo entre esos cambios regionales y el proceso de movilización popular que sacudió a Sudamérica desde 2000, ver especialmente Pascual (2013).

ya que se desarrolló un proceso de recomposición de la acción sindical que implicó la reversión de una década de tendencia a la caída de la conflictividad obrera. Pero, por otra parte, esa recomposición solo revirtió parcialmente el proceso de desorganización de la acción de los asalariados como clase y de desproletarización subjetiva desarrollados en los años noventa (Piva, 2011), al tiempo que se profundizó la dualización de la fuerza laboral.

Esa alteración paradójica de la relación de fuerzas entre las clases está en la base de la estrategia de incorporación y satisfacción de demandas sin reversión radical de la reestructuración del capital y del Estado de los años noventa. Y el desarrollo de esta estrategia, sobre el fundamento de aquella relación de fuerzas, permite comprender la evolución de la acumulación y la dominación en el período.

Del conjunto de trabajos que abarcan las tres partes de este libro surgen una serie de fechas que señalan coyunturas que constituyeron rupturas en esa evolución. El hecho de que esas coyunturas atraviesen a lo económico y a lo político indica hasta qué punto ambos momentos articulan un proceso de subordinación del trabajo al capital, cuyas inflexiones imponen rearticulaciones de la acumulación y de la dominación política sin que su correspondencia esté asegurada.

Relaciones de fuerza y periodización de la dinámica económico-política

La primera coyuntura significativa, en términos de la periodización post 2002, es la de fines del año 2005, la cual se configura alrededor de la salida de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía. Lo que convierte a la salida de Lavagna en un acontecimiento es su significado más general, que trasciende las disputas de gabinete y los ajustes de cuenta con el duhaldismo. En ese sentido, la salida de Lavagna resuelve dilemas de política originados en aquellas relaciones de fuerzas paradójicas, en un sentido que ratifica y consolida el rol del kirchnerismo y su relación con la rebelión de 2001. Se trata de las primeras tensiones entre continuidades y rupturas.

Desde la perspectiva de la relación entre política económica y acumulación, el dilema se produce entre dos alternativas. Por un lado, mantener una política económica adecuada a una estrategia de acumulación orientada a la exportación de productos de bajo valor agregado y basada en bajos costos salariales; o, por el otro, sostener una política de expansión de la demanda que permitiera reducir rápidamente el desempleo, mejorar salarios e ingresos populares y expandir el gasto social.

Desde el punto de vista de la articulación del Estado, el dilema era subordinar los objetivos políticos a objetivos de política económica determinados por las necesidades de la estrategia de acumulación dominante; o bien, subordinar los objetivos de política económica a las metas de incorporación política de la movilización social desafiante.

El origen es el mismo. Una vez completada la reactivación económica, el crecimiento plantea dilemas al proceso de satisfacción de demandas sin reversión estructural. Ya conocemos el resultado. Por un lado, alejamiento de las políticas “neodesarrollistas”³ e inicio del desfase entre política económica y acumulación de capital; y, por otro lado, desorganización de la forma de Estado neoconservadora a partir de la subordinación del Ministerio de Economía al ala política del Poder Ejecutivo.

La segunda coyuntura significativa es el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria del primer semestre de 2008. Se trata del acontecimiento político más importante desde la rebelión popular de 2001, constituyendo un parteaguas en el período postconvertibilidad. Este acontecimiento señala el agotamiento del período de compatibilización entre acumulación y legitimación por la vía de la satisfacción de demandas; y, simultáneamente, el bloqueo de la gran burguesía agraria a su resolución por la vía del aumento de la presión impositiva sobre el gran capital, significando, en los hechos, el bloqueo a esta vía por el conjunto de la gran burguesía.

El resultado, como vimos, fue la fuga hacia adelante del gobierno, que representó una profundización de la estrategia neopopulista. Ello significó el pleno desarrollo de una estrategia de desplazamiento del antagonismo capital/trabajo en su doble aspecto: el desplazamiento del antagonismo interno al kirchnerismo hacia la oposición, con personificaciones particulares o singulares del capital –como las patronales agropecuarias y, fundamentalmente, el grupo Clarín–; y el desplazamiento hacia el futuro del desenlace del antagonismo vía diferimiento del ajuste. El resultado fue una creciente dislocación de la acumulación y de la dominación, cuyas manifestaciones fueron la estabilización de la inflación en niveles superiores al 20%; el gradual retraso cambiario; el salto brusco en las magnitudes anuales de fuga de capitales y remisión de utilidades; el sostenimiento de altos niveles de movilización de las “clases medias”; el conflicto recurrente de po-

³ Aquí con “neodesarrollismo” queremos significar, tal como lo expusimos en la primera parte, un *set* de políticas cuyo objetivo es apuntalar una estrategia de desarrollo orientada a la exportación de productos industriales, partiendo del sector agroindustrial, la cual supone una reformulación limitada de las políticas neoliberales. El “neodesarrollismo” asimila, por lo tanto, la crítica neoliberal a la ISI y al Estado keynesiano/populista.

deres; la profundización de la desorganización del aparato de Estado neoconservador; la fuerte fluctuación e inestabilidad del apoyo electoral; entre otros. Todo ello en el marco de una crisis profunda en EEUU y Europa, que modificaba sustancialmente las condiciones internacionales de la recomposición de la acumulación y la dominación post 2002. Sin embargo, el gobierno fue capaz de aplazar la resolución “catastrófica” del antagonismo, continuar con la lógica de satisfacción gradual de demandas –a partir de medidas tales como la estatización de AFJP, la sanción de la AUH, la promoción de la movilidad jubilatoria, entre las más importantes– y recuperar una agenda democrática –Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley de Matrimonio Igualitario, etc.

La tercera coyuntura significativa para la periodización de la dinámica económico-política del kirchnerismo se produjo a finales del año 2011, con la corrida cambiaria posterior a las elecciones de octubre y la instauración del control de cambios.

La fuga de capitales, la remisión de utilidades y la corrida hacia el dólar se había desarrollado durante todo el año, pero en el escenario postelectoral se desató una lucha en torno al valor del peso que terminó en la limitación y, finalmente, prohibición de la venta de dólares por el canal oficial. La coyuntura de 2011 fue el resultado de la reemergencia de la restricción externa. En un marco de exclusión de facto de los mercados internacionales de crédito durante todo el período y de la continuidad de un marco internacional desfavorable, la reaparición del déficit fiscal y de cuenta corriente dio por tierra con los fundamentos de los incrementados márgenes de maniobra del Estado durante la postconvertibilidad. Esta situación conllevó una amplificación de los desequilibrios en las esferas de la acumulación y del Estado, que derivó en la pérdida sus capacidades institucionales, en un agravamiento de las tensiones cambiarias e inflacionarias y en la consiguiente presión por iniciar el ajuste.

Las políticas de ajuste gradual desarrolladas desde entonces han sido insuficientes para relanzar la acumulación, pero, hasta ahora, el gobierno parece tener éxito en aplazar el estallido de las contradicciones. En todo caso, lo que se manifiesta es la insuficiencia de la subordinación del trabajo para relanzar rápidamente la acumulación de capital sobre las bases existentes y la insuficiencia del desafío obrero al capital para romper los límites impuestos por la reestructuración del capital y del Estado de los años noventa.

Algunas palabras sobre los límites de la estrategia kirchnerista

Los límites de la estrategia kirchnerista ya asoman en los desequilibrios acumulados mientras duró su despliegue, en el núcleo duro que la dualización estructural opuso al proceso de incorporación política de demandas y en el golpe que la reaparición de la restricción externa asestó a la ilusión de autonomía del Estado. Sin embargo, conviene observar esos límites no sólo a través de sus resultados, los cuales siempre contienen determinaciones contingentes, aquellas que nos arrojan al terreno estéril de lo que pudo haber sido y no fue. Como decíamos anteriormente, para lograr una comprensión más abarcadora de lo que el kirchnerismo significa, es necesario descubrir los límites internos a su propia definición, los obstáculos a la realización de la estrategia kirchnerista que son constitutivos de ella y no meros accidentes exteriores.

En este sentido, el primer límite es aquella relación de fuerzas paradójica que está en la base de su emergencia como proyecto político. Y si, como decíamos antes, el kirchnerismo es exterior al proceso de movilización popular que quebró la convertibilidad y que viene a clausurar, la recomposición de la acumulación y la dominación que condujo se instala sobre, expresa y desarrolla esa relación de fuerzas.

La definición de su estrategia, como de reconstrucción del consenso a partir de la satisfacción de demandas populares sin reversión radical de la reestructuración capitalista neoliberal, supone esa relación de fuerzas como su condición de existencia. Basta considerar cómo una modificación cualitativa de esta relación, en cualquier sentido, cambia la naturaleza del proyecto político que la encarna y nos sitúa fuera de la estrategia kirchnerista. Una radicalización de la impugnación de la reestructuración neoliberal del capital y del Estado nos acerca a experiencias de reforma radical, tales como las de Bolivia y Venezuela; mientras que una subordinación de los trabajadores que adecue sus demandas a las necesidades de la acumulación supone abandonar el neopopulismo, en dirección a experiencias “neodesarrollistas”⁴, tales como las de Brasil o Uruguay.

A su vez, el hecho de que los gobiernos kirchneristas experimentaran esa relación de fuerzas como límite a su acción demuestra que se trata de un límite objetivo. En este sentido, el argumento kirchnerista de que, durante el enfrentamiento con la burguesía agraria en 2008, el gobierno quedó “a la izquierda de la sociedad” tiene bastante de cierto. Cuando el gobierno intentó, una vez más, mejorar su situación fiscal –y desacoplar los precios internos de los alimentos de sus

⁴ Ver nota 3.

precios internacionales– a través de un incremento de los derechos de exportación⁵, encontró los límites que la relación de fuerzas como condición de existencia le imponía. No se trata de que el resultado de la contienda estuviera escrito de antemano o de que las luchas simplemente fueran el terreno de desarrollo de una lógica objetiva. Pero los modos y capacidades relativas de intervención de los actores del conflicto pusieron de manifiesto una constelación de fuerzas sociales que, aun para el gobierno, constituían un dato de corto y mediano plazo.

La burguesía agraria mostró una inédita capacidad de movilización y de afectación de la vida económica y política, articulando una alianza social que contuvo a las movilizadas “clases medias” de la ciudad y del campo, constituyendo el terreno para la acción extraparlamentaria de la oposición política. El gobierno, por su parte, no pudo oponer una movilización semejante de los trabajadores –formales y precarios; ocupados y desocupados– y los que intervinieron lo hicieron a través de la CGT, de los movimientos sociales oficialistas y de los dispositivos territoriales de los jefes políticos locales, que se constituyeron en su base fundamental. Y esos límites también aparecieron cuando el gobierno intentó reducir subsidios a las tarifas domésticas de los servicios públicos o en los ensayos de un ajuste, aunque sea gradual, como respuesta al estancamiento y la recesión.

En la medida que la satisfacción gradual de demandas es la *differentia specifica* del kirchnerismo con la oposición política, cualquier intento en ese sentido desata procesos de deslegitimación pública que fuerzan retrocesos, compensaciones o la reducción del ritmo del ajuste.

Decíamos que la relación de fuerzas que es condición de existencia de la estrategia kirchnerista es interna a su definición, pero externa al kirchnerismo como movimiento político. Existe otro límite, sin embargo, que es interno en ambos sentidos. Se trata del “bloque político” que el kirchnerismo encarna.

En las sociedades contemporáneas, el ejercicio específico de las funciones hegemónicas corre por cuenta de aparatos burocráticos especializados, prioritariamente (aunque no sólo ellos) los partidos políticos. Nos referimos, entonces, con “bloque político” a un conjunto organizado de aparatos especializados de mediación política –partidos, sindicatos, movimientos sociales, etc.– capaz de construir una coalición política, en el sentido estrecho de base de apoyo para la movilización

⁵ Las retenciones móviles implicaban, en esa coyuntura, un fuerte incremento de presión tributaria. Cualquier especulación sobre lo que hubiera sucedido con esa movilidad cuando los precios bajaran, en caso de que el gobierno triunfaba en la contienda, cae fuera de las causas reales del conflicto.

política, fundamentalmente electoral, aunque también bajo otras formas.

La distinción entre “bloque político” y “bloque en el poder” es teórica y operativamente muy importante. El “bloque en el poder” refiere al predominio político de una fracción de la burguesía sobre otras, el que se halla entrelazado con la capacidad de hegemonía sobre la clase obrera y otros grupos sociales subalternos, tales como la pequeña burguesía o el campesinado (Poulantzas, 1986b). Por lo tanto, la clase obrera nunca puede ser parte del “bloque en el poder”. En cambio, sí puede ser parte de un “bloque político”, por ejemplo, como clase obrera sindicalmente organizada o siendo parte de una coalición política como base de apoyo electoral.⁶ Lo que le ha permitido al peronismo constituirse en partido del orden, tanto en la crisis de 1989 como de 2001, es la capacidad de incluir en su “bloque político” a la mayoría de las direcciones sindicales y contar con una base territorial firme. Ello le otorga una gran potencialidad para incorporar a su coalición política a una fuerza laboral dualizada, lo cual ha sido esencial para el desarrollo de la estrategia kirchnerista. El kirchnerismo es peronismo y esta verdad de perogrullo se convierte en un dato central a la hora de analizar los límites de esa estrategia.

La articulación de su “bloque político” –sobre la base de las direcciones sindicales cegetistas subordinadas al PJ y del poder territorial de gobernadores e intendentes– tiene efectos profundos y hunde sus raíces en la resolución de la crisis de 2001.

El Partido Justicialista, aunque menos impactado que otras fuerzas por esa crisis, no salió indemne de ella. De hecho, en esos días, quedó reducido a poco más que a una federación de gobernadores, con fuerte influencia de los intendentes más poderosos del conurbano bonaerense. Las alternativas de la elección de Rodríguez Saá, primero, y de Duhalde, después, para conducir la transición hacia un nuevo gobierno surgido de elecciones libres, lo pusieron de manifiesto. Los gobernadores, y no pocos intendentes, se convirtieron en “barones electores”. Néstor Kirchner pudo asumir la conducción del peronismo una vez que sumó el apoyo masivo de esos gobernadores e intendentes en su enfrentamiento con Duhalde –como Menem lo había hecho con Cafiero– y después de alinear a la CGT detrás suyo. La transversalidad nunca dio lugar a una base de apoyo suficiente que garantizara a Néstor Kirchner y Cristina Fernández autonomía frente a esa estructura tradicional y, en los momentos de debilidad, el sostenimiento de la lealtad del PJ y de la mayoría de la CGT resultó fundamental. Pero esos

⁶ Esta conceptualización de “bloque político” es una reproducción de la expuesta en Piva (2012).

aparatos políticos, cuya reproducción depende de su articulación exitosa con el Estado, constituyen, por esa misma razón, una fuerza conservadora del orden que impone límites a la estrategia kirchnerista. Internos a su conformación como fuerza política, esos límites aparecieron y aparecen en diversos momentos y en el ejercicio cotidiano del poder político.

En la coyuntura de ruptura con el duhaldismo y de la salida de Lavagna, se consolidó una oposición peronista que, si bien entonces era minoritaria y estaba conformada por los “vencidos”, mostró durabilidad y capacidad de atracción, especialmente en la medida que el kirchnerismo dejó traslucir, en el desarrollo de su estrategia de incorporación política de la movilización desafiante, algunos rasgos disruptivos.

En la coyuntura del enfrentamiento con la burguesía agraria, se produjo el pasaje a la oposición de figuras importantes del PJ, como el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota; el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá; el exgobernador de Santa Fé, Carlos Reuteman; entre otros. Lejos de representar alejamientos individuales, constituyeron auténticas fracturas del PJ y, en algunos casos, el alejamiento de partidos provinciales completos, como el de Córdoba. La expresión de ello fue la derrota de la Resolución N°125 en el Senado que, imputada al vicepresidente Julio Cobos, tuvo como condición la defección de buena parte del oficialismo.⁷ El proceso se completó en las elecciones legislativas de 2009, en la que los intendentes del conurbano bonaerense salvaron las ropas dividiendo las lealtades locales: sus punteros llamaron poco disimuladamente a votar por los intendentes y concejales propios; y, con menos pasión, por los candidatos a diputados nacionales del Frente para la Victoria.

El resultado fue la revalidación de los liderazgos locales y la derrota de Néstor Kirchner a manos del peronismo opositor de Francisco De Narváez. La necesidad de la conducción política del kirchnerismo de mantener unido su “bloque político” constituye un límite interno tanto más poderoso cuando se producen nuevas rupturas que desafían su liderazgo y disputan el apoyo del PJ y los sindicatos. Eso sucedió con De Narváez en 2009 y volvió a suceder con Sergio Massa en 2013, en tanto ambos derrotaron al FPV en territorio bonaerense. A ello, deberíamos sumar la dependencia del sostenimiento de las estructuras políticas

⁷ La votación terminó empatada en 36 votos, a pesar de que el oficialismo contaba, en los papeles, con una amplia mayoría. El entonces vicepresidente Julio Cobos desempató en contra del gobierno y rompió la concertación del Frente para la Victoria con un sector del radicalismo, denominado popularmente “radicalismo K”.

tradicionales en provincias como Formosa, Jujuy, Salta, San Juan, entre otras tantas.

La tensión entre asistencia social estatal y solución de problemas por medios clientelares, que llega a amenazar la coherencia de la intervención estatal, también es resultado de ese límite interno. Si bien la dualización de la fuerza laboral es parte de las relaciones de fuerza sobre la que el kirchnerismo emerge, la respuesta clientelar al problema político que esa dualización representa es inherente a la reproducción del aparato político que articula al kirchnerismo como fuerza.

Las direcciones sindicales plantean desafíos similares. El sector conducido por Luis Barrionuevo rompió tempranamente, en el marco de la ruptura con el duhaldismo. El divorcio con Hugo Moyano obligó al kirchnerismo a apoyarse sobre los “gordos”, los mismos que desplegaron la estrategia neoparticipacionista durante el menemismo y a los que el kirchnerismo había desalojado de la dirección de la CGT en 2003. El mismo grupo que integra la Lista Verde de la Unión Ferroviaria, aquella de los asesinos de Mariano Ferreyra. La negativa a otorgar la personería a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) conducida por Yasky, las dilaciones para reconocer a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) –direcciones sindicales enfrentadas al sindicalismo cegetista y que, sin ser parte del PJ, forman parte de la coalición kirchnerista– y, en general, el sostenimiento del modelo sindical tradicional son algunos de los límites que la unidad de su “bloque político” le impone. Estas presiones se intensifican en la medida en que la competencia electoral abre el juego de los apoyos sindicales a los diferentes candidatos. El entramado institucional tejido por la renovación peronista, el mismo que el kirchnerismo defendió frente a la arremetida del moyanismo, es el marco que señala los límites internos de la estrategia kirchnerista de incorporación política de demandas y de la movilización desafiante.

La recomposición de la acumulación y de la dominación que condujo el kirchnerismo cerró la crisis abierta tras el 2001. Pero lo hizo a costa de abrir y reproducir un largo *impasse* en torno a una relación de fuerzas de difícil estabilización. La actual situación económica y política presiona crecientemente por su resolución. Pero, aunque todo parezca apuntar hacia un giro conservador sin rupturas profundas, el final del juego permanece abierto.

Cuadros y gráficos

Cuadro 1			
PBI a precios de 1993, variación porcentual anual e Índice			
Año	PBI	Variación % PBI	Índice PBI
1993	236.504.980		100,0
1994	250.307.886	5,8%	105,8
1995	243.186.102	-2,8%	102,8
1996	256.626.243	5,5%	108,5
1997	277.441.318	8,1%	117,3
1998	288.123.305	3,9%	121,8
1999	278.369.014	-3,4%	117,7
2000	276.172.685	-0,8%	116,8
2001	263.996.674	-4,4%	111,6
2002	235.235.597	-10,9%	99,5
2003	256.023.462	8,8%	108,2
2004	279.141.289	9,0%	118,0
2005	304.763.529	9,2%	128,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación

Cuadro 2				
IBIF a precios de 1993; Índice IBIF 1993=100; Consumo de los hogares a precios de 1993; Índice consumo de los hogares 1993=100				
Año	IBIF	Índice IBIF	Consumo hogares con IVA	Índice consumo hogares c/IVA
1993	45.069.414	100	163.675.543	100,0
1994	51.231.425	113,7	173.608.052	106,1
1995	44.528.277	98,8	166.008.046	101,4
1996	48.483.861	107,6	175.195.864	107,0
1997	57.047.500	126,6	190.922.434	116,6
1998	60.780.670	134,9	197.557.138	120,7
1999	53.116.315	117,9	193.609.614	118,3
2000	49.502.143	109,8	192.332.463	117,5
2001	41.749.588	92,6	181.289.984	110,8
2002	26.532.874	58,9	155.267.267	94,9
2003	36.659.459	81,3	167.951.003	102,6
2004	49.279.552	109,3	183.905.707	112,4
2005	60.458.443	134,1	200.316.777	122,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación

Cuadro 3
Crecimiento industrial por bloques para los períodos 1996-1998 y 2003-2005

	Productos alimenticios y bebidas	Productos del tabaco	Productos textiles	Papel y cartón	Edición e impresión	Refinación del petróleo	Sustancias y productos químicos	Caucho y plástico	Productos minerales no metálicos	Industrias metálicas básicas	Vehículos Automotores	Metalmecánica exc. Ind. Automotriz
Crecimiento 1996-1998	6,5%	1,5	-5,8	0,0	31,4	15,1	15,1	12,5	27,2	2,8	47,9	-1,0
Crecimiento 2003-2005	13,4%	-13,9	18,0	16,4	16,4	2,1	19,3	22,0	34,1	5,6	94,3	21,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la Nación

Cuadro 4
Utilización de la de capacidad instalada en la industria - Bloques sectoriales (en porcentaje)

Período	NIVEL GENERAL	Productos alimenticios y bebidas	Productos del tabaco	Productos textiles	Papel y cartón	Edición e impresión	Refinación del petróleo	Sustancias y productos químicos	Goma y plástico	Minerales no metálicos	Industrias metálicas básicas	Vehículos automotores	Metaimec. excl. Industria automotriz
Ene-02	48,2	64,1	64,1	26,5	66,9	53,2	82,8	57,7	40,1	32,1	61,8	6,8	23,2
Feb-02	51,1	65,1	64,1	28,3	81,1	52,1	79,5	61,1	46,7	34,0	75,5	13,3	25,0
Mar-02	50,3	62,2	59,7	30,4	68,0	48,7	79,7	55,8	48,6	31,3	78,8	17,1	30,4
Abr-02	55,1	65,1	64,1	44,4	77,3	47,4	83,2	64,0	51,4	35,6	89,7	26,1	31,3
May-02	55,2	65,7	64,8	38,0	79,1	47,1	82,7	60,3	54,4	37,6	88,8	23,8	36,0
Jun-02	55,4	66,5	57,8	41,3	78,5	47,6	81,5	62,8	55,2	34,8	85,0	22,0	36,2
Jul-02	56,6	68,2	62,7	48,9	73,7	47,8	80,6	63,0	51,9	37,0	87,5	24,3	38,5
Ago-02	56,9	68,8	59,1	56,4	81,4	44,5	77,4	61,7	53,4	41,0	88,6	23,4	38,7
Sep-02	58,6	68,7	60,7	60,1	81,7	45,2	86,8	63,7	55,5	43,3	88,0	24,9	41,7
Oct-02	59,7	70,6	63,2	58,3	83,3	47,1	87,9	65,2	58,0	40,5	91,5	25,3	41,4
Nov-02	61,2	70,5	71,7	60,0	83,5	49,4	86,8	68,7	63,8	42,3	85,8	25,0	45,2
Dic-02	60	70,9	74,3	57,7	82,6	50,9	88,5	64,4	64,0	42,4	84,5	18,3	44,3
Ene-03	58,8	67,5	71,9	67,9	74,5	50,4	88,2	66,9	58,0	41,9	81,3	13,7	44,5
Feb-03	61,1	67,3	66,9	72,3	83,9	51,1	86,0	68,0	59,7	45,0	91,9	16,8	49,6
Mar-03	61,8	62,5	64,4	76,0	85,5	54,1	86,6	68,0	56,5	45,7	95,8	21,3	59,9
Abr-03	63,2	64,9	72,6	76,5	80,5	57,0	88,2	67,0	57,3	45,0	94,8	24,7	59,2
May-03	64,2	65,3	68,0	80,0	87,3	61,1	88,4	76,5	54,3	37,4	95,7	22,2	55,1
Jun-03	64,3	66,1	67,0	77,1	88,0	61,0	90,3	74,2	58,4	42,0	92,9	21,8	55,6
Jul-03	66	68,9	67,1	75,4	85,2	62,6	87,4	78,3	65,5	47,5	93,8	18,6	56,5
Ago-03	66,2	68,5	59,1	76,6	86,8	65,2	88,0	73,7	65,0	50,5	94,7	23,8	58,6
Sep-03	67,4	73,1	71,3	76,8	82,4	71,4	84,5	75,6	59,8	53,0	91,5	26,0	56,0
Oct-03	69,5	74,2	68,1	76,2	86,3	76,7	86,3	77,4	64,1	55,6	96,5	26,3	58,8
Nov-03	69,9	71,2	76,0	75,8	88,3	81,0	90,9	79,0	66,8	55,1	92,4	30,8	58,1
Dic-03	66,6	74,7	75,6	60,6	82,4	74,9	86,4	73,7	62,5	50,1	91,6	20,9	54,3

[Continúa]

[Viene de página anterior]

Ene-04	65,7	72,8	69,9	68,3	82,3	75,4	90,8	73,7	69,0	47,1	86,2	18,5	50,8
Feb-04	67,1	71,1	70,7	78,7	86,2	78,4	82,1	74,6	65,0	49,1	94,8	23,2	55,1
Mar-04	71	74,6	83,1	77,7	86,6	74,0	91,3	79,3	65,5	50,4	93,1	34,0	61,8
Abr-04	68,4	72,8	56,7	80,4	84,8	71,6	85,1	74,3	63,1	48,4	90,8	32,6	61,2
May-04	68,9	71,2	63,2	79,6	77,2	66,8	86,7	76,7	64,9	50,6	93,5	33,0	64,2
Jun-04	70,8	73,5	59,3	83,6	81,7	73,1	89,6	79,6	63,7	52,2	91,8	35,6	64,2
Jul-04	71,5	74,8	59,9	81,2	83,8	71,6	91,7	80,9	66,4	52,4	94,5	32,5	64,4
Ago-04	71,5	73,6	60,2	81,3	87,0	68,4	89,2	79,2	71,0	52,9	93,9	36,1	66,8
Sep-04	71,8	75,4	67,2	84,2	82,1	72,0	92,6	76,9	71,5	57,4	92,3	39,0	63,1
Oct-04	70,6	72,8	58,7	79,5	85,6	69,1	93,7	77,7	65,8	57,9	98,1	38,6	60,8
Nov-04	70,4	70,7	74,1	78,8	86,2	73,5	83,2	74,9	66,9	57,0	97,8	45,7	62,3
Dic-04	68,5	74,1	64,6	61,0	81,2	74,7	91,1	75,3	62,5	54,3	94,0	35,0	56,0
Ene-05	66,1	72,3	60,7	64,1	81,6	71,2	85,7	73,0	64,0	53,3	88,6	31,5	52,6
Feb-05	69,2	73,3	65,1	78,5	85,2	78,0	93,0	76,5	67,5	54,4	96,1	21,9	57,7
Mar-05	71	70,5	60,9	79,6	86,0	76,1	91,1	76,8	67,5	54,9	98,4	42,9	63,1
Abr-05	71,3	73,0	59,6	80,4	84,4	78,5	84,3	75,4	67,1	57,2	97,6	43,7	63,5
May-05	70,7	70,9	61,5	83,3	85,7	73,0	83,8	77,1	64,5	57,1	98,3	40,9	64,3
Jun-05	71,2	73,3	60,5	86,1	80,6	72,7	84,4	78,4	67,1	54,7	94,2	42,1	63,6
Jul-05	72	76,0	59,6	83,8	82,1	72,3	83,8	77,9	70,8	57,3	95,1	42,5	63,3
Ago-05	73,1	76,7	55,4	87,5	80,8	74,0	90,9	76,4	70,0	60,2	95,8	46,0	64,7
Sep-05	74,3	79,1	58,5	88,1	74,9	76,1	94,3	79,7	71,7	63,5	87,3	47,1	65,0
Oct-05	73,1	77,3	57,1	84,1	73,6	73,4	90,9	80,8	68,0	61,0	91,5	44,6	64,1
Nov-05	72,1	72,5	66,6	82,8	78,9	74,6	91,5	75,8	68,3	61,2	96,5	53,5	61,6
Dic-05	68,9	75,1	66,3	69,2	75,2	73,5	93,6	73,7	64,2	59,3	93,7	34,4	56,0
Ene-06	64,8	70,2	65,3	66,3	76,1	70,1	92,7	73,4	64,3	55,7	84,0	18,0	52,8
Feb-06	70,2	69,9	74,7	80,3	75,8	76,0	94,5	74,3	65,4	58,4	96,5	46,8	59,1
Mar-06	71,2	68,7	68,5	80,4	79,2	75,5	94,0	73,8	65,6	58,0	98,8	52,0	64,9
Abr-06	71,1	67,5	60,1	83,6	76,7	74,8	93,9	75,4	63,5	62,6	96,0	50,6	65,7
May-06	70,5	65,8	68,8	84,0	80,1	73,8	93,6	75,0	62,4	62,1	95,8	46,4	66,7
Jun-06	72,0	69,3	60,6	86,6	75,8	72,8	94,8	76,4	65,6	63,1	97,6	54,3	64,8
Jul-06	72,7	72,3	67,3	87,4	78,5	70,3	93,0	77,3	67,1	62,1	93,3	55,1	65,0

Fuente: INDEC

Cuadro 5
Exportaciones e importaciones (mercancías) y saldo comercial

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo comercial
1989	9656	3971	5685
1990	12488	3845	8643
1991	12146	7682	4464
1992	12399	13795	-1396
1993	13.269	15.633	-2.364
1994	16.023	20.162	-4.139
1995	21.162	18.804	2.357
1996	24.043	22.283	1.760
1997	26.431	28.554	-2.123
1998	26.434	29.531	-3.097
1999	23.309	24.103	-795
2000	26.341	23.889	2.452
2001	26.543	19.158	7.385
2002	25.651	8.473	17.178
2003	29.939	13.134	16.805
2004	34.576	21.311	13.265
2005	40.106	27.302	12.805

Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación

Cuadro 6
Tasas de Consumo total, público y privado, Inversión Bruta Fija y Exportaciones sobre PBI a precios constantes (1993) (1993-2012)

Año	Consumo privado/PBI	Consumo público/PBI	Consumo total/PBI	Inversión Bruta Fija/PBI	Exportaciones/PBI
1993	69,20	13,51	82,72	19,06	6,91
1994	69,36	12,82	82,18	20,47	7,53
1995	68,26	13,30	81,56	18,31	9,49
1996	68,27	12,87	81,14	18,89	9,68
1997	68,81	12,29	81,11	20,56	10,05
1998	68,57	12,23	80,80	21,09	10,70
1999	69,55	12,99	82,55	19,08	10,94
2000	69,64	13,17	82,81	17,92	11,32
2001	68,67	13,50	82,17	15,81	12,17
2002	66,00	14,38	80,38	11,28	14,08
2003	65,60	13,40	79,00	14,32	13,71
2004	65,88	12,63	78,51	17,65	13,60
2005	65,73	12,27	78,00	19,84	14,14
2006	65,31	11,91	77,21	21,61	13,99
2007	65,49	11,79	77,28	22,60	14,04
2008	65,36	11,80	77,17	23,09	13,31
2009	65,10	12,55	77,65	20,56	12,35
2010	65,00	12,58	77,58	22,84	12,97
2011	66,07	12,81	78,88	24,45	12,42
2012	67,71	13,39	81,10	22,83	11,38

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Cuadro 7
Valor Agregado Bruto (VAB) de la Industria Manufacturera sobre VAB y PBI a precios de mercado (Precios constantes y corrientes - año base 1993)

	1993	1998	2003	2012
VAB Industria Manufacturera/ VAB a precios de productor (Precios constantes de 1993)	19,81%	18,78%	17,49%	17,49%
VAB Industria Manufacturera/ PBI precios de mercado (Precios constantes de 1993)	18,24	17,19%	16,39%	15,94%
VAB Industria Manufacturera /VAB a precios de productor (Precios corrientes 1993)	19,81%	19,37%	24,04%	19,67%
Producción Industrial/PBI precios de mercado (Precios corrientes 1993)	18,24%	17,84%	22,49%	17,74%

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Cuadro 8

VAB Industria manufacturera sobre ocupados industriales (Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE – INDEC)), VAB Industria manufacturera sobre ocupados industriales (Encuesta Industrial Mensual (EIM)), VAB Industria manufacturera sobre ocupados industriales (Encuesta de Indicadores Laborales-EIL) (Variación porcentual 2003 – 2011)

	VAB/Ocupados (ENGE)	VAB/Ocupados (EIM) Total industria	VAB/Ocupados (EIL) Total industria
2003-2011	221,4%	205,7%	182,8%

Fuente: INDEC, Ministerio de Economía de la Nación, Ministerio de trabajo de la Nación

Cuadro 9

Variación porcentual 1991/1998 y 2003/2011 de indicadores de la industria manufacturera (Volumen físico de producción, Productividad horaria, productividad por obrero ocupado, productividad por ocupado sobre salario real e intensidad laboral)

	Variación (%) '91-'98	Variación (%) '91-'98	Variación (%) '03-'11	Variación (%) '91-'98	Variación (%) '03-'11	Variación (%) '91-'98	Variación (%) '03-'11	Variación (%) '91-'98	Variación (%) '03-'11
Volumen físico de producción	31,7%	101,1%	54,1%	54,2%	58,7%	49,5%	61,1%	17,9%	-44,1%
Productividad horaria									
Productividad por obrero ocupado									
Productividad/Salarios IPC – INDEC/IPC9									
Productividad/Salarios IPIM									
Intensidad laboral									
Nivel General	31,7%	101,1%	54,1%	54,2%	58,7%	49,5%	61,1%	17,9%	-44,1%

Fuente: Ministerio de Industria de la Nación, INDEC, CIFRA

Cuadro 10
Variación anual promedio (1991-1998 y 2003-2011) de la productividad horaria
y por ocupado de la Industria manufacturera

	Variación Anual Promedio Productividad horaria	Variación Anual Promedio Productividad por ocupado
1991-1998	6,4%	6,9%
2003-2011	5,6%	5,2%

Fuente: Ministerio de Industria de la Nación

Cuadro 11
Tasas de Consumo total, público y privado, Inversión Bruta Fija y Exportaciones sobre PBI a
precios corrientes (1993) (1993-2012)

Año	Consumo privado/PBI	Consumo público/PBI	Consumo total/PBI	Inversión Bruta Fija/PBI	Exportaciones/ PBI
1993	69,20	13,51	82,72	19,06	6,91
1994	69,92	13,19	83,11	19,94	7,53
1995	68,56	13,35	81,91	17,94	9,68
1996	68,52	12,50	81,02	18,08	10,42
1997	69,33	12,06	81,39	19,37	10,56
1998	69,05	12,49	81,55	19,93	10,41
1999	70,14	13,72	83,86	18,01	9,83
2000	69,33	13,78	83,12	16,19	10,99
2001	68,91	14,16	83,07	14,18	11,58
2002	61,90	12,23	74,13	11,96	28,38
2003	63,20	11,44	74,63	15,14	25,93
2004	62,81	11,13	73,95	19,17	25,71
2005	61,34	11,91	73,25	21,45	25,07
2006	59,03	12,41	71,44	23,35	24,76
2007	58,57	12,92	71,50	24,20	24,63
2008	57,61	13,44	71,06	23,28	24,47
2009	58,26	15,19	73,45	20,92	21,35
2010	57,31	14,92	72,23	22,00	21,71
2011	56,41	15,14	71,55	22,57	21,82
2012	57,08	16,62	73,70	21,78	19,71

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación

Cuadro 12
Índices de salario real (General, Sector Privado Registrados, Sector Privado No Registrado)
deflactados por IPC y provincias – CIFRA (2001-2013) · (Diciembre de cada año. Diciembre
2001 = 100)

Año	Índice evolución salario real general	Índice evolución salario real sector privado registrado	Índice evolución salario real sector privado no registrado
2001	100,00	100,00	100,00
2002	76,29	82,88	67,19
2003	82,53	92,74	71,62
2004	85,03	97,02	75,50
2005	91,08	108,79	75,70
2006	98,77	118,52	83,29
2007	96,70	113,56	82,29
2008	96,23	109,47	92,24
2009	97,72	111,73	97,41
2010	97,93	114,54	95,29
2011	103,41	126,87	103,06
2012	104,01	127,88	111,24
2013	100,96	123,44	109,55

Fuente: INDEC y CIFRA

Cuadro 13
Evolución del promedio mensual de paros, junio de 2003-diciembre de 2009

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
5,4	11,2	17	9,25	16	10,1	10,2

Fuente: Base de datos de elaboración propia a partir del diario La Nación

Cuadro 14
Movimientos de desocupados, Indicadores de evolución del conflicto, junio de
2003-diciembre de 2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Promedio mensual de acciones	27,42	40,8	27,3	7,8	2,2	6,5	7,2
Porcentaje de cortes, ocupaciones y tomas	76,1%	82,2%	84,8%	39,4%	30,8%	30,8%	84,9%
Porcentaje de marchas, concentraciones y otros	23,9%	17,8%	15,2%	60,6%	69,2%	69,2%	15,1%

Fuente: Base de datos de elaboración propia a partir del diario La Nación

Cuadro 15
Número y porcentaje de acciones de desocupados por semestre. Año 2009

	1º semestre	2º semestre	Total
Número de acciones	15	71	86
Porcentaje de acciones	17,5%	82,5%	100%

Fuente: Base de datos de elaboración propia a partir del diario La Nación

Cuadro 16
Número y porcentaje de paros por mes. Año 2009

	Mes												Total
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Número de paros	7	3	27	10	13	1	2	9	13	14	16	8	123
Porcentaje de paros	5,7	2,4	22,0	8,1	10,6	0,8	1,6	7,3	10,6	11,4	13,0	6,5	100,0

Fuente: Base de datos de elaboración propia a partir del diario La Nación

Cuadro 17
Evolución de los porcentajes anuales de paros motivados en demandas de Aumento salarial, Seguridad y en Conflictos intersindicales, 2003-2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aumento salarial	50	77,4	83,8	64,9	60,7	59,5	63,3
Seguridad	5,3	2,3	2	1,8	3,7	5,8	4,2
Confl. intersindicales	2,6	3,8	1,5	0	4,7	4,1	10

Fuente: Base de datos de elaboración propia a partir del diario La Nación

Cuadro 18
Variación respecto del año anterior de M2/PBI Constante (1993), M2/PBI Corriente (1993) e IPC 2004-2012

Año	M2/PBI Constante (1993) Variación respecto año anterior	M2/PBI Corriente Variación respecto año anterior	IPC Variación respecto año anterior
2004	28,00%	17,20%	4,40%
2005	13,40%	4,19%	9,70%
2006	13,01%	-0,37%	10,30%
2007	11,48%	-2,44%	18,30%
2008	9,88%	-7,72%	27,10%
2009	10,57%	0,54%	14,60%
2010	11,89%	-3,02%	23,10%
2011	22,67%	4,60%	23,40%
2012	30,27%	12,98%	23,70%

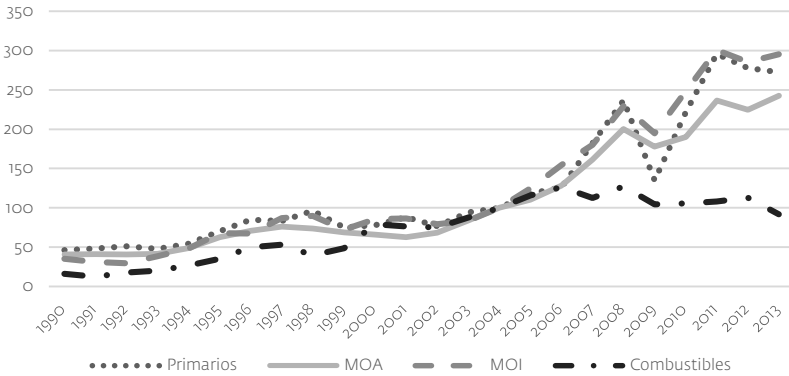
Fuente: INDEC - CIFRA/CTA

Cuadro 19
Variación respecto del año anterior de Salario nominal (registrados sector privado y no registrados), IPC y Salario real (General y registrados sector privado) 2004 – 2006

Año	Salario nominal nivel general Var. respecto año anterior (diciembre)	Salario nominal registrados s. privado Var. respecto año anterior (diciembre)	IPC – INDEC Var. respecto año anterior (diciembre)	Salario real nivel general Var. respecto año anterior (diciembre)	Salario real registrados s. privado Var. respecto año anterior (diciembre)
2004	9,3%	11,0%	6,3%		
2005	20,3%	26,0%	12,4%	7,1%	12,1%
2006	18,9%	19,4%	9,6%	8,4%	8,93%

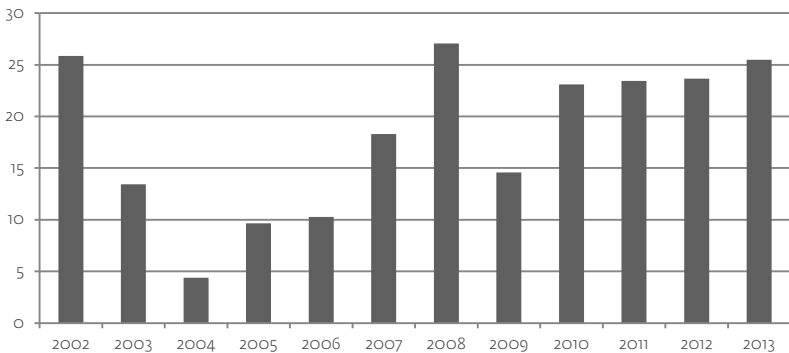
Fuente: INDEC

Gráfico 1
Exportaciones por grandes rubros según índice de valor (1990-2013)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Gráfico 2
IPC (variación porcentual anual) (2002-2013)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC (hasta 2006), IPC 9 prov. - CIFRA

Bibliografía

- ADAMOVSKY, E. (2009). *Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión (1919-2009)*. Buenos Aires: Planeta.
- AGIS, E., CAÑETE, M. Y PANIGO, D. (2010). *El impacto de la asignación universal por hijo. Documentos del CEIL-PIETTE*. Buenos Aires: CEIL-PIETTE.
- AGLIETTA, M. (1979). *Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos*. México DF: Siglo XXI Editores
- AGLIETTA, M. Y ORLÉAN, A. (1990). *La violencia de la moneda*. México DF: Siglo XXI Editores.
- ALVAREZ, L. Y COMPOSTO, C. (2010). “Minería a gran escala. Estado y resistencias sociales”. Ponencia presentada a las VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”, La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010.
- AMICO, F. (2008). “Argentina 2002-2008: ciclo económico, inflación y crecimiento”. En *Oikos. Revista de Economía Heterodoxa*. 10.
- ____ (2013). “Crecimiento, distribución y restricción externa en Argentina”. En *Circus. Revista Argentina de Economía*. 5.
- ANTÓN, G., CRESTO, J., REBÓN, J. Y SALGADO, R. (2010). “Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina”. En *OSAL*. Año XI. 28.
- ARGAÑARAZ, N. (2013). “Acuerdo de precios y emisión monetaria para financiar al fisco nacional: la estacionalidad juega un rol clave”. En *Informe económico N° 205*. Córdoba: IARAF.
- ASIAÍN, A. (2012). “Trayectoria del tipo de cambio y los salarios: un análisis para la economía Argentina (2001-2010)”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 51. 204.
- ASTARITA, R. et al. (1998). “Etapa de acumulación y régimen político en Argentina en la década del ‘90”. En *Debate Marxista*. 10.
- ASTARITA, R. (2003). “El oro y su rol monetario desde una perspectiva marxista”. En *Realidad Económica*. 199.
- ____ (2004). *Valor, mercado mundial y globalización*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- ____ (2008). *Keynes, Poskeynesianos y Keynesianos Neoclásicos*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- ____ (2010). *Economía política de la dependencia y el subdesarrollo. Tipo de cambio*

- y *renta agraria en la argentina*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- ____ (2012). “Crisis, sobrecapacidad y coyuntura”. Disponible en <http://rolandoastarita.wordpress.com/>.
- ____ (2012b). “Inversión y la “estructura social de la acumulación”. Disponible en <http://rolandoastarita.wordpress.com/>.
- ____ (2013). “Debate sobre la inflación en Argentina. Partes I a IV”. Disponible en <http://rolandoastarita.wordpress.com/>.
- ATZENI, M. Y GHIGLIANI, P. (2008). “Nature and limits of trade unions’ mobilizations in contemporary Argentina”. En *Labour Again Publications* - International Institute of Social History (Amsterdam). Disponible en <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/atzeni-ghigliani.pdf>.
- AUYERO, J. (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Manantial.
- AUYERO, J. (2007). *La zona gris, violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- AUYERO, J. Y BERTI, M. F. (2013). *La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense*. Buenos Aires: Katz.
- AZPIAZU, D. Y MANZANELLI, P. (2011). “Reinversión de utilidades y formación de capital en un gruposelecto de grandes firmas (1998-2009)”. En *Realidad Económica*. 257.
- BALBI, F. (2009). “¿Explicar el ‘peronismo’? Apuntes para un debate pendiente”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 49. 193.
- BARAN, P. Y SWEEZY, P. (1982). *El Capital monopolista: Ensayo sobre el orden económico y social de los Estados Unidos*. México DF: Siglo XXI Editores.
- BARTRA, R. (2007). “Populismo y democracia en América Latina” en *Perspectivas progresistas*. 1.
- BASUALDO, E. (2000). *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del '90*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- ____ (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- ____ (2003). “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”. En *Realidad Económica*. 200.
- ____ (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores/FLACSO.
- BELKIN, A. Y PIVA, A. (2009). “Elecciones del 28 de junio de 2009: el

- giro a la derecha en el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001". En *Herramienta*. 42.
- BONEFELD, W. (1992). "La reformulación de la teoría del estado". En HIRSCH, J., BONEFELD, W., CLARKE, S., PALÁEZ, E., HOLLOWAY, J., PLA, E. J. (1992). *Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista*. Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- BONNET, A. (1995). "Argentina 1995: ¿Una nueva hegemonía?". En *Cuadernos del Sur*. 19.
- _____ (2007). "Argentina: ¿un nuevo modelo de acumulación?". En *Anuario EDI*. 3.
- _____ (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- _____ (2008b). "El lock-out patronal y la crisis política del kirchnerismo". Ponencia presentada en el IV° Coloquio Internacional "América Latina: escenarios del nuevo siglo. Nuevos desafíos y horizontes de transformación". Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), Buenos Aires, 22-24 de octubre de 2008.
- BONNET, A. Y PIVA, A. (2013). "Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad". En GRIGERA, J. (comp.) (2013). *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- BORON, A. (1991). *Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- _____ (1995). "El experimento neoliberal de Carlos Saúl Menem". En BORON, A., MORA Y ARAUJO, M., NUN, J., PORTANTIERO, J.C., SIDICARRO, R. (1995). *Peronismo y menemismo*. Buenos Aires: Cielo por Asalto.
- _____ (2003). "La sociedad civil después del diluvio neoliberal". En SADER, E. Y GENTILI, P. (comp.) (2003). *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*. Buenos Aires: CLACSO.
- BOURDIEU, P. (1988). *La distinción: Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- BOYER, R. (1989). *La teoría de la regulación: un análisis crítico*. Buenos Aires: Humanitas.
- BRAUN, O. Y JOY, L. (1981). "Un modelo de estancamiento económico- estudio de caso sobre la economía argentina". En *Desarrollo Económico*. Vol. 20. 80.
- BRESSER PEREYRA, L.C. (2007). "Estado y Mercado en el nuevo desarrollismo". En *Nueva Sociedad*. 210.
- DE BRUNHOFF, S. (1973). *La concepción monetaria de Marx*. Buenos Aires: Del Siglo.

- _____. (1980). *La política monetaria. Un ensayo de interpretación marxista*. México DF: Siglo XXI Editores.
- CAMPIONE, D. (2008). “‘Reaparición obrera’ en Argentina a partir de 2004”. En LÓPEZ MAYA, M., IÑIGO CARRERA, N., CALVEIRO, P. (2008). *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- CANTÓN, D. (1973). *Elecciones y partidos políticos en la Argentina. Historia, interpretación y balance: 1910-1966*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- CAPELLO, M., GRIÓN, N. Y VALSAGNA, V. (2013). *Anatomía del gasto público argentino: expansión en la última década y desafíos a futuro*. En *Documentos de trabajo*. Año 19. 135.
- CARDOSO, F.H. Y FALETTO, E. (1992). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México DF: Siglo XXI Editores.
- CAVAROZZI, M. (2002). *Autoritarismo y democracia*. Buenos Aires: Eudeba.
- CHUDNOVSKY, D., LÓPEZ, A. Y PORTA, A. (1994). “La nueva inversión extranjera directa en la Argentina. Privatizaciones, mercado interno e integración regional”. En *Documentos de trabajo N° 15*. Disponible en www.fun-cenit.org.ar.
- CIAFARDINI, H. (1990). *Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente*. Buenos Aires: Agora.
- _____. (1990b). “Inflación y política antiinflacionaria (el empleo, la magnitud y la distribución del ingreso y el desarrollo en un marco inflacionario)” en CIAFARDINI, H. (1990). *Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente*. Buenos Aires: Agora.
- CIFRA (2012). “Propuesta de un indicador alternativo de inflación”. Disponible en [http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20-%20IPC-9%20\(Marzo%202012\).pdf](http://www.centrocifra.org.ar/docs/CIFRA%20-%20IPC-9%20(Marzo%202012).pdf).
- CORTÉS, M. (2009). *Luchas populares y lógica estatal: entre la autonomía y la institucionalización. Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea (2003-2007)*. Tesis de Maestría. Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- COTARELO, M.C. (2000). “La protesta en la Argentina de los ‘90”. En *Herramienta*. 12.
- CROMPTON, R. (1994). *Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales*. Madrid: Tecnos.
- DAHRENDORF, R. (1979). *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp.
- DALLE, P. (2011). “Movilidad social intergeneracional desde y al inte-

- rior de la clase trabajadora en una época de transformación estructural”. En *Revista Laboratorio*. 24.
- DAMILL, M. Y FRENKEL, R. (2013). “La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros”. En PERUZZOTTI, E. Y GERVAISONI, C. (eds.) (2013). *La Década Kirchnerista*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- DE RIZ, L. Y ADROGUÉ, G. (1991). “Democracia y elecciones en Argentina: 1983-1989”. En NOHLEN, D. Y DE RIZ, L. (1991). *Reforma institucional y cambio político*. Buenos Aires: Legasa.
- DEL CAMPO, H. (1983). *Sindicalismo y Peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*. Buenos Aires: CLACSO.
- DEVINE, P. (2006). “The 1970s and After: The Political Economy of Inflation and the Crisis of Social Democracy”. En *Soundings: A Journal of Politics and Culture*. 32.
- DI TELLA, T. (1977). “Populismo y reformismo”. En Ianni O. (comp.). *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México DF: Ediciones Era.
- DIAMAND, M. (1973). *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia: economía para las estructuras productivas desequilibradas: caso argentino*. Buenos Aires: Paidós.
- DONAIRE, R. Y ROSATI, G. (2009). “Evolución de la distribución de la población según grupos sociales fundamentales. Argentina, 1960-2001”. En PIMSA. *Documentos y comunicaciones 2008-2009*. Buenos Aires: PIMSA.
- ETCHEMENDY, S. Y COLLIER, R. (2008). “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”. En *POSTData*. 13.
- ETCHEMENDY, SEBASTIÁN Y PALERMO, V. (1998). “Conflicto y concertación. Gobierno, congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 37. 148.
- FABRIS, J. Y VILLADEAMIGO, J. (2011). “El ‘modelo productivo’ argentino. Fortalezas y debilidades de un modelo económico con aristas heterodoxas”. Ponencia presentada en la AHE Conference 2011, Nottingham Trent University, United Kingdom.
- FAIRBROTHER, P. (2008). “Social Movement Unionism or Trade Unions as Social Movement”. En *Employee Responsibilities and Rights Journal*. 20.
- FANELLI, J.M. Y ALBRIEU, R. (2009). “Crisis internacional y estrategia macroeconómica”. En KOSAKOFF, B. Y MERCADO, R. (Eds.)(2009).

- La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción. Crisis y oportunidades.* Buenos Aires: CEPAL.
- FERRER, A. (1963). “Devaluación, redistribución de ingresos y el proceso de desarticulación industrial en la Argentina”. En *Desarrollo económico*. Vol. 2. 4.
- ____ (2004). “Globalización, desarrollo y densidad nacional”. En *Pesquisa & Debate*. Vol. 15. N° 2.
- ____ (2010). “Raúl Prebisch y el dilema del desarrollo en el mundo global”. En *Revista de la CEPAL*. 101.
- FRANCO, R., HOPENHAYN, M. Y LEÓN, A. (2011). “Crece y cambia la clase media en América latina: una puesta al día”. En *Revista de la CEPAL*. 103.
- FREEMAN, A. Y KLIMAN, A. (2011). “A welcome step in a usefull direction. A response to Changkeun Kim”. En *Marxism 21*. Vol. 22.
- FREGE, C M. Y KELLY, J. (2003). “Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective”. En *European Journal of Industrial Relations*. Vol. 9. 1.
- FRENKEL, R. (2004). “Real Exchange Rate and Employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico”. Ponencia preparada para G24 - Washington DC, septiembre.
- ____ (2007). “La sostenibilidad de la política de esterilización”. En N° 17. Buenos Aires: CEFIDAR.
- ____ (2008). “Tipo de cambio real competitivo, inflación y política monetaria”. En *Revista de Economía Política de Buenos Aires*. Año 2, Vols. 3 y 4.
- FRENKEL, R. Y RAPETTI, M. (2011). *Fragilidad externa o desindustrialización: ¿Cuál es la principal amenaza para América Latina en la próxima década?*. Santiago de Chile: CEPAL.
- FRENKEL, R. Y TAYLOR, L. (2006). “Real Exchange Rate, Monetary Policy and Employment”. En *DESA Working paper N° 19*. Nueva York: United Nations.
- FRIEDMAN, M. (1968). “The role of monetary policy”. En *American Economic Review*. Vol. 58. 1.
- ____ (1970). “A Theoretical Framework for Monetary Analysis”. En *Journal of Political Economy*. Vol. 78. 2.
- GAGGERO, A., SCHORR, M. Y WAINER, A. (2014). *Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Futuro Anterior/Revista Crisis.

- GARCÍA, G. D. (2014). “Inversión extranjera directa y empresas extranjeras: rupturas y continuidades en Argentina, 1990-2012”. Ponencia presentada a las VII Jornadas de Economía Crítica, La Plata, octubre de 2014.
- GERMANI, G. (1977). *Política y sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.
- ____ (1977b). “Democracia representativa y clases populares”. En IANINI, O. (comp.) (1977). *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México DF: Ediciones Era.
- ____ (2003). *Autoritarismo, Fascismo y Populismo Nacional*. Buenos Aires: Temas.
- GIGLIANI, G. Y BERCOVICH, A. (2006). “Productividad y salarios industriales en la ‘era Kirchner’”. En *Anuario EDI*. 2.
- GIUSSANI, L.A. Y L'HOPITAL, M.F. (2003). *La inversión extranjera directa en Argentina (1992-2002)*. Buenos Aires: Dirección Nacional de Cuentas Internacionales/ INDEC.
- GOLDTHORPE, J. Y MCKNIGHT, A. (2004). *The economic basis of social class*. Londres: LSE.
- GORDON, D. (1980). “Etapas de acumulación y ciclos económicos largos”. En *CIDE Cuadernos semestrales*. 7.
- GRAMSCI, A. (1998). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- GRIGERA, J. (2011). “La desindustrialización en Argentina ¿Agresión a la manufactura o reestructuración capitalista?”. En BONNET, A. (comp.) (2011). *La Argentina invisible. Debates sobre la Argentina reciente*. Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente.
- GUERRERO, D. (2004). *Historia del pensamiento económico heterodoxo*. [Edición electrónica]. Disponible en www.eumed.net/coursecon/libreria
- HABERMAS, J. (1995). *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*. Buenos Aires: Amorrortu.
- HALPERIN DONGHI, T. (1975). “Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los migrantes internos”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 14. 56.
- HARRIS, L. (1985). *Teoría Monetaria*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- HEYMANN, D. Y RAMOS, A. (2010). “Una transición incompleta. Inflación y políticas macroeconómicas en la argentina post-convertibilidad”. En *Revista de Economía Política de Buenos Aires*. Año 4, Vols. 7 y 8.
- HIRSCH, J., BONEFELD, W., CLARKE, S., PALÁEZ, E., HOLLOWAY, J., PLA, E. J. (1992). *Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista*.

- Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- HOLLOWAY, J. (1994). *Marxismo, Estado y Capital*. Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- HORKHEIMER, M. Y ADORNO, TH. (2006). *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Trotta.
- INDEC (2006). *Evolución de la distribución del ingreso*. Disponible en www.indec.mecon.gov.ar.
- JAMES, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946 – 1976*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- JESSOP, B. (1980). “Teorías recientes sobre el estado capitalista”. En *Críticas de la Economía Política*. 16/17.
- ____ (1990). *State theory: putting the capitalist State in its place*. Cambridge: Polity Press.
- ____ (1996). “Osos polares y lucha de clases”. En *Cuadernos del Sur*. 21.
- KALECKI, M. (1984). *Teoría de la dinámica económica*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- KAN, J. Y PASCUAL, R. (2013). *Integrados (?)*. *Debates sobre las relaciones internacionales y la integración latinoamericana y europea*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- KATZ, C. (1989). “Teorías de la inflación en Latinoamérica” en *Realidad Económica*, n° 86.
- ____ (2001). “El desafío crítico a los economistas ortodoxos”. Disponible en <http://www.lahaine.org/katz/b2-img/El%20Desaf%C3%ADo%20Cr%C3%ADtico%20a.pdf>.
- ____ (2013). “La economía desde la izquierda II: Modelo y propuestas”. Disponible en <http://katz.lahaine.org/?p=226>.
- ____ (2013). “Las grietas del modelo”. Disponible en <http://katz.lahaine.org/?p=218>.
- ____ (2014). “¿Qué es el neo-desarrollismo? I- Una visión crítica. Economía”. Disponible en <http://katz.lahaine.org/?p=232>.
- KEJSEFMAN, I. (2014). “Neodesarrollismo: ¿qué hay de neo y qué de desarrollista en la Argentina de la postconvertibilidad?”. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Economía Crítica, La Plata, octubre de 2014.
- KENWORTHY, E. (1973). “The function of the little-known case in theory formation, or what peronism wasn’t”. En *Comparative Politics*. 6.
- ____ (1975). “Interpretaciones ortodoxas y revisionistas del apoyo inicial del peronismo”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 14,. 56.

- KESSLER, G. Y DI VIRGILIO, M. (2008). “La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas”. En *Revista de la CEPAL*. 95.
- KEYNES, J.M. (1986). *Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- KICILLOF, A. Y NAHÓN, C. (2006). “Las causas de la inflación en la actual etapa económica argentina: un nuevo traspié de la ortodoxia”. En *Documentos de trabajo N° 5*. Buenos Aires: CENDA.
- LACLAU, E. (2010). *La razón populista*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- LACLAU, E. Y MOUFFE, C. (2004). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- LENGUITA, P. (2011). “La trama sindical en el lugar de trabajo. Reflexiones sobre una tradición obrera en Argentina”. En *Estudos do trabalho*. Año 5. 8.
- LENGUITA, P. Y MONTES CATÓ, C. (comps.) (2009). *Resistencias laborales. Experiencias de repolitización del trabajo en Argentina*. Buenos Aires: El Aleph.
- LEVITSKY, S. (2005). *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista. 1983-1999*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- LIPSET, S. Y BENDIX, R. (1963). *Movilidad en la sociedad industrial*. Buenos Aires: Eudeba.
- LLANOS, M. (1998). “El presidente, el congreso y la política de privatizaciones en la Argentina (1989-1997)”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 38. 151.
- LOCKWOOD, D. (1962). *El trabajador de la clase media. Un estudio sobre la conciencia de clase*. Madrid: Aguilar.
- LÓPEZ, A. Y RAMOS, D. (2009). “Inversión extranjera directa y cadenas de valor en industria y servicios”. En KOSAKOFF, B. Y MERCADO, R. (eds.) (2009). *La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción. Crisis y oportunidades*. Buenos Aires: CEPAL.
- LUKACS, G. (1985). *Historia y conciencia de clase*. Madrid: Sarpe.
- MANZANELI, P. Y SCHORR, M. (2013). “Oligopolio e inflación. Aproximación al proceso de formación de precios en la industria argentina en la posconvertibilidad”. En *Realidad Económica*. 273.
- MARSHALL, A. Y PERELMAN, L. (2013). *El empleo industrial: balance de una década (2003-2012)*. Documento para discusión N° 9. Buenos Aires: IDES.
- MARTICORENA, C. (2013). “Relaciones laborales y condiciones de traba-

- jo en la industria manufacturera durante la postconvertibilidad”. En GRIGERA, J. (comp.) (2013). *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- _____. (2014). *Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores de la industria argentina de los noventa a la posconvertibilidad*. Buenos Aires: Imago Mundi
- MARX, K. (1998). *El Capital*. Tomos I, II y III. México DF/Madrid: Siglo XXI Editores.
- MARX, K. Y ENGELS, F. (1974). “Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas” en (1974) *Obras escogidas. Tomo I*. Moscú: Progreso.
- MAURIZIO, R. Y BECCARIA, L. (2012). “Reversiones y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 52. 205.
- MAYER, K. (1961). *Clase y sociedad*. Buenos Aires: Paidós.
- MERKLEN, D. (2010). *Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática, Argentina (1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- MOSELEY, F. (2004). “The Determination of the ‘Monetary Expression of Labor Time’ (‘MELT’) in the Case of Non-Commodity Money”. En *Review of Radical Political Economics*. Vol. 43. 1.
- MURILLO, M.V. (2013). “Cambio y continuidad del sindicalismo en democracia”. En *Revista SAAP*. Vol. 7. 2.
- MURMIS, M. Y PORTANTIERO, J.C. (1984). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- NATALUCCI, A. (2013). “Revitalización sindical y sindicalismo peronista : encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina, 2003-2012)”. En *Les Cahiers ALHIM*. 26.
- NEGRETTO, G.L. (2002). “¿Gobierna solo el presidente? Poderes de decreto y diseño institucional en Brasil y Argentina”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 42. 167.
- NEGRI, A. (1991). “John M. Keynes y la teoría capitalista del estado en el ‘29””. En *El cielo por asalto*. 2.
- NOTCHEFF, H. (ed.) (1998). *La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente*. Buenos Aires: Eudeba/FLACSO.
- NOVARO, M. (2003). “Continuidades y discontinuidades tras el derumbe político”. En *Revista SAAP*. Vol. 1. 2.
- NUN, J. (1995). “Populismo, representación y menemismo”. En BORON, A., MORA Y ARAUJO, M., NUN, J., PORTANTIERO, J.C., SIDICARRO, R. (1995). *Peronismo y menemismo*. Buenos Aires: Cielo por Asalto.

- O' DONNELL, G.(1972). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós.
- ____ (1996). *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.
- O'CONNOR, J. (1981). *La crisis fiscal del Estado*. Barcelona: Península.
- OFFE, C. (1992). *Contradicciones en el Estado del Bienestar*. México DF: Alianza Editorial.
- OLIVERA, J.H.G. (1964). "On structural inflation and Latin-american structuralism". En *Oxford economic papers*. Vol. 16. 3.
- ____(1986). "Inflexibilidad descendente de los precios monetarios". En *Desarrollo Económico*. Vol. 25. 100.
- ORTIZ, R. Y SCHORR, M. (2009). "Crisis internacional y alternativas de reindustrialización en Argentina". En *Documentos de investigación social* N° 7. Buenos Aires: UNSAM.
- OSZLAK, O.(2003). "El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina". En *Desarrollo Económico*. Vol. 42. 168.
- OUVIÑA, H. (2002). "Minimización o metamorfosis del estado. Las transformaciones de la última década en el aparato estatal argentino". En BONNET, A., GALAFASSI, G. Y ZARRILLI, A. (comps.) (2002). *Modernización y crisis. Transformaciones sociales y reestructuración capitalista en la Argentina del siglo XX*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- PALERMO, V. Y NOVARO, M. (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma/FLACSO.
- PARSONS, T. (1976). *El sistema social*. Madrid: Revista de Occidente.
- PASCUAL, R. (2013). "UNASUR. La construcción de un soporte regional del poder soberano estatal". En KAN, J. Y PASCUAL, R. (2013). *Integrados (?)*. *Debates sobre las relaciones internacionales y la integración latinoamericana y europea*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- PÉREZ ROIG, D. (2013). "Explotación de hidrocarburos en la Argentina postconvertibilidad (2002-2013). Entre el valor económico y la importancia estratégica". Ponencia presentada en las II Jornadas de Pensamiento Crítico para el Cambio Social "El desarrollo en disputa. ¿Es posible el buen vivir?". Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 3-4 de octubre de 2013.
- PÉREZ, G. (2007). "Exceso y defecto: movilización y subjetividad desde una perspectiva sociopolítica". En VILLANUEVA, E. Y MASSETTI, A. (comps.) (2007). *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina de hoy*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

- PIVA, A. (2001). “La década ‘perdida’: Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del capital (1989/2001)”. En *Cuadernos del Sur*. 32.
- ____ (2005). “Acumulación de capital, desempleo y sobreocupación en Argentina (1989-2003)”. En *Cuadernos del Sur*. 38/39.
- ____ (2006). “El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989-2001)”. En *Estudios del Trabajo*. Segundo semestre de 2006.
- ____ (2007). “Acumulación de capital y hegemonía débil en Argentina (1989-2001)”. En *Realidad Económica*. 225.
- ____ (2008). “Monsieur Le Travail, Monsieur Le Capital y Madame La Terre. Notas críticas sobre la noción marxista de clase”. En *Bajo el Volcán*. Año 7. 13.
- ____ (2009). “Hegemonía, Estado y lucha de clases”. En *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico*. 6.
- ____ (2009b). “Vecinos, Piqueteros y Sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001”. En BONNET, A. Y PIVA, A. (comps.) (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente.
- ____ (2011). “¿Fin de la clase obrera o desorganización de la clase?”. En BONNET, A. (comp.) (2011). *La Argentina invisible. Debates sobre la Argentina reciente*. Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente.
- ____ (2012). *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*. Buenos Aires: Biblos.
- ____ (2012b). “Burocracia y teoría marxista del estado”. En *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*. Vol. 6. 2.
- ____ (2014). “La movilización antikirchnerista de clase media. Entre la crisis de representación y la recomposición neopopulista del consenso”. En *Astrolabio. Nueva época*. 12.
- PORTA, F. Y FERNÁNDEZ BUGNA C. (2008). “El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural”. En *Realidad Económica*. 233.
- PORTANTIERO, J.C. (1973). “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”. En BRAUN, C. (comp.) (1973). *El capitalismo argentino en crisis*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- ____ (1977). “Economía y política en la crisis argentina, 1958-1973”. En *Revista mexicana de sociología*. 2.
- POULANTZAS, N. (1985). *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México DF: Siglo XXI Editores.

- _____ (1986). *Hegemonía y dominación en el Estado moderno*. México DF: Siglo XXI Editores.
- _____ (1986b). *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*. México DF: Siglo XXI Editores.
- PREBISCH, R. (1947). *Introducción a Keynes*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- PRZEWORSKI, A. Y LIMONGI, F. (1994). “Regímenes políticos y crecimiento económico”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 34. 134.
- ROEMER, J. (1989). *Teoría general de la explotación y de las clases*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- ROWTHORN, . (1977). “Conflict, inflation and money”. En *Cambridge Journal of Economics*. 1.
- ROZITCHNER, L. (2003). *El terror y la gracia*. Buenos Aires: Kapeluz.
- SAAD-FILHO, A. (2000). “Inflation theory: a critical literature review and a new research agenda”. En *Value, capitalist dynamics and money*. 18.
- SALVIA, A. Y QUARTULLI, D. (2011). “La movilidad y la estratificación socio-ocupacional en Argentina”. En *Revista Laboratorio*. 24.
- SALVIA, A. Y VERA, J. (2013). “Heterogeneidad estructural y distribución de los ingresos familiares en el Gran Buenos Aires (1992-2010)”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 52. 208.
- SÁNCHEZ, M. (2013). “La distribución funcional del ingreso hacia el interior del universo asalariado argentino (1997 – 2011)”. Ponencia presentada a las VI Jornadas de Economía Crítica, Mendoza, agosto de 2013.
- SCHORR, M., MANZANELLI, P. Y BASUALDO, E. (2012). “Elite empresaria y régimen económico en la Argentina. Las grandes firmas en la postconvertibilidad”. En *Documentos de Trabajo N° 22*. Buenos Aires: FLACSO.
- SCHVARZER, J. (2000). *Implantación de un modelo económico. La experiencia Argentina entre 1975 y el 2000*. Buenos Aires: AZ Editora.
- SCHVARZER, J. Y FINKELSTEIN, H. (2005). “El sistema financiero local: en busca de un nuevo modelo luego del fracaso de la convertibilidad”. En *Notas de coyuntura N° 20* - CESP (FCE-UBA).
- SCOLNIK, F. (2009). “El movimiento obrero argentino entre dos crisis: las organizaciones de base antiburocráticas en el área metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2007”. En *Conflicto Social*. Año 2. 2.
- SEMBLER, C.R. (2006). *Estratificación social y Clases sociales. Una revisión*

- analítica de los sectores medios*. Santiago de Chile: CEPAL.
- SENÉN GONZÁLEZ, C. y Del Bono, A. (dirs.) (2013). *La revitalización sindical en Argentina. Alcances y perspectivas*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- SHAIKH, A. (2006). *Valor, acumulación y crisis*. Buenos Aires: RyR Ediciones.
- SIDICARO, R. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- SIGAL, S. (2008). “Del peronismo como promesa”. En *Desarrollo económico*. 190/191.
- ____ (2009). “Respuesta al comentario de Fernando Balbi”. En *Desarrollo económico*. Vol. 49. 193.
- SMITH, P. (1972). “The social base of peronism”. En *Hispanic American Historical Review*. 52.
- ____ (1974). “Las elecciones argentinas de 1976 y las inferencias ecológicas”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 14. 54.
- SOHN-RETHEL, A. (1980). *Trabajo manual y trabajo intelectual (crítica de la epistemología)*. Bogotá: Editorial Viejo Topo.
- STEIN, S. (1980). *Populism in Perú*. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
- SVAMPA, M. (2008). “Argentina: una cartografía de las resistencias 2003-2008”. En OSAL. Año IX. 24.
- ____ (2008b). *Cambio de época, movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- SVAMPA, M. Y GONZÁLEZ BOMBAL, I. (2002). *Movilidad social ascendente y descendente en las clases medias argentinas: un estudio comparativo*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- SVAMPA, M. Y PEREYRA, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- SWEEZY, P.M. (1974). *Teoría del desarrollo capitalista*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- TEJEDA, J.L. (2005). “El laboratorio de la democracia en América Latina”. En *Espiral*. 32.
- THWAITES REY, M. (2010). “Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina?”. En OSAL. Año XI. 27.
- TORRE, J.C. (1989). “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 28. 112.
- ____ (1990). *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

- _____ (2003). “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”. En *Desarrollo Económico*. 168.
- TOURAINÉ, A. (1987). *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Santiago de Chile: PREALC.
- TROTSKY, L. (1988). *La revolución permanente*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- VILAS, C. (1988). “El populismo latinoamericano: un enfoque estructural”. En *Desarrollo Económico*. Vol. 28. 111.
- _____ (1994). *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*. México DF: Conaculta.
- WEBER, M. (1991). “Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y de los partidos”. En *Escritos Políticos*. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1996). *Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- WRIGHT, E. O. (1983). *Clase, crisis y Estado*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- _____ (1994). *Clases*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- ZAVALETA MERCADO, R. (2008). *Lo nacional-popular en Bolivia*. La Paz: Plural.